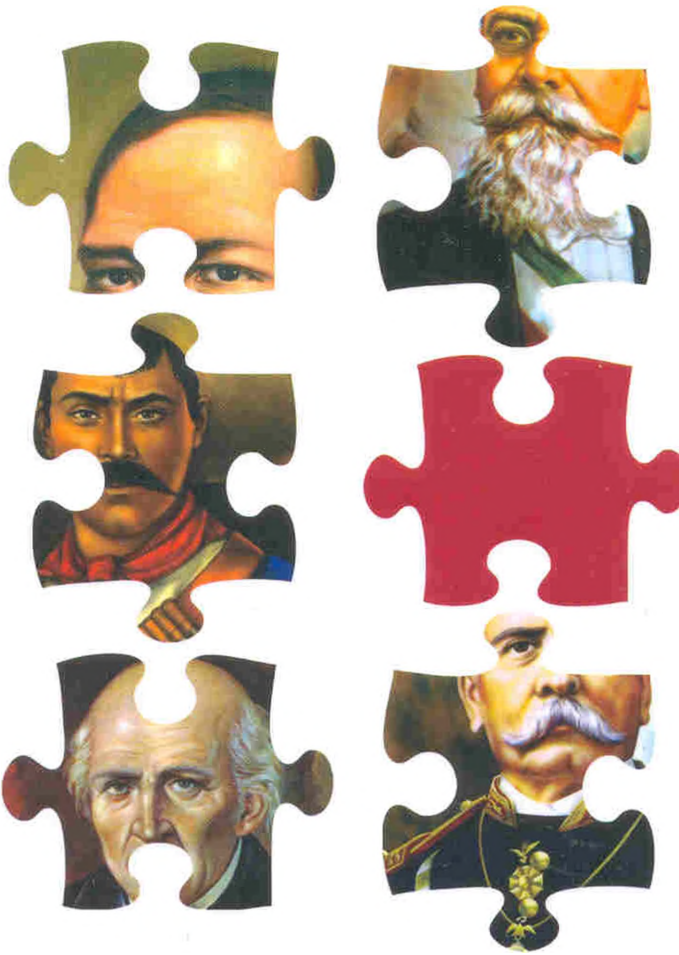
Enrique Florescano
Coordinador



Arma a Historia

La nación mexicana a través de dos siglos

Alfredo Ávila, Érika Pani, Aurora Gómez Galvarriato
José Antonio Aguilar Rivera, Soledad Loaeza

Arma la Historia

La nación mexicana a través de dos siglos

ALFREDO ÁVILA
ÉRIKA PANI
AURORA GÓMEZ GALVARRIATO
JOSÉ ANTONIO AGUILAR RIVERA
SOLEDAD LOAEZA

Coordinador
Enrique Florescano

DEBOLSILLO

Arma la historia
La nación mexicana
a través de dos siglos

Primera edición: agosto, 2009
Primera edición en este formato: mayo, 2011

D. R. © 2009, Promotora de Actividades de América 2010-México, S. A. de C. V.
Coordinador Enrique Florescano
Autores: Alfredo Ávila, Érika Pani, Aurora Gómez Galvarriato,
José Antonio Aguilar Rivera y Soledad Loaeza Tovar

D. R. © 2011, Random House Mondadori, S. A. de C. V.
Sobre la presente edición.
Av. Homero núm. 544, col. Chapultepec Morales,
Delegación Miguel Hidalgo, 11570, México, D. F.

www.rhmx.com.mx

Comentarios sobre la edición y el contenido de este libro a:
megustaleer@rhmx.com.mx

ISBN 978-607-310-494-4

Impreso en México / *Printed in Mexico*

Índice

Prólogo 9

La independencia: el primer paso
para construir una nación, *Alfredo Ávila* 11
Nueva España: una parte de la monarquía española 13
El enfrentamiento con la crisis, 1808-1810 18
El liberalismo, 1810-1814 24
La insurgencia, 1811-1815 31
Vivir en una época difícil, 1811-1820 37
La independencia, 1820-1823 40

El México de las posibilidades, *Alfredo Ávila*
y Érika Pani 47
1823: el nacimiento de la república
federal mexicana 49
La república federal y el quiebre del orden
constitucional, 1824-1828 53
La crisis de la república federal, 1829-1836 58
Un país que intenta sobrevivir, 1836-1848 67
Constitución, guerra e intervención, 1848-1867 76
Dictadura y Constitución, 1853-1857 78
Diez años de guerra, 1857-1867 84
La guerra civil, 1858-1860 84
Intervención francesa y experimento monárquico 87

Para construir un Estado, 1867-1910, *Érika Pani y Aurora Gómez Galvarriato* 95
¿Una máquina para gobernar? 98
Para consolidar la nación, 1867-1910 113
El régimen envejece: la crisis del porfiriato, 1900-1910 119

La Revolución, *Aurora Gómez Galvarriato* 125
La sucesión presidencial de 1910 127
La revolución maderista 129
El gobierno de Francisco I. Madero 136
La contrarrevolución 138
La revolución que vino del norte 142
La lucha de facciones 152
Un nuevo pacto político: la Constitución de 1917 160
De Venustiano Carranza a Álvaro Obregón 162
El saldo de la Revolución 164

Los gobiernos posrevolucionarios, 1921-1945, *José Antonio Aguilar Rivera* 167
Las tareas de la Revolución 170
La Revolución hecha gobierno 176
El cardenismo y la política de masas 185
Conclusión 197

La construcción de un país moderno, 1945-2000, *Soledad Loaeza* 201
El Milagro Mexicano, 1945-1970 203
La renovación del legado revolucionario, 1970-1982 226
Crisis, reforma económica y democratización, 1982-2000 246
1988-2000, hacia la modernidad a marchas forzadas 255

Prólogo

Arma la Historia es un recuento de los hechos históricos que en doscientos años han convertido a México en la nación que es ahora.

El libro conjuga la visión renovada de un grupo de historiadores que en estas páginas han vuelto a narrar, en una forma sencilla y directa, los sucesos centrales del pasado mexicano.

Lanzando la vista atrás, nos será posible comprender que la complejidad del México de hoy se encuentra en la amalgama de procesos y circunstancias por los que ha transitado una comunidad que no siempre ha sabido resolver sus dilemas de manera concertada. En medio de continuos desacuerdos, el país ha cruzado por instancias difíciles y de gran crispación social. En algún momento se llegó a temer que el proyecto nacional naufragase.

Sin embargo, como se revela en *Arma la Historia*, México ha logrado desde hace poco más de un siglo crear y mantener un sentimiento de pertenencia a la nación, el cual ha fungido como un poderoso punto de unión para los distintos sectores sociales, políticos y regionales.

En el contexto del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, las nuevas generaciones de mexicanos pueden conocer una visión más rigurosa de los hechos fundamentales de nuestra historia.

La preservación de la memoria, que ha estado sujeta, en diversos momentos, a la justificación de una situación política vigente, hoy debe estar al servicio de la sociedad misma, en su búsqueda por resolver sus más graves y urgentes desafíos. Pues sólo a través de su estudio, la historia cobra vida y permite un conocimiento más justo, más certero, del presente.

ENRIQUE FLORESCANO

LA INDEPENDENCIA: EL PRIMER PASO PARA CONSTRUIR UNA NACIÓN

Alfredo Ávila

Nueva España: una parte de la monarquía española

Hubo una época en la que no existía la nación mexicana. Las personas que vivían en el territorio que hoy conocemos como México no se sentían miembros de una única nación. Desde el siglo XVI, ese territorio era conocido como Nueva España y formaba parte de una monarquía católica que también tenía dominio sobre muchas otras regiones en Europa, América, África y Asia. Las diferencias entre los habitantes de Nueva España eran enormes. En el norte, en las Provincias Internas, unas pocas comunidades resistían las duras condiciones de veranos secos y ardientes e inviernos fríos. Para colmo, se enfrentaban a los grupos indígenas de las praderías que los atacaban con frecuencia. Sólo permanecían ahí por la expectativa de tener unas tierras propias para sus familias y la posibilidad de encontrar algún filón de plata o de oro que los convirtiera en prósperos mineros. Las comunidades indígenas del sureste eran muy diferentes. Vivían de manera semejante a como lo habían hecho durante siglos, desde antes de la llegada de los castellanos. El idioma español era desconocido para la mayoría. En realidad, los únicos rasgos comunes de todos los habitantes de Nueva España eran la religión católica y su condición de súbditos de un rey al que nunca veían. Al dar inicio esta historia, ese rey era Carlos IV, quien llegó al trono en 1789.

Nada ilustra mejor la diversidad de Nueva España que las procesiones que se realizaban en las ciudades por distintos motivos. En ellas participaban los grupos de la sociedad de la época: las corporaciones. Esos cuerpos eran agrupaciones que otorgaban a sus integrantes privilegios y protección. Los artesanos, las órdenes religiosas, los comerciantes, los universitarios, los mineros, etcétera, tenían su propia corporación. Los pueblos de indios también contaban con un órgano corporativo conocido como *república de indios*. La gente se sentía más vinculada con los miembros de su corporación que con los demás habitantes de Nueva España. Algo parecido sucedía en las poblaciones pequeñas, que no tenían muchas relaciones con el resto de Nueva España. En ocasiones sólo el cura servía de vínculo a los habitantes de numerosas villas con la monarquía católica, aunque no faltaban las autoridades nombradas en ciudades más grandes, que cobraban impuestos, perseguían criminales y administraban justicia en nombre del rey. Sólo unas cuantas villas y ciudades tenían un ayuntamiento, es decir, una corporación en la que las personas más importantes del lugar podían encargarse de la administración local. Por eso, una de las demandas más constantes de las villas era contar con su propio ayuntamiento. Querían ser gobernadas por quienes habían nacido en ellas, pero las autoridades superiores casi nunca lo aceptaban.

Millones de personas en pueblos y rancherías parecían estar aisladas del resto del mundo; no obstante, las afectaban los cambios que sucedían más allá de sus comarcas. En la segunda mitad del siglo XVIII, en la Gran Bretaña se introdujeron nuevas tecnologías para la producción de artículos como la cerámica y las telas. Muchos comerciantes los introducían a Nueva España de contrabando, sin pagar impuestos. Por esta

razón, eran más baratos que los fabricados en lugares como Querétaro o Puebla, y la gente los prefería. Cuando el número de productos extranjeros aumentó, quienes los fabricaban en Nueva España dejaron de hacerlo. Muchos artesanos se quedaron sin trabajo y pronto exigieron a las autoridades que se prohibiera comprar artículos traídos de fuera.

En las ciudades, las personas podían percatarse mejor de los cambios que sucedían en el mundo y cómo las afectaban. Algunas noticias resultaban temibles: se supo que en 1793 los franceses habían asesinado a su propio rey y vivían una época tan violenta que se le conoció con el nombre de El Terror. La Revolución francesa, que había promovido los derechos del hombre y del ciudadano, fue bien apreciada por unas cuantas personas en el virreinato, aunque la mayoría la vio como un irresponsable atentado contra el orden establecido. Incluso en Nueva España empezaron a suceder cosas inusitadas. En diciembre de 1794, un predicador pronunció un escandaloso sermón en el que negó que Nuestra Señora de Guadalupe se hubiera plasmado en el ayate de Juan Diego. Algo grave pasaba en el mundo, pero se tenía confianza en que las autoridades podrían enfrentar esos cambios.

Otras transformaciones eran más lentas, aunque sus efectos también eran importantes. Al finalizar el siglo XVIII, la población había crecido de manera considerable durante más de una centuria, y casi llegó a los seis millones. Esto, junto con la introducción de nuevas tecnologías, había beneficiado a ciertas industrias, como la minera, que contaban con más mano de obra. En contraste, algunos pueblos empezaron a tener problemas, pues las familias crecían pero no así las tierras que sembraban. En general, Nueva España era próspera. Las minas generaban riqueza que beneficiaba a rancheros

y otros agricultores. Ellos pagaban una contribución a la Iglesia, el diezmo, equivalente a la décima parte de su producción. Ese impuesto, junto con los legados y donaciones que hacían algunas personas ricas, era utilizado para construir magníficos templos, seminarios y catedrales. La Iglesia invertía su riqueza de diversas maneras. Otorgaba préstamos con intereses muy bajos, que favorecían a todo tipo de productores. De esa manera se beneficiaban desde los grandes mineros hasta los más modestos rancheros.

Los comerciantes de Nueva España aprovechaban esa riqueza para traer artículos desde Asia y Europa. Al cruzar por cada provincia y ciudad, las mercancías cubrían un impuesto conocido como alcabala. Esto permitía que se pagara la administración pública, pero encarecía los productos. Los caminos eran malos y transportar mercancías se volvía lento y costoso. Por ello, no había mucho comercio entre las distintas zonas del virreinato. La grana que producían los pueblos indígenas oaxaqueños se enviaba a los mercados europeos, pero no se vendía en otras regiones de Nueva España. Algo semejante sucedía con el producto más apreciado de Nueva España, que era la plata. En Europa y en la lejana China no era extraño encontrar dinero con el sello de la Casa de Moneda de México.

Alrededor de tres millones de personas en los pueblos de indios vivían de su trabajo cotidiano, como habían hecho sus ancestros durante generaciones. Muchos pequeños rancheros no podían competir con los grandes hacendados y renunciaron a sus propiedades o dejaron de pagar el arrendamiento. En tiempos de sequía los precios del maíz aumentaban, en provecho de los acaparadores y para malestar de los más pobres. Estas condiciones resultaban peligrosas, pues podían ocasionar descontento. Las leyes

otorgaban privilegios y oportunidades diferentes a los diversos sectores sociales. Los más beneficiados legalmente eran los españoles, sin importar si habían nacido en España o en América. Los primeros recibían el nombre de *españoles europeos, peninsulares* o *gachupines,* mientras que los segundos eran conocidos como *americanos, españoles americanos* o *criollos.* Los habitantes de los pueblos originarios de América eran llamados *indios.* Tenían algunos privilegios, pero debían pagar tributo y eran considerados incapaces de ejercer ciertos derechos. Los descendientes de los africanos también pagaban tributo y no tenían ningún privilegio legal.

Algunos individuos perspicaces se dieron cuenta de que la sociedad debía reformarse. El obispo de Michoacán, Antonio de San Miguel, consideraba que era necesario eliminar los tributos. Afirmaba que las leyes que protegían a los pueblos de indios se debían abolir para que estuvieran en igualdad de condiciones con los españoles. Las ideas también estaban cambiando. Aparecieron algunos periódicos para que el público se ilustrara, es decir, tuviera elementos de juicio que le permitiesen actuar en beneficio de todos. Se fundaron nuevos establecimientos, como el Colegio de Minería, donde los científicos ensayaban nuevas técnicas. Muchos de ellos también estaban interesados en demostrar al mundo que en estas tierras se producían conocimientos útiles para la sociedad. Por eso, colaboraron con las investigaciones del joven científico alemán Alexander von Humboldt, que visitó Nueva España en 1804.

El siglo XIX anunciaba nuevas dificultades para los habitantes de Nueva España. En Europa, Napoleón había formado un imperio que muy pronto reanudó las hostilidades que desde tiempo atrás Francia tenía con Gran Bretaña. El rey

español fue obligado a pelear del lado de los franceses y por lo mismo necesitaba cada vez más recursos para su ejército y su armada. En 1804, Carlos IV decretó que la Iglesia católica de sus dominios americanos debía enviar su capital líquido a España. La Iglesia servía de banco en Nueva España, por lo que las personas que tenían préstamos tuvieron que pagarlos para satisfacer esa real orden. Quienes no pudieron pagar, perdieron sus propiedades. Más de diez millones de pesos salieron rumbo a España en cumplimiento de esa medida. Mineros, hacendados y rancheros se quedaron sin capital. Incluso los pueblos de indios entregaron la enorme suma de más de seiscientos mil pesos. En Yucatán, cuando se presentó una sequía, esos pueblos no tuvieron dinero para comprar maíz. Algo semejante pasó en otros lugares. Los mineros de Nueva España producían más de la mitad de la plata de todo el mundo, pero se quedaron sin dinero suficiente para invertir en sus negocios o en otras minas. La prosperidad había llegado a su fin.

El enfrentamiento con la crisis, 1808-1810

Desde 1805, el *Diario de México* informaba de las novedades de Europa. Las noticias eran cada vez más alarmantes. Lo peor era que se sucedían con gran rapidez. A comienzos de 1808, se supo de un motín en Aranjuez, España, que obligó al rey Carlos IV a renunciar a la corona. Ese motín había sido ocasionado por el propio hijo del monarca, Fernando, en contra del favorito de los reyes, Manuel Godoy, quien tenía enorme influencia en la política española. Pocas semanas después, las gacetas y los periódicos informaban que toda la familia

real había viajado a Francia para entrevistarse con Napoleón. Los reyes se vieron obligados a renunciar al trono frente al emperador francés, quien nombró a su hermano José Bonaparte como nuevo soberano de España. Los novohispanos se hallaban desconcertados. Muy pronto habría nuevas noticias. El pueblo español se había levantado en armas en contra de las tropas francesas, lo que ocasionó júbilo, pero en breve se conocieron las derrotas del levantamiento popular.

Los españoles que se opusieron a los franceses se organizaron en juntas, encargadas de gobernar sus regiones en nombre de Fernando, el hijo de Carlos IV, quien fue reconocido como monarca y se hallaba preso en Francia. Esto representaba un problema muy serio para las autoridades del virreinato: ¿a quién debían obedecer? El 19 de julio de 1808, el Ayuntamiento de la ciudad de México, encabezado por Francisco Primo de Verdad y José Francisco de Azcárate, propuso que por ningún motivo se reconociera a José Bonaparte, pues se le consideraba usurpador. El virrey José de Iturrigaray aceptó con gusto esa propuesta, pero eso no solucionaba el problema de que, en la práctica, no había un gobierno en España al cual se obedeciera. Para resolver esta crisis, el mismo Ayuntamiento sugirió el establecimiento de una junta de autoridades en el virreinato para que se hiciera cargo del gobierno. Esta propuesta se fundaba en el propio ejemplo español, pues en la península ibérica se habían erigido varias juntas. Los miembros del Ayuntamiento de México también aseguraron que las antiguas leyes permitían, en una situación de emergencia, que la capital del reino convocara una reunión de autoridades para enfrentar los problemas. Sin embargo, la Real Audiencia de México —el supremo tribunal de justicia— consideró innecesaria y peligrosa una

junta y reprochó al Ayuntamiento que elaborara iniciativas en nombre de toda Nueva España.

Durante las semanas siguientes, las discusiones entre quienes proponían una junta y quienes pensaban que nada debía modificarse se volvieron más agrias. Nunca lograron ponerse de acuerdo, salvo en que permanecerían leales a Fernando VII. Al finalizar agosto, llegaron al virreinato dos representantes de una de las juntas españolas, la de Sevilla, que se había proclamado gobernadora de todos los dominios españoles, incluidos los de América. Poco después se recibieron cartas de la Junta de Asturias, que también pedía ser reconocida como el supremo gobierno. Ante esta situación, el virrey decidió no reconocer ningún gobierno en España, ni a las juntas ni a José Bonaparte.

Uno de los integrantes de la Audiencia, Jacobo de Villaurrutia, se percató de que, al no haber gobierno en España, las autoridades del virreinato eran prácticamente autónomas y podían actuar de manera arbitraria. Un fraile de origen peruano, Melchor de Talamantes, elaboró varios documentos en los que planteaba que la caída de la monarquía española dejaba independiente a Nueva España y que, por lo tanto, debían tomarse medidas para organizar un gobierno propio, sujeto a leyes benéficas para toda la nación, término que, para Talamantes, incluía a todos los españoles y sus descendientes en el Nuevo Mundo. El riesgo de no formar un congreso que hiciera leyes era que las autoridades, como el virrey o la Audiencia, podían actuar sin control alguno, pues no respondían ante ninguna autoridad superior.

Los temores de personas como Villaurrutia y Talamantes muy pronto se volvieron una terrible realidad. Los opositores a la idea de convocar una junta organizaron una conspira-

ción, en la que incluyeron a los poderosos comerciantes y a las autoridades de la Iglesia. La noche del 15 de septiembre de 1808, un grupo de hombres armados y dirigidos por un hacendado de la región de Temixco apresó al virrey Iturrigaray, a los integrantes del Ayuntamiento y a otras personas. Los acusaron de querer separar el virreinato de España. A la mañana siguiente, declararon que todo lo habían hecho en beneficio del pueblo y en su nombre. Formaron un nuevo gobierno, cuyo origen era ilegal.

Muy pronto se presentaron protestas en contra de ese acto violento. En la ciudad de México hubo algunas movilizaciones populares, pero el nuevo virrey, Pedro Garibay, apresó a quienes las organizaron. Contaba con el respaldo de instituciones como la Inquisición. Mientras tanto, en España, las juntas se unieron en un solo órgano de gobierno, llamado Junta Central, que de inmediato fue reconocido por Garibay, por la Audiencia y por el arzobispo Francisco Xavier Lizana.

La Junta Central procuró obtener el apoyo —en especial económico— de los dominios españoles en América, para lo cual solicitó que cada virreinato y capitanía enviara un representante. Esta medida fue de enorme importancia, pues por primera vez el gobierno español invitaba a los americanos para participar en la toma de decisiones de toda la monarquía. En los ayuntamientos de las capitales de cada provincia se hicieron elecciones, en las que se propusieron candidatos para enviar a la Junta. Los nombres de todos los electos se enviaron a la ciudad de México, donde el Ayuntamiento votó por tres personas. Un sorteo dio como resultado al vocal de Nueva España en la Junta Central, el tlaxcalteca Miguel de Lardizábal, quien ya no tuvo tiempo de integrarse en la mencionada Junta.

En Nueva España las opiniones estaban divididas. Por un lado, muchas personas estuvieron dispuestas a apoyar al gobierno español. Demostraron su lealtad al rey a través de numerosos préstamos y donativos que alcanzaron la fabulosa cantidad de más de doce millones de pesos entre 1808 y 1811. Sin embargo, otras personas creían que el gobierno era ilegal y que debía formarse una junta en Nueva España. En varios lugares como Oaxaca, Sultepec y la propia ciudad de México se organizaron grupos para evitar que Nueva España quedara bajo el dominio de Napoleón. Julián de Castillejos, un abogado originario de Tehuacán, publicó en 1809 una proclama en la que advertía el peligro de permanecer unidos a España, pues ésta había caído ya en manos de los franceses. El gobierno virreinal formó una Junta de Seguridad y Buen Orden, encargada de perseguir a quienes promovieran la idea de separarse de España. Antes de concluir ese año, la Junta descubrió un grupo en Valladolid (Morelia). Lo culpó de instigar a la población indígena para oponerse al pago de tributos y de promover la independencia, aunque según Mariano Michelena, uno de los arrestados, esas acusaciones eran falsas.

En los siguientes meses muchas personas más fueron arrestadas. En septiembre de 1810, las autoridades descubrieron unas reuniones que se desarrollaban en Querétaro y San Miguel el Grande. Ignacio Allende, Mariano Abasolo, Juan Aldama y la misma esposa del corregidor de Querétaro, doña Josefa Ortiz, habían acordado desconocer cualquier gobierno que mantuviera la unión con España. Miguel Hidalgo, cura del pueblo de Dolores, quien también se hallaba involucrado en esas reuniones, tomó la decisión de convocar a sus feligreses la mañana del 16 de septiembre. Hubo muchos motivos para que la gente se le uniera. Algunas personas

lo siguieron por el miedo a caer en manos de Napoleón. En el Bajío, los precios del maíz habían subido por las malas cosechas y porque los grandes productores lo acaparaban. Eso también generó descontento y facilitó que mucha gente se uniera a la rebelión. Otros aprovecharon la situación para llevar a cabo un antiguo reclamo: que cada villa estuviera gobernada por la gente que había nacido en ella. En los lugares por donde las tropas de Hidalgo y Allende iban pasando, quitaban el mando a los *gachupines* y se lo daban a los españoles americanos.

Durante las primeras semanas, la rebelión obtuvo numerosos apoyos. Pobres y ricos pensaron que la insurrección era una alternativa para que los americanos pudieran hacerse cargo de su propio gobierno y evitaran caer en manos de los franceses. Sin embargo, la violencia y la muerte que se iba sembrando provocaron temor. La ocupación y el saqueo de Guanajuato produjeron desaprobación. En Valladolid, Miguel Hidalgo organizó un gobierno criollo y dictó reformas —inspiradas en el pensamiento de quien había sido su obispo, Antonio de San Miguel— para mejorar las condiciones de los pueblos indígenas, de los descendientes de africanos y, en general, de los sectores sociales más desprotegidos. Por supuesto, esas medidas generaron simpatías entre muchas personas ilustradas, pero otras rechazaron la violencia.

Algunos destacados personajes, como Agustín Fernández de San Salvador, rector de la Universidad de México y célebre abogado, acusaron a los dirigentes de la insurrección de provocar la desunión. Manuel Abad y Queipo, que había sido amigo personal de Hidalgo, lo condenó y excomulgó. Gran parte de la población de las ciudades vio con buenos ojos las medidas enérgicas que el nuevo virrey Francisco

Xavier Venegas tomó en contra de los rebeldes. Cuando los insurgentes ocuparon la ciudad de Guadalajara, fueron combatidos por un poderoso ejército encabezado por Félix Calleja. En enero de 1811, a las afueras de esa ciudad, Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y las fuerzas rebeldes se vieron derrotados. Los restos del ejército insurgente huyeron hacia el norte, pero pronto sus dirigentes fueron arrestados y ejecutados. El proyecto para reformar la sociedad, formar una junta y entregar el gobierno a los americanos quedaba, de momento, cancelado.

El liberalismo, 1810-1814

El caso de Nueva España no era único. En todos los dominios de la monarquía católica hubo proyectos para establecer juntas de gobierno ante la falta del rey, aunque las que se formaron en América tenían algunas características diferentes a las de España. Si en principio se habían erigido como instituciones transitorias de gobierno, con el tiempo exigieron que se reconociera a los criollos el derecho a gobernar sus propias provincias y localidades. Algunas de ellas se negaron a obedecer a las autoridades españolas. Caracas, Buenos Aires y Cundinamarca, entre otras ciudades, iniciaron el camino a la independencia. La monarquía católica se fracturaba.

Mientras tanto, en España las instituciones provisionales de gobierno también promovieron cambios en la organización de la monarquía, pero en un sentido diferente. En 1810, la Junta Central convocó a elecciones para reunir un congreso —al que llamaron Cortes— en el puerto de Cádiz, uno de los pocos lugares que permanecían libres de las tropas

francesas. Lo más notable de ese proceso era que los diputados de las Cortes serían electos en todos los dominios de la monarquía, incluidas América y Asia, cuyos habitantes tendrían iguales derechos que los nacidos en España.

Las elecciones se llevaron a cabo. Sin embargo, muy pronto algunas personas se dieron cuenta de las diferencias en las maneras de elegir a los diputados. España tendría legisladores que representarían a las juntas provisionales de gobierno, a ciertas ciudades privilegiadas y a la población de las provincias, en razón de un diputado por cada cincuenta mil personas. En cambio, en América sólo habría un representante por cada provincia. Las provincias hispanoamericanas tenían en total más de quince millones de habitantes, mientras que en la península ibérica había diez millones de españoles; con este método, sin embargo, habría más representantes de la península que de toda América.

En Nueva España la noticia de la reunión de las Cortes fue bien recibida. Muy pronto se hicieron las elecciones, en las que participaron los regidores y alcaldes de los ayuntamientos. La gente nacida en el virreinato participó en la asamblea encargada de hacer una Constitución para toda la monarquía. Muchos de los diputados novohispanos tuvieron una participación relevante en los debates. José Miguel Guridi y Alcocer —nacido en Tlaxcala— fue uno de los más fervientes defensores de la igualdad de derechos entre España y América. En varias oportunidades exigió que Hispanoamérica tuviera el mismo número de representantes que la metrópoli. No tuvo mucho éxito, pues los diputados nacidos en España, que eran mayoría, siempre se opusieron a esas demandas. Miguel Ramos Arizpe —quien provenía de Coahuila— consiguió que las Cortes establecieran una

BECENE
cicyt
CENTRO DE INFORMACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA

institución de gobierno local, las diputaciones provinciales, encargadas del bienestar de cada una de las regiones. Por su parte, el poblano Antonio Pérez Martínez defendió entidades más tradicionales, como la Inquisición, que en Nueva España era muy respetada.

En 1812, las Cortes promulgaron una Constitución. Como su objetivo era proteger los derechos de los ciudadanos, se le calificó de liberal, término que se relacionaba con la generosidad. Desde entonces, los defensores de la Constitución se conocieron como liberales y se llamó liberalismo al pensamiento que promovía la protección de los derechos de los ciudadanos. A lo largo del siglo XIX, el liberalismo sería una corriente de pensamiento y acción política que buscaba construir un gobierno fundado en la voluntad de las personas y no en un origen divino. Para quienes se describieron como liberales, la tarea más importante del gobierno era garantizar los derechos de los individuos. Las instituciones debían tener la fuerza suficiente para mantener el orden y al mismo tiempo estar acotadas para no transgredir esos derechos.

En sus primeros artículos, la Constitución de 1812 señaló que la soberanía radicaba en la nación española, y que ésta incluía a todos los habitantes de España, Hispanoamérica y algunos lugares de Asia y de África. Ni antes ni después ningún país constituyó, como hizo España, una nación tan grande, con gente de tantos lugares del mundo. La nación se definía como el conjunto de personas sujetas a las mismas leyes y con los mismos derechos. El gobierno de esa gran nación estaría integrado por tres poderes. El poder de hacer las leyes estaría en las Cortes y el rey; el de ejecutarlas en el propio rey, y el de vigilar su cumplimiento en un Supremo Tribunal de Justicia. Las Cortes serían electas por

los ciudadanos. Tanto los descendientes de españoles como los indígenas serían considerados, a partir de ese momento, como ciudadanos iguales. En cambio, no se dieron los mismos derechos a los que tenían ascendencia africana. Los diputados creían que esas personas eran corruptas y que, por lo mismo, no podían hacer una buena elección. Por eso, sólo se les permitiría gozar de todos los derechos políticos cuando demostraran tener las suficientes virtudes. Tampoco eran tomadas en cuenta para determinar el número de diputados. Según la Constitución, debía haber un representante por cada setenta mil almas, pero excluyendo a la gente con antepasados africanos. Esta medida fue impulsada por los diputados peninsulares para evitar que los hispanoamericanos tuvieran mayoría en las Cortes, pues en Hispanoamérica había un gran número de descendientes de africanos.

La Constitución y las demás leyes liberales de las Cortes fueron recibidas con júbilo en Nueva España. La libertad de prensa, uno de los derechos de los ciudadanos, impulsó el nacimiento de varios periódicos, como *El Pensador Mexicano,* publicado por José Joaquín Fernández de Lizardi, y *El Juguetillo* de Carlos María de Bustamante. Estos escritores promovieron la participación de los ciudadanos para ejercer sus derechos, en especial el de votar. También se organizaron las primeras elecciones populares en Nueva España. En los últimos meses de 1812 y a comienzos de 1813, todos los hombres mayores de edad —salvo los descendientes de africanos y otros casos particulares— fueron llamados a participar en las elecciones municipales. Los comicios se hicieron en las parroquias de los pueblos, villas y ciudades, y aunque es imposible determinar cuántos ciudadanos salieron a votar, la participación sorprendió a las autoridades.

Las elecciones fueron motivo de festejo en algunos lugares. Se realizaba una solemne ceremonia religiosa, se establecía una mesa presidida por la gente más notable de la localidad, como el cura y el subdelegado. A continuación, los ciudadanos se presentaban ante la mesa y ahí mencionaban en voz alta o por escrito el nombre de las personas por las que querían votar. Merece la pena señalar dos cosas. En primer lugar, que —pese a la Constitución— también participaron muchos descendientes de africanos. En segundo lugar, que el proceso para elegir a los miembros de los ayuntamientos era indirecto en segundo grado; es decir, los ciudadanos votaban por algunas personas, las que a su vez se reunían en una junta para decidir quiénes serían los regidores y los alcaldes.

En la ciudad de México, la primera etapa de las elecciones tuvo un resultado que no se esperaban las autoridades. Mucha gente, en un ambiente festivo, ejerció sus derechos políticos. La mayoría de los hombres electos estaba a favor de que los criollos se encargaran del gobierno de sus propias provincias. Más aún, algunos simpatizaban con los insurgentes y los habían apoyado. Formaban parte de una sociedad secreta conocida con el nombre de *Guadalupes,* que enviaba información y otros recursos al campo de los que peleaban a favor de la independencia. Por estas razones, las autoridades superiores se alarmaron y decidieron suspender tanto las elecciones como la libertad de prensa.

La Constitución de Cádiz requería una reorganización completa de las instituciones de la monarquía española. Entre otras cosas, desaparecía la figura del virrey. En su lugar, fue establecido un jefe político que no tenía el enorme poder que antes habían tenido los virreyes. La Audiencia, que también había intervenido en asuntos administrativos y de

gobierno, se convirtió en un tribunal de justicia. También se prohibió que los jefes políticos tuvieran mandos militares. En una situación de guerra como la que se vivía en Nueva España, estas medidas podían debilitar a las autoridades. Por eso, Francisco Xavier Venegas impidió que se aplicaran algunas disposiciones de las Cortes.

En 1813, Félix Calleja fue nombrado por el gobierno español virrey de Nueva España y presidente de la Audiencia de México. Resulta curioso que haya recibido ese nombramiento, pues la Constitución había desaparecido el título de virrey. Calleja procuró, en principio, actuar según las nuevas leyes: limitó el poder de la Audiencia, ordenó que se realizaran las elecciones y fomentó el establecimiento de ayuntamientos. También aplicó las medidas fiscales de las Cortes, que prescribían que todos los habitantes de la nación pagaran impuestos, algo que resultaba muy conveniente para el gobierno en tiempos de guerra.

Los actos de Calleja iban encaminados a un único fin: destruir el movimiento insurgente. Por eso permitió que se establecieran ayuntamientos, pues una de las primeras medidas que tomó para defender el orden virreinal había sido dejar que los pueblos y villas se armaran en contra de los rebeldes. De esa forma, las leyes de las Cortes que favorecían al gobierno en la guerra fueron bienvenidas por Calleja. En cambio, decidió suspender la aplicación de las que habrían debilitado su autoridad. Mientras en otras provincias como Yucatán y Guadalajara ya se habían establecido las diputaciones provinciales, la de México se instaló muy tarde, en 1814, pocos días antes de que fuera abolida la Constitución de Cádiz.

Al finalizar 1813, las tropas francesas que habían ocupado la península ibérica sufrieron muchas derrotas en toda

Europa y empezaban a replegarse. Fernando VII recuperó su libertad y se trasladó a España para ocupar su trono. El gobierno liberal esperaba que jurara la Constitución para reconocerlo como monarca, pero algunos diputados tenían dudas acerca de las nuevas leyes y pidieron al rey que disolviera las Cortes. Uno de esos diputados fue el poblano Antonio Pérez Martínez. No favorecía el absolutismo, pero desde su punto de vista la Constitución de Cádiz y las leyes de las Cortes eran demasiado revolucionarias y, por lo mismo, peligrosas.

Fernando VII desconoció a los gobiernos establecidos en España desde 1808, disolvió las Cortes y anuló la Constitución. Muchos de los diputados más liberales, como Miguel Ramos Arizpe, fueron apresados y llevados a los tribunales. En distintos lugares se presentaron muestras de resistencia contra estas medidas, pero la oposición fue mínima. El rey contaba con un amplio respaldo de grupos poderosos, como la Iglesia y la nobleza, así como de sectores populares. Mucha gente trataba de olvidar los años de guerra y pensaba que se podía regresar a la situación previa a la invasión de los franceses.

En Nueva España, el virrey Calleja disolvió las instituciones establecidas por las nuevas leyes. Las diputaciones provinciales y los ayuntamientos constitucionales desaparecieron, aunque no siempre se pudieron restablecer las instituciones anteriores. La guerra había ocasionado cambios profundos. Por otra parte, Calleja mantuvo algunas disposiciones de las Cortes —como las fiscales— que le convenían. La Inquisición se reinstaló y destacados miembros de la Iglesia promovieron una campaña de lealtad a la corona. En los sermones se exaltaba el regreso de Fernando VII al trono y

se aseguraba que la paz por fin regresaría. Algunos estimaron que el liberalismo y la insurgencia habían pretendido destruir la religión y que la única libertad para el ser humano era la que se podía alcanzar a través de la fe. Muchos de los habitantes de Nueva España admitieron de buen grado estos argumentos, pues atribuían una gran importancia a su religión en la vida cotidiana y con miras a la salvación eterna. Sin embargo, no todos aceptaron esta situación.

La insurgencia, 1811-1815

La guerra fue, junto con el liberalismo, uno de los elementos que contribuyeron a la caída del orden tradicional de la monarquía católica. La insurrección iniciada en 1810 había sido muy desordenada y ocasionó temor por su violencia. No obstante, también procuró llevar a cabo algunas reformas sociales, como la abolición de tributos y de la esclavitud. La muerte de los primeros caudillos de la insurgencia en 1811 no detuvo el curso de la guerra. En algunas regiones surgieron movimientos sociales que combatían el orden español. En Zitácuaro, en los límites de la provincia de México con la de Michoacán, Ignacio Rayón —por encomienda del propio Hidalgo— estableció un organismo de gobierno compuesto por tres vocales, al que llamó Suprema Junta Nacional Americana. El propio Rayón, junto con José Sixto Verduzco y José María Liceaga, había integrado la Junta en nombre de Fernando VII, cuando éste todavía estaba preso en Francia.

Ignacio Rayón consideraba que las juntas españolas no tenían derecho a gobernar en América, pues no había americanos en ellas. Sin embargo, sabía que las Cortes de Cádiz

se habían integrado con diputados de toda la monarquía española, incluidos los de Nueva España. También era consciente de que la Constitución promulgada por esas Cortes resultaba muy atractiva para los americanos, pues les otorgaba derechos. Esto era un reto para los insurgentes: si querían triunfar debían ofrecer leyes e instituciones parecidas a las del orden liberal español. Por eso, en septiembre de 1812 Rayón publicó unos textos conocidos como *Elementos constitucionales,* que servirían de base para el gobierno alterno.

En los *Elementos constitucionales* resaltaba la defensa de la religión católica. Al mismo tiempo, se reconocía el principio de la soberanía popular, la garantía de los derechos básicos del ciudadano, la apertura comercial y el autogobierno. Según este proyecto, el gobierno provisional estaría en manos de la Junta, que sería integrada por cinco vocales, de modo que hacía falta nombrar a dos más.

La insurrección en Nueva España afectó muy distintas regiones. En Zacatecas se estableció un gobierno americano que duró poco tiempo. En San Blas y Tepic, José María Mercado encendió la llama de la rebelión por un breve periodo. En Texas, Bernardo Gutiérrez de Lara declaró la independencia en abril de 1813, apoyado por tropas en las que había muchos estadounidenses. Guanajuato fue, quizá, la provincia que más padeció la insurrección, pero también en ciertas regiones de la de Guadalajara o Nueva Galicia y de Michoacán hubo dirigentes rebeldes que mantuvieron por varios años la opción armada de la independencia, como Gordiano Guzmán y José Antonio Torres. En los Llanos de Apan y en la Sierra Norte de Puebla, José Francisco Osorno organizó el Departamento del Norte, que contaba con un gobierno y era capaz de recolectar impuestos. En las regiones controla-

das por hombres como Rayón y Osorno se decretó que los bienes de los españoles serían de la nación. La producción de ranchos y haciendas servía para sostener la causa. Los insurgentes también se preocuparon por satisfacer las necesidades espirituales de la gente, de modo que insistieron a los eclesiásticos que suministraran sacramentos en los territorios que iban liberando.

Tal vez el más destacado de los caudillos de la independencia fue José María Morelos. Desde finales de 1810 había salido de su parroquia en Carácuaro, para tomar el puerto de Acapulco, según le había instruido Hidalgo. La campaña fue breve y no consiguió su objetivo, pero en cambio logró que algunos de los más importantes terratenientes de la región se le unieran, como la familia Galeana. También formuló un plan de gobierno americano, en el que resumía algunas de las propuestas del mismo Hidalgo. Señalaba la importancia de proteger la religión, ordenaba despojar de los empleos públicos a los *gachupines* y entregarlos a los criollos, prohibía la salida de metales preciosos, abolía las distinciones de castas, establecía la igualdad entre todos los americanos y obligaba a la restitución de las tierras que habían sido arrebatadas a las comunidades.

Las acciones militares de Morelos fueron muy exitosas en 1811. Por ello fue designado cuarto vocal de la Junta Nacional Americana. El ejército de Morelos ocupó poblaciones importantes, como Chilapa, Taxco, Izúcar y Cuautla. Consiguió el apoyo de otros terratenientes, como los miembros de la familia Bravo, y de un sacerdote originario de Tlaxcala, Mariano Matamoros, quien resultó tener brillantes dotes militares. Ese mismo año se incorporó a sus tropas Manuel de Mier y Terán, un estudiante del Colegio de Minería que

destacaba al frente de la artillería. Al empezar 1812, la estrella militar de Morelos iba en ascenso. Planeó dirigirse a Puebla, con lo que habría interrumpido el comercio de la ciudad de México con Veracruz. Sin embargo, en febrero fue sitiado en Cuautla por las tropas de Félix Calleja. Después de más de dos meses de constantes asedios y padeciendo hambre y sed, Morelos consiguió huir de la ciudad. Para Calleja fue humillante haber dejado escapar con vida a los principales jefes de la insurrección, pero también fue una derrota para los insurgentes, quienes se percataron de que sus fuerzas no eran suficientes para ocupar plazas mayores como la poblana y, mucho menos, la ciudad de México. Por ello, Morelos tomó la decisión de dirigir sus armas hacia una ciudad capital, pero que no era de tanto peso en términos de su centralidad en el virreinato: Oaxaca.

El sitio de Cuautla tuvo otra consecuencia grave. Los dos meses de hostilidades ocasionaron tantas muertes dentro de la ciudad y la población quedó tan debilitada por la falta de alimentos y de agua, que muy pronto hicieron su aparición unas "fiebres misteriosas". Durante los meses siguientes, el tifo se extendió por Puebla. No se sabe cuántas personas murieron en esa provincia ni cuántas otras en las regiones controladas por los insurgentes. Sin embargo, en 1813, en la ciudad de México se registraron cerca de veinte mil defunciones y más de treinta mil en los distritos cercanos a la capital. Estos datos dan idea del tamaño de la catástrofe. La mortandad es un factor que explica por qué los rebeldes empezaron a perder apoyo después de esa fecha, pues muchas localidades se estaban despoblando.

A finales de 1812, Morelos consiguió tomar Oaxaca. Pronto se percató de que tenía pocas simpatías entre los gru-

pos poderosos de la ciudad. Sólo uno de los altos dignatarios eclesiásticos de la catedral oaxaqueña, José de San Martín, se declararía partidario de la independencia. La mayoría de los comerciantes, terratenientes, burócratas y eclesiásticos eran leales a la corona española. Para ganar apoyo, Morelos promovió que el quinto vocal de la Junta Nacional Americana fuera electo por las principales corporaciones oaxaqueñas. El nombramiento recayó en José María Murguía y Galardi, un rico comerciante de la región.

En 1813 llegó a Oaxaca un abogado y periodista que había participado en las elecciones en la ciudad de México, bajo el régimen de la Constitución de Cádiz. Carlos María de Bustamante era perseguido por el gobierno de Francisco Xavier Venegas a raíz de su defensa de los derechos que la Constitución otorgaba a los ciudadanos. Esta experiencia lo convenció de que el gobierno monárquico era por naturaleza autoritario y nunca respetaría las leyes liberales. Entonces propuso a Morelos la reunión de un congreso, de una asamblea que redactara una constitución parecida a la de Cádiz, pero con una diferencia: no tendría rey, sino que sería una constitución republicana.

Para entonces, la Junta Nacional Americana tenía serios problemas. Verduzco, Liceaga y Rayón se disputaban el mando y, en la práctica, actuaban por separado. Esta situación fue aprovechada por Morelos, que convocó a una reunión del Congreso. Al tiempo que se dirigía a la conquista de Acapulco, organizó elecciones. Sólo pudo ser electo José Manuel de Herrera, diputado de Tecpan, una provincia creada por los insurgentes en el sur por el movimiento intendentista de México. Los demás diputados fueron electos por las provincias. El 13 de septiembre, el Congreso se instaló de manera solemne en Chilpancingo.

A diferencia de la propuesta de Ignacio Rayón y de la Junta Nacional Americana, José María Morelos estaba decidido a romper por completo con la monarquía española. Uno de sus más importantes ideólogos, José María Cos, había expresado ya —en su *Plan de paz y guerra*— que los insurgentes no eran rebeldes sino una parte contendiente en una guerra entre dos naciones, la americana y la española. En los *Sentimientos de la nación*, Morelos declaró que la América sería libre e independiente de cualquiera otra nación o monarquía. Quedarían abolidas la esclavitud y las diferencias de nacimiento. El gobierno se entregaría a los criollos y se protegería la religión católica. Estos principios serían retomados por el Congreso, el 6 de noviembre de 1813, en la solemne declaración de la independencia de la América Septentrional.

Puede parecer paradójico que el periodo de mayor desarrollo político de la insurgencia coincidiera con su debacle militar. Las tropas expedicionarias que llegaban de España contribuyeron a fortalecer el ejército realista. El Congreso de Anáhuac anduvo varios meses a salto de mata, huyendo de las tropas leales al rey. En Apatzingán, en octubre de 1814, promulgó finalmente el *Decreto constitucional para la libertad de la América mexicana,* que prescribía la división de poderes y el reconocimiento de derechos a los ciudadanos, así como la protección de la religión. El *Decreto* pretendió ofrecer a la población de Nueva España una alternativa constitucional frente al regreso de Fernando VII al trono de España y la abolición de la Constitución de Cádiz, en la que se habían inspirado sus autores. Sin embargo, las derrotas que sufriría la insurgencia en los siguientes meses impidieron que la Constitución de Apatzingán tuviera vigencia más allá de los

pueblos y villas por donde el Congreso y el mismo Morelos transitaban. La captura y la muerte de Morelos a finales de 1815 significaron también el fin del gobierno constitucional insurgente. Los conflictos entre los insurgentes debilitaron el movimiento. Las personas que habían sido más cercanas a Morelos acusaron al Congreso de causar la debacle de la insurgencia. José María Cos afirmaba que un grupo de abogados y curas que no habían sido electos no podían considerarse auténticos representantes de la nación. Poco después, Mier y Terán disolvió el Congreso.

Vivir en una época difícil, 1811-1820

La guerra trastornó la vida de mucha gente. El control que tradicionalmente ejercía el virrey en las diversas regiones del virreinato se hallaba debilitado y ahora las provincias dependían de sus propios jefes militares, que en ocasiones actuaban de manera arbitraria. En el sureste de Nueva España, en el sur, en Michoacán y el Bajío, en los Llanos de Apan y la Sierra Norte de Puebla, en Veracruz y en Nueva Galicia, la guerra había provocado transformaciones importantes. Muchos pueblos y villas se habían armado para combatir a los insurgentes. Esas localidades ya no volverían a quedar subordinadas a las cabeceras municipales ni a las repúblicas de indios de las que antes dependían.

En los pueblos donde los hombres se armaron, la vida familiar sufrió cambios serios y se tornó más violenta. En cambio, en otros sitios donde los hombres habían sido arrastrados por la guerra y abandonaron sus pueblos, las mujeres tomaron un papel central en el sostenimiento de la casa y

en la vida doméstica. La guerra dividió familias. Uno de los más destacados defensores de la unión con España, Mariano Beristáin, vio cómo su hermano peleaba del lado de los insurgentes. Pero su caso no fue el único.

La guerra había ocasionado desorden, aumentó el bandolerismo y los caminos eran inseguros. Por eso, mucha gente se mudó a las ciudades, donde esperaban encontrar más protección. Esto provocó contratiempos a quienes ya vivían ahí. Como la agricultura y el comercio se habían trastornado, los productos se empezaron a encarecer. Además, las autoridades ponían restricciones para evitar que los insurgentes entraran en las ciudades, de modo que muchos pequeños comerciantes ya no circulaban con libertad. Algunos artículos que antes podían ser consumidos por todos, como la carne, se convirtieron en un lujo. No faltó quien sacara ventaja de esta situación. Así, los "regatones" o intermediarios obtuvieron ganancias nunca antes vistas. Muchos oficiales del ejército se beneficiaron, pues cobraban por escoltar los metales preciosos que salían de las minas.

Pese a todo, la gente trataba de seguir con su vida normal. Algunas personas se levantaban en armas —a favor o en contra de la insurgencia— y después de algún tiempo, cuando se cansaban o presentían un mayor peligro, se asentaban. Cuando el padre Marcos Castellanos fue derrotado en la isla de Chapala, se fundaron algunas rancherías en los alrededores. Muchos rebeldes volvieron a la vida tranquila, buscaron el ganado que se había dispersado, reconstruyeron sus jacales, sembraron la tierra. No faltó quien destilara mezcal. Después de todo, la vida y la muerte seguían su curso. La parroquia podía ser un buen lugar para buscar el sentido a lo que estaba sucediendo y los curas enfrentaban la difícil situación de cui-

dar las almas de sus feligreses, tanto quienes permanecieron leales a la monarquía como aquellos que habían optado por la rebelión. En muchas ocasiones, los párrocos fueron acusados tanto por las autoridades virreinales como por los insurgentes de colaborar con el enemigo, y todo porque suministraban los sacramentos a unos y otros. Es verdad que entre los dirigentes de la insurgencia hubo sacerdotes, pero no fueron mayoría. Muchos religiosos apoyaron abiertamente el orden español, incluso con las armas; muchos más sólo procuraron seguir con su ministerio en aquel tiempo adverso.

Los indígenas tampoco tomaron una decisión unánime sobre la insurgencia. Algunos la apoyaron, otros no. Por lo general, los que se rebelaron tenían objetivos muy concretos, como expulsar a los *gachupines* asentados en los pueblos de indios, recuperar el dominio sobre recursos naturales en conflicto. Nunca se alejaron demasiado de sus pueblos y procuraban regresar para seguir con sus tareas en el campo. En algunos lugares, las comunidades vieron con malos ojos tanto a las tropas realistas como a las insurgentes. En las sierras de Oaxaca los mixtecos no aceptaron la presencia del ejército de Morelos.

Los niños y los ancianos fueron, como suele suceder, los más afectados. La peste y el hambre ocasionadas por la guerra quizá mataron a más personas que las balas, las flechas y las espadas. Tiempo después, un observador extranjero aseguraría que seiscientos mil habitantes de Nueva España murieron durante la década de 1810. Cuando los hombres se levantaban en armas, las mujeres les proporcionaban alimentos y auxilios. Por eso, algunos realistas como Agustín de Iturbide no se tentaron el corazón para apresar y ajusticiar mujeres. Cuando disminuía la población de rancherías,

pueblos y villas, ya fuera por la muerte de sus habitantes, por abandono o por las incursiones militares, los insurgentes perdían ese apoyo tan necesario.

La independencia, 1820-1823

La rebelión permaneció viva aun después de la muerte de Morelos. Por supuesto, nunca volvió a estar tan organizada. Luego de la disolución del Congreso de Anáhuac, una junta subalterna se encargó del gobierno, aunque era poco reconocida por los dirigentes de la insurgencia. Los hermanos Osorno, Vicente Guerrero, Antonio Torres, Gordiano Guzmán, tenían poco contacto entre sí, y en ocasiones se hallaban enemistados. Manuel de Mier y Terán y Guadalupe Victoria tuvieron serios conflictos. Cuando en 1817 el joven militar navarro Xavier Mina arribó a Nueva España junto con Servando Teresa de Mier para luchar contra las autoridades realistas, no encontró apoyo y pronto fue apresado y fusilado. La guerra continuaba y los oficiales del ejército del rey aprovechaban esa situación para adquirir mayor poder. El nuevo virrey de Nueva España, Juan Ruiz de Apodaca, tenía poca autoridad sobre los jefes militares de las provincias. José de la Cruz, capitán general en Guadalajara, era sin duda más fuerte que el propio virrey. En el noreste, Joaquín Arredondo actuaba de manera muy autónoma, y lo mismo podía decirse de otros comandantes y oficiales. En la práctica, muchas regiones eran ya independientes. Por eso Servando Teresa de Mier llegaría a afirmar que lo único que faltaba era que un jefe militar (él pensaba en un insurgente) nombrara un Congreso y formara un

gobierno para que la independencia se consiguiera. Eso sucedería poco después.

En 1820, en España, algunos sectores del ejército se rebelaron para exigir al rey que restableciera la Constitución de Cádiz. Fernando VII no tuvo más opción que reunir de nuevo a las Cortes. En Nueva España las reacciones fueron muy diversas. Hubo quienes se quejaron porque el orden liberal abolía la Inquisición. Muchos jefes militares tuvieron miedo de que el nuevo régimen los persiguiera por los excesos cometidos durante la guerra. Antonio Pérez Martínez, ahora obispo de Puebla, temía que las Cortes lo castigaran por haber invitado a Fernando VII a abolir la Constitución en 1814. Al mismo tiempo, en los pueblos, villas y ciudades, mucha gente aprovechó para elegir sus propias autoridades. Más de un millar de ayuntamientos se erigieron en toda Nueva España. Algunas ciudades importantes, como Puebla y Valladolid, exigieron que se les reconociera el derecho a tener su propia diputación provincial. La libertad de prensa fue aprovechada para expresar ideas a favor de la Constitución; algunos escritores, sin embargo, sugirieron que, para gozar de los derechos constitucionales, tal vez sería necesario romper con España.

Muchas personas dieron la bienvenida a la Constitución, aunque al parecer las Cortes seguían sin estar dispuestas a dar a los americanos la representación que se merecían, pese a las exigencias de los diputados de Nueva España. Como hizo notar Carlos María de Bustamante, los virreyes habían aplicado las leyes liberales de manera muy arbitraria. En 1821, un grupo de diputados americanos presentó en las Cortes una proposición para que se crearan tres reinos independientes en América, que reconocerían a Fernando VII

como monarca, si bien cada uno tendría sus propias Cortes. Por supuesto, los diputados españoles la rechazaron. Desde antes de salir rumbo a Madrid, algunos de los representantes de Nueva España en las Cortes sabían que varios grupos políticos y militares habían fraguado un plan para que el rey de España o un miembro de la familia real se coronara emperador de México. Ese proyecto se estaba llevando a cabo en el sur de la capital virreinal, entre el comandante Agustín de Iturbide y uno de los pocos guerrilleros que mantenían la bandera de la independencia, Vicente Guerrero.

El Plan de Iguala de febrero de 1821 declaraba la independencia de México, ofrecía el trono del Imperio mexicano a Fernando VII o algún miembro de la familia real y aceptaba que la Constitución de Cádiz continuara vigente mientras se hacía una que fuera adecuada para el país. Respetaba los derechos que las leyes liberales otorgaron a los americanos, aunque exigía que se aplicaran a toda la gente, sin importar su origen. Recuperaba, por lo tanto, una demanda insurgente: la desaparición de las diferencias por nacimiento, pero no excluía a los españoles. Otro elemento de fundamental importancia en el movimiento de independencia encabezado por Iturbide fue la defensa de la religión, pues las Cortes de Madrid estaban aprobando leyes en contra de algunos privilegios de la Iglesia. Manuel de la Bárcena, que había sido muy cercano a Miguel Hidalgo y a Manuel Abad y Queipo, expresó con toda claridad los motivos de la independencia. La naturaleza había hecho del Imperio mexicano una nación, separada de España por un océano, rica y próspera, con un clima y una población que exigían leyes e instituciones propias.

En la ciudad de México, el virrey suprimió la libertad de

prensa, por lo que la mayoría de las publicaciones favorables a la independencia aparecieron en Puebla, en donde el obispo Pérez Martínez y el Ayuntamiento apoyaron a Iturbide a cambio de una diputación provincial. Las tropas españolas no estaban contentas con la manera en que Juan Ruiz de Apodaca llevaba la guerra, por lo que lo destituyeron el 5 de julio de 1821. El dirigente de este golpe, Francisco Novella, fue declarado virrey, pero no obtuvo el reconocimiento ni del Ayuntamiento de México ni de la Diputación Provincial. Una vez más, como había ocurrido en 1808, la débil legalidad del régimen fue violentada y se estableció un gobierno ilegítimo. El nuevo jefe político de Nueva España, enviado por las Cortes para tratar de pacificar el virreinato, Juan O'Donojú, decidió negociar con Iturbide y reconocer la independencia, en agosto de 1821, en la villa de Córdoba, Veracruz.

Poco después, el ejército de las tres garantías —religión, libertad e independencia— entraría en la ciudad de México. Tal como había propuesto Servando Teresa de Mier, Agustín de Iturbide nombró a los integrantes de una Junta Provisional Gubernativa, quienes a su vez lo designaron presidente de la Regencia. El 28 de septiembre de 1821, los miembros de la Junta firmaron el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. El Acta apelaba a los derechos naturales —otorgados por Dios— de los americanos y rechazaba el dominio de cualquier otra potencia. El Imperio sería una gran nación, gobernada por leyes liberales, con dominio sobre un enorme territorio que iba desde Panamá hasta California. Unos meses después llegaría la noticia de que España se negaba a reconocer la independencia de ese territorio, al que consideraba una provincia rebelde.

Agustín de Iturbide enfrentó numerosos problemas para organizar un gobierno. El Plan de Iguala había declarado que la Constitución de Cádiz seguía vigente en el Imperio mexicano, pero las autoridades sólo la acataban cuando les convenía. En cambio, cuando querían más poder que el conferido por la Constitución, se definían como autoridades soberanas. Con ese argumento, Iturbide trató de modificar la manera como se elegiría el primer Congreso imperial. Cuando el Congreso se reunió, tuvo serios conflictos con el titular del Poder Ejecutivo, pues los diputados aseguraban que los preceptos de la Constitución debían aplicarse a todos, menos a ellos. Iturbide alegaba lo mismo. Esta contradicción tuvo graves consecuencias.

El 21 de julio de 1822, ante el rechazo español a reconocer la independencia, Agustín de Iturbide fue proclamado emperador. Sin duda se trataba del caudillo más popular, pero eso no bastó para consolidar su gobierno. Un grupo de hombres y mujeres —entre quienes se contaban algunos antiguos insurgentes— consideraba que la monarquía no podía convivir con el orden constitucional. Servando Teresa de Mier difundió una publicación en la que promovía la república. Finalmente, el emperador se percató de que algunos diputados estaban conspirando contra el Imperio y decidió arrestarlos. Con el apoyo de un número importante de diputados de las más diversas posiciones políticas, Iturbide disolvió el Congreso por ineficiente, ya que no había redactado la Constitución ni aprobado leyes importantes. En su lugar, estableció una Junta Nacional Instituyente integrada por algunos miembros del Congreso disuelto. Este organismo debía elaborar un proyecto de Constitución.

En principio, estas medidas fueron bien vistas por mu-

chos sectores políticos que desconfiaban de los republicanos y favorecían un gobierno fuerte. Sin embargo, las cosas no mejoraron. El país había quedado muy desarticulado después de once años de guerra. Algunos pueblos se negaban a pagar impuestos. Otros sí los pagaban, pero esos recursos no llegaban a la ciudad de México, sino que se quedaban en las capitales de provincia, donde los jefes políticos o las diputaciones provinciales los controlaban. El emperador tampoco pudo satisfacer las demandas de quienes lo habían apoyado. Principalmente se sentía comprometido con el ejército, aunque debía lidiar también con las ambiciones de algunos de sus principales jefes. En diciembre de 1822, la disolución del Congreso sirvió a uno de esos militares, el brigadier Antonio López de Santa Anna, para pronunciarse en Veracruz, en unión con varios conspiradores republicanos. La situación para Iturbide se volvía peligrosa. Incluso Francisco Lemaur, jefe militar del castillo de San Juan de Ulúa, que seguía en manos de los españoles, apoyó la rebelión de Santa Anna para desestabilizar al gobierno independiente de México.

El pronunciamiento no tuvo mayor resonancia sino en los pueblos cercanos, pero el ejército imperial no pudo tomar Veracruz. No había recursos para proveerlo de pertrechos ni de parque. Cuando el general encargado de combatir a Santa Anna, Antonio Echávarri, supo que iba a ser destituido, prefirió pronunciarse a favor de la reunión de un nuevo Congreso y hacer la paz con los rebeldes, el 1° de febrero en la Casa Mata de Veracruz. Esta situación fue aprovechada por algunos enemigos del emperador que se hallaban en el ejército, como fue el caso de José Morán, comandante de Puebla, quien se adhirió al Plan de Casa Mata y se proclamó

comandante en jefe del ejército libertador. El emperador no podía dar crédito. A principios de marzo de 1822, Iturbide restauró el Congreso que había disuelto y poco después, al darse cuenta de que se había roto la coalición que le había permitido la consumación, el 19 de marzo, abdicó. Fracasaba así el primer intento de construir un gobierno en el territorio que una vez había sido parte de una poderosa monarquía.

EL MÉXICO DE LAS POSIBILIDADES

Alfredo Ávila y Érika Pani

1823: EL NACIMIENTO DE LA REPÚBLICA FEDERAL MEXICANA

A mediados de 1823, la situación en los territorios que habían formado parte del Imperio mexicano era en extremo difícil y su futuro incierto. Más de diez años de guerra habían paralizado la economía. Las minas de los lugares más afectados por el conflicto, como las de Guanajuato, se habían inundado. Los empresarios no tenían dinero para realizar las labores de drenaje, por lo que buscaron socios extranjeros. En los años anteriores habían salido millones de pesos. Muchos españoles, temerosos por sus vidas, huyeron del país y se llevaron sus riquezas. La falta de recursos económicos afectó de igual forma el comercio, sobre todo el que se realizaba con el exterior. Los agricultores que producían alimentos para vender en los grandes mercados de las ciudades también sufrieron. Algunas haciendas dejaron de obtener ganancias. Esto benefició a los rancheros que cultivaban productos básicos, como el maíz, pues podían arrendar o comprar tierras de haciendas a precios bajos, con lo que se convertían en pequeños propietarios.

El proceso de independencia provocó transformaciones importantes, pero la sociedad mantuvo muchas características de la época colonial. A ciencia cierta, no se conocía la extensión del territorio que había ocupado el Imperio mexicano, pero se sabía que era enorme y poco poblado, pues se estimaba

que lo habitaban más de seis millones concentrados en el centro y el sureste. Más de la mitad vivía en pueblos indígenas, en los que la tierra y los recursos naturales no pertenecían a los individuos, sino sólo a la comunidad. Esos pueblos eran numerosos en la cuenca de México y sus alrededores, los valles de Puebla y Tlaxcala, la Sierra Mixteca y los valles centrales oaxaqueños, Yucatán y las zonas frías de Michoacán y Jalisco. En cambio, en las tierras cercanas a las costas se contaba una población menor. Ahí casi todos los habitantes eran mestizos, es decir, descendientes tanto de españoles como de indígenas, africanos y, en menor medida, asiáticos. Los mestizos predominaban en el norte, aunque ahí la población también era escasa. Zacatecas, la ciudad más grande de aquellas regiones, apenas alcanzaba treinta mil residentes. Durango, San José del Parral, Chihuahua, Saltillo y Monterrey tenían pocas calles y casas. San Blas y Mazatlán eran puertos con unos cuantos pobladores. Tampico y Matamoros también eran pequeños, pero empezaron a crecer merced a que Veracruz no monopolizaba ya el comercio. En California algunas misiones congregaban a pocos indígenas. Eran regiones muy aisladas, lo mismo que El Paso y Santa Fe, en Nuevo México. Por su parte, los vecinos de San Antonio de Béjar, en Texas, empezaron a ver la llegada de personas provenientes de Estados Unidos, con costumbres diferentes de las suyas.

Durante la época colonial muchos pueblos y villas dependían del gobierno de otras ciudades. Después de años de guerra esas poblaciones ganaron autonomía. Los vecinos más importantes por su riqueza o posición social se hicieron cargo del gobierno. A veces ejercían control sobre los demás pobladores de manera informal, pero en ocasiones lo hicieron a través de las instituciones establecidas por la

legislación de las Cortes de Cádiz. Los ayuntamientos y las diputaciones provinciales podían considerarse representantes de la soberanía popular. Después de la caída del Imperio muchos políticos y escritores consideraron que la sociedad volvió a un estado natural, es decir, que cada región e incluso cada persona podían adoptar su forma de gobierno y decidir libremente si se unían a otras regiones para formar un país. En América Central todas las provincias, menos Chiapas, decidieron integrar una nación independiente, aunque los conflictos políticos la hicieron fracasar en 1839.

En realidad, la mayoría de las provincias sostenían muchas relaciones comerciales entre sí y consideraban que les convenía mantenerse unidas, pues permanecía latente la amenaza de reconquista por parte de España. Sin embargo, no estaban dispuestas a perder la autonomía obtenida gracias a la guerra y a las instituciones liberales, por lo que se manifestaron en contra de reconocer la legitimidad del propio Congreso y del Poder Ejecutivo provisional que éste había nombrado. En este contexto, fue de fundamental importancia la actividad del joven minero de Guanajuato Lucas Alamán, quien consiguió el reconocimiento de las provincias al gobierno de México. Como secretario de Relaciones Exteriores e Interiores del Poder Ejecutivo provisional, entabló negociaciones con políticos de las principales ciudades de la República y no dudó en enviar al ejército para someter a Jalisco. Alamán también desempeñó un papel relevante para que Chiapas se uniera a México y no a Guatemala, de la cual había dependido durante todo el periodo colonial.

En noviembre de 1823 se reunió en la ciudad de México un nuevo Congreso para "constituir" a la nación. Los diputados tenían ideas diferentes y a veces contradictorias respecto

de cómo debían redactar una Constitución. Algunos, como el antiguo insurgente Carlos María de Bustamante, pensaron que el territorio de la antigua Nueva España debía mantenerse unido, con un gobierno fuerte, electo por los ciudadanos. Quienes pensaban de esa manera fueron conocidos como *centralistas*. Otros, como Servando Teresa de Mier, consideraban que dado el tamaño del país, cada provincia debía tener instituciones de gobierno electas. Tenían un proyecto *moderado,* aunque a veces se los confundía con los centralistas. La mayoría de los congresistas pensaba, en cambio, que las provincias eran verdaderos estados soberanos, con instituciones de gobierno propias y que podían unirse para formar una nación. Los promotores de esta propuesta, como Miguel Ramos Arizpe, se llamaron *federalistas,* pues pensaban que la unión de los estados soberanos daría forma a una federación, respetuosa de las instituciones locales, pero capacitada para gobernar sobre todos. Por último, otros diputados —como el jalisciense Juan de Dios Cañedo— creían que los estados soberanos sólo debían unirse para arreglar las relaciones con el exterior y el comercio, por lo que proponían una *confederación.*

Nunca como en 1823 aparecieron tantas publicaciones en torno a la manera como debían organizarse las instituciones. La mayoría consideraba que el federalismo traería la felicidad de todos los mexicanos, asociaba el centralismo con el despotismo y aseguraba que los habitantes del Anáhuac (como también se llamaba al país) podían ser mejores ciudadanos si participaban en las decisiones políticas de sus propias regiones. Los periódicos reproducían las sesiones de los diputados y, aunque muy poca gente sabía leer, quienes podían hacerlo leían en voz alta en lugares públicos para que los demás se enteraran.

En octubre de 1824 fue firmada la Constitución Federal. Ese documento concibió a la nación integrada por el pueblo que habitaba los viejos territorios de Nueva España, Yucatán, las Provincias Internas y las Californias, y también por los estados que en los meses anteriores se establecieron en esas mismas regiones. Los ciudadanos elegirían periódicamente a sus gobernantes. El Poder Legislativo tendría dos cámaras: la de Diputados, con representantes populares, y la de Senadores, con representantes de los estados federados. El presidente sería electo por los congresos de los estados, los que a su vez se formaban por el voto de los ciudadanos de cada uno de ellos. Cada estado tendría su propio gobierno y su propia constitución, en la que se definirían los derechos de sus habitantes, incluidos los de votar y ser votado para los cargos de gobierno. La Federación mexicana se constituyó como una nación católica, una de las pocas características comunes a toda la gente que la habitaba.

La república federal y el quiebre del orden constitucional, 1824-1828

En octubre de 1824 también fue nombrado el primer presidente de la República. El ganador de la elección de los congresos estatales fue Guadalupe Victoria, mientras que en segundo lugar quedó Nicolás Bravo, que ocupó la vicepresidencia. Ambos habían sido destacados insurgentes, aunque el segundo fue acusado de centralista. Victoria procuró integrar un gobierno con representantes de todas las tendencias, lo cual fue criticado, pues no quedó bien con ningún grupo político. El nuevo gobierno enfrentó muchas dificultades.

Para empezar, estaban los peligros externos. España no aceptaba perder el más rico de sus virreinatos y amenazaba con enviar tropas para reconquistarlo. El gobierno mexicano trató de obtener el reconocimiento y el apoyo de otros países, pero ello no fue fácil. Ni el papa León XII, jefe de la Iglesia católica en la época de la presidencia de Guadalupe Victoria, ni los pontífices que lo sucedieron, reconocieron la independencia de las antiguas colonias españolas sino hasta la muerte de Fernando VII en 1833. Francia y las otras monarquías aliadas de España también obstaculizaron el reconocimiento. Gran Bretaña estuvo dispuesta a negociar con México, en buena medida porque tenía intereses comerciales en el país. Estados Unidos y las demás naciones americanas que se habían independizado habían establecido relaciones diplomáticas con México durante la época del Imperio.

La Constitución señalaba que únicamente los estados podían cobrar impuestos directos a los ciudadanos. El gobierno federal tenía algunas fuentes de recursos, pero no eran suficientes para pagar a la burocracia y, en especial, al ejército, por lo que era difícil asegurar su lealtad. Algunos diputados eran miembros de familias poderosas y ricas que, en la época colonial, habían hecho préstamos a la corona española. Aunque favorecieron la independencia, no estaban dispuestos a perder su dinero, pues era obvio que España no saldaría esas deudas. Por eso declararon que el gobierno mexicano debía pagarlas. La penuria y las deudas obligaron al gobierno a conseguir préstamos de bancos británicos interesados en hacer negocios con los nuevos países, pero que cobraban muy altos intereses por el riesgo que implicaban. Ese dinero se esfumó al pagar la cuenta corriente y en la compra de armas y uniformes de la burocracia y el ejército.

Una buena parte se perdió con la quiebra de la Casa Barclay, institución que manejaba buena parte de esos recursos. México no pudo cumplir con los pagos, por lo que se quedó sin crédito internacional hasta la década de 1880. El gobierno recurrió a los prestamistas mexicanos y extranjeros, conocidos como agiotistas, que se enriquecieron gracias a los intereses altísimos.

Los estados conocieron una situación diferente, pues pudieron aprovechar los recursos que antes enviaban a la capital. Veracruz se benefició del comercio internacional que debía pagar alcabalas, y sus ricas tierras producían alimentos, algodón y tabaco. En Yucatán creció el intercambio de mercancías con La Habana, pues Cuba se había enriquecido con los capitales salidos del país en los años anteriores. Oaxaca también vivió una buena época, pese a que la grana dejó de venderse tan bien como antes. Puebla contaba con grandes recursos naturales, aunque sufrió por la importación de telas baratas. El Estado de México era sin duda el más rico y el más poblado de la Federación. Michoacán y Jalisco también prosperaban, aunque no tanto como San Luis Potosí y Zacatecas, con sus minas de plata. Guanajuato y Querétaro no tenían la enorme riqueza de la época anterior a la insurgencia, pero la paz haría que se recuperaran poco a poco.

Algunos estados tuvieron gobiernos estables, pero la mayoría se vio afectada por las turbulencias políticas. Como no había partidos políticos, los grupos que tenían interés en ocupar cargos públicos se organizaron de diversas maneras. El ejército también se convirtió en un actor poderoso, capaz de proteger su fuero constitucional, que le permitía tener sus propios tribunales. Sólo la Iglesia gozaba del mismo privilegio.

Muchos políticos se agruparon en logias masónicas. La masonería era una sociedad secreta cuyo objetivo era promover la ilustración y los derechos de los ciudadanos; en México como en otros lugares se convirtió también en un medio para participar en la política. Los principales miembros del gobierno en 1823 y 1824 se sumaron a las logias del rito escocés, conformadas por republicanos que se consideraban enemigos del Imperio. En 1824 descubrieron una conspiración favorable a Agustín de Iturbide, quien se hallaba en el exilio. Arrestaron a muchas personas y fusilaron al mismo Iturbide cuando desembarcó en Tamaulipas. Los partidarios del que había sido emperador de México se integraron después en otras logias, como la del Águila Negra, que encabezaba el presidente Guadalupe Victoria y que se adscribió a la de York, con ayuda del ministro de Estados Unidos en México, Joel R. Poinsett.

Los yorquinos organizaban movilizaciones populares y por ello adquirieron mucha influencia en las elecciones. Acusaron a sus enemigos de centralistas y promovieron una campaña en contra de los españoles que vivían en la República. En 1826 consiguieron un gran triunfo en las elecciones para el Congreso. Algunos de sus más distinguidos miembros formaban parte del gobierno de Guadalupe Victoria, como el secretario de Guerra, Manuel Gómez Pedraza. También ganaron presencia en muchos de los gobiernos de los estados. En cambio, el vicepresidente Nicolás Bravo era gran maestre de las logias del rito escocés. Los triunfos yorquinos hicieron que sus demandas fueran cada vez más radicales. Exigieron la expulsión de todos los españoles residentes en el país, aunque éstos eran legalmente mexicanos, pues habían reconocido la independencia. Nicolás Bravo se pronunció en contra de

estas medidas, pero fue derrotado por el general Vicente Guerrero. En 1827 los yorquinos se habían convertido en el grupo político dominante, pero pronto se dividieron. Por un lado, los yorquinos más identificados con los intereses de los estados, como Miguel Ramos Arizpe y Francisco García, decidieron dar su apoyo a Gómez Pedraza. Formaron un nuevo grupo denominado *los imparciales*, opuesto a los escoceses y a los yorquinos radicales, como el gobernador del Estado de México, Lorenzo de Zavala, quien promovió la candidatura de Guerrero a la presidencia.

Los debates políticos se dirimían también en la prensa. Multitud de panfletos daba su apoyo a los bandos en pugna. El periódico *El Sol* era el vocero de los escoceses, mientras que los imparciales contaban con el diario *Águila Mexicana*. Por su parte, los yorquinos publicaban *El Correo de la Federación,* en el que atacaban a los otros grupos. En 1828 las elecciones populares para renovar al Congreso beneficiaron a los yorquinos; sin embargo, el presidente era nombrado por los votos de los congresos estatales, en donde no tenían mayoría. Por eso, el primer lugar lo obtuvo Manuel Gómez Pedraza; el segundo, Vicente Guerrero, y el tercero el general Anastasio Bustamante, apoyado por algunos yorquinos enemigos de Zavala, como José María Tornel y José María Bocanegra. Antes de conocer el resultado de la elección, con el argumento de que la voluntad popular estaba del lado de Guerrero, Antonio López de Santa Anna se levantó en armas en contra del Congreso veracruzano, que había votado a favor de Gómez Pedraza. En la ciudad de México Lorenzo de Zavala organizó un motín popular que desembocó en un escandaloso saqueo en el mercado del Parián. Guadalupe Victoria no pudo con la presión y nombró a Guerrero secretario de Guerra.

Gómez Pedraza renunció a sus pretensiones y huyó a Jalisco. El nuevo Congreso eligió a Guerrero como presidente y a Bustamante como vicepresidente, pese a que la Constitución ordenaba que, en caso de que el electo estuviera imposibilitado para ocupar la presidencia, debía hacerse un nuevo proceso electoral.

La crisis de la república federal, 1829-1836

La república no fue capaz de transmitir el poder por medios legales. Al finalizar 1828 varios estados que habían apoyado a Gómez Pedraza buscaron hacer una coalición en contra de Guerrero, pues consideraban que estaba siendo impuesto por el centro. Algunos, como Guanajuato, ordenaron la movilización de sus milicias, pero los oficiales de menor rango y buena parte de la tropa simpatizaban con Guerrero, de modo que se negaron a obedecer. La mayor fortaleza del nuevo gobierno era el apoyo popular, por lo que se tomaron medidas para consolidarlo. Se expidió una nueva ley de expulsión de españoles y se prohibió la importación de telas y otros artículos, para beneficio de los artesanos.

Guerrero tuvo muchas dificultades para gobernar. Lorenzo de Zavala, secretario de Hacienda, buscó dar facultades al gobierno federal para cobrar impuestos directos a los ciudadanos, lo que fue interpretado como una medida centralista. Con tan pocos recursos financieros, se vio obligado a obtener préstamos de los agiotistas. El gobierno también enfrentó un intento de reconquista española. Un grupo de descontentos había convencido a Fernando VII de armar una expedición en contra de México desde La Habana. Imagi-

naban que el desorden político y los problemas económicos harían que los mexicanos estuvieran deseosos de regresar al dominio español. La expedición, a cargo del general Isidro Barradas, desembarcó en Tampico. Antonio López de Santa Anna desde Veracruz y Manuel de Mier y Terán desde Tamaulipas consiguieron derrotar a las tropas españolas el 11 de septiembre de 1829. Los mexicanos vivieron un breve pero intenso momento de fervor patriótico. El 16 de septiembre, para conmemorar las fiestas patrias, el presidente Guerrero decretó la abolición de la esclavitud.

La situación del país se deterioraba por la falta de recursos. En noviembre, la guarnición de Campeche se pronunció a favor del centralismo. Un mes después, el ejército que se encontraba en Xalapa en previsión de un intento de reconquista española se pronunció por el restablecimiento de la Constitución. A la cabeza se encontraba el propio vicepresidente Bustamante. El movimiento logró una amplia alianza de todos los que desconfiaban de Guerrero por el uso de las facultades extraordinarias para suspender la libertad de expresión e imponer contribuciones directas y un préstamo forzoso a los estados. Guerrero tuvo que refugiarse en el sur de México, lo que permitió que Bustamante asumiera el Poder Ejecutivo a principios de 1830 y nombrara a Alamán secretario de Relaciones Exteriores e Interiores.

De nuevo, el Congreso se extralimitó en sus facultades constitucionales: declaró "justo" el Plan de Xalapa, reconoció a Bustamante en el ejercicio del Poder Ejecutivo y declaró a Guerrero imposibilitado para gobernar. La Administración Alamán —como se llamó al gobierno de 1830-1832— se caracterizó por su empeño en restaurar el orden y la hacienda pública, pero algunas de sus medidas no fueron

las más adecuadas. Durante meses, el ejército persiguió a Vicente Guerrero. Al ser capturado, el caudillo de la independencia fue acusado, juzgado de manera sumaria y fusilado. Alamán persiguió a los partidarios de los yorquinos, en especial a quienes habían ganado las elecciones en 1828 para los congresos estatales, por lo que pronto se consideró que estaba atentando contra los derechos de los estados. Es verdad que los gobiernos estatales habían apoyado en un principio a Bustamante, pero reorganizaron sus propias milicias para enfrentar medidas del gobierno federal que eran vistas como centralistas. El secretario de Guerra de Bustamante, el general José Antonio Facio, trató de reordenar al ejército y profesionalizarlo y procuró disminuir el peso de las milicias cívicas. Estas medidas, el fusilamiento de Guerrero y los excesos que de manera impune cometió el comandante de Jalisco contra el gobierno de esa entidad, extendieron el descontento. La prensa de oposición, como el periódico *El Fénix de la Libertad,* denunció al gobierno, y pronto empezó a ser objeto de persecución.

En materia económica, Lucas Alamán cambió la política que había mantenido el gobierno de Vicente Guerrero. En vez de prohibir la importación de artículos, permitió que éstos entraran al país mediante el pago de impuestos, que invirtió en maquinaria moderna para fabricar telas a precios bajos. Dio forma a la primera institución de financiamiento industrial, el Banco de Avío, que hacía préstamos a los empresarios comprometidos con la producción y la generación de empleos. Gracias a esa iniciativa se fundó la primera fábrica textil industrial en México, La Constancia Mexicana, que funcionó durante largos años. No todos vieron con buenos ojos este proyecto. Los grandes comerciantes que importa-

ban telas repudiaban la competencia de fábricas mexicanas. Como el orden legal se hallaba fracturado desde 1828, los grupos de interés no recurrieron a las leyes para solucionar sus demandas. En vez de eso, buscaron un caudillo que, por la vía armada, los beneficiara. En 1832 ese caudillo fue Antonio López de Santa Anna, muy popular por haber derrotado a los españoles en Tampico.

López de Santa Anna se rebeló en Veracruz en contra de los ministros del gobierno, a quienes acusó de centralistas y de querer cambiar la Constitución. Durante algunos meses no pudo avanzar con sus tropas, pues había varios estados que intentaban recuperar la legalidad constitucional que se había fracturado desde 1828. Muy pronto debía haber elecciones presidenciales y Manuel de Mier y Terán parecía el candidato ideal para los políticos de estados tan importantes como Zacatecas, San Luis Potosí y Jalisco. Sin embargo, Mier y Terán se suicidó a mediados del año, y los federalistas de esos estados se quedaron sin candidato. Temerosos de que Alamán aprovechara su posición para llegar a la presidencia, se aliaron con los rebeldes, a condición de que aceptaran que Gómez Pedraza concluyera el periodo presidencial para el cual había sido electo. Era una manera ingenua de "restaurar" un orden que se había fracturado. La debilidad del gobierno federal fue determinante para que Anastasio Bustamante negociara su salida del poder.

En abril de 1833, las elecciones en los estados dieron como presidente a Antonio López de Santa Anna y como vicepresidente a Valentín Gómez Farías. Los dos se consideraban federalistas y liberales radicales, es decir, dispuestos a hacer reformas sociales, aunque eso implicara enfrentar a corporaciones tradicionales como la Iglesia. Hasta entonces,

buena parte de la educación se hallaba en manos de instituciones religiosas. El guanajuatense José María Luis Mora elaboró un plan para que las escuelas superiores se convirtieran en lugares donde se formaran buenos ciudadanos, y que el gobierno elaborara los programas de estudio, según las necesidades de la república. Algunas entidades, como Oaxaca, Zacatecas y el Estado de México, habían establecido institutos de Ciencias y Artes, en donde se educarían las futuras generaciones de liberales.

Desde la independencia, los gobiernos de los estados procuraron ejercer el dominio sobre la Iglesia, llamado patronato, que antes tenía el rey de España. El papa había concedido ese privilegio al monarca español por extender la religión católica sobre millones de indígenas americanos y no quedaba claro que pudiera ser heredado por los gobiernos de los países independientes. La necesidad de obtener recursos había hecho que los gobiernos del Estado de México, Michoacán y Veracruz iniciaran la venta de bienes del clero. La mayoría de los federalistas, inspirados en el pensamiento ilustrado español del siglo XVIII, promovió que los bienes raíces eclesiásticos fueran distribuidos entre pequeños rancheros para mejorar no sólo la producción sino las condiciones de vida de la gente. Para consolidar las instituciones nacionales era necesario que todos los ciudadanos y corporaciones respetaran las leyes, así como la soberanía de los estados y la Federación. La Iglesia había aceptado el nuevo orden y reconocía a la autoridad civil y sus normas, pero no estaba dispuesta a permitir que los nuevos gobiernos intervinieran en sus asuntos ni que atentaran contra sus privilegios.

Para llevar adelante las reformas, Valentín Gómez Farías contó con el apoyo del Congreso electo en 1833, pero se co-

metieron varios excesos. El vicepresidente disolvió el Ayuntamiento de la ciudad de México y lo sustituyó por uno más favorable a sus propios intereses; prohibió la circulación de obras críticas al régimen, y promulgó una ley con la que desterraba a varios enemigos políticos y a otros que estuvieran "en el mismo caso". Amparado en esa ley, el gobierno actuó contra varios políticos destacados sin otorgarles audiencia ni mucho menos un juicio justo. Estas medidas ocasionaron descontento. Las reformas incluían la supresión del pago obligatorio de diezmos y del cumplimiento forzoso de los votos eclesiásticos. La Iglesia católica se manifestó contraria a estas medidas, pero las aceptó. En cambio, los obispos se negaron a obedecer un decreto que permitía al gobierno designar sacerdotes para ocupar los curatos y los cargos eclesiásticos vacantes. El propio vicepresidente suspendió el cumplimiento de esta disposición, pero en 1834 el Congreso decretó que los obispos que no la acataran serían desterrados.

Diversos acontecimientos habían retrasado las reformas. Una rebelión, encabezada por los generales Gabriel Durán y Mariano Arista, fue sofocada por Santa Anna, quien dio su apoyo al programa político de su vicepresidente, pues consideraba que resolvería los problemas financieros del gobierno, aunque no estuvo dispuesto a que el Congreso reorganizara el ejército.

Un problema adicional se presentó en el norte. Desde 1819, el gobierno español permitió que las personas que vivían en la Luisiana y en la Florida (que habían sido dominios españoles antes de formar parte de Estados Unidos) pudieran establecerse en Texas. El gobierno imperial de Agustín de Iturbide reconoció los privilegios que se dieron a esos co-

lonos y promovió la llegada de más. Tras la promulgación de la Constitución de 1824, los estados se encargaron de arreglar los asuntos de la colonización. Debido a que Texas tenía muy poca población, había quedado integrado con Coahuila como un solo estado. Los gobernantes "coahuiltexanos" ratificaron y dieron nuevas concesiones de tierras a empresarios estadounidenses para traer colonos. En pocos años, los anglosajones eran más que los mexicanos. Muy pronto, la presencia de la esclavitud ocasionó problemas. La Constitución de Coahuila y Texas declaraba que todas las personas que nacían en ese estado serían libres. En 1829 se abolió la esclavitud en todo el país, pero se permitió que persistiera en Texas, a cambio de que ya no se importaran más esclavos. En 1830, Lucas Alamán había promovido una ley que permitía al gobierno federal controlar la inmigración y la colonización. Se prohibió que los extranjeros que vinieran al país se asentaran en territorios limítrofes con sus países de origen. Estas medidas ocasionaban descontento entre los colonos de origen estadounidense y fueron aprovechadas por algunos individuos interesados en la anexión de Texas a Estados Unidos.

Los texanos, por medio de asambleas populares, reclamaron la separación de Texas respecto de Coahuila. En 1833, designaron al destacado empresario Esteban Austin para que viajara a la ciudad de México y promoviera la separación de Coahuila, la abolición de la ley de 1830 y la exención de pagar impuestos. El Congreso aceptó abolir la impopular ley de colonización y extendió por tres años la exención impositiva, pero Austin escribió a Texas para que se organizara un gobierno estatal. Cuando el vicepresidente se enteró de esa carta, ordenó la detención del empresario texano, quien ya

había emprendido el camino rumbo al norte. Austin fue encarcelado y permaneció en la ciudad de México hasta 1835, aunque Santa Anna consiguió liberarlo. La situación se volvió más tensa en los últimos meses de 1833 y en la primera mitad de 1834. Nuevos dirigentes, como Samuel Houston, organizaron grupos armados dispuestos a luchar por la independencia de Texas, con la idea de unirse después a Estados Unidos. Estas amenazas alertaron a los políticos mexicanos, quienes pensaron que sería necesario tener un gobierno más centralizado, para evitar que el país se fraccionara.

En 1834, Santa Anna se hizo cargo de la presidencia. Los principales cargos del gobierno federal fueron ocupados por federalistas, pero más moderados que los que habían estado con Gómez Farías. Algo semejante pasó en el Congreso. Las elecciones para renovarlo beneficiaron a políticos que veían con temor las medidas radicales. Los nuevos diputados, entre quienes se encontraban el rico empresario y poeta Francisco Manuel Sánchez de Tagle y el ex presidente Guadalupe Victoria, estuvieron de acuerdo en hacer reformas a la Constitución para evitar que los estados buscaran separarse de la Federación.

El año más crítico para la república federal fue 1835. Varios estados se mostraron dispuestos a defender sus derechos con las armas, mientras que algunos grupos políticos consideraban que el país estaba a punto de desintegrarse. En Campeche y Cuernavaca ya se habían presentado movimientos armados para defender la integridad nacional frente a lo que veían como una amenaza separatista. Incluso el presidente, que durante mucho tiempo había sido un convencido partidario de la federación, empezó a creer que ésta podía conducir a la desunión de México. Por ello, decidió actuar contra

los defensores de los derechos de los estados y promovió medidas para fortalecer al gobierno federal, como reducir el número de milicias estatales. La reacción no se hizo esperar en varios lugares. Santa Anna dirigió las tropas para enfrentar a las milicias cívicas zacatecanas. Contra lo que se esperaba, no encontró resistencia. Incluso recibió el apoyo de algunas ciudades, como Aguascalientes, que había tenido conflictos con los políticos de la ciudad de Zacatecas y que aprovechó la ocasión para pedir su separación de ese estado.

Las autoridades de Coahuila y Texas también se opusieron a la reducción de las milicias. En ese lugar se presentaron varios conflictos entre el gobernador y el comandante militar. El clima de inestabilidad e incertidumbre fue aprovechado por los colonos texanos para no reconocer ni al gobierno del estado ni al federal, aunque Austin los convenció para que no declararan la independencia, pues esa medida ocasionaría que los federalistas mexicanos dejaran de apoyar las demandas texanas. Esta situación cambió, pues Santa Anna organizó una expedición para someter a los rebeldes, por lo que en marzo de 1836 una convención declaró la independencia de la república de Texas. El primer presidente fue David Burnet, mientras que Lorenzo de Zavala ocupó la vicepresidencia. Poco después el ejército de Samuel Houston, integrado por voluntarios estadounidenses, venció a las tropas mexicanas en San Jacinto. López de Santa Anna fue apresado y obligado a reconocer la independencia texana.

Mientras tanto, en la ciudad de México la prensa se mostraba cada vez más alarmada, y no sólo por la amenaza de desintegración política. En 1833 un extraño mal se introdujo en México. El cólera ocasionaba altas fiebres y diarreas. Al final, una terrible muerte esperaba a los enfermos. Al prin-

cipio se pensó que era una enfermedad estomacal ocasionada por las altas temperaturas, propias de las regiones bajas. Sin embargo, la epidemia pronto se extendió. Las regiones más afectadas fueron Puebla y el altiplano de México, en donde probablemente murió el diez por ciento de la población. Algunas personas creyeron que se acercaba el fin del mundo; otras acusaron a los políticos radicales de haber propiciado la ira del cielo con las medidas que perjudicaban a la Iglesia católica. La crisis demográfica fue acompañada por un aumento en el precio de los alimentos. Se acusó al gobierno y las instituciones federales de ocasionar demasiados gastos y de provocar la pobreza de los artesanos. El centralismo no parecía una mala opción. Por eso, el Congreso empezó a trabajar en una nueva Constitución. En 1836 fueron promulgadas las Siete Leyes Constitucionales, que establecieron un sistema centralizado. Ése fue el fin de la primera república federal.

Un país que intenta sobrevivir, 1836-1848

Las Siete Leyes Constitucionales establecieron un sistema político liberal. Garantizaron los derechos de los ciudadanos e hicieron del equilibrio de poderes un principio fundamental. Hasta ese momento, la legislatura era vista como superior a los poderes Ejecutivo y Judicial. Para evitar que esto se repitiera, la nueva Constitución creó un Supremo Poder Conservador, sin más función que mantener la igualdad de los otros tres poderes. Las Siete Leyes buscaban limitar los excesos del liberalismo radical. Por eso, se exigió que los ciudadanos tuvieran una renta mínima para poder votar. También se aumentó el número de personas requerido para

poder formar ayuntamientos y, por último, se suprimieron los estados soberanos. En su lugar se establecieron departamentos que, aunque tenían juntas electas por la población, se hallaban sujetos al gobierno central. Pese a estos cambios, el gobierno nacional no pudo imponerse sobre la mayoría de los territorios. Una cosa era la ley y otra muy diferente la capacidad institucional para hacerla cumplir. Los pueblos y ciudades de provincia siguieron siendo muy autónomos.

Tal como había sucedido durante la guerra de independencia, la gente trataba de seguir con su vida pese a las calamidades y los problemas políticos. En el campo las cosas no cambiaban mucho. Los rancheros y los pueblos de indios llevaban una vida sujeta a los ciclos agrícolas. En cambio, en las ciudades la vida era más agitada. Como no había drenaje, las aguas negras se arrojaban a las calles y toda la suciedad iba a dar a los patios traseros, que a veces eran auténticos cochineros. Muy pocas personas tenían casa propia, de modo que las familias alquilaban lugares pequeños. En una sola habitación podía tenerse la cocina y el dormitorio, en el que pernoctaban juntos padres, hijos, hermanos, cuñados, tíos, abuelos.

Ni siquiera los ricos tenían muchas comodidades. Los pocos placeres que la gente se procuraba eran el chocolate, el tabaco y las bebidas alcohólicas, que podían consumirse en pulquerías y vinaterías. A lo largo de su vida, las mujeres tenían muchos hijos, la mayor parte de los cuales moría antes de cumplir un año. Tampoco era extraño que ellas murieran al dar a luz. En circunstancias tan difíciles, se buscaba consuelo en la religión. Los curas y párrocos eran figuras muy presentes, lo mismo que los santos, vírgenes, ángeles y diablos. Muchos creían en todo tipo de supersticiones. Imaginaban que habían visto las ánimas de sus muertos o que

se habían topado con la mismísima Llorona. La gente se iba a dormir en cuanto anochecía. Sólo unos cuantos, en las ciudades, asistían al teatro a ver compañías extranjeras que interpretaban piezas teatrales, especialmente comedias. Las noches eran oscuras, con cielos llenos de estrellas, y muy frías. Durante el día, las diversiones incluían juegos de azar, peleas de gallos y corridas de toros. Las ferias y los tianguis no sólo servían para el comercio sino que también eran aprovechados para la diversión. Todos los pueblos y ciudades tenían numerosas fiestas religiosas, en honor de sus santos patrones. Eran momentos en que la gente podía expresar sus creencias con mayor libertad de la que las autoridades solían tolerar. Los bailes y cantos populares no siempre eran bien vistos por las personas que habían recibido educación superior o pertenecían a las familias más ricas del país.

Los niños que podían asistir a las escuelas se topaban con métodos muy rigurosos. Los profesores con frecuencia recurrían a los golpes para "corregir" a los alumnos. Todo se memorizaba y se combinaba con enseñanzas religiosas. No obstante, los infantes podían escapar de esa disciplina. Corrían y jugaban con aros, canicas, baleros y trompos. Las ciudades estaban llenas de animales. En Veracruz, por ejemplo, los zopilotes abundaban, pues prestaban un servicio público muy apreciado: se comían los desperdicios. En la ciudad de México había tantos perros, que en las noches muy lluviosas los canes desenterraban a los muertos de los cementerios, lo cual ponía en graves aprietos a las autoridades municipales, que no sabían cómo solucionar este problema.

Con la independencia, la gente común y corriente aprendió a involucrarse en asuntos políticos. No faltó quien supiera convencer a sus vecinos para que lo nombraran miembro

RECENE
cicyt
CENTRO DE INFORMACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA

del ayuntamiento. Algunos harían carreras políticas más destacadas. Por eso, cuando las Siete Leyes exigieron a los ciudadanos que tuvieran un ingreso mínimo para poder votar y ser votados, hubo un gran descontento. Los nuevos impuestos también generaron rechazo. El costo de la vida ya era caro como para además tener que pagar al gobierno. El primer presidente del centralismo, Anastasio Bustamante, se vio obligado a enfrentar este malestar. Como no contaba con suficientes recursos, reincidió en la práctica de endeudarse con agiotistas, aunque también subió los impuestos al comercio internacional. Algunas de las personas que daban préstamos al gobierno eran ciudadanos extranjeros, quienes para garantizar que se les pagara acudían a las representaciones diplomáticas de sus países, con lo cual un simple problema de deuda privada podía convertirse en un conflicto internacional. Eso sucedió en 1838, cuando Francia, para cobrar las reclamaciones de algunos de sus ciudadanos, bombardeó el puerto de Veracruz.

Anastasio Bustamante no tuvo una tarea fácil. Los partidarios de la federación no desaparecieron y se mostraron muy activos. Muchos de ellos controlaban las instituciones locales de gobierno. Los más radicales estuvieron dispuestos a tomar las armas. En 1840, una rebelión encabezada por el general José Urrea y Valentín Gómez Farías intentó restablecer el federalismo, pero Bustamante logró imponerse. El temor a una escalada de violencia permitió que se delinearan otros grupos políticos que tendrían una enorme fuerza en esos años tan críticos. Por un lado, algunas pocas personas pensaron que los mexicanos no podían gobernarse con las instituciones adoptadas desde la independencia, porque en el fondo permanecían las costumbres y tradiciones coloniales,

de modo que lo más sensato era recuperar las leyes e instituciones de aquella época, aunque modernizándolas. Ante la constatación de que el sistema republicano había sido un verdadero fracaso, José María Gutiérrez de Estrada propuso en agosto de 1840 el establecimiento de una monarquía constitucional.

Como reacción a esta propuesta, algunos jefes del ejército señalaron que era necesario un régimen militar para salvar al país. Contaron con mucho apoyo, pues se temía que los federalistas más exaltados provocaran anarquía. La prensa de la época criticó de manera escandalosa tanto a los federalistas radicales como a Gutiérrez de Estrada, quien se vio obligado a huir. Finalmente, con el respaldo de los comerciantes descontentos por los altos impuestos, se aliaron Antonio López de Santa Anna, Mariano Paredes y Arrillaga, y desde la propia capital Gabriel Valencia, en contra del presidente y de las Siete Leyes Constitucionales. Muchos federalistas los apoyaron. Los políticos de las provincias creyeron que tendrían una buena oportunidad de recuperar las instituciones autónomas de gobierno. En 1842 se reunió un Congreso para redactar una nueva Constitución. Los militares no pudieron controlar las votaciones, de manera que los diputados no se sentían comprometidos ni con Santa Anna ni con Nicolás Bravo, quien se hizo cargo de la presidencia.

El Congreso, en el que abundaban políticos jóvenes, estuvo dispuesto a hacer reformas importantes. Se elaboraron tres proyectos de Constitución, sin que se lograra un consenso respecto de alguno de ellos. En diciembre de 1842, Bravo disolvió aquella asamblea que no podía llegar a nada. Poco después, se reunió una junta de personas notables que redactaron unas Bases Orgánicas, una especie de Constitución centra-

lista que eliminó el Poder Conservador y dio más fuerza al Ejecutivo. Antonio López de Santa Anna ocupó de nuevo la presidencia, pero no pudo evitar que los federalistas ganaran las elecciones para integrar el Congreso. Trató de disolverlo sin éxito, de modo que fue obligado a dejar la presidencia.

La vida política del país era un desastre. Quedó demostrado que cuando un grupo político no estaba contento con el orden establecido, simplemente se rebelaba y elaboraba una nueva Constitución. Para ese momento nadie podría hablar de legalidad. Los gobiernos nunca tenían suficiente dinero para pagar al ejército, que siempre se encontraba descontento y listo para levantarse en armas. Para colmo, una amenaza exterior ensombrecía aún más el panorama. Texas era un verdadero dolor de cabeza. Todos los políticos mexicanos consideraban que se trataba de una provincia rebelde a la que se debía sujetar por medio de las armas, pero no había recursos para financiar una expedición. El problema era mayor porque los texanos afirmaron que su frontera con Tamaulipas era el Río Bravo, mientras que los mexicanos siempre reclamaron que la frontera estaba más al norte, en el Río de las Nueces. Entre esos dos ríos había una amplia extensión de tierras que se convirtió en objeto de constantes discordias.

Desde que se independizaron de México, los texanos buscaron integrarse a Estados Unidos, pero por diversas razones no lo habían conseguido. En 1845 la situación cambió. La república texana había entrado en una prolongada crisis, contrajo una enorme deuda y demostró su falta de viabilidad política. En Washington, el Congreso aprobó la anexión, pese a que el gobierno mexicano había advertido que un acto como ése sería considerado motivo de guerra. En ambos

países, la prensa exaltó los ánimos dentro de un clima beligerante. El presidente José Joaquín de Herrera sabía que nunca ganaría una guerra con el país del norte, pero tampoco podía reconocerlo. De momento, estuvo dispuesto a admitir la independencia de Texas, si bien el presidente de Estados Unidos, James Polk, tenía otros planes. Envió al agente John Slidell a negociar con México la compra del puerto de San Francisco, en California. Cuando Herrera se enteró de esas pretensiones ni siquiera estuvo dispuesto a recibirlo, pero la prensa lo acusó de ceder a las presiones estadounidenses.

En diciembre, el general Mariano Paredes y Arrillaga, que debía encabezar un ejército para defender la frontera, se rebeló en contra del gobierno. Contaba con el apoyo de varios políticos conservadores, como Lucas Alamán, quienes pretendían establecer una monarquía como el único medio para evitar que el país cayera en manos de Estados Unidos. Alamán sabía muy bien que México no tenía posibilidades de ganar una guerra, pero también era consciente de que ningún gobierno podía mantenerse si no se manifestaba a favor de la reconquista de Texas. Para ese momento, el presidente James Polk estaba dispuesto a entrar en guerra con México. Envió al general Zachary Taylor rumbo a Texas, con órdenes de avanzar hacia el Río Bravo, en territorio tamaulipeco. Durante varios días, el campamento del ejército de Estados Unidos se encontró frente a frente con las tropas del general Pedro Ampudia.

No pasó mucho tiempo antes de que estallaran las hostilidades. La débil condición económica de México y los conflictos entre los distintos grupos políticos impedían que el ejército nacional estuviera en condiciones de enfrentarse al de Estados Unidos. Ese país contaba con tecnología supe-

rior, recursos económicos y oficiales muy bien formados. La armada de Estados Unidos bloqueó los puertos mexicanos. Lo triste para los mexicanos fue que, ante esa situación, los grupos políticos siguieron peleando entre sí. Yucatán, por ejemplo, prefirió declararse neutral, para evitar ser atacado. En Sinaloa, los comerciantes de Culiacán aprovecharon que Mazatlán había sido ocupado por el ejército enemigo para obtener ventajas. Así como hubo muchas muestras de patriotismo, también quedó claro que la mayoría de los habitantes de la República Mexicana —ricos y pobres— preferían ocuparse de sus asuntos antes que defender a su patria.

El ejército de Zachary Taylor avanzó sobre las ciudades norteñas. Pese a la resistencia de algunos de sus pobladores, Nuevo México y California fueron conquistados. Winfield Scott desembarcó en Veracruz, desde donde emprendió la campaña rumbo a la ciudad de México. Frente a la guerra, varios grupos del ejército y algunos destacados políticos pensaron que Antonio López de Santa Anna era el único capaz de organizar la defensa. Paredes y Arrillaga fue derrocado y se procedió a pedir al viejo caudillo que regresara a México. A pesar de las dificultades del momento, los federalistas radicales propusieron que se restableciera la Constitución de 1824 y se llevaran a cabo algunas reformas, incluso en materia eclesiástica. López de Santa Anna ocupó una vez más la presidencia y Valentín Gómez Farías volvió a ser nombrado vicepresidente.

Muy pronto se organizó un improvisado ejército que salió rumbo al norte, al mando del propio Antonio López de Santa Anna. En febrero de 1847 se enfrentó a Taylor cerca de Saltillo, en La Angostura. Pese a haber tenido la oportunidad de derrotar al ejército invasor, los mexicanos abandona-

ron el campo y regresaron a la ciudad de México, en donde la guardia nacional se había rebelado en contra del vicepresidente, al que acusaba de atacar a la Iglesia. Para evitar más problemas, López de Santa Anna destituyó a su vicepresidente y salió rumbo a Veracruz para combatir a Scott, pero no pudo hacer mucho. El ejército de Estados Unidos avanzó rápidamente. Contaba con un excelente sistema de aprovisionamiento y cada cierto tiempo llegaban más voluntarios a sustituir a quienes estaban heridos. En agosto de 1847 ya estaban frente a la ciudad de México. La guardia nacional, varios cadetes del Colegio Militar, algunos militares y hasta ciudadanos comunes y corrientes hicieron una heroica pero infructuosa defensa en Churubusco, Molino del Rey y Chapultepec. Todo fue inútil. Las autoridades mexicanas abandonaron la capital.

La presencia del ejército de Estados Unidos dio un aspecto diferente a la ciudad de México. El comercio se reactivó, la seguridad volvió a las calles, que parecían más limpias que de costumbre. Inclusive, ciertos prominentes políticos liberales sugirieron que todo México se anexara a Estados Unidos. También algunos pobres se beneficiaron de la guerra. Varios grupos de bandidos y guerrilleros se pasaron del lado estadounidense, en donde hicieron una carrera destacada. Había quedado claro que no todos compartían la idea de pertenecer a una misma nación. La gente se identificaba más con su región, su ciudad, sus compañeros y su religión que con la República. La debilidad del gobierno provocó levantamientos en varios lados. Grupos indígenas en Yucatán, Guanajuato y Sonora aprovecharon para tomar las armas contra los blancos. En Yucatán las autoridades pidieron ayuda a los estadounidenses para combatir a los rebeldes mayas.

El nuevo presidente mexicano, Manuel de la Peña, se trasladó a Querétaro, en donde reunió al Congreso. Los federalistas radicales estaban dispuestos a continuar la guerra hasta sus últimas consecuencias, pero el gobierno quería firmar la paz. En 1848 dieron inicio las negociaciones. México aceptó la pérdida de los territorios de Nuevo México y California y recibió una indemnización de quince millones de pesos. El Tratado de Paz firmado en la Villa de Guadalupe fue muy doloroso. Muchos mexicanos quedaron del lado norte de la frontera. Según el Tratado, Estados Unidos respetaría sus derechos, aunque en la práctica fueron violentados. De igual forma, México renunció a su obligación de proteger la frontera, confiando en que el gobierno estadounidense lo haría, algo que tampoco se llevó a cabo.

Al empezar la década de 1820, Carlos María de Bustamante, Lucas Alamán, Antonio López de Santa Anna y Valentín Gómez Farías habían imaginado un México próspero, una potencia de primer orden. Empero, ahora se daban cuenta de que ese sueño había fracasado. El país estaba a punto de desintegrarse, cada quien miraba por su propio interés, había rebeliones de grupos indígenas y México se había visto obligado a ceder territorios muy ricos a un vecino al que, durante mucho tiempo, había admirado.

Constitución, guerra e intervención, 1848-1867

La derrota frente a Estados Unidos y la pérdida de una parte importante del territorio cayeron como balde de agua fría sobre quienes intentaban construir un México independiente, próspero y estable. El trágico resultado de la guerra

confirmaba que iban por mal camino. A partir de ese momento, la construcción de un gobierno que pudiera a la vez defenderse del exterior y mantener el orden interno empezó a ser vista como un asunto de vida o muerte. Las dos décadas siguientes estuvieron marcadas por esta urgencia. Siguió la experimentación política que había marcado las primeras décadas de vida independiente, pero quienes proponían distintas formas de gobierno se volvieron más intransigentes. Todos querían encaminar a México hacia el progreso, si bien diferían en cuanto a la ruta que debía seguirse.

Unos tomaron para sí el nombre de *partido conservador* y llamaban *destructores* a sus contrincantes. Aunque compartían muchos de los principios del liberalismo, la corriente política predominante desde la independencia, los conservadores creían que una libertad exagerada, un afán miope de innovación, el principio de soberanía popular y el federalismo habían corroído las bases de la autoridad y de la paz social. Buscaban construir un Estado fuerte pero no arbitrario, cuya autoridad fuera respetada en todo el territorio, que garantizara los derechos civiles de la población, asegurara el orden y promoviera el crecimiento económico. Sus opositores se llamaron *liberales,* y el adjetivo se convirtió en la etiqueta de un partido. Creían que México agonizaba por el peso del legado colonial. Querían acabar con las formas tradicionales de pensar y de organizar la sociedad y la economía, que coartaban la libertad de los individuos, como la superstición, la marginación de los indígenas y la concentración de tierras en manos de la Iglesia. Aunque liberales y conservadores coincidían en varios puntos —como la necesidad de modernizar a México—, la lucha por definir el proyecto nacional se volvió cada vez más implacable. Al

final, los enfrentamientos políticos desembocaron en una guerra civil de diez años, a la cual se sumó una invasión extranjera.

Dictadura y Constitución, 1853-1857

En 1851, el presidente José Joaquín de Herrera entregó el mando al general Mariano Arista. Era la primera vez que un presidente concluía su mandato y transfería el poder a su sucesor, electo en un proceso no impugnado. Sin embargo, pronto se desvaneció la ilusión de que la vida política se normalizaba. En 1852 el Plan de Guadalajara puso fin al gobierno de Arista, y los líderes de todos los bandos llamaron al poder, de nuevo y por última vez, a Antonio López de Santa Anna. Apoyado por un grupo de destacados conservadores y algún liberal, como Miguel Lerdo de Tejada, el general veracruzano instauró una dictadura. Los conservadores no gustaban de poderes ilimitados ni confiaban en el exitoso personaje que había cambiado tantas veces de filiación política, pero creían que la patria peligraba, y que sólo un régimen que clausurara la lucha entre facciones podía salvarla. Estaban convencidos de que las discusiones eternas sobre derechos y sistemas de gobierno no servían sino para "alborotar el gallinero". La política, decían, enfrentaba a los distintos poderes entre sí, y al pueblo con el gobierno. La autoridad quedaba paralizada, y se hacían imposibles la estabilidad y el Estado de derecho. Los conservadores pretendían aprovechar la suspensión del debate y en esa coyuntura crear los instrumentos que el Estado necesitaba para cambiar la realidad del país.

Entre 1853 y 1855 se promulgaron leyes que buscaban reforzar el aparato de gobierno: se creó una procuraduría general para defender los intereses del público en los tribunales; se estableció un Ministerio de Fomento, cuyo objetivo consistía en estudiar el entorno económico e impulsar el desarrollo del país. Se hizo un gran esfuerzo por publicar códigos —civil, criminal, mercantil, de procedimientos— para sistematizar y dar mayor certidumbre a la administración de justicia. No obstante, el contexto no se prestaba a la consolidación de las reformas. Casi de estreno, presionado por los Estados Unidos, Santa Anna vendió La Mesilla. Por otra parte, en estos años no hubo elecciones (salvo las municipales) ni cuerpos legislativos, y se procuró limitar la autonomía de las regiones. Santa Anna se hizo llamar *Su Alteza Serenísima,* y reprimió el descontento amordazando a la prensa y exiliando a sus opositores. El autoritarismo, la centralización del régimen y los desmanes del dictador empujaron a una parte importante de la población, incluidos algunos colaboradores del propio Santa Anna, a apoyar el Plan de Ayutla (llamado así por la localidad del estado de Guerrero en que fue proclamado en 1854 por el coronel Florencio Villarreal). Siguiendo el mecanismo típico de los pronunciamientos, el Plan llamaba al poder a un jefe respetado, en este caso al viejo cacique del sur y antiguo insurgente Juan Álvarez, y prometía la elección de un Congreso Constituyente para elaborar un nuevo pacto político.

A fines de 1855, con la derrota de Santa Anna y el desprestigio de sus colaboradores, subía al escenario de la política una nueva generación. Estos hombres no habían conocido el régimen colonial ni la guerra de independencia. Casi todos eran provincianos y abogados que vivían de su trabajo.

La ascensión al poder de Santa Anna en 1853 había cortado la carrera política de muchos, y no pocos habían sufrido el exilio. Provenían de regiones y circunstancias distintas: Benito Juárez era un indio zapoteca que tras recibirse de abogado había incursionado en la política de Oaxaca, recorriendo desde el Ayuntamiento capitalino hasta el despacho del gobernador, pasando por los tribunales y los congresos estatal y federal. Miguel Lerdo de Tejada, miembro de una acaudalada familia de comerciantes de Veracruz, había publicado un sesudo estudio sobre el comercio exterior y colaborado en el Ministerio de Fomento bajo la dictadura. El novelista capitalino Manuel Payno, que se ufanaba de ser hombre "del justo medio", conocía bien los asuntos de la hacienda pública y había negociado el arreglo de la deuda española. Distinguían a estos hombres experiencias y a veces opiniones distintas, pero compartían el empeño por cortar con lo que consideraban el lastre del pasado. Querían poner al país, como se decía en la época, "a la altura del siglo".

La Constitución que surgió de los acalorados debates del Congreso Constituyente de 1856 y 1857 buscaba afianzar una república "representativa, democrática y federal". Como salían de un gobierno dictatorial, los constituyentes buscaron reforzar el Poder Legislativo frente al Ejecutivo, y con ese fin lo depositaron en una sola Cámara. Aseguraron el derecho a votar de todo hombre mayor de edad que tuviera un "modo honesto de vivir", aunque no se establecieron elecciones directas. Sin embargo, el vínculo entre elector y representante se estrechó, pues los votantes elegirían directamente al colegio electoral, sin tener que pasar por otra elección intermedia, como se hacía antes. La Constitución reconocía en los derechos del hombre "la base y el objeto de

las instituciones sociales", y por ello dotó al Poder Judicial federal de la facultad de amparar a los ciudadanos cuando se afectaran sus garantías individuales.

Los liberales de Ayutla buscaron reformar profundamente a la sociedad, sin agitar demasiado los ánimos. La Ley de Administración de Justicia planteó la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, pero mantuvo la existencia de los tribunales eclesiásticos y militares. La ley de desamortización pretendía que entraran al mercado las propiedades de corporaciones como la Iglesia, los ayuntamientos y los pueblos de indios. Estos bienes se conocían como de *manos muertas* porque pertenecían a corporaciones compuestas de varios individuos que se perpetuaban incluso cuando éstos morían. Para los liberales, este tipo de propiedad era un obstáculo al crecimiento económico, pues las corporaciones rara vez vendían sus tierras y los arrendatarios que las trabajaban no lo hacían con el ahínco con que lo habrían hecho de ser suyas. La ley ordenó que estas propiedades se fraccionaran en parcelas individuales y que se vendieran, de preferencia a quienes las trabajaban. Sin embargo, se reconocía el derecho de propiedad de las corporaciones, y se les otorgaba el producto de la venta. Adicionalmente, se exceptuaban aquellos bienes —iglesias y sacristías, ejidos— que servían directamente a los fines propios de estas comunidades. Por otra parte, muchos creyeron que era ventajoso que la Iglesia no tuviera grandes propiedades: sus miembros se ocuparían de su misión pastoral, en lugar de administrar arrendamientos y contar pesos y centavos.

No se concretaron todas las propuestas que llegaron al Congreso. Algunos diputados afirmaban que entre las libertades de las que debían gozar los individuos estaba la de adorar

a Dios como mejor les pareciera. Esta propuesta provocó una oposición importante, más allá de las paredes del Congreso, entre quienes normalmente no intervenían en asuntos de la cosa pública. Para muchos católicos, el hecho de introducir otras religiones equivalía a fomentar el error, poniendo en peligro el alma de los fieles. Además, se destruirían los ya tan deteriorados lazos de unión entre los mexicanos. Finalmente, el Congreso no aprobó la tolerancia de cultos, aunque la Constitución de 1857 fue la primera que no declaró la religión católica como exclusiva de la nación.

De igual forma, no prosperaron los esfuerzos de algunos diputados por romper con la desigualdad que afectaba a la población. Para Ponciano Arriaga e Isidoro Olvera, un pueblo que vivía en la miseria no podía ser "libre, ni republicano, ni mucho menos venturoso, por más que cien constituciones y millares de leyes proclamen derechos abstractos". Propusieron que se limitara la extensión del terreno que podía poseer una sola persona o que se expropiara la tierra de quien no la trabajaba. Pero una cosa era obligar a corporaciones anticuadas y poco eficientes a vender sus propiedades y muy otra coartar el derecho de propiedad de los individuos, que la mayoría de los liberales consideraba intocable. El Constituyente no quiso dar al Estado la facultad de regular la propiedad privada.

La Constitución promovía mecanismos para transformar a la sociedad por medio de la ley. Sin embargo, provocó escepticismo y rechazo, que en algunos casos se tradujeron en rebelión violenta. Para los militares y los clérigos, como para los pueblos campesinos, las disposiciones constitucionales atacaban sus derechos y costumbres. Dentro del bando liberal unos pensaban que la Constitución era demasiado

radical, y otros, que se quedaba corta. Para varios —entre los que destacaba el presidente Ignacio Comonfort—, la Ley Fundamental planteaba grandes complicaciones pues dejaba al Ejecutivo maniatado, incapaz de resolver problemas. Para los conservadores, la primacía de un Legislativo belicoso y la autonomía de los gobiernos estatales —que significaba la restauración del federalismo— resultarían en la incompetencia y parálisis del gobierno. Les preocupaba además el rompimiento con la autoridad espiritual, pues si ésta no caminaba de la mano con el gobierno, sobrevendría el caos. Por su parte, la Iglesia como institución, y a pesar de las muy distintas opiniones de los hombres que la componían, vio en la Constitución un ataque frontal; la condenó como "impía, atea y por lo consiguiente injusta e inmoral".

Desde la independencia, las relaciones entre la Iglesia y el Estado habían sido complicadas. Cada institución resentía la intervención de la otra en campos que consideraba de su exclusiva propiedad. Aunque la pérdida de las propiedades afectaba gravemente su economía, la Iglesia se opuso, llevada más bien por su concepción de lo que debía ser la relación entre los dos poderes. Los obispos negaron el derecho que reclamaba la autoridad política a legislar sobre los asuntos "terrenales" de la Iglesia. Ésta era una "sociedad perfecta", instituida, con todos sus derechos y privilegios, por el mismo hijo de Dios. Si el Estado quería desamortizar sus propiedades o abolir el fuero, no podía hacerlo sino con la autorización del papa. Cuando el gobierno ordenó que todos los funcionarios juraran la Constitución, los obispos amenazaron con la excomunión a quien lo hiciera. Estas circunstancias llevaron a la conclusión extrema de que el buen católico no podía ser buen ciudadano.

Diez años de guerra, 1857-1867

A finales de 1857 la situación parecía insostenible. En diciembre, apoyado por la guarnición de la capital, el presidente Comonfort dio un golpe de Estado en contra de la Constitución que había jurado pocos meses antes. Proponía reunir a "todos los partidos" para discutir una nueva Ley Fundamental con la que sí se pudiera gobernar. Esto no satisfizo a los militares y conservadores que habían apoyado el golpe, pero que no buscaban una transacción sino dar marcha atrás a las innovaciones contenidas en la Carta Magna. En enero de 1858, el militar Félix Zuloaga depuso a Comonfort. El presidente de la Suprema Corte, Benito Juárez, asumió la presidencia por mandato constitucional y, después de muchas peripecias para escapar de los conservadores, estableció su gobierno en la ciudad de Veracruz. Daba inicio la guerra civil más larga y sangrienta que hubiera vivido el país desde la independencia.

La guerra civil, 1858-1860

Las diferencias de opinión política se convirtieron en un enfrentamiento armado. Durante tres años, la violencia asoló el territorio, y las poblaciones sufrieron las exacciones de ambos contendientes. La actividad económica, que se recuperaba lentamente desde la década de 1820, se desplomó. La sociedad se dividió en dos bandos irreconciliables. Las jovencitas liberales se pusieron moños rojos en el pelo y zapatos verdes para pisar el color de los *mochos*. Hacían lo propio, invirtiendo los colores, las que se identificaban con el bando

contrario. En abril de 1859, cuando el general conservador Leonardo Márquez derrotó a las tropas republicanas en Tacubaya, mandó fusilar también a los civiles que auxiliaban a los heridos. Era una guerra fratricida y sin cuartel. Hubo intentos por poner fin al conflicto a través de la negociación, mediante la formación de un gobierno mixto, como propuso el conservador Manuel Robles Pezuela, o por la intermediación de los representantes de los gobiernos extranjeros, sugerencia del liberal Santos Degollado, pero todos se estrellaban con la intransigencia de quienes veían la guerra como una lucha entre el bien y el mal.

Una primera ronda de enfrentamientos desembocó en un punto muerto. Los conservadores, que tenían más experiencia militar, ganaron la mayoría de las batallas. Dominaban el centro del país y todas las grandes ciudades menos Veracruz, pero no lograron la derrota definitiva de los defensores de la Constitución. Los liberales se refugiaron en el norte, apoyados por las milicias locales, curtidas en años de lucha contra los indios nómadas, así como en ciertas zonas periféricas de Guerrero, Oaxaca y Michoacán. Ocupaban también Veracruz, el principal puerto del país, lo cual tenía dos grandes ventajas. Por un lado, podían disponer de los recursos de su aduana, la mayor fuente de ingresos de los gobiernos nacionales durante todo el siglo XIX. Por el otro, era difícil poner en sitio a una ciudad que siempre podía abastecerse por mar.

Para destrabar la situación militar, ambos contendientes buscaron apoyos en el exterior. El gobierno conservador ubicado en la capital firmó con España el Tratado Mon-Almonte (septiembre de 1859), y el liberal en Veracruz signó el McLane-Ocampo con Estados Unidos (diciembre de 1859).

Ambos eran tratados en los que México concedía mucho a cambio del reconocimiento diplomático y vagas promesas de apoyo. En el primero se reconocían los dudosos créditos otorgados por prestamistas españoles al último gobierno santannista. En el segundo se otorgaba al vecino del norte paso por el istmo de Tehuantepec. Los dos textos reflejaban la desesperación de los contendientes, así como su escasa capacidad de negociación en el escenario internacional. Paralelamente, el gobierno constitucional dejó atrás la moderación que había marcado las medidas de 1856. En junio de 1859 promulgó las Leyes de Reforma, que consumaban la separación tajante entre Iglesia y Estado. Estas leyes nacionalizaban las propiedades de la Iglesia, en castigo al apoyo que esta institución había brindado al gobierno conservador; instituían el registro civil, que concedía a la autoridad política el control sobre los momentos claves de la vida del ciudadano (nacimiento, matrimonio y muerte), y abolían las órdenes religiosas. Al año siguiente, cuando vio asegurado el triunfo militar, el gobierno constitucional promulgó también la libertad de cultos.

Al final, el agotamiento vino a romper el punto muerto en que se había empantanado la guerra. La desesperación de Miramón y sus generales ante la carencia de recursos los llevó a cometer una serie de tropelías que los distanciaron de quienes, de buena o mala gana, habían sido sus aliados. Encarcelaron a los miembros de la élite capitalina que se resistieron a los préstamos forzosos. Cuando la Iglesia, cuyas arcas estaban exhaustas, no pudo entregar las sumas exigidas, fue despojada de los objetos de culto de la catedral metropolitana. Finalmente, Leonardo Márquez confiscó, camino a Veracruz, un cargamento de plata que pertenecía a la Legación

inglesa, con lo que las de por sí deterioradas relaciones del representante de Su Majestad Británica con el gobierno de la ciudad de México terminaron por romperse.

Por su parte, con la nacionalización de los bienes eclesiásticos, el gobierno de Juárez, además de disponer de los ingresos aduanales, atrajo hacia su causa algunos de los sectores económicos más importantes. Por un lado, al calor de la guerra, quienes disponían de dinero en efectivo adquirieron los bienes confiscados por los jefes militares de corte liberal. Por el otro, quienes habían prestado dinero al gobierno esperaban canjear sus devaluados bonos por bienes nacionalizados. Finalmente, los ejércitos liberales lograron tornar el desarrollo de la guerra. Los conservadores se pusieron a la defensiva. En diciembre de 1860, el general zacatecano Jesús González Ortega venció a Miramón en Calpulalpan, Estado de México.

Intervención francesa y experimento monárquico

No obstante, ni el triunfo liberal ni la restauración de la Constitución lograron afianzar la paz que tanta falta hacía a la nación extenuada. Las guerrillas conservadoras mantuvieron una lucha discontinua pero muy violenta, en la cual fueron asesinados tres de los más destacados liberales: Melchor Ocampo, acaso el más audaz de sus ideólogos; el general Santos Degollado, comandante del ejército liberal, y el valiente oficial Leandro Valle. Por su parte, el partido vencedor estaba profundamente dividido respecto del camino por seguir y cómo gobernar con una Constitución que, según muchos, entorpecía la acción de la autoridad. En julio

de 1861, para hacer frente al quebranto de la hacienda pública, se promulgó una ley que establecía una moratoria al pago de las convenciones de deuda extranjera. Las tres principales potencias acreedoras, Gran Bretaña, España y Francia, azuzadas por el emperador de los franceses, pactaron intervenir militarmente para poner en orden a la República morosa.

Cada una de las potencias europeas participó en esta expedición por motivos distintos. Los ingleses simplemente buscaban asegurar el pago de lo debido. España, debilitada por crisis internas, no quería sin embargo quedar fuera de juego en una región que había formado parte de su imperio. Añádase que además había un sector de la opinión, pequeño pero escandaloso, conformado por españoles con intereses no siempre cristalinos en México y que llevaba años reclamando una intervención militar. La postura de Francia era tal vez la más compleja. Aunque era la potencia a la que menos se debía, una vez que las tres naciones interventoras llegaron a un acuerdo con el gobierno de la República, gracias a los buenos oficios del comandante español Juan Prim, las tropas francesas rehusaron acatarlo. Sus objetivos rebasaban con mucho el problema de las deudas sin saldar.

Para Napoleón III, la "aventura mexicana" representaba una oportunidad excepcional para afianzar los intereses políticos, económicos y culturales de Francia en América, aprovechando que Estados Unidos estaba enfrascado en una devastadora guerra civil. En el contexto de la carrera colonialista que se iniciaba en Europa, en la que Francia y Gran Bretaña se perfilaban como los dos grandes rivales, resultaba muy atractiva la idea de asegurar la presencia e influencia francesa en México, país rico en plata y otras materias primas, posible crucero comercial entre Oriente y Occidente, y

potencial mercado para los productos de la industria gala. Además, el sobrino del gran Napoleón soñaba con frenar la expansión de Estados Unidos y erigirse en protector de la "raza latina" en el Nuevo Mundo.

Por otra parte, desde la década de 1840 algunos exiliados mexicanos en Europa pensaban que sólo una monarquía vinculada a algún gobierno europeo salvaría a México de desaparecer, ahogado por el desorden endémico y las ambiciones de su vecino del norte. Después de la guerra de Reforma, ciertos conservadores derrotados —como el hijo natural de Morelos, Juan Nepomuceno Almonte— y algunos obispos ofendidos —como el de México, Pelagio Labastida y Dávalos— se unieron al coro de voces alarmadas de los monarquistas mexicanos. Así, una serie de sucesos inusitados llevó a la alianza del emperador francés, a la sazón el político más exitoso de la Europa continental, con grupos conservadores mexicanos que anhelaban instalar a un príncipe europeo y católico en el trono mexicano. Para apoyar esta empresa, el Imperio francés envió a treinta y cinco mil soldados que permanecerían en suelo nacional hasta principios de 1867, en lo que sería una de las incursiones más desafortunadas del gobierno de Napoleón III.

En febrero de 1862, los franceses avanzaron hacia la capital hasta que, en los linderos de Puebla, los detuvieron las tropas de Ignacio Zaragoza y las milicias cívicas de los pueblos de la sierra. Tuvieron que llamar refuerzos considerables para finalmente ocupar la ciudad de México en junio de 1863. Un año después llegaron a la capital mexicana Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota. El hermano menor del emperador de Austria y Hungría —que tras las dificultades que había enfrentado para gobernar a un Lom-

bardo-Véneto convulsionado por el nacionalismo italiano, se había dedicado desde hacía unos años a la decoración de interiores y al estudio de las mariposas— propuso gobernar para todos los mexicanos por medio de leyes "sabiamente liberales". El régimen monárquico despertó menos antipatías de las que podían preverse pues, tras la caída de Iturbide, muy pocos habían defendido abiertamente esta opción política, identificada con el pasado colonial y apoyada por las bayonetas de un ejército invasor. En un país extenuado por tantos años de confrontación, donde los políticos no daban con una fórmula adecuada de gobierno estable, no faltaron quienes vieron en el Imperio la oportunidad de constituir un gobierno, si no ideal, por lo menos viable.

Para muchos pueblos, sobre todo en la meseta central, vapuleados por el constante ir y venir de fuerzas liberales o conservadoras, la llegada del Imperio significó un respiro. Además, los emperadores mostraron un interés especial por la población indígena y sus culturas ancestrales. Comprometido con el ideal liberal de integrar a los indígenas a la sociedad como ciudadanos iguales a los demás, el gobierno imperial emprendió acciones para hacer más llevadero su tránsito hacia la modernidad. La Junta Protectora de Clases Menesterosas canalizaba sus demandas y elaboraba leyes para beneficiar a los sectores más desprotegidos, como la Ley de Jornaleros de noviembre de 1865, que prohibía el trabajo excesivo, los castigos corporales y la retención por deudas.

Para los católicos, la ascensión de un príncipe que había hecho escala en Roma durante su viaje a México para recibir la bendición del papa prometía la solución de la problemática religiosa y la reconciliación de los dos poderes. Por otra parte, muchos miembros de la clase política consideraban

que el monárquico era el tipo de régimen fuerte y centralizado que demandaba el país para poner la casa en orden. Incluso para los más obstinados liberales, la ausencia de cuerpos legislativos —que suponían temporal— era una ventaja, toda vez que las reformas imprescindibles exigidas por la nación no se verían empantanadas en los larguísimos debates a los que eran tan proclives los diputados retóricos. Para estos hombres, el Imperio debía congelar la lucha política. Merced a la presencia del ejército francés, profesional y moderno, las autoridades civiles no tendrían que estar constantemente negociando con unas fuerzas armadas que actuaban más bien como fiel de la balanza. Se pensó entonces, como en 1853, que esta tregua debía aprovecharse para construir más idóneos instrumentos de gobierno.

Durante el segundo Imperio se realizó una nueva división política del territorio. El mapa administrativo lo dividía en cincuenta departamentos de dimensiones similares, según los criterios científicos del geógrafo, historiador y lingüista Manuel Orozco y Berra, para romper con las jerarquías y los espacios de poder político y económico que se habían conformado dentro de las regiones. En la misma línea de pensamiento y acción, el equipo de abogados que desde fines de la guerra de Reforma trabajaba en la redacción del Código Civil publicó en 1866 el primer código válido en todo el territorio. Se otorgaron concesiones para la creación de ferrocarriles regionales. El primer banco comercial, el Banco de Londres y México, abrió sus puertas en la capital. Como sucedería después durante la República Restaurada, muchos vieron en la literatura y el arte un espacio donde aquella sociedad, profundamente dividida y lastimada, podía reconciliarse. En el seno de la Academia Imperial de Ciencias y Artes, el chiapaneco

Manuel Larráinzar expuso un primer esquema para escribir una historia general de México, desde sus orígenes prehispánicos hasta la llegada del emperador. A su vez, Maximiliano encargó a los pintores de la Academia de San Carlos una serie de retratos para honrar a los héroes de una historia nacional que hermanaba a Hidalgo con Iturbide.

Empero, ninguno de estos proyectos tuvo un impacto profundo. El Imperio duró poco (1864-1867) y se dio en un contexto de guerra constante, pues el ejército francés no logró vencer a las guerrillas liberales ni pacificar al país. En éste, como en los regímenes que le precedieron, las finanzas públicas fueron un desastre, agravadas por el acuerdo entre Maximiliano y Napoleón III según el cual sería México quien sufragara los gastos de la expedición militar francesa. Concluida la guerra civil estadounidense, el gobierno de Washington dejó claro que no toleraría la presencia de un ejército europeo en el país vecino. Paralelamente, las victorias de Prusia sobre Dinamarca y Austria anunciaban que Francia sería el próximo objetivo de la política de unificación alemana. El cálculo costo-beneficio que el emperador de los franceses había realizado en 1861 ya no se sostenía, y optó por repatriar al ejército.

El Imperio representaba un régimen en el que se anudaban esperanzas y proyectos disímbolos y muchas veces contradictorios. Maximiliano se opuso a la ambición expansionista de Napoleón III, que quería establecer un protectorado en Sonora. Los comandantes franceses no estuvieron dispuestos a tolerar la formación de un ejército imperial mexicano que les disputaría el mando de la expedición. La ilusión de restauración de los católicos que apoyaban a Maximiliano vino a estrellarse con el proyecto imperial, que por un lado

ratificaba la nacionalización de los bienes eclesiásticos y la tolerancia de cultos, y por el otro pretendía que el emperador nombrara a los obispos y pagara a los clérigos del tesoro público. Finalmente, la conciliación entre liberales y conservadores resultó imposible, pues ambos consideraban que sus oponentes eran la encarnación del mal. Una vez retiradas las tropas francesas, el Imperio se derrumbó. El 19 de junio de 1867 morían fusilados en el Cerro de las Campanas, en Querétaro, Maximiliano y sus dos generales: el joven Miguel Miramón y el cacique indígena de la Sierra Gorda, Tomás Mejía. Con ellos cayó el proyecto conservador, identificado no sólo con la traición, sino con la incompetencia.

PARA CONSTRUIR UN ESTADO, 1867-1910

Érika Pani y Aurora Gómez Galvarriato

Al finalizar la guerra en contra de la intervención y el Imperio, los liberales dirigidos por Benito Juárez enfrentaban grandes desafíos. El país estaba devastado, desunido y aislado del contexto internacional. Hacia afuera, el gobierno de Juárez decidió romper relaciones con todo gobierno que hubiera reconocido al "usurpador". Restablecer vínculos diplomáticos con Europa resultó un proceso difícil, complicado por la siempre espinosa cuestión de la deuda. Las relaciones con Gran Bretaña, potencia que resultó la más dura de roer, no se reanudaron sino hasta 1884. Pero la política de Juárez, aparejada al desconocimiento de las deudas y compromisos del régimen de Maximiliano, sentó las relaciones diplomáticas de México sobre bases menos desventajosas. En el interior, los liberales consideraron imprescindible constituir un Estado que permitiera asegurar el orden necesario para la reconstrucción y modernización de la sociedad. Para estos fines, creyeron que era indispensable que el grueso de la clase política estuviera de acuerdo con las reglas del juego político y que la autoridad nacional pudiera atraer las lealtades y los recursos de las regiones. A estas tareas se abocaron, con resultados disímiles, los gobiernos de la República Restaurada (1867-1876) y del porfiriato (1876-1910).

¿Una máquina para gobernar?

Tras el triunfo liberal, el discurso del poder condenó al proyecto conservador al desprestigio, al tiempo que erigió a la Constitución de 1857, que había sido el proyecto de una facción política, en bandera de la nación. A partir de entonces, la Constitución habría de proveer el marco jurídico en el que se desarrollaría el juego político. A diferencia de lo sucedido durante las primeras décadas de vida independiente, a partir de 1867 los desafíos al poder no exigirían replantear el pacto político fundamental; se plantearían en nombre y defensa de la Constitución. De hecho, a partir de 1858 la autoridad moral y la legitimidad de que gozaba Benito Juárez provenían de su compromiso con la defensa del orden constitucional. Sin embargo, por su penosa experiencia al frente de la República asediada, Juárez sabía que la Ley Fundamental resultaba un torpe instrumento de gobierno pues condenaba al gobierno federal y al Ejecutivo a la debilidad.

De ahí que todos los presidentes que gobernaron con la Constitución en la mano intentaran reformarla, sobre todo para reforzar al Poder Ejecutivo y tener mayor libertad de acción. El gobierno tenía mucho que hacer: reducir y someter al ejército, que había sido protagonista principalísimo de la gesta liberadora; lograr que las regiones cumplieran con el pacto federal; sofocar las rebeliones armadas que siguieron dándose a lo largo del periodo; obtener y sistematizar información demográfica, económica y geográfica, pues para controlar el territorio había que conocerlo; construir los mecanismos legales y erigir el aparato burocrático que le permitieran asegurar, en toda la nación, el Estado de derecho. Difícilmente podía hacerlo si el Eje-

cutivo era constantemente amonestado y fiscalizado por el cuerpo legislativo.

No obstante, los presidentes del último tercio del siglo XIX enfrentaron fuertes resistencias cuando intentaron modificar un documento que encarnaba los más altos ideales de la república y el sacrificio de tantos mexicanos en la desigual lucha contra conservadores y franceses. Incluso la decisión de Juárez de permanecer al frente del Ejecutivo al concluir su periodo presidencial en 1865, en plena intervención francesa, fue severamente criticada por sus correligionarios. A esto se debe, quizás, que dos años después ni siquiera considerara presentar su propuesta de reforma constitucional al Legislativo. El presidente aprovechó la convocatoria a elecciones para apelar directamente al pueblo, solicitando que autorizara la división del Poder Legislativo en dos cámaras, lo que haría más fácil encauzar la opinión del Congreso.

Juárez fracasó en ese intento. Correspondió a su sucesor, Sebastián Lerdo de Tejada, restaurar el Senado, al tiempo que las Leyes de Reforma que tanto habían agraviado a la Iglesia fueron elevadas a preceptos constitucionales. Como presidente, Porfirio Díaz pudo reformar el texto constitucional para reelegirse siete veces. En cambio, fracasaron las reformas propuestas por aquellos de sus colaboradores que querían construir una política más "científica" y menos popular. En 1893, la propuesta de que los jueces, en vez de ser electos, se mantuvieran en sus puestos para desligarse de la política, fue rechazada por el Senado. Si resultaba difícil gobernar con la Constitución, al parecer era aún más difícil reformarla.

Entre 1867 y 1910, los cuatro presidentes que gobernaron recurrieron a otras vías para asegurar la acción expedita de sus gobiernos, sin violentar la Constitución. Juárez y Lerdo

solicitaron facultades extraordinarias al Congreso varias veces y buscaron asegurar su proyecto político interviniendo en las elecciones. Al triunfo del Plan de Tuxtepec, Porfirio Díaz siguió muchas de esas mismas estrategias. El joven general se había rebelado contra la reelección —la tercera de Juárez en 1871, y la de Lerdo en 1875—, pues ésta violaba "la moral y las leyes". Pero una vez al frente del Ejecutivo, y salvo un breve interludio entre 1880 y 1884, don Porfirio se mantuvo en la silla presidencial hasta 1910, respetando las formas —aunque no el espíritu— de la Constitución, el gobierno representativo y la división de poderes.

El Estado se iba afianzando. Entre 1867 y 1910 sólo un levantamiento armado —el de Tuxtepec en 1876, que colocó en el poder a Porfirio Díaz— trastornó la marcha del gobierno federal. En 1872 entraron en vigor los códigos civil y penal, que promovieron una administración de justicia basada en lo que establecían las leyes, y no en las costumbres, los precedentes o una interpretación subjetiva de lo justo. Por otra parte, resultaba difícil gobernar un país sobre el cual no se tenía la información indispensable. El gobierno federal no tuvo datos confiables sobre cuántos eran los mexicanos y cuál era su situación sino hasta que levantó el censo de 1895. Desde la década de 1870, un número importante de agrimensores —que, por orden de la ley de desamortización de 1856, procedieron al apeo y deslinde de tierras— hizo presente al Estado regulador en comunidades apartadas. Sin embargo, no lograron trazar un mapa de la estructura de la propiedad rural para dar certidumbre al derecho de propiedad y celeridad al mercado nacional de bienes raíces. Fue sólo en la década de 1880 cuando empezaron a elaborarse los primeros catastros, y habría que esperar casi cien años

más para que se levantaran en estados como Aguascalientes y Jalisco. En 1910, más de la mitad de la propiedad carecía de registro oficial.

Pero el nuevo orden rindió frutos. Bajo la presidencia de Díaz el país vivió una estabilidad y un crecimiento económico sin precedentes. Varios factores apuntalaron lo que llegó a llamarse la *pax porfiriana.* Mientras que Juárez y Lerdo tuvieron que enfrentar las críticas a veces devastadoras de periodistas y diputados, a partir de 1888 Díaz logró amansar a la oposición dentro del mismo grupo liberal. Sobre los periodistas pesó la amenaza de la cárcel cuando subían de tono su crítica al régimen. Surgió además un nuevo tipo de periodismo, subsidiado por el gobierno y abocado más a la noticia y el entretenimiento que a la discusión política, encarnado por el diario *El Imparcial,* que algún crítico apodara "el periódico más parcial del mundo". Se fueron eclipsando, hasta desaparecer, *El Siglo XIX* y *El Monitor Republicano,* que habían sido los grandes portavoces del liberalismo de combate desde la década de 1840. La defensa del liberalismo ortodoxo, opuesto al "científico", se refugió en las fantásticas caricaturas de la prensa satírica, como *El Ahuizote* y *El Hijo del Ahuizote,* y publicaciones que intentaban combinar la crítica política con el nuevo estilo periodístico, como *El Diario del Hogar* de Filomeno Mata.

Don Porfirio logró atraer a políticos destacados que habían apoyado a sus rivales, como a su suegro, el lerdista Manuel Romero Rubio, y a jóvenes como Justo Sierra, que habían sido iglesistas. A escala federal, Díaz forjó nexos sólidos con los gobernadores, con quienes logró afianzar la influencia del Ejecutivo sobre el Legislativo, y del gobierno federal sobre los estatales, trabajando tras bambalinas en los

procesos electorales. Gracias a estas maniobras enfrentó a diputados menos aguerridos que los que sus predecesores habían tenido que encarar. Apoyado en los vínculos personales que estableció con las élites regionales, Díaz tuvo la habilidad de concentrar el poder que antes había estado disperso. Mediante variadas y complejas concertaciones, logró erigirse en árbitro de las disputas locales. En algunas regiones y merced a un contexto económico favorable, pudo establecer equilibrios, impidiendo que quienes gozaban de una situación acomodada monopolizaran también la autoridad pública. Éste fue el caso de los hacendados azucareros en Morelos y el de la familia Madero en Coahuila. Otras veces, cuando enfrentó conflictos entre grupos locales, impuso un tercero en discordia, como cuando envió como gobernador de Nuevo León al general jalisciense Bernardo Reyes.

Sin embargo, no debe exagerarse el poder del presidente. Su gobierno, por ejemplo, trató varias veces de abolir un gravamen de origen colonial, las alcabalas, que aplicaban los estados a las mercancías provenientes de otros estados al entrar en su territorio. Las alcabalas encarecían los bienes y dificultaban el comercio, por lo que habían sido abolidas por la Constitución de 1857, pero los gobiernos de los estados se habían negado a renunciar a estos ingresos. El Congreso había decretado su desaparición repetidamente, en 1882, 1884 y 1886. No fue sino hasta 1896, tras negociar directamente con las autoridades estatales y al margen de los diputados, cuando Díaz logró su cometido. Unas finanzas públicas relativamente sanas le permitieron construir una maquinaria política más efectiva y más presente en la vida diaria de los mexicanos, a través de actores como los jefes políticos, los empleados de Hacienda y de Correos, la policía y la guardia rural.

De este modo, los aparatos de gobierno, tanto el federal como los estatales, sirvieron para limitar, reforzar o equilibrar a distintos grupos de poder. Las elecciones, que durante tres décadas se llevaron a cabo de manera regular y relativamente ordenada, se convirtieron en espacios para la negociación, en los que los gobernadores, los hombres fuertes y el presidente buscaban promover sus intereses. Sin embargo, como lo atestiguan los primeros pasos del mismo Díaz sobre el escenario electoral, estas vías no estaban abiertas a quienes se hallaban fuera de las redes del poder, ni representaban un mecanismo de transferencia de poder entre un grupo y otro. Se estableció un sistema de gobierno relativamente eficiente y funcional, pero frágil en tanto que dependía de los altibajos de la economía, de la habilidad política de Díaz y de su sensibilidad para abrir las puertas del poder a quienes pudieran desestabilizarlo desde fuera.

El tren del progreso... y los que se quedaron en la estación

Desde mediados del siglo XIX importantes avances tecnológicos, como los barcos de vapor y los ferrocarriles, redujeron el costo del transporte de mercancías y personas. Se estrecharon los lazos que unían a las distintas regiones del mundo, y aumentaron el comercio, la emigración y los flujos de capital. México entró tarde a este proceso, debido a la violencia que vivió hasta finales de la década de 1860. En 1873 se concluyó el ferrocarril que unía a la capital con el puerto de Veracruz, a pesar de que desde la década de 1830 había proyectos para su construcción. A partir de ese momento, el país vivió un rápido desarrollo del sistema ferroviario. El ferrocarril im-

pulsó un crecimiento económico sin precedentes, acompañado por una creciente demanda de productos minerales y agrícolas —plata, henequén, tabaco, café, cacao, azúcar, algodón, vainilla, etcétera—, otras mejoras tecnológicas —como la mecanización de la industria y nuevos procesos que reducían los costos de producción de plata—, así como el flujo de inversión extranjera. Desde la independencia la población había crecido lentamente. Pasó de algo más de seis millones en 1810 a poco más de ocho en 1865, pero en 1910 se contaban ya más de quince millones. Entre 1860 y 1900 la producción nacional por habitante se multiplicó por dos. Sin embargo, no todos los mexicanos estuvieron en condiciones de beneficiarse de estas transformaciones.

Entre 1873 y 1910 el tendido ferroviario pasó de quinientos cuarenta kilómetros a más de diecinueve mil quinientos. En un país montañoso, en donde la mayor parte de la producción se consumía a nivel local, y las mercancías que se vendían fuera se transportaban a lomo de mula, el tren redujo los costos y los tiempos de traslado, y permitió consolidar un espacio económico que estaba muy fracturado. Si bien el ferrocarril benefició sobre todo a los productores que transportaban grandes cantidades, las vías atravesaban diecisiete estados de la República, en los que habitaba la mitad de la población, y vinculaban a casi todas las ciudades. Aunque la construcción del ferrocarril resultó onerosa, pues el gobierno tuvo que subsidiar hasta en un cincuenta por ciento el costo de las obras a las compañías extranjeras que lo construyeron, el nuevo medio de transporte transformó al país: de Sonora a Yucatán se empezó a consumir trigo de los estados del norte y del Bajío, azúcar de Morelos, textiles de Puebla-Tlaxcala y del valle de Orizaba, arroz de Michoacán,

algodón de Coahuila y el jabón que se fabricaba con sus pepitas. Junto con el ferrocarril se desarrollaron también modernos puertos, como Veracruz y Tampico, a través de los cuales la economía mexicana se vinculó de manera más intensa con la del resto del mundo. Con la vainilla mexicana los europeos y estadounidenses preparaban todo tipo de postres, y se utilizaban cuerdas de henequén mexicano en barcos de todo el mundo.

Con la llegada del tren, el norte, que había sido una zona deshabitada por su naturaleza desértica, por su aislamiento y por los ataques de los indios nómadas, se convirtió en una de las regiones económicas más dinámicas. Su actividad productiva la vinculaba tanto con el centro del país como con Estados Unidos. En poco más de treinta años, la población del norte se duplicó y surgieron ciudades pujantes prácticamente de la nada. La localidad minera de Cananea en Sonora, que en 1891 contaba con cien habitantes, tenía casi nueve mil en 1910. Torreón se convirtió en un centro algodonero, productor de jabón y de aceites, y pasó de casi cuatro mil habitantes a más de treinta mil en diecisiente años.

La posibilidad de surtir a un mercado en expansión alentó a agricultores e industriales a producir más. Desde mediados de siglo se introdujeron mejoras tecnológicas como abonos, y mejores herramientas, además de nuevos cultivos para aumentar la producción agrícola. Desde la década de 1830 se comenzó a mecanizar la industria. Pero estos esfuerzos modernizadores no se generalizaron sino cuando la paz, los trenes y un mayor poder de compra incrementaron el número de consumidores. En el campo, la producción comercial se duplicó entre 1880 y 1910. Muchas tierras que antes no tenían ningún valor para los inversionistas alcanza-

ron altas cotizaciones. Para impulsar el crecimiento del sector agrícola, el gobierno apresuró la ejecución de las leyes de desamortización, suspendida por la guerra y el desorden.

El proceso de transformación de la propiedad comunal en privada se vivió de manera muy distinta según cada región. Hubo lugares en que la tierra se parceló sin problema, y otros donde los campesinos, para seguir trabajando sus tierras como venían haciéndolo, recurrieron a innovadoras formas de propiedad, como los condueñazgos y las sociedades cooperativas. En ciertas regiones de Michoacán, Jalisco o Coahuila surgieron poblaciones de rancheros independientes luego del fraccionamiento de grandes propiedades. Pero en las regiones donde la tierra se convirtió en un bien preciado —ya porque se cultivaban productos de alto valor comercial, como la caña de azúcar en Morelos o la vainilla en Papantla, ya porque se hallaba en la ruta del tren—, las medidas privatizadoras no multiplicaron el número de propietarios ni mejoraron el nivel de vida de los campesinos.

Esto sucedió porque en unos casos la división de la tierra en propiedad privada afectó bienes que tradicionalmente la gente del campo había disfrutado en forma comunal: los pastizales adonde llevaban a pastar a sus animales, los bosques de donde sacaban madera y carbón, los lagos donde pescaban, cazaban o recogían carrizo. En el valle de Chalco, por ejemplo, el afán de los hacendados por extender el cultivo de cereales los llevó a desecar el lago a partir de la última década del siglo XIX; el ambiente lacustre que durante siglos había permitido a los ribereños transportarse, alimentarse y obtener materia prima para la elaboración de artesanías, desapareció para siempre. Otras veces, en el proceso desamortizador, muchos campesinos, en vez de volverse propietarios,

perdieron sus tierras, pues a menudo las compraron empresarios dueños del capital suficiente para explotarlas, o que aprovecharon sus recursos y contactos para torcer las leyes en su beneficio. En las comunidades indígenas del centro y del sur, como en las poblaciones de colonos en el norte, la concentración de la tierra en pocas manos desbarató viejos equilibrios políticos y patrones tradicionales de autogestión. Al acrecentarse su poder, los grandes propietarios presionaban y corrompían a jefes políticos y presidentes municipales para que apoyaran sus intereses.

En consecuencia, los recursos de las comunidades se vieron fuertemente presionados, y numerosos campesinos fueron forzados a trabajar en las grandes propiedades, donde los hacendados a menudo los retenían como "peones acasillados". Como los salarios eran muy bajos, los campesinos apenas podían cubrir las necesidades básicas. Si tenían que hacer algún gasto adicional, debían pedir prestado al patrón. Éste les prestaba dinero, adelantándoles el sueldo, y así aquéllos no podían abandonar el trabajo, aunque las condiciones fueran deplorables, sino hasta haber saldado su deuda. Muchas comunidades se fracturaron debido a enfrentamientos no tanto entre indígenas y no indígenas, sino entre aquellos que tenían interés en fomentar una agricultura mercantil y los que querían preservar las formas tradicionales de cultivo. Para defenderse, los campesinos recurrieron a la dilación, a los tribunales y, cuando todo fallaba, a la rebelión. Los brotes de violencia no cesaron a lo largo de la República Restaurada y durante la *pax porfiriana*. La autoridad política hizo lo posible por reprimir a los levantiscos, aunque esto no siempre sería fácil. Los mayas del este de Yucatán, organizados en torno al culto de una "cruz parlan-

te", tomaron las armas desde 1847 y no fueron derrotados sino hasta 1903. En Sonora, los yaquis, aunque vencidos en la batalla de Mazacoba en 1900, se defendieron mediante una guerra de guerrillas que se prolongó hasta 1909. La resistencia de ambos grupos indígenas fue sofocada mediante implacables políticas de deportación que afectaron tanto a los rebeldes como a los llamados pobladores "mansos". Los mayas fueron enviados a trabajar en los ingenios de Cuba y los plantíos de tabaco de Valle Nacional, en Oaxaca, mientras los yaquis fueron llevados a las haciendas henequeneras de Yucatán.

Algunas comunidades se habían integrado a la vida política nacional, preservando muchos de sus recursos y autonomía gracias a la negociación y el apoyo estratégico a distintos grupos; sin embargo, en algún momento se vieron orilladas a recurrir a la violencia. Entre 1867 y 1868 los pueblos del valle de Chalco se adhirieron a un plan que proclamaba "la guerra a los ricos" y "el reparto de tierra a los pobres". En Chihuahua, varios poblados se habían formado con inmigrantes que recibieron tierras a cambio de participar en la guerra en contra de las tribus nómadas, por lo que fueron llamados colonias militares. Estos pueblos trataron de resistir los embates de la expropiación y la pérdida de la autonomía municipal que sufrieron a partir de 1886; al haber derrotado a los apaches, dejaron de ser útiles a los hacendados como fuerzas defensivas. En 1891, en Tomóchic, un centenar de colonos resistió durante semanas la embestida de un ejército de unos mil doscientos soldados, aunque al final fueron derrotados. En general, en la época de Porfirio Díaz el campo, la vida rural, experimentó grandes transformaciones, unas veces pacíficas y otras extremadamente violentas.

Fábricas modernas que producían telas, cerveza, vidrio, cemento, fierro y acero aparecieron en diferentes regiones, así como minas que extraían productos que antes casi no se explotaban, como el cobre, el carbón, el hierro o el cinc. Si bien estas fábricas no rebasaron el ámbito del consumo nacional, lograron una penetración comercial importante. Sus productos llegaron a sectores que hasta hacía poco sólo consumían lo que producían por su cuenta. Para principios del siglo XX la mayoría de los campesinos compraba ya hecha la manta de algodón con la que hacían sus vestimentas. La industria textil del algodón, que en 1878 satisfacía el sesenta por ciento de la demanda nacional de telas, en 1910 cubría el ochenta por ciento, lo que no ocurría en ningún otro país de América Latina. El desarrollo industrial que tuvo México durante estos años fue extraordinario en relación con el de la mayor parte de los países no sólo de América Latina sino también de Asia. Sin embargo, la falta de fuentes de financiamiento y los privilegios que el gobierno otorgaba a sus allegados limitaron las oportunidades e hicieron que unos cuantos empresarios controlaran gran parte de la economía.

A la par del crecimiento industrial y de la electrificación de parte importante de la producción, los nuevos servicios de transporte y comunicaciones (ferrocarriles, tranvías, teléfonos) abrieron nuevas fuentes de trabajo. Estos trabajadores recibían mejores salarios que los campesinos, aun cuando su vida no dejaba de estar llena de dificultades. La necesidad de recurrir a la energía hidráulica e hidroeléctrica obligó a ubicar las fábricas a orillas de los ríos. Las minas y buena parte de las fábricas se instalaron en zonas aisladas, no urbanizadas y escasamente pobladas. Las compañías tenían que construir no sólo la planta productiva, sino todo lo necesario para que

habitaran ahí sus empleados: vivienda, calles, alumbrado, tiendas e incluso iglesias y oficinas gubernamentales. Al asumir estas atribuciones, los empresarios se acostumbraron a nombrar a los gobernantes locales y a los jueces. Por no tener contrapesos políticos, las compañías incurrían en mayores abusos. A los trabajadores frecuentemente se les insultaba o golpeaba; se les imponían multas por averiar las máquinas, por dormirse en el trabajo o por silbar, conversar o "bailar sin música". En cualquier momento un empleado podía ser despedido y ese mismo día debía desalojar su casa.

En estos pueblos había muy pocas escuelas y un solo doctor, empleado de la compañía. Si un trabajador enfermaba o moría, incluso por causas laborales, no recibía ningún tipo de indemnización y su familia quedaba completamente desprotegida. Las jornadas eran de doce horas, pero a veces llegaban a ser hasta de quince. Además, debido al aislamiento, los empleados y sus familias sólo podían hacer sus compras en las tiendas de las propias compañías. Éstas usualmente vendían caro, ofrecían créditos a tasas exorbitantes y trataban mal a la clientela. Frente a la presencia sofocante de la empresa, los trabajadores no tenían protección legal, ni derecho a organizar sindicatos y huelgas. El mundo industrial era dinámico, pero su interior estaba lleno de tensiones.

La locomotora y la estación de tren, la hacienda y la fábrica modernas, así como las ciudades porfirianas, fueron los símbolos de los grandes cambios y tensiones que vivieron numerosos mexicanos durante el último tercio del siglo XIX. El crecimiento económico corrió paralelo al de las ciudades: si en 1870 había sólo ocho ciudades con más de veinte mil habitantes, para 1910 eran ya veintidós, y el veintinueve por ciento de la población era urbana. Al convertirse en centro

de las actividades económicas, políticas y administrativas, la ciudad experimentó cambios acelerados debidos a su propio crecimiento, a las tecnologías innovadoras y a las nuevas formas de pensar la vida en común. Los hombres y mujeres que abandonaban el mundo rural dejaban atrás los ritmos de antaño, el trabajo pautado por la luz del sol y las estaciones, para embarcarse en una vida de ajetreo y de horarios fijos, a menudo marcados por la campana o el silbato de la fábrica.

Desde la antigüedad los citadinos concibieron a la urbe como símbolo de civilización. Durante el porfiriato se procuró dotar a las ciudades de parques y paseos con árboles, prados y fuentes "brotantes", para que sus pobladores pudieran disfrutar de un "sano esparcimiento". Se construyeron calles anchas y pavimentadas, cuyos antiguos nombres de oficios y de santos cristianos se cambiaron por los de los héroes y acontecimientos que fundaron la República. Se hicieron inversiones importantes para modernizar el alumbrado público, pasando del gas a la electricidad a finales de la década de 1880. El tranvía eléctrico modificó el transporte urbano. Los descubrimientos médicos de la época exigían que el agua se entubara para evitar la transmisión de virus y microbios. Quienes tenían los recursos procuraron que su casa respondiera a los nuevos estándares de belleza e higiene. El agua corriente, el drenaje y la recámara individual pasaron a ser símbolos del buen vivir y de la modernidad. Por ejemplo, con el cambio de siglo llegaron a una capital de provincia como Mérida el asfalto, los palacetes *art nouveau* del Paseo Montejo y los primeros inodoros.

Las nuevas colonias, exclusivamente residenciales y reservadas a los sectores más prósperos, acentuaron las divisiones sociales. Antes, aunque la sociedad fuera tan jerárquica,

varias clases sociales habían ocupado el mismo espacio, a veces incluso la misma casa —las familias pudientes en el primer piso, los artesanos y comerciantes en las accesorias, los más pobres en los patios traseros—. Durante el porfiriato, mientras los nuevos barrios disfrutaban de las innovaciones del urbanismo, los barrios pobres, cada vez más poblados, carecían de los servicios municipales básicos, como la limpia o la vigilancia. En sus callejones se amontonaban la basura y los desperdicios de las carnicerías y las talabarterías. El agua se quedaba estancaba, y las bacinicas se vaciaban en la calle, al tradicional grito de "¡Aguas!" En los arrabales se entreveraban los espacios urbano y rural, las huertas con las fábricas, y en las calles convivían las gallinas con los puercos.

Para los artífices del régimen la ciudad fue el escenario idóneo para mostrar los logros del gobierno, con magnas obras de ingeniería, como el sistema de desagüe del valle de México, o con edificios que ordenaban la vida en común y expresaban su ideal de sociedad. En esos años se construyeron grandes mercados públicos para encerrar los olores y los ruidos que antes se desparramaban desordenadamente por las calles. En las ciudades importantes se inauguraron monumentos, teatros y museos, así como quioscos de estilo moderno que también se instalaron en las plazas de poblaciones más pequeñas. El estilo arquitectónico que más gustaba era el francés, que en México como en el resto del mundo representaba la cumbre del buen gusto y de la "civilización". La ciudad de México se convirtió en sede de impresionantes edificios públicos, como los palacios de Comunicaciones y de Correos (1904 y 1907), el Manicomio General (1910), el edificio panóptico de la cárcel de Lecumberri (1900), así como dos obras inconclusas: el Teatro Nacional —que en la actua-

lidad es el Palacio de Bellas Artes— y el Palacio Legislativo —cuya enorme cúpula es hoy el monumento a la Revolución—. El Estado porfiriano, además de promover el "orden y el progreso", buscaba dejar su marca en el paisaje urbano.

Para consolidar la nación, 1867-1910

Luego de la derrota frente a Estados Unidos en 1847, no faltó quien afirmara que México había perdido la guerra porque no era "una nación". No obstante, a principios del siglo XX la mayoría de los mexicanos de entonces se identificaban como tales y se sentían parte de una misma comunidad. Sin embargo, ya no concebían a la nación como una comunidad esencialmente política, como un grupo de hombres y mujeres que se habían dado un mismo gobierno y vivían bajo las mismas leyes. Ya no se trataba tampoco de la nación como la comunidad de derechos por la que habían suspirado los políticos de mediados de siglo. La minoría que gobernaba imaginaba ahora a la nación como una colectividad vinculada por la cultura y la historia, y ésta sería la imagen que promovería desde el poder.

La construcción de esta comunidad imaginaria responde a varios factores. Por un lado, los avances tecnológicos permitieron comunicarse con mayor facilidad y rapidez. Ya en 1862, gracias al telégrafo, el gobierno de Juárez supo que las armas nacionales se habían "cubierto de gloria" al derrotar al ejército francés frente a Puebla. Si en 1851 había dos oficinas de telégrafos, para 1910 había quinientas veinte, y se intercambiaban más de cuatro millones setecientos mil mensajes telegráficos al año. Por este medio los mexicanos se

enteraban de todo tipo de noticias, desde el triunfo del popular torero Rodolfo Gaona hasta la reelección de Porfirio Díaz. Una mayor eficiencia en las comunicaciones favoreció también la centralización del poder.

El ferrocarril hizo mucho más fácil atravesar la República de norte a sur y de oriente a poniente. En 1864, un viaje de la ciudad de México al puerto de Veracruz en diligencia duraba unas cuarenta horas, sin contar los tiempos de descanso, y costaba treinta y un pesos. Para 1890, el ferrocarril mexicano hacía el mismo trayecto en once horas y media, y un boleto de primera clase costaba doce pesos. En los vagones, con los productos agrícolas, minerales y todo género de mercancías, viajaban también cartas, periódicos ilustrados, "papeles sueltos" que relataban chismes y cuadernillos con la letra y la música de "canciones modernas" y otras tonadas de moda, como el vals *Sobre las olas,* de Juventino Rosas. Por tren llegaban mercachifles que vendían desde fotografías con la imagen de la Virgen de Guadalupe hasta máquinas de coser. En el tren iban también las compañías de teatro, de títeres y de circo. A pesar de que la educación pública llegaba todavía a muy pocos, la mayor relación entre las distintas regiones del país y las exigencias de un mercado cada vez más amplio difundieron el uso del español, que según el censo de 1900 hablaban ocho de cada diez mexicanos. A lo largo y ancho del país, y dentro de distintas clases sociales, la mayor parte de los habitantes comenzó a compartir el mismo lenguaje, modas, diversiones y muchas imágenes y recuerdos.

Por otra parte, para dotar de unidad a una población dividida por hondas diferencias económicas, sociales y geográficas, los políticos y los intelectuales se esforzaron por construir símbolos de identidad. La historia nacional no era

entonces un espacio compartido cuya lectura uniera a todos los mexicanos. A partir de la independencia, los historiadores habían tratado de explicar y justificar las "revoluciones", esas convulsiones tremendas en que los mexicanos habían luchado unos contra otros por definir la forma de ser de la nación. Después de 1867, la pacificación permitió que se reconstruyera el pasado como un relato multisecular, colorido y heroico, que desembocaba en un presente de paz, pleno de promesas. Esta versión quedó plasmada en los cinco tomos de *México a través de los siglos* de Vicente Riva Palacio (1880), y en *México: su evolución social,* la obra dirigida por Justo Sierra (1900), y también en textos más entretenidos y accesibles, como la melodramática novela *Clemencia* de Ignacio Manuel Altamirano y los divertidos *Episodios nacionales* de Victoriano Salado Álvarez. Los novelistas, poetas y pintores dejaron atrás los modelos europeos y se esforzaron por crear un arte que reflejara el ser de la nación, la belleza y diversidad de sus paisajes, lo pintoresco de su población y las particularidades de su gente y su lengua.

El complejo y conflictivo pasado de los mexicanos se transformó en una historia evolutiva sin grandes fisuras, en la que parecía que todos habían participado, con la posible excepción de los despistados y los traidores. Con Cuauhtémoc, los mexicanos habían resistido valientemente la inicua conquista de una España oscurantista. Con Miguel Hidalgo y José María Morelos habían logrado la independencia. Como los Niños Héroes, habían sacrificado sus vidas para defender a la nación del ataque de Estados Unidos. Apoyados por hombres como Ignacio Zaragoza, Benito Juárez y Porfirio Díaz, habían batido al francés y al Imperio de Maximiliano, y demostrado al mundo su valía. Como se trataba de

una historia que buscaba sobre todo enaltecer, emocionar y unificar, dejaba fuera aquello que no cuadraba con esa trama: las hostilidades que enemistaban a las poblaciones indígenas cuando llegaron los españoles; el sentido de pertenencia a la monarquía española que habían compartido muchos novohispanos y que se había traducido en las posturas encontradas que habían hecho de la guerra de independencia una guerra civil, y las visiones y los esfuerzos de aquellos mexicanos que habrían querido construir algo distinto al modelo de república federal, liberal y laica que terminó por imponerse.

La nación dejaba entonces de ser una entidad que había que construir con grandes esfuerzos para convertirse en un ser natural, dotado de un territorio bien definido, con personalidad e historia propias. Para que esta "historia patria" se convirtiera en referente de todos los mexicanos, había que difundirla y celebrarla. La escuela primaria constituía un espacio idóneo para fomentar en los niños el amor a la nación, enseñándoles las hazañas de aquellos héroes "que nos dieron patria". Desde fines de 1867 la historia nacional formaría parte de los planes de estudio para la educación primaria, y célebres historiadores, novelistas y geógrafos como Manuel Payno, Justo Sierra, Guillermo Prieto y Antonio García Cubas escribieron libros de texto para contar a los niños la historia de su nación. Empero, a pesar de los esfuerzos realizados por extender la educación, eran pocos los niños que podían asistir a la escuela, pues en las zonas rurales, donde vivía la mayor parte de la población, éstas eran prácticamente inexistentes. Pero incluso donde había una escuela cercana, buena parte de los niños no podían asistir, pues tenían que contribuir al sostén de la familia, trabajando en las fábricas o en el campo. Si bien la población escolar

crecía año con año, en 1910 sólo dos de cada diez mexicanos sabían leer y escribir.

Pero si los que asistían a la escuela eran pocos, el espacio público estaba abierto a todos, ricos y pobres. Todas las poblaciones que tenían los recursos para hacerlo adornaron su plaza principal con la estatua de un héroe como Miguel Hidalgo o Benito Juárez. En la capital del país se quiso que el Paseo de la Reforma fuera una gran lección de historia, vertida en bronce. A lo largo de la avenida, cada estado erigió estatuas a dos de sus hombres más ilustres, mientras que en las glorietas que estaban en el centro se levantaron monumentos para conmemorar los grandes momentos de la historia de México —descubrimiento, conquista, independencia, reforma— y honrar a sus grandes hombres. Porfirio Díaz honraría la memoria de quien había sido su rival político inaugurando en 1910 el Hemiciclo a Benito Juárez, héroe de la que fuera llamada la "segunda guerra de independencia".

Las fiestas patrias se celebraban hasta en los pueblos más pequeños. Se decoraban las calles y las plazas con el verde, blanco y rojo de la bandera y abundaban los discursos que describían con voces grandilocuentes los hechos gloriosos del pasado. Eran comunes las representaciones dramáticas de sucesos históricos como el grito de Dolores o la batalla de Puebla. Uno de los personajes más populares de la famosa compañía de títeres de los hermanos Rosete Aranda era Vale Coyote, que invitaba a todos sus "conclapaches" a celebrar el día "más grande y facundo de nuestra cara independencia", con la que los mexicanos se habían librado de unos "uropeos [que] dialtiro se creyeron güenos y por lo mismo pretendieron cogerse lo ajeno". Como en las fiestas religiosas —que seguían celebrándose a pesar de que las Leyes de Reforma prohibían las

procesiones al aire libre—, había música y cohetes, y a veces verbena, jaripeos, peleas de gallos y corridas de toros. La gente rompía con la rutina diaria para juntarse y disfrutar de la convivencia y de los antojitos que se vendían en las plazas.

Hasta la década de 1850 la independencia se celebraba tanto el 16 como el 27 de septiembre, para conmemorar el llamado de Hidalgo y la entrada a la capital del ejército trigarante comandado por Agustín de Iturbide. En las décadas centrales del siglo, las fiestas patrias se convirtieron en una forma de expresar la pertenencia a alguno de los bandos que enfrentaban a la sociedad: los liberales ensalzaban a Hidalgo, mientras que los conservadores deploraban el desorden que había producido el grito de Dolores y festejaban a Iturbide, el héroe que había alcanzado la independencia en un contexto de paz y unidad. Entre 1864 y 1867, los republicanos conmemoraron la victoria del 5 de mayo al tiempo que los imperialistas festejaban el cumpleaños de Maximiliano en abril.

Fue el emperador quien, en su búsqueda de una historia conciliadora y por considerar que tanto día feriado frenaba el progreso del país, decidió que la independencia debía celebrarse en una sola fecha. A partir de entonces el aniversario del inicio de la insurgencia se convirtió en la fecha más importante del calendario cívico. Tenía además la ventaja de coincidir, casi, con el cumpleños de don Porfirio, que era el 15 de septiembre. Los mexicanos podían entonces festejar al mismo tiempo la independencia y el natalicio del presidente que "tanto había hecho por el país". Por todo esto, la celebración del primer centenario en 1910 adquirió tanta importancia. Serenado el encono político de las primeras décadas de vida independiente, todos los mexicanos podían celebrar lo mucho que habían logrado y lo lejos que podían llegar.

El régimen envejece: la crisis del porfiriato, 1900-1910

Los porfiristas vivieron la primera década del nuevo siglo con sentimientos encontrados de satisfacción y angustia. Por un lado, el régimen que apoyaban parecía haber sido el artífice de una transformación sorprendente: tras los desmanes del primer medio siglo, y en un par de décadas, el país de las clases altas y a medias urbanas se había convertido en un país casi moderno. México estaba por cumplir cien años y podía presumir al mundo lo mucho que había avanzado. Por otro lado, estaban el malestar y el descontento de quienes se habían visto afectados por los procesos políticos y económicos impulsados por el régimen. A éstos se sumaba una serie de crisis, ocurridas en un momento en que el ingenioso y resuelto don Porfirio estaba viejo. Cumpliría ochenta años en 1910. Además, era apremiante dar solución al problema de la sucesión: responder a la pregunta de cómo habría de funcionar el complejo sistema de pesos y contrapesos, de ejecución de leyes y acuerdos informales, cuando desapareciera quien había sido la pieza central de la maquinaria política.

De hecho, el sistema estaba ya resquebrajándose. Había envejecido no sólo Díaz, sino también el conjunto de sus colaboradores, y las nuevas generaciones no encontraban espacios en la política y el gobierno. Díaz, erigido en el gran árbitro de las disputas nacionales, había logrado resolver los conflictos de manera que ninguna de las partes se sintiera atropellada, pero ahora estaba perdiendo su capacidad de mediación. En Chihuahua, en donde el proceso de desamortización y centralización había agredido a los colonos y beneficiado a la familia Creel-Terrazas, resultaron electos gobernadores, sucesivamente a partir de 1903, Luis Terra-

zas, su yerno Enrique Creel y su hijo Adalberto Terrazas, al tiempo que Creel se incorporaba al gobierno federal como embajador en Washington y después como ministro de Relaciones Exteriores. Algo similar sucedió en Yucatán con el henequenero Olegario Molina, que de gobernador pasó a ocupar el Ministerio de Fomento, y en Morelos, donde en 1909 se eligió como gobernador a un poderoso hacendado, Pablo Escandón, mientras la expansión de las haciendas azucareras y su avidez de agua y mano de obra hacían cada vez más difícil la supervivencia de las comunidades campesinas. Tal política generó fuerte animadversión, no sólo entre las clases populares, sino también entre las clases medias y otros hacendados y empresarios, avasallados por el poder desmedido de unas cuantas familias.

La pérdida de equilibrio en el juego político tuvo consecuencias trágicas en el ámbito laboral. En 1906, influidos por los movimientos de los trabajadores en auge en los países industrializados, los trabajadores comenzaron a organizarse para tratar de mejorar sus condiciones laborales y de vida en general. En las fábricas textiles fundaron el Gran Círculo de Obreros Libres, mediante el cual buscaban apoyarse entre sí para defender sus derechos. En unos cuantos meses esta organización, que nació en el valle de Orizaba, tuvo presencia en la mayor parte de las fábricas textiles del país. El Gran Círculo estableció alianzas con una nueva agrupación política, el Partido Liberal Mexicano, fundado en 1906 por liberales de viejo cuño y un grupo de intelectuales de tendencias anarcosindicalistas. Este grupo se oponía al gobierno de Díaz por traicionar los ideales liberales, y esperaba derrocarlo.

A lo largo de 1906 estallaron numerosas huelgas, en algunas de las cuales los trabajadores consiguieron ciertas me-

jorías, como la eliminación de multas y aumentos salariales. Sin embargo, esas conquistas resultaban intolerables para los industriales y mineros, que buscaron el apoyo del gobierno para "aplacar" la incipiente organización obrera. También los trabajadores miraron hacia Díaz con la esperanza de que, con su apoyo, los empresarios reconocieran la legitimidad de sus agrupaciones y demandas. Empero, en lugar de desempeñar el papel de negociador imparcial, el gobierno dio su apoyo total a los empresarios, permitiendo incluso a *rangers* norteamericanos entrar a México a reprimir a los mineros de Cananea y enviando al ejército en contra de los obreros levantados en Río Blanco, Veracruz. La represión culminó con la matanza de decenas de trabajadores, y reveló a mexicanos y extranjeros la cara autoritaria y despiadada del régimen porfirista.

Para colmo de males, en 1907 una crisis económica internacional afectó severamente al país. En 1905 México había entrado al patrón oro, lo que significa que, como la mayor parte de los países industrializados, iba a fijar el tipo de cambio de su moneda dependiendo del valor de la libra esterlina de Inglaterra. Esto se hizo con el objetivo de generar mayor estabilidad en el tipo de cambio, pero la liga estrecha de la economía mexicana con las de los países industrializados la exponía al contagio cuando éstas sufrieran algún revés. Las exportaciones disminuyeron y hubo fuertes pérdidas entre hacendados y mineros que no pudieron pagar sus deudas a los bancos. El sistema financiero entró en un círculo vicioso: quienes debían no podían pagar y los bancos no podían prestar. Ante la falta de pagos muchos bancos se fueron a la bancarrota. El gobierno tuvo que emprender un costoso rescate bancario y restructurar las finanzas. Además,

muchos trabajadores que se encontraban en Estados Unidos quedaron sin empleo y regresaron al país, donde tampoco conseguían trabajo. A esto se sumó que tanto 1908 como 1909 fueron años de sequía. La escasez de alimentos desencadenó en un aumento de precios del veinte por ciento entre 1907 y 1910, sin que crecieran paralelamente los salarios. Así pues, el descontento se comenzó a acumular a lo largo y ancho del país, en el seno de clases sociales distintas.

Los problemas que enfrentaba Díaz no sólo obedecían a causas internas. El creciente poder económico de las compañías norteamericanas despertó cada vez mayores preocupaciones. Por eso, el gobierno de Díaz buscó contrarrestar la posición dominante del capital estadounidense promoviendo la inversión europea. La disputa por el poder económico se exacerbó cuando hacia 1905 fueron descubiertos importantes yacimientos petroleros en México. Entonces comenzó una lucha entre la norteamericana Mexican Petroleum Company y la inglesa Pearson Trust (más tarde El Águila), favorecida por Díaz. Entre 1907 y 1908, mediante una serie de manipulaciones financieras, el gobierno formó la compañía Ferrocarriles Nacionales de México para tomar el control de las vías férreas que pertenecían a dos consorcios estadounidenses: la Standard Oil y la casa bancaria de Speyer. Estas políticas hicieron que los intereses norteamericanos fueran cada vez menos afectos a Porfirio Díaz.

En este ambiente de crisis e incertidumbre se buscó solventar el asunto de la sucesión. Para dar un respiro a la ansiedad que provocaba, se reformó la Constitución en 1904, de modo que se alargó el periodo presidencial de cuatro a seis años y se creó la figura del vicepresidente, que sucedería al titular del Ejecutivo si éste fallecía. En 1908 Porfirio Díaz

aseguró, en una entrevista con el periodista estadounidense James Creelman, que no buscaría la reelección en 1910, y que vería con buenos ojos la formación de partidos políticos para competir en elecciones limpias y abiertas. Esto despertó gran interés en la contienda electoral de 1910, pero —y esto nos dice mucho sobre el lugar que don Porfirio ocupaba en el sistema político— el debate se centró en la cuestión referida a quién elegiría Díaz como vicepresidente. La discusión enfrentó a dos de los principales grupos políticos que lo habían apoyado. Por un lado, estaba el de los "científicos", conformado principalmente por altos funcionarios de la capital, miembros de la oligarquía financiera y política, entre los que figuraban personas como José Ives Limantour, secretario de Hacienda. En el lado opuesto estaba el grupo de los "reyistas", encabezado por Bernardo Reyes, ministro de Guerra entre 1900 y 1903, y por muchos años gobernador de Nuevo León. Este grupo tenía una presencia importante en el norte y sostenía ideas más cercanas a los intereses de los hacendados y empresarios de la región, que sufrían la fuerte competencia de la inversión norteamericana. Cada grupo consideró que el sucesor del general Díaz tenía que surgir de sus filas. Finalmente hubo quien, al acercarse la fecha de la elección, se interesó en la formación de estructuras políticas autónomas y quiso competir en la lid electoral, como Francisco I. Madero, miembro de una rica familia de hacendados y empresarios de Coahuila, que hasta entonces se habían mantenido alejados de la política. Así, la sucesión presidencial de 1910 abrió una gran incertidumbre, a la vez que fracturó la anquilosada estructura del régimen.

LA REVOLUCIÓN

Aurora Gómez Galvarriato

La sucesión presidencial de 1910

Si bien existía un fuerte descontento entre distintos grupos sociales y políticos del país, éstos difícilmente se habrían unido para hacer una revolución si no hubiera sido por los problemas políticos que despertó la sucesión presidencial de 1910. Ésta generó un punto de unión y una razón inmediata que llevó a que varios grupos de la más diversa índole, tanto regional como social, se pusieran de acuerdo respecto a un fin común: derrocar al gobierno de Porfirio Díaz.

La Revolución mexicana comenzó a gestarse a partir de una disputa que dividió a los principales grupos políticos que apoyaban al gobierno de Díaz. Cuando don Porfirio decidió reelegirse y nombrar como su candidato a vicepresidente al sonorense Ramón Corral, identificado con los "científicos", puso en su contra a uno de los pilares de su gobierno: los "reyistas". Muchos hacendados y empresarios norteños que antes lo habían respaldado, ahora estaban dispuestos a apoyar a la oposición, pensando que se trataría simplemente de un cambio de personas en el grupo gobernante. En septiembre de 1909, Porfirio Díaz, consciente de la fuerza del reyismo, decidió enviar a Bernardo Reyes como comisionado a Europa, lo que éste aceptó sin remilgos. Sin embargo, sus seguidores no fueron tan dóciles, y decidieron impulsar el movimiento "antirreeleccionista" de Francisco I. Madero,

todavía incipiente, y que, como su nombre indica, se oponía a la reelección presidencial.

Francisco I. Madero, quien pertenecía a una familia grande, rica y poderosa, había hecho estudios de agricultura, derecho y administración de empresas en Estados Unidos y en Francia, donde conoció las ideas de democracia y participación ciudadana que defendería más tarde. Al regresar a México en 1903, incorporó nuevas técnicas de cultivo y mejoró las condiciones de los trabajadores de sus haciendas. Pronto comenzó a participar en política, tratando de consolidar una oposición al gobierno de Díaz. En 1909 publicó el libro *La sucesión presidencial de 1910,* en el que planteaba la necesidad de transformar a México en un Estado democrático moderno, que otorgara a los ciudadanos —como individuos— una representación política y social verdadera a través del "sufragio efectivo" (elecciones libres y no fraudulentas), la independencia de la prensa y los tribunales, la libertad de asociación y expresión, y el respeto a los derechos sindicales. Su libro apenas si hablaba de las cuestiones sociales: no se detenía en la situación del campo ni en la necesidad de un reparto agrario, pero sí en los problemas de los obreros. Ese mismo año, Madero fundó el Partido Nacional Antirreeleccionista, que más tarde lo eligió como su candidato a la presidencia, y emprendió exitosas giras por diversas regiones del país.

Madero obtuvo el apoyo de numerosos reyistas y de algunos grupos allegados al Partido Liberal Mexicano, seguidores del líder anarquista Ricardo Flores Magón. La creciente popularidad de su oponente entre las distintas clases sociales llevó a Díaz a tomar medidas represivas. Poco antes de las elecciones, Madero fue encarcelado en San Luis Potosí. Mientras estaba en prisión tuvieron lugar los comicios, en los que obviamente

resultaron vencedores Díaz y Ramón Corral. El gobierno de Díaz se sentía tan fuerte que dejó salir a Madero de la cárcel, lo que él aprovechó para huir a San Antonio, Texas, donde redactó el Plan de San Luis. En él llamaba al pueblo a una revolución que debía iniciarse el 20 de noviembre de 1910. El Plan, como su libro, contenía las aspiraciones de la burguesía opuesta a Díaz: la democracia electoral y la limitación de los derechos de los extranjeros. Sin embargo, el Plan sí tocaba el problema agrario: prometía la devolución de todas las tierras injustamente expropiadas a los pueblos. La revolución, tal y como se la imaginaban en ese momento los maderistas, no iba a ser ni violenta ni larga, entre otras razones, para evitar una intervención militar de Estados Unidos, como la que recientemente había tenido lugar en Cuba.

La revolución maderista

Pocos fueron los grupos rebeldes que efectivamente se levantaron en armas el 20 de noviembre de 1910. Los preparativos del alzamiento en ciudades como Culiacán, Guadalajara, Chihuahua, Hermosillo y algunas localidades en Veracruz y Puebla fueron descubiertos por el gobierno de Díaz, y sus instigadores, detenidos. El asesinato, unos días antes, del principal líder antirreeleccionista en Puebla, Aquiles Serdán, avivó los temores de los distintos grupos maderistas, que prefirieron esperar a que otros se rebelaran primero. El movimiento revolucionario de Chihuahua rompió el círculo vicioso: ahí comenzó la Revolución.

Los primeros levantamientos se dieron en pequeños poblados de Chihuahua, como Cuchillo Parado, Namiquipa y

Bachiniva. Varios años atrás, sus habitantes habían luchado, sin un éxito rotundo, por defender sus tierras y la autonomía municipal ante los embates de hacendados apoyados por el gobernador Enrique Creel. Estos pueblos contaban con una amplia experiencia militar, pues desde que ocuparon sus tierras a mediados del siglo XVIII habían librado batallas constantes para defenderlas, primero contra los apaches y después contra el gobierno. A pesar de su relativa desventaja numérica, los pueblos alzados lograron poner en jaque al ejército mediante una guerra de guerrillas.

La composición social de los revolucionarios chihuahuenses era diversa. El líder del partido antirreeleccionista en Chihuahua, Abraham González, descendía de una de las principales familias de esa entidad; había sido ranchero, pero no había podido hacer frente a la competencia de las grandes haciendas del clan Terrazas-Creel. Pascual Orozco, el líder militar más destacado en la fase inicial de la Revolución, había sido dueño de recuas de mulas y su resentimiento se debía a las importantes concesiones que el gobierno del estado había otorgado a un rival. Puede decirse que sólo un gran dirigente del movimiento de Chihuahua surgió de las clases populares: el duranguense Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco *Pancho* Villa, quien había sido peón de hacienda, minero, bandido y comerciante. Poco a poco, su pasado se fue transformando a través de historias y corridos, y se convirtió en una leyenda que lo presentaba como una especie de Robin Hood que robaba a los ricos para dar a los pobres.

Desde Chihuahua, el movimiento se fue extendiendo a otras regiones. En algunos estados operaban pequeños grupos guerrilleros, pero en otros, como Coahuila, Morelos y Sonora, ya había conjuntos de varios miles de combatientes.

El 14 de febrero de 1911 la Revolución dio un nuevo giro cuando Madero regresó a México, entrando por Chihuahua, donde los rebeldes habían adquirido más fuerza. Un mes más tarde, el movimiento revolucionario había cundido en distintas partes de la República. En muchos estados surgieron nuevas bandas maderistas que sumaban unos veinticinco mil revolucionarios en pie de guerra. La rebelión fue bajando de la sierra, extendiéndose por buena parte de los territorios de Chihuahua, Sonora, Durango, Sinaloa, Coahuila y Zacatecas. En el sur, a principios de marzo, los hermanos Figueroa se sublevaron en la región minera de Huitzuco, Guerrero, y en Morelos estalló la insurgencia zapatista. Díaz intentó contener estos alzamientos tanto por medios militares como prometiendo reformas, pero fracasó. En gran parte del país sus tropas lograban, cuando mucho, mantenerse en las ciudades grandes, mientras que los revolucionarios controlaban cada vez una mayor parte del campo. La insurrección nacional convocada por Francisco Madero se había hecho una realidad.

Las diferencias entre los bandos revolucionarios eran considerables, tanto en su dimensión como en su composición social. En Morelos emergió un auténtico líder popular en la persona de Emiliano Zapata. Si bien era más próspero que la mayoría de sus vecinos de Anenecuilco, pues se dedicaba a la arriería y el adiestramiento de caballos, Zapata era uno de ellos y compartía su lucha: desde pequeño había prometido a su padre devolverle las tierras que los hacendados le habían arrebatado. De acuerdo con las costumbres tradicionales de su región, en 1909 Zapata fue electo presidente del consejo de su pueblo y asumió la responsabilidad de defender las tierras de la comunidad. Desde ese momento hasta el día de su asesinato, acaecido diez años más tarde, no

país importante en esta disputa, debido a su cercanía con Estados Unidos y al hecho de ser uno de los mayores productores de petróleo, razones por las que las tres potencias buscaban aumentar su influencia en él. La batalla por el poder hegemónico internacional enmarca e interviene en el proceso revolucionario.

Francisco I. Madero llegó a la ciudad de México el 7 de junio de 1911 convertido en un ídolo popular: "el apóstol de la democracia". Sin embargo, pronto se dieron graves escisiones en el grupo revolucionario. Algunos consideraron que el Tratado de Ciudad Juárez representaba una traición a la Revolución. Otros simplemente no quedaron satisfechos con lo que Madero les ofrecía. Tal fue el caso de Francisco Vázquez Gómez, uno de los fundadores del Partido Antirreeleccionista y compañero de fórmula de Madero como candidato a vicepresidente en la campaña política de 1909-1910. En agosto de 1911, él y su hermano Emilio, molestos con Madero por su cercanía con los "científicos" porfiristas, se levantaron en armas demandando el cumplimiento del Plan de San Luis y el fraccionamiento de los latifundios. Asimismo, Pascual Orozco, que había sido clave para el triunfo de la Revolución, no se dio por satisfecho con el cargo de comandante de su antigua fuerza convertida en milicia del estado. Después de perder la gubernatura de Chihuahua ante Abraham González, en marzo de 1912 Orozco decidió emprender con su bando, los orozquistas, una rebelión. Ésta sería derrotada por las milicias de los estados del norte, formadas con los revolucionarios maderistas que se habían librado del licenciamiento, y por el ejército federal bajo el mando de Victoriano Huerta, un general porfiriano graduado del Colegio Militar que servía ahora al gobierno de Madero.

Las negociaciones entre Emiliano Zapata y Madero para licenciar al ejército libertador del sur resultaron infructuosas. Madero no estuvo dispuesto a cumplir las tres demandas de los zapatistas para dejar las armas: restitución de las tierras expropiadas a los pueblos, establecimiento de una administración gubernamental revolucionaria en Morelos y la retirada del ejército federal. Madero exasperó a los líderes revolucionarios al notificarles que las reclamaciones de los poblados contra las haciendas tendrían que esperar a que "se estudiase la cuestión agraria". En contra de la voluntad de Madero, las fuerzas federales bajo el mando de Victoriano Huerta ocuparon Morelos y quemaron pueblos, rompiendo cualquier posibilidad de reconciliación con los zapatistas.

Por su parte, los porfiristas intentaron armar una contraofensiva. Madero no tenía apoyo de los bancos ni de las grandes compañías. Pronto muchos miembros de las clases altas, que en un principio lo apoyaron, se afiliaron al Partido Nacional Católico, que promovía la candidatura de Bernardo Reyes y León de la Barra. Ante la ausencia de Vázquez Gómez en las filas maderistas, Gustavo Madero reorganizó el Partido Antirreeleccionista para crear el Partido Progresista Constitucional, que nombró a un abogado de Yucatán, José María Pino Suárez, como candidato a la vicepresidencia.

El 1° de octubre de 1911 se llevaron a cabo las elecciones, que serían las más libres de la historia de México hasta la de 2000. La fórmula Madero-Pino Suárez obtuvo cincuenta y tres por ciento de los votos; el resto lo compartieron otras cuatro candidaturas. El 6 de noviembre Madero asumió el cargo de presidente por un periodo que se vislumbraba de cinco años.

El gobierno de Francisco I. Madero

Madero tenía la convicción de que el país necesitaba un cambio político y que las reformas sociales se darían gradualmente a través de los cauces legales que ofrecía el nuevo gobierno. La libertad de asociación y la posibilidad de contar con gobernantes, diputados y senadores electos democráticamente, irían solucionando poco a poco los problemas sociales sin arrojar a la nación a una nueva era de violencia y militarismo, como la que sufrió durante buena parte del siglo XIX. Igual que muchos otros reformadores moderados que han llamado al pueblo a las armas, Madero pronto se dio cuenta de que no podía controlar las fuerzas que había puesto en marcha. Nombró un gabinete que incluía a varios políticos porfiristas y a los revolucionarios menos radicales. Sin embargo, buena parte de los grandes empresarios, propietarios, banqueros y comerciantes le retiraron su apoyo y buscaron la restauración del régimen porfirista. Aprovechando la amplia libertad de prensa que ahora se gozaba, fue blanco de críticas mordaces en las que se le tachaba de timorato y débil.

La economía siguió funcionando prácticamente igual que antes, con la ventaja de que la crisis financiera y las sequías habían terminado y se vivía una recuperación. En sus primeras acciones, el gobierno de Madero se enfrentó a algunos de los grupos económicos más poderosos, lo que le sumó apoyos pero también grandes enemigos. En Yucatán creó una Comisión Reguladora del Mercado del Henequén, que se opuso a la International Harvester, empresa que hasta entonces había controlado el mercado con el apoyo de Olegario Molina, gobernador de la entidad y ministro de Fomento durante el porfiriato. Los precios del henequén

subieron, con lo cual el gobierno consiguió mayores recursos fiscales y se ganó la lealtad de los hacendados henequeneros. Menos exitoso fue el afán maderista por mejorar las finanzas públicas, aumentando los impuestos a las compañías mineras norteamericanas y del clan Creel-Terrazas, o la intención de fijar un impuesto a las empresas petroleras, o la presión para que las compañías ferrocarrileras dieran a los trabajadores mexicanos oportunidades y condiciones similares a las de los trabajadores estadounidenses. Estas políticas incrementaron la oposición norteamericana a su gobierno.

El movimiento obrero encontró un clima favorable para su desarrollo. Entre 1911 y 1912 se registraron innumerables huelgas a lo largo del país. En enero de 1912 se creó el Departamento del Trabajo, responsable de mediar en los conflictos obrero-patronales, que dejaron de considerarse asuntos meramente privados, y en los que la autoridad ya no habría de tomar siempre el partido de los empresarios. En septiembre se fundó un centro anarquista, la Casa del Obrero Mundial, que agrupaba a los más fuertes sindicatos de la ciudad de México. Los precios, que habían venido aumentando entre 1907 y 1910, se estabilizaron entre 1910 y 1912, lo que junto con las mejoras salariales generó aumentos significativos en el poder de compra de la clase trabajadora.

Si los obreros vivieron cambios positivos, la gente del campo (o campesinos, como se les llamaría después de la Revolución) no experimentó mejoría alguna. El 25 de noviembre de 1911 los jefes de los pueblos de Morelos, bajo el mando de Zapata, se levantaron en contra de Madero proclamando el Plan de Ayala. En éste exigían la restitución de todas las tierras expropiadas a los pueblos, la distribución de la tercera parte de las propiedades de las haciendas entre

la gente sin tierra y la expropiación y repartición de las haciendas cuyos dueños se hubieran opuesto a la Revolución. Durante la siguiente década, este Plan se convirtió en el programa de la lucha campesina revolucionaria del sur.

En Morelos, Madero sustituyó como jefe del ejército federal al despiadado general Juvencio Robles por el más humanitario general Felipe Ángeles, que suspendió casi todas las acciones represivas contra la población civil. Sin embargo, la ausencia de reformas sustantivas impedía alcanzar la paz. Los grupos acomodados consideraban que la actitud moderada de Madero impedía derrotar al "Atila del Sur", como en la prensa llamaban a Emiliano Zapata, y lo culpaban de alentar la creciente inquietud campesina. Con su política, pues, Madero no quedaba bien ni con Dios ni con el Diablo.

Al ver sus finanzas seriamente perjudicadas por el aumento en el gasto militar, el gobierno tomó la decisión de contratar deuda externa. Sin embargo, estos recursos no bastaron para restaurar la respetabilidad financiera del país, lo que comenzó a afectar la economía a partir de 1912.

La contrarrevolución

Los cuadros porfiristas llevaron a cabo varios intentos de golpe de Estado contra Madero. El primero fue el del general Bernardo Reyes, que en septiembre de 1911 lanzó desde Texas el Plan de la Soledad, pero fracasó ante la indiferencia del ejército federal, y fue encarcelado. Más adelante, en octubre de 1912, un grupo de "científicos" organizó una revuelta encabezada por el general Félix Díaz, sobrino de don Porfirio. Félix Díaz se apoderó del puerto de Veracruz

e instó al ejército a asumir el mando del país. Sin embargo, ni un solo general respondió a su llamado. Muy pronto el ejército recuperó la plaza y Félix Díaz fue enviado a la misma prisión que Bernardo Reyes, lo que permitió que ambos siguieran conspirando.

Poco después, el 5 de noviembre de 1912, el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Woodrow Wilson, ganó las elecciones, lo que cambiaría las coordenadas políticas de ese país. Sin embargo, al presidente William Taft, del Partido Republicano, le quedaban unos cuantos meses en el poder —hasta marzo de 1913—, que quiso aprovechar para dejar en México a un gobernante más afín a los intereses de las compañías norteamericanas y de su propio partido.

En enero de 1913 Félix Díaz, Bernardo Reyes y el general porfirista Manuel Mondragón se unieron para organizar una nueva conspiración. El 9 de febrero Mondragón liberó de la cárcel a Díaz y a Reyes. Pero, junto con cientos de rebeldes, Reyes cayó muerto al tratar de penetrar en Palacio Nacional. El edificio fue defendido por uno de los pocos generales que permanecieron leales a Madero, el jefe del ejército, Lauro Villar, quien resultó gravemente herido. Félix Díaz se refugió con el resto de sus tropas en la Ciudadela de la capital.

En lugar de convocar a las fuerzas revolucionarias para defender su gobierno, Madero decidió apoyarse en el ejército federal. En sustitución de Villar, nombró como jefe del ejército a Victoriano Huerta, quien había dado ya múltiples muestras de traición y desobediencia. Ésta fue una decisión fatal. Al día siguiente del comienzo de las hostilidades, con la intervención del embajador de Estados Unidos en México, Henry Lane Wilson, Huerta se reunió con Félix Díaz. Acordaron derrocar a Madero. La estrategia sería que Huerta

escenificaría una guerra "falsa" con el fin de eliminar a las tropas leales al presidente, antes de intentar un golpe. Durante los diez días que son recordados como "la decena trágica" se enfrentaron en las calles de la capital las tropas leales con las golpistas, provocando numerosas muertes, no sólo entre los militares sino también entre la población civil.

Henry Lane Wilson amenazó a Madero con una intervención norteamericana si no renunciaba. El 18 de febrero de 1913, Huerta, mediante un grupo de senadores, le pidió su renuncia y, como Madero se negó, lo cogió preso. Aquella noche Gustavo A. Madero, entonces diputado federal, fue asesinado. Al día siguiente Francisco I. Madero y José María Pino Suárez presentaron su dimisión y el 22 de febrero, con la anuencia del embajador norteamericano, fueron también asesinados.

Aquellos que anhelaban la restauración del régimen de Porfirio Díaz celebraron con champaña la caída de Madero, y buena parte de las élites políticas e intelectuales se alió con el general Huerta. El periódico católico *El País* publicó un mensaje del Vaticano felicitando a Huerta por haber restablecido la paz. Gran Bretaña y otros países europeos otorgaron un pronto reconocimiento diplomático al nuevo régimen. En cambio, para desgracia de los contrarrevolucionarios, con el cambio de gobierno en Estados Unidos el demócrata Woodrow Wilson denegó su reconocimiento. Internamente, el ascenso de Huerta al poder provocó la movilización de la mayor parte de las fuerzas revolucionarias que habían llevado al triunfo a Madero. La revolución popular, "el tigre" que Díaz y Madero procuraron domar con el Tratado de Ciudad Juárez, había sido desatado por los grupos a los que menos convenía dejarlo suelto.

En el contexto de una crisis económica provocada por la caída del precio internacional de la plata, el gobierno de Huerta tuvo que aumentar el gasto militar recurriendo nuevamente a la deuda externa y a préstamos forzosos del sistema bancario. Los bancos de emisión resolvieron el problema inmediato imprimiendo más billetes, pero eso generó gran desconfianza entre la gente. Todos trataban de retirar sus depósitos y cambiar sus billetes por monedas de oro o plata, temiendo que de no hacerlo perderían sus ahorros. Las políticas gubernamentales condujeron a la gradual destrucción del sistema bancario, lo que culminó cuando Carranza ordenó su incautación en 1916, obligando a los principales bancos a cerrar sus puertas por varios años.

De igual manera, las fuerzas revolucionarias se financiaron con la emisión de billetes que tenían curso forzoso en las zonas que ocupaban. Estas acciones generaron inflación y una depreciación de la moneda, que pasó de dos pesos por dólar en febrero de 1912 a casi cuatro pesos por dólar en agosto de 1914. La falta de recursos obligó al gobierno de Huerta a suspender el pago de la deuda externa en mayo de 1914, lo cual impidió al país recibir nuevos préstamos extranjeros por varias décadas. Mientras que hasta 1912 la Revolución no había causado mayores trastornos en la economía, de ese año en adelante la situación comenzó a deteriorarse y adquirió dimensiones graves entre 1914 y 1916, y sobre todo en 1915. Las empresas sufrían por la ausencia de créditos y bancos que los otorgaran, lo que impedía realizar cobros a distancia. Además, la frecuente interrupción de los servicios ferroviarios dificultaba la compra y distribución de bienes.

El movimiento obrero continuó creciendo en fuerza y visibilidad. En un principio Huerta lo permitió: la Casa del

Obrero Mundial organizó en 1913 la primera celebración pública del 1° de mayo. Sin embargo, un año más tarde Huerta clausuró la sede de esa organización y mostró una actitud más dura hacia los trabajadores.

La revolución que vino del norte

A partir del golpe militar de Victoriano Huerta, la Revolución entró en una nueva fase que se caracterizó por la amplitud geográfica, el aumento de la actividad bélica, una mayor radicalización política y la crisis de la economía. Lo que comenzó en buena medida como una lucha dentro de la clase gobernante, se fue transformando en una revolución en la que participaron notables dirigentes populares y extensos sectores de las clases medias, a los que se agregaría el activismo de campesinos dispuestos a defender sus propias reivindicaciones fundamentales.

En esta fase, el norte desempeñaría de nuevo un papel trascendental, si bien no exclusivo. El protagonismo de esta región es explicable porque ninguna otra zona del país había sido transformada tan intensamente por la modernización porfirista. Adicionalmente, los estrechos vínculos con la economía estadounidense hicieron a la frontera más sensible a las crisis cíclicas de la economía. Ahí, como en pocas regiones de México, vivían miles de trabajadores dispuestos a enlistarse en los ejércitos revolucionarios y había una extensa red ferroviaria para movilizarlos. A la abundancia de hombres dispuestos a luchar habría que sumar la de las armas, adquiridas con gran facilidad en Estados Unidos.

Chihuahua, Coahuila y Sonora serían esenciales para la

nueva insurgencia. Venustiano Carranza, un hacendado, ex senador porfirista y gobernador maderista del estado, asumió el liderazgo en Coahuila. Con sus más de cincuenta años, era dos décadas mayor que los otros caudillos revolucionarios. En el momento de la asonada golpista de Huerta, Carranza lo desconoció y convocó a la formación de un ejército para restaurar la legalidad, que tomó el nombre de "constitucionalista". A finales de marzo de 1913 Carranza promulgó el Plan de Guadalupe, que le asignaba el papel de jefe del movimiento. Apenas un mes más tarde, logró ser reconocido por los alzados de Sonora y Chihuahua como el dirigente de la rebelión.

En Sonora tomaría el liderazgo un grupo formado por pequeños rancheros, comerciantes, empresarios menores y notables de los pueblos. La mayoría de estos jóvenes audaces y emprendedores, cuya cabeza más visible era Álvaro Obregón, había sufrido en el porfiriato la cerrazón del sistema político y la falta de movilidad económica y social. A este bloque se unieron algunos hacendados, como fue el caso de José María Maytorena, gobernador de la entidad en tiempos de Madero, y propietarios de minas que habían sufrido la falta de mano de obra ocasionada por la deportación y aniquilamiento de los yaquis en los últimos años del porfiriato.

Álvaro Obregón era un empresario de clase media que por su propio esfuerzo había alcanzado una buena posición económica. Debido a la muerte de su padre, empezó a trabajar a los diez años de edad. Así aprendió a reparar máquinas y más tarde se desempeñó como mecánico en algunas haciendas e ingenios azucareros. Con el tiempo, pudo primero rentar y luego comprar algunas tierras, y obtuvo buenas ganancias con el cultivo y exportación de garbanzo, negocio

para el que desarrolló una máquina sembradora que luego comercializó.

El movimiento que impulsaron en 1913 los nuevos jefes revolucionarios de Coahuila y Sonora era un desprendimiento de los ejércitos estatales maderistas, formados con las fuerzas revolucionarias que habían luchado en contra de Díaz. Por tanto, más que una insurrección popular, como había sido la revolución maderista, fue ésta una empresa organizada y dirigida por los gobiernos estatales. Los principales jefes insurgentes contarían con tropas organizadas profesionales, pagadas y avitualladas como un ejército regular. Fortalecidos en el norte durante 1912 por la lucha contra la rebelión orozquista, esos cuerpos pudieron oponer al ejército federal una red militar efectiva y apoyar la revolución constitucionalista.

Otro estado norteño que desempeñaría un papel protagónico en la lucha contra Huerta sería Chihuahua, donde las fuerzas revolucionarias estaban encabezadas por Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa. Pese a ser iletrado y carecer de entrenamiento militar formal y trayectoria política, Villa desarrolló rápidamente una extraordinaria capacidad de organización que le permitió transformar a su abigarrado conjunto de rancheros, campesinos, arrieros, mineros y vaqueros en una eficiente maquinaria de combate: la División del Norte. Éste fue uno de los ejércitos populares más eficaces y disciplinados de su tiempo. Lo que Villa poseía sobradamente eran varios rasgos de carácter que le ganaron un arrastre multitudinario entre sus hombres: valentía, audacia, inteligencia, tenacidad, gran destreza de tirador y jinete, y apego solidario a sus soldados. Aunque era su dirigente indiscutido, en realidad también era uno de

ellos, como se apreciaba en su vestimenta y en su lenguaje de todos los días. Al igual que sus soldados, Villa creía que la guerra era la guerra, con todas las crueldades y tropelías que ésta suponía.

En las otras regiones la resistencia principal la ofrecieron los zapatistas de Morelos. Después de su golpe contra Madero, Huerta intentó que los zapatistas aceptaran un armisticio. A diferencia de los orozquistas, éstos rechazaron la propuesta y, al amparo del Plan de Ayala, adoptaron una guerra de guerrillas apoyada por las decenas de pueblos campesinos asentados en la región. Huerta encargó la campaña contra los zapatistas al general Juvencio Robles, quien formó una tropa de entre cinco mil y ocho mil hombres que se caracterizó de nuevo por sus métodos brutales, como los utilizados años atrás contra los yaquis.

Los zapatistas tuvieron que huir de Morelos, pero reorganizaron sus tropas en el vecino estado de Guerrero. Pronto surgieron nuevos grupos armados de campesinos en Michoacán, el Estado de México, Tlaxcala, Puebla, el Distrito Federal, Hidalgo y Oaxaca, los cuales adoptaron el Plan de Ayala y se subordinaron al mando supremo de Zapata. Si bien las tropas zapatistas no pudieron convertirse en unidades militares provistas de equipos y armas modernas como los ejércitos revolucionarios del norte, su identidad con la tierra y los valores comunitarios les dieron la organización necesaria para hacer cumplir sus demandas a nivel regional. Su influencia ideológica, que se extendió más amplia y profundamente que su acción directa, rebasaría su capacidad militar.

Entre 1913 y 1914 serían nuevamente los alzados de Chihuahua y sus bravos vecinos de la sierra occidental de Durango quienes alcanzarían las victorias más rotundas contra

el ejército federal. Una vez dominado el inmenso territorio de Chihuahua, merced a los triunfos en las ciudades de Chihuahua y Juárez, la División del Norte se lanzaría a la reconquista de Torreón, que cayó el 2 de abril de 1914. Para este momento, la Revolución había pasado ya de la lucha guerrillera a los enfrentamientos entre ejércitos convencionales, con un alto número de bajas, tanto militares como civiles. La trashumancia de miles de hombres y mujeres llevados por el ferrocarril, la máquina de guerra decisiva de aquellos tiempos, se convirtió en un hecho cotidiano, especialmente en el norte. Los trenes de la Revolución iban y venían cargando la caballería y las tropas de refuerzo, transportando heridos y pertrechos, y por supuesto, a la muchedumbre de soldaderas que acompañaban a sus hombres. Estas "adelitas" eran esenciales para los ejércitos, pues no sólo atendían las necesidades básicas de los combatientes, sino que a veces participaban como enfermeras y tropa activa e incluso como comandantes con batallones a su cargo. Era una revolución también hecha por mujeres.

La batalla decisiva se daría en Zacatecas. La ocupación de la ciudad era estratégica, pues abría el camino a la capital del país. No en balde ahí se concentró una fuerte resistencia federal compuesta por más de doce mil efectivos. Su importancia era tal, que Venustiano Carranza se opuso a que Pancho Villa, con quien tenía una fuerte rivalidad, dirigiera esta crucial batalla. Carranza sabía que el único ejército capaz de tomar la ciudad era la División del Norte, pero no quería que con esa victoria Villa aumentara su prestigio y pudiera entrar, antes que nadie, a la ciudad de México. Ordenó entonces que la División del Norte enviara a cinco mil de sus soldados, bajo las órdenes de Pánfilo Natera,

un antiguo subordinado de Villa, con el objetivo de tomar la plaza. Para Villa, esta decisión de Carranza dejaba claro que eran irreconciliables las diferencias que se habían venido gestando entre ambos; además, consideraba que al mando de Natera sería difícil ganar la batalla. Villa decidió renunciar y dejar la decisión en manos de sus generales, quienes de forma unánime lo apoyaron, le pidieron que desistiera de su renuncia y mandaron un telegrama a Carranza informándole que avanzarían a Zacatecas. La plaza zacatecana fue tomada el 23 de julio de 1914 por las fuerzas villistas, con un saldo de más de siete mil muertos y unos cinco mil heridos por ambos bandos. Después de esta batalla, la más grande en la lucha contra Huerta, los revolucionarios estaban en condiciones de tomar la ciudad de México, pero la escisión entre las facciones estaba ya claramente marcada.

La División del Norte no era el único ejército que se dirigía al centro. Álvaro Obregón comandó la campaña de la costa del Pacífico y con el ejército del noroeste tomó Culiacán para pasar después a Nayarit y Jalisco y entrar triunfante en Guadalajara, en julio de 1914. Los oficiales del ejército del noreste, encabezado por el general Pablo González, también bajaron al sur conquistando ciudades. Asimismo, la actividad revolucionaria en estados como San Luis Potosí y Tlaxcala contribuyó a debilitar a Huerta. En esta etapa fue decisivo el activismo de los campesinos-guerrilleros del ejército libertador del centro y sur de México, bajo las órdenes de Emiliano Zapata, que expulsaron a los huertistas de Morelos. En julio de 1914 llegaron, con la toma de Milpa Alta, a las afueras de la capital. Pero fueron los destacamentos villistas, con el brío irresistible de sus famosas cargas de caballería, los que rompieron el espinazo del ejército federal

y contribuyeron como ningún otro a la destrucción militar del viejo régimen.

La situación política y las circunstancias internacionales trabajaron también en contra del gobierno. El 10 de octubre de 1913 Huerta disolvió el Congreso, arrestó a los diputados que consideraba hostiles al régimen y convocó a elecciones para el 26 de ese mismo mes. Éstas fueron manipuladas militarmente para otorgarle la presidencia al mismo Huerta, y la vicepresidencia a su ministro de Guerra, pero como menos de la mitad de los distritos electorales entregaron resultados, las elecciones no fueron válidas y Huerta continuó siendo presidente interino. Feliz Díax, el otro contendiente a la presidencia, huyó el 27 de octubre en un buque de guerra norteamericano. El Congreso quedó constituido por allegados de Huerta, entre los que figuraban varios de sus parientes. Para ese momento, la proscripción de los civiles de la política abarcó incluso al Partido Católico, y sus líderes, al igual que los de otros partidos, fueron arrestados.

Estas acciones eliminaron la escasa apariencia de legalidad que hasta entonces Huerta había tratado de mantener. Cuando Huerta disolvió el Congreso, la oposición del presidente norteamericano Woodrow Wilson se volvió implacable, y le advirtió que los Estados Unidos no reconocerían los resultados de las elecciones. El 1° de noviembre Wilson amenazó a Huerta: debería dimitir o Estados Unidos favorecería a los constitucionalistas. Huerta no renunció y en cambio trató de conseguir el apoyo de la Iglesia católica permitiendo que consagrara México al Sagrado Corazón de Jesús y realizara importantes celebraciones religiosas públicas en honor de Cristo Rey. Asimismo, toleró una nueva organización eclesiástica cada vez más activa en los asuntos

civiles, la Asociación Católica de la Juventud Mexicana. Si bien la relación entre Huerta y los grupos católicos no fue siempre cordial e incluso sufrió serias rupturas, el apoyo que la cúpula del Partido Católico y la Iglesia católica le otorgó a Huerta en ciertos momentos fortaleció el ánimo anticlerical entre los constitucionalistas.

Wilson aprovechó que unos marineros norteamericanos habían sido detenidos en Tampico el 9 de abril de 1914 para emprender una intervención contra Huerta. Ante la noticia de que llegaría un buque alemán con armas a Veracruz, el presidente de Estados Unidos mandó ocupar el puerto el 21 de ese mismo mes. Cientos de civiles y cadetes de la escuela naval de Veracruz ofrecieron resistencia, pero su número era muy reducido en relación con el del rival, y al día siguiente unos seis mil infantes de marina estadounidenses tomaron la plaza, que conservarían hasta noviembre. Con gran habilidad política, Carranza denunció inmediatamente la intervención, calificándola de violación de la soberanía nacional. Lo mismo hizo Zapata. A pesar de que la invasión los favorecía, los revolucionarios dejaban clara su posición nacionalista y antinorteamericana. Antes que dimitir, Huerta obtuvo del Congreso poderes dictatoriales y movilizó manifestaciones patrióticas. No obstante, la pérdida de los ingresos de la aduana y de pertrechos militares afectó sus fuerzas y su gobierno comenzó a tambalearse.

Ante el ímpetu revolucionario, los huertistas terminarían firmando la paz y los ejércitos constitucionalistas entraron en la ciudad de México. El 15 de agosto de 1914, las tropas victoriosas de Álvaro Obregón ocuparon la capital, y seis días más tarde Venustiano Carranza instalaba su gobierno en el Palacio Nacional. Sin embargo, después de dieciocho duros

meses de lucha, ni las huestes zapatistas, que tenían semanas de estar acampadas en las montañas al sur de la ciudad, ni los contingentes de la División del Norte participarían en la ocupación de la capital.

Estas ausencias no obedecían a una mera casualidad. Denunciaban las serias diferencias entre las fuerzas vencedoras, pues tanto los ejércitos villistas como los zapatistas habían sido bloqueados por Venustiano Carranza para evitar que entraran a la capital y participaran juntos en la celebración del triunfo contra Huerta. Carranza detuvo a los villistas en Zacatecas, impidiendo que les llegara el carbón necesario para proseguir en los ferrocarriles hacia el sur y, como parte de la tregua, Obregón pactó con el ejército federal para que obstaculizara la entrada de los zapatistas en la ciudad de México.

Para superar esas divisiones, diferentes facciones constitucionalistas propusieron realizar una asamblea de jefes militares y gobernadores de los estados. La Soberana Convención de Aguascalientes se celebraría entre octubre y noviembre de 1914 para decidir cómo administrar el poder obtenido. Sin embargo, las diferencias entre los distintos grupos eran demasiado profundas y entre todos reinaba la desconfianza. Venustiano Carranza aceptó que la Convención se realizara sólo porque no podía oponerse al deseo de la mayoría de sus generales, pero no asistió y jamás dejó en claro que atendería sus resoluciones. Pancho Villa solamente acudió para firmar sobre la bandera nacional, un acto realizado por todos los delegados, que simbolizaba su promesa de cumplir las decisiones de la Convención. Días más tarde, los zapatistas llegaron invitados merced a una resolución promovida por Felipe Ángeles, uno de los dos representantes de Villa. Los zapatistas únicamente exigían de la Convención, para reconocer su

soberanía, la adhesión al Plan de Ayala, lo que fue aprobado por unanimidad ante el asombro de Álvaro Obregón.

Pronto quedó claro que, para alcanzar la paz, tanto Carranza como Villa debían renunciar a la búsqueda de la presidencia y al control de sus respectivos ejércitos, pero ninguno estaba dispuesto a hacerlo. Para ambos no solamente se trataba de una cuestión de poder; consideraban que sin ellos los objetivos por los que habían luchado se irían por la borda. Carranza se veía a sí mismo como el freno civil al predominio militar y estaba convencido de que, si triunfaban los villistas y los zapatistas, México caería en la anarquía, el gobierno central se disolvería y el país quedaría a merced de Estados Unidos. Si bien Villa no anhelaba la presidencia de la República, consideraba que Carranza era un dictador que ignoraría los cambios que había llevado a cabo en Chihuahua y Durango, y tomaría represalias contra los hombres a los que él, Villa, debía su mayor lealtad: los soldados, oficiales y generales de la División del Norte, a quienes había prometido dotar de tierras una vez que terminara la contienda.

Ante la irreconciliable disputa entre villistas y carrancistas, un tercer bando formado por los delegados de la División del Noroeste y grupos independientes asumió el liderazgo. Por iniciativa de Álvaro Obregón, la Convención nombró como presidente interino a Eulalio Gutiérrez, un revolucionario relativamente neutral y de cierto prestigio, pues se había sumado a la Revolución desde sus inicios. Recientemente había sido designado gobernador y comandante militar de San Luis Potosí. Sin embargo, Carranza no tenía ninguna intención de participar en un arreglo que incluyera a Villa como principal fuerza, por lo que mandó una carta, leída por Obregón, en la que marcó la ruptura. En esa carta, Carranza

decía que se opondría a la Convención a menos que Zapata y Villa salieran del país. La Convención lo desconoció como encargado del Poder Ejecutivo y nombró a Villa jefe del ejército convencionista.

Eulalio Gutiérrez representaba a los líderes intermedios que buscaban excluir de la jefatura de la revolución tanto a Villa, al que consideraban demasiado radical, como a Carranza, en quien veían a un conservador. Sin embargo, este grupo, en su mayor parte proveniente de la clase media, era muy débil, heterogéneo y carente de unidad para imponer su proyecto. La Convención no fue capaz de dar dirección viable a una situación política dominada por la fuerza de los caudillos militares.

La inexistencia de instituciones políticas que permitieran dirimir las diferencias y lograr consensos hacía difícil llegar a acuerdos duraderos y alcanzar la necesaria y ansiada paz. Tampoco ayudaban las grandes discrepancias que existían entre los distintos ejércitos revolucionarios, formados en realidades regionales y sociales diversas. Se pasó, por tanto, al enfrentamiento militar, y, como sucedió en otras revoluciones, la lucha entre revolucionarios fue aún más cruenta y destructiva que la etapa previa de aniquilación del antiguo régimen.

La lucha de facciones

Ante la pérdida de apoyos militares, Venustiano Carranza se retiró con sus fuerzas al estado de Veracruz. En esta decisión lo acompañarían Álvaro Obregón y los principales jefes de su ejército, Plutarco Elías Calles, Salvador Alvarado, Benjamín Hill y Manuel Diéguez. Los ejércitos de Villa y

Zapata entraron a la ciudad de México en medio del repique de campanas en noviembre de 1914. Sonriente, Villa posó para la fotografía sentado en la silla presidencial; parecía el nuevo hombre fuerte de México. Todo indicaba que la coalición que él encabezaba dominaría pronto el país, una vez que acabara con las fuerzas constitucionalistas replegadas en la costa del Golfo de México. La coalición de villistas y zapatistas no sólo superaba numéricamente en esas semanas a los carrancistas, sino que dominaba, desde el norte hasta el centro, buena parte del país. Sus líneas de comunicación iban de la frontera con Estados Unidos, indispensable para el suministro de armamento, hasta el sur zapatista. Su fuerza militar traía un impulso que, de no ser interrumpido, podía llegar hasta la ocupación del litoral veracruzano, obligando a Carranza a huir por la vía marítima.

Las huestes carrancistas se ubicaban en la periferia, a lo largo de las costas, y no podían comunicarse entre sí. No obstante, tenían varios elementos a su favor. Disponían de los ingresos del petróleo y de las aduanas de los puertos más importantes, así como de las cuantiosas divisas producidas por la exportación de henequén. Gozaban también del apoyo del gobierno norteamericano, que si bien por un tiempo había estado indeciso entre apoyar a Villa o a Carranza, al final se decidió por este último y limitó el flujo de armas para Villa. Además, la coalición liderada por Carranza tenía un mando unitario, a diferencia de los convencionistas, cuya celebrada unidad pronto reveló ser un espejismo. Venustiano Carranza, el "Primer Jefe", como le llamaban sus seguidores, no poseía ni remotamente la popularidad de sus caudillos rivales; pero, al menos hasta 1919, lograría controlar a sus generales gracias a su don de mando y férrea determinación.

El ex gobernador coahuilense tenía además algo que a sus contrincantes les faltaba: sentido de Estado.

Francisco Villa desaprovechó el impulso obtenido por su ejército victorioso. En vez de seguir a Venustiano Carranza hasta Veracruz, como aconsejaba Felipe Ángeles, su asesor militar más influyente, dejó en paz al núcleo carrancista principal, permitiéndole reorganizarse y preparar la contraofensiva. Villa se retiró al norte y al occidente a combatir contra diferentes fuerzas adheridas al Primer Jefe. Dejó el centro del país en manos de los zapatistas, aún menos interesados en ir a confrontar a los carrancistas en la costa veracruzana. Llegaron hasta Puebla, que al final descuidaron y perdieron. Emiliano Zapata tenía claro que su ejército, una liga armada de municipalidades, no tenía la capacidad para combatir fuera de la zona zapatista y menos todavía si no contaba con los refuerzos de artillería que Villa prometió y nunca llegaron. Era evidente que tanto a Villa como a Zapata les importaban fundamentalmente sus propias regiones. Su provincialismo les impidió formar un gobierno central eficaz y fue desastroso en su estrategia militar durante esta fase de la Revolución, llamada "lucha de facciones".

La guerra civil se desató más sangrienta y destructiva que en todo el periodo anterior. No se trataba solamente de una lucha entre caudillos rivales, aunque por supuesto pesaron también las diferencias personales, las ambiciones de poder y el oportunismo. Tampoco fue únicamente una reedición de las pugnas del siglo XIX entre federalismo y centralismo, si bien las tensiones entre la capital y las regiones permanecían subyacentes. Villa, Zapata y sus partidarios querían mayor autonomía regional para lograr que sus demandas se cumplieran en sus respectivas zonas de influencia, mientras que Carranza

propugnaba por un gobierno nacional fuerte, pues temía la desintegración del país y la pérdida de independencia frente a Estados Unidos. También se distinguían unos de otros por su postura ante la religión: en tanto que los carrancistas quemaban iglesias y fusilaban curas, los zapatistas los protegían y tenían a varios sacerdotes entre sus tropas. Muchos zapatistas llevaban una imagen de la Virgen de Guadalupe en el sombrero. Los villistas, en su mayor parte, tampoco eran anticlericales, por lo que muchos voluntarios católicos provenientes de Jalisco, Colima y Michoacán se adhirieron a ellos. Los revolucionarios se diferenciaban asimismo en la expresión de su nacionalismo, y en particular de su ánimo antiestadounidense, mucho más fuerte entre los carrancistas.

Un ingrediente adicional de confrontación fue la cuestión agraria, que ahondó la pugna entre los zapatistas y Carranza. Para la coalición villista, la exigencia del reparto agrario a escala nacional no era tan importante como para los zapatistas; sin embargo, consideraban que al menos en su ámbito regional —el eje Chihuahua, Durango, La Laguna— las haciendas confiscadas al enemigo no debían ser devueltas, sino fraccionadas y repartidas una vez concluida la lucha. Venustiano Carranza y muchos de sus generales estimaban, en cambio, que el reparto agrario hundiría al país en el atraso. Empero, no todos los carrancistas pensaban así; Luis Cabrera, el principal asesor intelectual de Carranza, al igual que algunos de sus generales, como Lucio Blanco, consideraba necesario realizar algún tipo de reparto. No se puede atribuir a una sola causa la vorágine de violencia que sobrevino entonces, pues fueron múltiples los puntos de desacuerdo y de conflicto entre las coaliciones confrontadas.

El 5 de enero de 1915 Álvaro Obregón, pieza clave del

carrancismo, retomó Puebla e inició ahí su campaña para derrotar a Villa. De los revolucionarios del sur no se ocuparía por el momento. Las batallas decisivas se darían en el Bajío. Simultáneamente a la ofensiva militar, los carrancistas desarrollarían una ofensiva política para justificar su desafío a la Convención de Aguascalientes. En diciembre de 1914 habían hecho adiciones al Plan de Guadalupe, prometiendo dictar leyes a favor del pueblo. Se empezó con la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, redactada por Cabrera, que reconocía a las comunidades campesinas el derecho a la devolución de sus tierras expropiadas. En realidad, fue mínimo lo que se repartió. Sin embargo, esta ley permitió la primera movilización política del campesinado fuera de las regiones dominadas por Villa y Zapata, y le disputó al zapatismo sus banderas agraristas. El 7 de enero el gobierno constitucionalista ordenó a las compañías petroleras suspender las obras relacionadas con la explotación de hidrocarburos hasta que no se revisara la legislación del país. Como consecuencia de la lucha armada, éstas habían dejado de pagar impuestos y en su lugar daban cuotas a cambio de protección al general Manuel Peláez, un revolucionario independiente de la Huasteca que mantenía tropas en la región y combatió a las fuerzas carrancistas.

Por otro lado, impulsados por el ala obregonista, los constitucionalistas tendieron puentes hacia los trabajadores. Un sector importante de la Casa del Obrero Mundial, al que más adelante se sumarían otros contingentes, pactó con Carranza y formó seis "batallones rojos". Sin embargo, el Primer Jefe pronto cuestionó la pertinencia de invitar a los obreros a tomar las armas y les pidió que mejor siguieran trabajando, pues ésa sería su mejor contribución a la lucha. A cambio, y a través del Departamento del Trabajo, pro-

movió su organización en sindicatos; varios gobernadores constitucionalistas, como Salvador Alvarado en Yucatán y Cándido Aguilar en Veracruz, apoyaron sus demandas frente a los patrones y promulgaron leyes en su beneficio.

Ya encaminada la ofensiva política, se puso en práctica la estrategia militar. Al frente de su ejército, Álvaro Obregón se parapetó en el Bajío en abril de 1915, dispuesto a su primer choque bélico con Villa. Allí Obregón perdió un brazo, pero demostró que se había convertido en un maestro de la guerra y en el mejor general de la Revolución. Para derrotar a Villa, Obregón aplicó las mismas tácticas que estaban utilizando con éxito los ejércitos de las grandes potencias en la primera Guerra Mundial: tropas de infantería bien atrincheradas, protegidas con alambradas y nidos de ametralladoras que diezmaban a la caballería. Tres derrotas sucesivas y de gran envergadura le infligió Obregón a Villa: dos a principios de abril, en Celaya, y una tercera, a comienzos de junio, en León.

Estas batallas hicieron que el equilibrio militar se inclinara a favor de los carrancistas. El gobierno de Estados Unidos así lo consideró. El 19 de octubre de 1915, el presidente Wilson reconoció *de facto* al gobierno de Carranza. Ciertamente, los constitucionalistas no dominaban aún todo el país —la revolución zapatista estaba más viva que nunca en Morelos y toda una constelación de grupos rebeldes y desafectos seguía en pie de guerra—, pero su más poderoso enemigo había sido liquidado como fuerza militar de amplitud nacional. En efecto, el maltrecho ejército villista se fue al norte para refugiarse en su dimensión regional. De ahí en adelante, los constitucionalistas impondrían su dirección política a la nación.

En su hora de triunfo, Venustiano Carranza declaró que empezaba la etapa de reconstrucción nacional. No mencionó

lo mucho que ésta tendría de restauración. Se rodeó de un grupo de consejeros y de una burocracia proveniente, en un número significativo, del antiguo régimen. Además, sin dejar de reconocer la importancia de la cuestión agraria, no aplicaría sino muy limitadamente su propia ley de enero de 1915. Antes bien, devolvió las haciendas previamente confiscadas a sus propietarios. Su indisposición al reparto agrario lo conduciría a la guerra abierta con los zapatistas. El general Pablo González aplicó en Morelos una táctica de tierra arrasada, quemando pueblos y cosechas, por la que el ejército carrancista fue visto como una réplica del antiguo ejército porfirista. Esta política tendría su corolario en el asesinato de Emiliano Zapata el 10 de abril de 1919.

Los años de 1915 y 1916 fueron muy duros para la población en general. Se vivieron hambrunas debido a la escasez de alimentos, provocada por la gran devastación en el campo. Otra causa del hambre fue la enorme inflación desatada por la creciente impresión de billetes llevada a cabo por las facciones revolucionarias. El proceso inflacionario aumentó cuando Carranza, ya en el poder, emitió grandes cantidades de sus famosos billetes "infalsificables". El peso, que valía 3.80 por dólar en agosto de 1914 —cuando Obregón entró por primera vez en la capital—, llegó a 217.40 pesos por dólar en diciembre de 1916. Ante esta situación, los comerciantes se negaban a vender sus productos a cambio de papel moneda, lo cual agravó la escasez de alimentos.

Los trabajadores emprendieron numerosas huelgas para recuperar el poder adquisitivo que su salario, pagado en papel moneda, perdía aceleradamente. Más tardaban en conseguir un aumento, que lo que éste tardaba en rezagarse en términos de su poder de compra. Hacia mediados de 1916, los

salarios reales en las fábricas textiles de Orizaba eran tan sólo una séptima parte de lo que habían sido en 1912. Si algunos mexicanos, como los de San José de Gracia en Michoacán, quedaron al margen del sufrimiento que produjo la guerra revolucionaria porque sus pueblos estaban lejos de los campos de batalla, la mayoría padeció el hambre, las epidemias y la inflación.

A lo largo del segundo semestre de 1916, los trabajadores organizados entablaron una dura batalla para obligar a sus patrones a pagarles en monedas de oro. Incluso tuvieron que enfrentar la represión del gobierno de Carranza, hasta que en noviembre de ese mismo año triunfaron en su lucha y fue así como dejaron de circular billetes en el país hasta 1931. Si bien la inflación se frenó, 1917 fue un año difícil para la población. Al entrar en la primera Guerra Mundial, Estados Unidos prohibió la exportación de cereales y alimentos a México, cuando la producción nacional —que además se vio afectada por la sequía— aún no se recuperaba. Finalmente, la epidemia de gripe española (influenza) durante 1918 y 1919 golpeó a una población debilitada causando gran mortandad.

Si Carranza fue coherente en su conservadurismo social frente a los campesinos revolucionarios y los trabajadores organizados, también lo fue en su actitud nacionalista. Frente al agresivo intervencionismo de las grandes potencias europeas y de Estados Unidos, instrumentó una diplomacia magistral que mantuvo la independencia de México. No fue una tarea fácil, dada la debilidad política y las dificultades económicas de su gobierno, que actuaba en un entorno internacional particularmente complejo e inestable. Pero la obstinación de Venustiano Carranza logró afirmar el nacionalismo como valor fundamental de la Revolución.

Un nuevo pacto político: la Constitución de 1917

El constitucionalismo triunfante no conformaba un bloque monolítico, como se pudo apreciar en la asamblea constituyente que se reunió en Querétaro entre diciembre de 1916 y febrero de 1917. Venustiano Carranza presentó un proyecto que retomaba casi en su totalidad la Constitución de 1857, con la novedad importantísima de proponer un Poder Ejecutivo con mayor fuerza e independencia, que fue incorporada. Pero el documento final de la nueva Constitución terminó diferenciándose profundamente de su antecesora, pues el Constituyente de 1916-1917 era mucho menos conservador que Carranza. En 1857 habían fracasado los intentos de algunos ciudadanos y legisladores que, como Ponciano Arriaga, trataron de acotar el liberalismo para promover una mayor justicia social. En contraste, el Constituyente de 1916-1917 votó en su mayoría por preceptos notablemente más radicales.

El artículo 27 otorgaba a la nación la propiedad de los recursos naturales, incluidos los del subsuelo, y limitaba el derecho de los extranjeros y de las asociaciones religiosas para adquirir tierras. Además, incorporaba algunas importantes demandas zapatistas al ordenar la restitución de todas las tierras que se hubieran enajenado a los pueblos con base en las Leyes de Reforma, y la dotación de tierras a los pueblos desprovistos de parcelas. Este artículo constitucional, que sería considerado confiscatorio por las compañías petroleras y los gobiernos extranjeros, fue la base para la reforma agraria y la nacionalización del petróleo emprendidas más tarde.

El artículo 123 otorgaba derechos fundamentales a los trabajadores, como la jornada máxima de ocho horas, el descanso semanal y el salario mínimo. También definía normas

generales sobre bienestar social, entre las que figuraban: prohibir el trabajo de los niños menores de doce años, reconocer el derecho de las mujeres al descanso posnatal y responsabilizar a los empresarios de los accidentes y las enfermedades sufridos en el ámbito laboral. Finalmente, reconocía también derechos colectivos, como la formación de sindicatos y la huelga, y establecía las Juntas de Conciliación y Arbitraje para la resolución de los conflictos. Su inclusión en la Constitución reflejaba el importante avance del movimiento obrero a partir de 1910. Muchos de los derechos consignados en este artículo habían sido ya ganados, paulatinamente, por distintas organizaciones, como era el caso de los obreros del valle de Orizaba.

El artículo 3° fijaba el carácter laico de la enseñanza tanto en los establecimientos públicos como en los particulares; estos últimos debían sujetarse a la vigilancia oficial. La enseñanza de nivel básico impartida por el Estado sería gratuita, y se prohibía a las iglesias fundar o dirigir escuelas primarias. Por su parte, el artículo 130 prohibía a los sacerdotes criticar a la Constitución y al gobierno, así como votar y participar en asociaciones políticas. Ambos artículos llevaron la secularización más lejos que las Leyes de Reforma, lo que reflejaba la voluntad de los constituyentes de disminuir la influencia del clero católico entre la población. Con estos artículos, los constituyentes sentaron las bases para el enorme avance educativo que se daría en la década siguiente, pero también contribuirían a avivar el conflicto entre la Iglesia y el Estado que se expresaría de forma violenta a partir de 1925.

La Constitución de 1917 es la mejor prueba de que los revolucionarios, al final de cuentas, pudieron ir más allá de las fuertes disputas que los dividían y construir un pacto que

permitiera restablecer la paz. En la Carta Magna se plasmaron muchas de las demandas de las facciones revolucionarias, incluidas las de los villistas y los zapatistas, cuyos ejércitos habían sido ya derrotados. La Constitución también reflejaba que la Revolución había dejado claros perdedores: los grupos católicos, los terratenientes y los grandes empresarios, en particular los extranjeros.

Como los de 1857, los constituyentes de 1917 deseaban convertir a México en un país moderno. A diferencia de sus antecesores, la mayoría tenía ahora clara conciencia de que la justicia social era una condición de la modernidad y que sin reformas sociales no se alcanzaría una paz duradera. Y si bien muchos de los nuevos artículos constitucionales nunca se cumplirían cabalmente, los ideales revolucionarios de democracia política, justicia social y soberanía nacional quedaron plasmados como una guía del camino por donde debía transitar la nación. Lamentablemente, al tiempo que la Constitución de 1917 daba cabida a las demandas de distintas fuerzas, sus preceptos se volvían poco realizables. Esto abrió un abismo entre la ley y la realidad cotidiana, que entorpecería el establecimiento de un verdadero Estado de derecho.

De Venustiano Carranza a Álvaro Obregón

No fue un mérito menor de Venustiano Carranza el hecho de aceptar que bajo su mandato se redactara una Constitución que, en muchos de sus artículos, iba en contra de su forma de pensar. Carranza mostró una gran sabiduría y habilidad política al promulgarla, lo que tuvo lugar el 5 de febrero de 1917. Sin embargo, no lograría establecer la paz,

pues no tomó en cuenta las nuevas condiciones creadas por la guerra civil. Tampoco forjó una base social amplia de apoyo a su gobierno, pues su política conservadora lo confrontaba cada vez más con los campesinos y los obreros. Sobreestimó sus propias fuerzas al tratar de imponer como candidato presidencial en 1920 a Ignacio Bonillas, quien había sido su embajador en Washington y que, para colmo, en tanto civil, gozaba de un escaso respeto entre los militares.

En abril de 1920, Carranza intentó eliminar a Álvaro Obregón de la contienda electoral. Al comparecer ante el tribunal militar de la ciudad de México, siguiendo una orden de Carranza, Obregón se enteró de que su cercano partidario Adolfo de la Huerta había sido destituido como gobernador de Sonora y de que él mismo sería detenido al día siguiente. Haciendo gala de su reconocida astucia, Obregón logró escapar de la capital disfrazado de ferrocarrilero para refugiarse en Guerrero. De inmediato Adolfo de la Huerta y los jefes militares bajo el mando de Obregón, agrupados en torno a Plutarco Elías Calles y Salvador Alvarado, comenzaron a organizar la resistencia. El 23 de abril de 1920 los rebeldes proclamaron el Plan de Agua Prieta, que desconocía a Carranza, y al que pronto se adhirió la mayor parte de los generales, así como el ejército zapatista, bajo el mando de Gildardo Magaña. Viéndose solo, Venustiano Carranza decidió el 7 de mayo tomar el tren hacia Veracruz para, desde allí, salir del país. Sin embargo, el tren fue interceptado en Puebla. Carranza trató de huir a caballo junto con algunos allegados y finalmente fue asesinado por sus perseguidores.

Álvaro Obregón triunfó sin mayores problemas en las elecciones de octubre de 1920. Otra vez, como a fines del siglo XIX, se imponía como tarea primordial de la agen-

da política la restauración del Estado; había que limitar el poder regional, controlar a las facciones surgidas de la lucha armada y crear un ejército profesional. Si bien Obregón compartía con Carranza muchas de sus ideas conservadoras, desde su experiencia en la Convención de Aguascalientes tenía claro que, sin reformas sociales y sin la construcción de una base de apoyo popular, la paz sería inalcanzable. Muy pronto llegó a acuerdos con casi todos los grupos rebeldes opuestos a Carranza, como los zapatistas, los villistas y las tropas de Manuel Peláez, dándoles reconocimiento a cambio de su lealtad. Además, para restablecer la paz debía eliminar el poder de los caudillos militares y la legitimidad de sus insurrecciones. Aunque no faltaron rebeliones del ejército en los años veinte, es significativo que el levantamiento de Agua Prieta resultara la última sublevación victoriosa de la Revolución. Así comenzó una nueva fase de la historia de México, en la que los sonorenses dominaron durante quince años la política nacional.

El saldo de la Revolución

La Revolución mexicana tuvo enormes costos. Recientes estudios la han colocado, junto con la Guerra Civil española, como la novena guerra con mayor mortandad de los últimos dos siglos. Se calcula que el costo demográfico de la Revolución fue de 2.1 millones de personas, del que 1.4 millones fueron muertes en batallas o debidas a la falta de alimentos y a enfermedades letales. La disminución en el número de nacimientos provocada por la Revolución le costó al país unos quinientos veinticinco mil habitantes, y la emigración hacia

Estados Unidos, otros ciento setenta y cinco mil por causas atribuibles a la lucha armada. Para una población que en 1910 sumaba apenas 15.2 millones de habitantes, estos números significaron una sangría enorme.

Sin embargo, la Revolución provocó cambios decisivos en el país. La voz de muchos mexicanos que antes eran ignorados y despreciados encontró cauces para ser escuchada. Los gobiernos tuvieron que tomar en cuenta, como una fuerza real de poder, a las organizaciones populares surgidas de la lucha armada. Ya no se podía pensar que los únicos ciudadanos que contaban y tenían derechos eran los adinerados. No fue menor la transformación cultural que significaron la pérdida del "respeto ancestral" de las clases populares a sus antiguos amos y el resquebrajamiento de las ideas racistas que permeaban a la sociedad porfirista y que, de forma abierta y socialmente aceptada, consideraban a la población de tez blanca superior a la mestiza, y a ésta por encima de la indígena.

Adicionalmente, la Revolución abrió el camino a las reformas cardenistas de la década de 1930: una amplia reforma agraria y la nacionalización de la industria petrolera. Considerada como un proceso que llega hasta 1940, la Revolución mexicana adquiere una dimensión comparable a la de las otras grandes revoluciones sociales del siglo XX.

La Revolución abrió el camino a la modernidad al sacar adelante muchas de las tareas que los liberales del siglo XIX habían dejado pendientes: la construcción de un Estado capaz de gobernar efectivamente todo el territorio, la creación de un imaginario colectivo nacional que integrara la herencia indígena, y la incorporación a la política moderna de muchos sectores de la población todavía inmersos en las tradicionales esferas corporativas heredadas de la Colonia. Sin

embargo, la Revolución también provocó retrocesos, pues durante los años de lucha armada resurgieron muchos de los problemas del siglo anterior: el caudillismo, el corporativismo y la legitimidad política basada en el poder militar. Todo esto postergó la posibilidad de construir el Estado democrático que soñaba Madero. El Estado posrevolucionario basó su legitimidad en el pueblo, otorgándole prioridad a la representación social sobre la representación política. Permitía a la población participar políticamente a través, por ejemplo, de organizaciones sindicales y campesinas, pero no creó un ámbito de competencia electoral real entre los partidos.

Quizá el mayor legado de la Revolución fue la consolidación de sus ideales en la Constitución de 1917. Después de luchas fratricidas, los distintos grupos revolucionarios fueron capaces de llegar a acuerdos y a definir un proyecto de Estado nacional, cuando la nación misma parecía resquebrajarse. Si bien hubo perdedores, la nueva realidad política, económica y social era más incluyente que la que había prevalecido durante el porfiriato. A pesar de no haberse logrado todo lo que se deseaba, del nuevo acuerdo alcanzado surgió un México más grande, impulsado por un proyecto colectivo.

LOS GOBIERNOS POSREVOLUCIONARIOS, 1921-1945

José Antonio Aguilar Rivera

Cuando Álvaro Obregón llegó a la presidencia de la República el 1° de diciembre de 1920, México era un país muy diferente al de hoy y al que había sido apenas diez años antes. En 1920 el país tenía catorce millones de habitantes; en 2005 la población de la zona metropolitana del valle de México era de poco más de diecinueve millones de personas. Hubo que esperar hasta 1940 para que la población de todo el país igualara a la de la zona metropolitana de 2005. En 1920, la población sumada de Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas era de 1 808 707; en 2005 la población de la delegación Iztapalapa, en la ciudad de México, era de 1 820 888. Entre 1910 y 1920 los mexicanos dedicaron todas sus energías a la guerra civil. El resultado fue impresionante: el censo de población de 1921 registró muchas personas menos que en 1910. En consecuencia, la producción agrícola y minera cayó a la mitad. La deuda externa era enorme y no se habían pagado los intereses. El sistema ferroviario nacional, orgullo del gobierno de Porfirio Díaz, se encontraba quebrado y en ruinas. Los bancos y el crédito casi desaparecieron. Además, algunos gobiernos extranjeros exigían al de México compensaciones por los daños y pérdidas sufridos por sus ciudadanos durante el conflicto. El ejército revolucionario devoraba más de la mitad del presupuesto federal. El único

sector de la economía que marchaba bien era el del petróleo, pues México se había convertido en uno de los principales productores en el mundo. Las mayores beneficiarias de este auge eran las compañías petroleras extranjeras.

En 1921, México seguía siendo un país predominantemente rural. Siete de cada diez mexicanos se dedicaban a las labores del campo y vivían en pueblos de menos de dos mil quinientos habitantes. A la mayoría de estos pequeños poblados no llegaban ni el telégrafo ni el ferrocarril. Carecían de teléfono, correo, servicios médicos, mercados, farmacias. Pasarían más de veinte años antes de que el país lograra recuperar el camino del crecimiento. Sin embargo, para el fin de la segunda Guerra Mundial, México no sólo había logrado reconstruirse; también había puesto los cimientos del que sería uno de los regímenes políticos más longevos del siglo XX. Entre 1921 y 1945 se sentaron las bases políticas, económicas y sociales del país que conocemos hoy. Y muchos de los retos que todavía enfrentamos pueden ser rastreados hasta esos años decisivos en la conformación del México moderno.

Las tareas de la Revolución

El gobierno de Álvaro Obregón (1920-1924) marcó el inicio de una etapa de reconstrucción nacional. Si bien aún habría rebeliones por muchos años (la última, encabezada por Saturnino Cedillo, ocurrió en mayo de 1938 contra Lázaro Cárdenas), después del derrocamiento y asesinato de Venustiano Carranza en 1920, ningún otro gobierno sería ya depuesto por las armas.

Durante su primer año en el poder, el flamante presidente

de la República, Obregón, se propuso conmemorar el centenario de la consumación de la independencia. Con motivo de las fiestas, el hipódromo de la Condesa, que se encontraba donde hoy se levanta la colonia del mismo nombre en la ciudad de México, reabrió sus puertas (había sido inaugurado en 1910). En las primeras décadas del siglo XX, la gente gustaba de "ir a pasear en coche" por las nuevas colonias que se multiplicaban debido al crecimiento de la ciudad. Sin embargo, pocas personas tenían coche. En esa época, las corridas de toros, las carreras de caballos y las charreadas eran espectáculos muy populares. A ellos asistían personas de todas las clases sociales. Los capitalinos también realizaban excursiones de fin de semana a los merenderos de Santa Anita, a las trajineras de Xochimilco o a las floridas plazas de Tlalpan, que en ese entonces no formaban parte aún de la ciudad de México.

La vida de los mexicanos retornaba a la normalidad. El 27 de septiembre de 1921 se llevó a cabo la primera transmisión de radio con canciones, música y versos. Los programas se asemejaban a las funciones de teatro. Por eso, los organizadores llamaban a los programas de radio "funciones" o "conciertos". Aunque en sus inicios la radiodifusión no era un medio masivo, para 1923 se había popularizado de manera importante. Sin embargo, los aparatos receptores todavía eran muy caros para la gran mayoría de los mexicanos. El precio de un radio iba de trece a ochocientos pesos, cuando en 1923 el salario mínimo diario de un albañil era de menos de un peso. En 1924 las transmisiones radiofónicas se escuchaban con un auricular "ligero y cómodo". El teléfono operaba en la ciudad de México desde finales del siglo XIX.

Los revolucionarios sonorenses que llegaron al poder querían hacer, en sus palabras, a la "Revolución gobierno".

Obregón creía que la clave para la reconstrucción y el progreso económico era una agricultura comercial exitosa y un pequeño sector industrial. También pensaba que la conciliación de las clases sociales era indispensable para la marcha ordenada y pacífica del país. Se reconocía el papel central que tendría Estados Unidos en el futuro de México.

Los desafíos del nuevo gobierno eran enormes. El ejército consumía recursos que la reconstrucción del país exigía desesperadamente. Estados Unidos no había reconocido de manera formal al gobierno de Obregón y tenía muchas reclamaciones pendientes. La Constitución de 1917 afectaba sus intereses económicos, pues establecía en su artículo 27 que el subsuelo era propiedad de la nación. De acuerdo con la Constitución de 1857, las compañías petroleras tenían derechos adquiridos sobre el subsuelo de sus propiedades, donde se encontraban los yacimientos petroleros. Además, la proliferación de innumerables líderes revolucionarios, que obedecían al gobierno central sólo en apariencia, hacía que la paz fuera precaria.

Para sostenerse en el poder, Obregón formó alianzas con diferentes grupos, como campesinos y obreros; estos últimos organizados en la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM). Los sindicatos desempeñarían a partir de entonces un papel nuevo y central en la política y la sociedad. El gobierno también se propuso repartir tierras en aquellas regiones donde los campesinos participaron activamente en la lucha armada. En algunos estados, gobernadores radicales alentaron la formación de ligas agrarias, que a su vez apoyaban al gobierno. En Yucatán, el gobernador Felipe Carrillo Puerto organizó "Ligas de Resistencia" que reclutaron y organizaron a campesinos mayas para demandar una reforma

agraria. El gobernador también legalizó el divorcio, concedió el voto a las mujeres y las alentó a que ocuparan puestos públicos. Estas reformas eran radicales para la época y no se adoptaron en todo el país sino décadas después. Obregón, de la misma manera, procedió a reducir drásticamente el ejército y logró una concentración temporal con los norteamericanos en los Acuerdos de Bucareli, lo que abrió la puerta al reconocimiento de Washington.

Durante este periodo la educación pública recibió un importante impulso. Con el triunfo de los sonorenses, José Vasconcelos, un antiguo maderista, regresó del exilio y fue nombrado por Obregón rector de la Universidad Nacional. Tiempo después se puso al frente de la recién creada Secretaría de Educación Pública (SEP). Su labor por la educación y la cultura de los mexicanos fue impresionante. Lanzó una campaña nacional de alfabetización. En 1895, ocho de cada diez mexicanos eran analfabetos; en 1930, seis de cada diez lo eran; en 1950, la proporción era de cuatro por cada diez, y para el año 2000 el porcentaje había bajado a poco menos de uno de cada diez. La SEP editó libros clásicos de la civilización occidental (como la *Iliada* y la *Odisea*), y se preocupó por distribuirlos en cada rincón del país. Sobre esta labor, Vasconcelos escribió: "deseo hacer llegar el libro excelso a las manos más humildes y lograr de esta manera la regeneración espiritual que debe preceder a toda regeneración". De la *Iliada* de Homero, por ejemplo, se imprimieron veinte mil ejemplares (un tiraje grande, incluso para los estándares actuales). Se construyeron muchas escuelas a lo largo del país, no sólo en las ciudades sino en las regiones más apartadas. Para 1925 había ya un sistema de educación secundaria. Durante tres años, el Estado mexicano invirtió como nunca antes en la

educación pública. En 1923 dedicó a este rubro diecisiete por ciento del presupuesto total, lo que representaba casi la mitad del de Guerra, el más grande. Nunca se ha vuelto a gastar, proporcionalmente, tanto en educación como en esos años.

Con todo, la paz no duró mucho tiempo. En 1923 Francisco Villa fue asesinado en Parral, cerca de la hacienda donde se había retirado. Ese mismo año, Plutarco Elías Calles, otro sonorense y secretario de Gobernación de Obregón, lanzó su candidatura a la presidencia de la República. Era el elegido por el presidente para sucederlo. Sin embargo, estaba por verse si podría conseguir su propósito. Entre los revolucionarios había muchos aspirantes al cargo, como Adolfo de la Huerta, sonorense también (y quien había sido presidente interino a la muerte de Carranza). De la Huerta, decepcionado por no haber sido el candidato, unió a quienes se oponían a Calles y encabezó, a finales de 1923, una gran revuelta en la que participó más de la mitad del ejército, docenas de generales, varios gobernadores y caudillos regionales. Para enfrentar la insurrección, el gobierno de Obregón echó mano de los gobernadores aliados, el contingente leal del ejército, así como de las organizaciones obreras y campesinas que había cultivado. Esta coalición logró derrotar a los rebeldes en tan sólo tres meses.

En julio de 1924, Calles ganó las elecciones presidenciales para el periodo 1924-1928. Obregón, por su parte, regresó a su rancho en Sonora, para desde ahí planear su regreso a la silla presidencial. Calles prosiguió con la reconstrucción del país. Su alianza con los obreros se fortaleció y nombró al líder de la CROM, Luis N. Morones, secretario del Trabajo. La repartición de tierras continuó, se siguieron construyendo escuelas rurales y se expandió el sistema ferroviario. El

gobierno realizó proyectos de riego en varias regiones y se construyeron carreteras. En 1925 se creó el Banco de México. El ejército se redujo en más de la mitad y veinticinco gobernadores desafectos al nuevo presidente fueron depuestos en quince estados.

La relación con Estados Unidos seguía siendo difícil. El motivo de la nueva tensión era la ley petrolera que se discutía en el Senado y que afectaba a compañías de ese país. Después de un intenso estira y afloja entre ambos gobiernos, Calles encontró una salida legal satisfactoria y así llegó a un acuerdo con el nuevo embajador norteamericano, Dwight Morrow, con quien mantendría excelentes relaciones.

En 1926 la marcha del país enfrentó un obstáculo significativo: el conflicto religioso. La Constitución de 1917 era abiertamente anticlerical y la Iglesia católica la rechazaba. Los gobiernos revolucionarios consideraban a la religión un signo de atraso y deseaban "liberar" las mentes de los mexicanos. Calles incluso estableció una Iglesia para competir con la católica y debilitar a los sindicatos afines a ella: la Iglesia Católica Apostólica Mexicana. El arzobispo de México condenó públicamente varios artículos de la Carta Magna y el gobierno respondió expulsando a doscientos sacerdotes extranjeros, así como al enviado papal. Después, el presidente decretó la llamada Ley Calles, que reglamentó el artículo 130 constitucional. Esa ley, entre otras cosas, ordenaba el cierre de las escuelas religiosas y expulsaba a los sacerdotes extranjeros. El artículo más temible para la Iglesia era la obligación para los sacerdotes de conseguir su registro en Gobernación. En respuesta, la Iglesia católica suspendió el culto en las iglesias, ante lo cual el gobierno prohibió el culto en las casas particulares. A falta de templos, los matrimonios

religiosos se celebraron en las casas, que eran decoradas con flores, alfombras y cortinajes. Los habitantes de las ciudades temían ser descubiertos al celebrar estos actos clandestinos.

Los católicos reaccionaron. Algunas protestas fueron pacíficas y otras violentas. Incluso antes de esta crisis, en el occidente del país ya tenían lugar levantamientos de campesinos que se oponían a la política anticlerical del gobierno. En 1927 estalló una insurrección campesina en Guanajuato y luego se propagó a otros diez estados. Los rebeldes empuñaron las armas al grito de "¡Viva Cristo Rey!": había comenzado la Cristiada, una guerra desigual y sin futuro. Incapaces de batir a las muy superiores tropas federales en una batalla decisiva, los cristeros dominaban el campo, mientras que el gobierno controlaba las ciudades y las vías férreas. La rebelión cristera duró tres años, consumió casi la mitad del presupuesto federal y costó decenas de miles de vidas. Finalmente, el gobierno aceptó no hacer efectivas las leyes que había promulgado en contra de la Iglesia católica. Cuando el gobierno y la Iglesia hicieron las paces, en junio de 1929, todavía había cincuenta mil cristeros en armas. Las campanas de todas las iglesias de la capital, que no habían sonado por tres años, tañeron de nuevo.

La Revolución hecha gobierno

No todo era guerra. En 1923 se inauguró el cabaret del hotel Regis en la ciudad de México, uno de los hoteles más lujosos de la época. A sus baños de vapor acudían importantes políticos y hombres de negocios. Hasta tenía un camioncito que transportaba de manera gratuita a sus clientes. El Regis se

derrumbó en los sismos de 1985. En la década de los veinte se bailaban diversos ritmos de moda: foxtrot, *two step,* danzón, tango y valses. En 1927 se puso de moda el charlestón. Sin embargo, la vida era dura para la mayoría de la población, que no pasaba el tiempo en bailes. Por ejemplo, hacia 1920 el jornal de un trabajador de la ciudad de Chihuahua era de entre un peso y un peso con cincuenta centavos. Sus gastos consistían en alimentación (maíz, harina de trigo, pan blanco, frijol, arroz, carne de res, manteca, leche, café, chile y azúcar), combustible (carbón, leña), vestido y alojamiento, cuya renta no podía ser superior a cinco pesos mensuales. Aunque se tenía la idea de que las mujeres no debían trabajar sino quedarse en casa cuidando a los hijos y haciendo labores domésticas, había muchas mujeres empleadas en la industria, en particular en el sector textil. No obstante, desde entonces las mujeres ganaban en promedio veinticinco por ciento menos que los varones, incluso en la industria del vestido, que las empleaba mayoritariamente. La vida era dura y corta: en 1930, la esperanza promedio de vida al nacer era de treinta y siete años para las mujeres, y de treinta y seis años para los hombres; en 1940, de cuarenta dos y cuarenta años, respectivamente; en 1950, de cincuenta y uno y cuarenta y ocho años, respectivamente; en 2005, de setenta y ocho y setenta y tres años. Es decir, los años que vivía una persona en la década de 1930 hoy representan la mitad de los que, en promedio, vive un mexicano. Por otra parte, también era cierto que a partir de 1930 cada vez morían menos niños.

A pesar de que una de las banderas principales del movimiento revolucionario había sido la "no reelección", en 1927 el Congreso reformó la Constitución para permitir una sola reelección no consecutiva. Este cambio le abrió a Obregón

las puertas para regresar a la presidencia, una vez concluido el gobierno de Calles. De la misma forma, en 1928 el periodo presidencial se extendió de cuatro a seis años, como sigue hasta el día de hoy. Sin embargo, la pretensión de Obregón no fue bien recibida por todos los revolucionarios. No fue apoyado inicialmente por la CROM ni por algunos generales. En 1927 compitieron con él dos ex aliados: los generales Francisco Serrano y Arnulfo Gómez. Su bandera principal fue el antirreeleccionismo. Sin embargo, ninguno creía que la designación del nuevo presidente podría hacerse de manera pacífica. Así que no esperaron a las elecciones del siguiente año. Gómez y Serrano pensaban encabezar un levantamiento militar, así como tenderles una trampa a Calles y Obregón para fusilarlos. Pero su plan fue descubierto y ambos personajes acabaron asesinados. Se persiguió a sus partidarios y se purgó el ejército: cuarenta generales fueron fusilados (veinticinco en tan sólo tres días) sin mayor trámite. Los hechos que terminaron con la muerte del general Serrano en el paraje de Huitzilac fueron magistralmente capturados por el revolucionario y escritor Martín Luis Guzmán en una novela fascinante: *La sombra del caudillo* (1929). Aunque había elecciones, México no era una verdadera democracia. Habría que esperar más de setenta años para que el sufragio fuera realmente efectivo y los electores designaran con su voto a los gobernantes.

Ya sin adversarios declarados, con la excepción de Morones, Obregón prosiguió su campaña electoral. La guerra cristera continuaba y el candidato sufrió un atentado fallido por parte de algunos simpatizantes de la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa. En respuesta, Calles ordenó fusilar sin previo juicio a cuatro sospechosos, entre los que había dos inocentes: el sacerdote Miguel Pro y su her-

mano. La sangre había corrido en abundancia aun antes de las elecciones: "quien mata más es quien gobierna", afirmó Obregón entonces. En las elecciones del 1° de julio de 1928 Obregón arrasó. Ese día el candidato estaba en Sonora y dos semanas después llegó a la capital del país. Ahí, el 17 de julio, mientras comía en el restaurante La Bombilla, en San Ángel, fue asesinado por el católico José de León Toral, quien creía, equivocadamente, que el principal artífice de la guerra cristera era Obregón. León Toral sufrió la misma suerte que el padre Pro. El asesinato suscita hasta el día de hoy numerosas interrogantes, y la sospecha cubrió tanto al presidente Calles como a Morones.

El magnicidio de Obregón tuvo consecuencias notorias. El intento reeleccionista, la ambición de numerosos jefes y la incapacidad para conducir la lucha por el poder de manera pacífica, hicieron evidente la necesidad de nuevas formas de competencia política. Los revolucionarios no habían encontrado la manera de transmitir el poder sin matarse los unos a los otros. La desaparición de Obregón provocó que se llevaran a cabo importantes reformas que buscaron institucionalizar la Revolución. El mismo mes de la muerte de Obregón, Calles inició una ronda de reuniones con los jefes militares para comprometerlos a no dividirse y a que ninguno de ellos buscara la presidencia.

Lo más apremiante era elegir a un presidente interino. Los partidarios de Obregón miraban con gran desconfianza a Calles. Había que seleccionar a alguien que fuera aceptable tanto para aquéllos como para éste. La persona que cumplía el requisito era secretario de Gobernación: el ex gobernador de Tamaulipas, Emilio Portes Gil, quien tenía fama de agrarista y controlaba el Partido Socialista Fronterizo. Así pues,

en septiembre de 1928 fue elegido por la Cámara de Diputados presidente interino para el periodo del 1° de diciembre de 1928 al 5 de febrero de 1930.

La presidencia interina sólo proporcionó un breve reposo a la lucha por el poder, pues de nuevo comenzó la pugna por la candidatura a la presidencia. Calles ideó una solución al problema: un nuevo partido político nacional que agrupara a los revolucionarios. Se trataría de una federación de jefes militares y caciques, diversas organizaciones políticas de los estados y las asociaciones obreras y campesinas que aquéllas controlaban. Así, Calles convocó a una convención para formar el Partido Nacional Revolucionario (PNR) que se celebró en marzo de 1929. En su informe de 1928, Calles afirmó que el país debía pasar, de una vez por todas, de la condición histórica del "país de un hombre" a la de "nación de instituciones y leyes". La aspiración de todos los mexicanos era "vivir en México, bajo gobiernos netamente institucionales". La idea era que el PNR formara una alianza de partidos locales que conservarían su autonomía. Calles advertía que "si hoy logramos organizar partidos estables, y que representen las distintas tendencias de opinión del país, salvaremos a la República de la anarquía a que pueden llevarla las ambiciones puramente personalistas y habremos establecido las bases de una verdadera democracia". El recién creado partido sería el responsable de designar al candidato a la presidencia; de esta forma, la candidatura estaría apoyada por la mayoría de los revolucionarios. Calles sería la cabeza de la nueva organización.

El PNR se constituyó en marzo de 1929. Incorporó a los personajes y organizaciones revolucionarios más importantes de México. Al mismo tiempo, en el norte del país estalló un

nuevo levantamiento contra Calles y el gobierno, acaudillado por el general José Gonzalo Escobar, jefe de operaciones militares de Coahuila. Como la rebelión delahuertista, la escobarista fue breve y poco afortunada; duró apenas tres meses. El propio Calles, quien ahora fungía como secretario de Guerra y Marina del presidente Portes Gil, se encargó de aplastar la insurrección. El PNR (luego PRM y finalmente PRI), que nacía entonces, sería una de las organizaciones políticas más notables del siglo XX. A pesar de que en cada una de sus tres etapas tuvo características propias, el partido de los revolucionarios compartía el mismo objetivo: organizar la contienda por el poder desde el gobierno. No era un partido en el sentido democrático moderno. El PNR incluyó no sólo individuos sino también organizaciones. Desde un inicio se concibió no como un partido político más, en pugna electoral con otros, sino como una organización capaz de contener en su seno a todas las fuerzas importantes del país, para dirimir ahí —y no en las elecciones abiertas— los conflictos y decidir quiénes gobernarían el país. La contienda por el poder era un asunto exclusivo de los miembros de la familia revolucionaria. La idea del pluralismo político no era parte del legado de la Revolución.

Sin embargo, la creación del PNR no significó la despersonalización de la política revolucionaria. En realidad, la nueva institución no estaba peleada con el personalismo, al menos no en sentido estricto. La coalición de fuerzas que representaba el PNR necesitaba un líder y una atención personal. La Revolución requería de un Jefe Máximo. Aunque ya había dejado la presidencia, Calles se convirtió en ese árbitro y juez de los revolucionarios. De la experiencia de Obregón había aprendido que la familia revolucionaria no toleraba la

reelección, pero ello no significaba que un liderazgo político de largo aliento no fuera posible o incluso deseable. Los efectos de la nueva organización pronto se hicieron sentir. Calles utilizó el naciente partido para impedir que el aspirante de los obregonistas, Aarón Sáenz, obtuviera la candidatura a la presidencia. En su lugar, el PNR nominó a Pascual Ortiz Rubio, un oscuro general revolucionario, a la sazón embajador en Brasil y que fue llamado por Portes Gil para ocupar la Secretaría de Gobernación.

A finales de 1929 era claro que el PNR se había consolidado y que Calles era el "Jefe Máximo" de la Revolución, aunque no se sentara en la silla presidencial. El periodo del "maximato" había comenzado. Lo que Obregón quiso hacer al reelegirse, Calles lo había logrado desde fuera de la residencia presidencial, que por aquel entonces estaba en el Castillo de Chapultepec y no en Los Pinos. La broma consabida del periodo era que el presidente vivía en el castillo, pero que quien mandaba, es decir Calles, "vivía enfrente".

Ante la candidatura "oficial" de Ortiz Rubio sólo se levantaron algunas voces inconformes, como la de José Vasconcelos, quien esta vez regresó del exilio para desafiar a la máquina política de Calles y ser el candidato del Partido Nacional Antirreeleccionista. Vasconcelos proponía, entre otras cosas, destinar la cuarta parte del presupuesto nacional a la educación. También se opuso el obregonista Aarón Sáenz. Sin embargo, su nominación no tenía muchas posibilidades frente a la de Ortiz Rubio, quien contaba con el apoyo del gobierno y su partido, por lo que resultó ganador en las elecciones de diciembre de 1929. El proceso estuvo plagado de irregularidades. El nuevo presidente tomó posesión en febrero de 1930.

Muy pronto el flamante presidente chocó con el Jefe Máximo. Ortiz Rubio quería mandar, no ser un títere de Calles. Sus intentos por lograr independencia acabaron mal. Su gobierno vivió en crisis política permanente desde su inicio. Dicha crisis se manifestaba en el Congreso, en el PNR y en el gabinete. El Jefe Máximo logró poner en su contra a la Cámara de Senadores, al partido y a una parte del ejército. Obligó a cuatro de sus secretarios a renunciar al gabinete y él mismo ocupó la Secretaría de Guerra. Calles era quien llevaba la batuta en el gobierno. Ante este escenario, el 2 de septiembre de 1932 Ortiz Rubio decidió presentar su renuncia sin provocar mayores enfrentamientos con el hombre fuerte que realmente gobernaba el país.

La década de los treinta fue muy difícil. El país resintió los efectos de la depresión económica mundial. El comercio exterior de América Latina se desplomó. Los capitales norteamericanos dejaron de llegar a México y cayó la demanda de algunas exportaciones. En varios países los sistemas democráticos parlamentarios estaban en crisis y las ideologías autoritarias eran muy populares. Ésta fue la década del nazismo y el fascismo. Las ideas racistas y autoritarias hacían avances por todo el mundo. México no era la excepción: había aquí amplios sectores de la población que simpatizaban con Hitler y la Alemania nazi. Algunas minorías sufrieron los embates del racismo. El caso más significativo fue el de los chinos, que durante y después de la Revolución fueron perseguidos y en ocasiones masacrados. El progresista gobernador Salvador Alvarado afirmaba en 1919: "los asiáticos no son, en ningún respecto, adecuados ni para mejorar la raza ni para incrementar y desarrollar nuestros recursos. Nunca se asimilarán. Siguen siendo asiáticos y son en efecto sanguijuelas que chu-

pan el dinero de nuestro país". De la misma manera, en 1923 el Congreso estatal de Sonora aprobó dos leyes; una de ellas ordenó la creación de guetos para los chinos y la otra prohibió el matrimonio o el concubinato entre chinos y mexicanos. En la siguiente década, el gobernador de Sonora y primogénito del presidente, Rodolfo Elías Calles, legalizó la persecución informal que habían sufrido los chinos durante la Revolución. La legislatura del estado decretó una ley que obligaba a todos los patrones a que ochenta por ciento de sus trabajadores fueran mexicanos. En 1931 se promulgó la Ley Federal del Trabajo, y ese mismo año entraron en vigor las leyes laborales en el estado. Ante estas medidas, los comerciantes chinos cerraron sus tiendas. El gobierno de Sonora los obligó entonces a rematar todas sus mercancías y desalojar los locales. Acto seguido, los chinos fueron expulsados del estado. Un tercio de las contribuciones fiscales estatales se perdió con ellos. En enero de 1932, el gobernador Elías Calles proclamó orgulloso a los cuatro vientos que "el problema chino había sido completamente resuelto en Sonora". De igual forma, en 1934 se fundó en Baja California el Partido Nacionalista Pro Raza, integrado por comerciantes mexicanos de ideas racistas. Un año después lograron que el gobierno estatal ordenara a los chinos cerrar sus negocios y abandonar la ciudad de Ensenada en un plazo no mayor de noventa días.

El momento más alto del poder informal de Calles ocurrió con la renuncia del presidente Pascual Ortiz Rubio. Era claro que las decisiones importantes las tomaría el Jefe Máximo; sin embargo, las apariencias se mantendrían. Tras la renuncia del presidente, el gabinete se reunió en la casa de Calles en Cuernavaca para ser informado de cómo se procedería a designar al sustituto. El Jefe Máximo había puesto

los ojos en el general Abelardo Rodríguez, otro sonorense, entonces secretario de Estado de Ortiz Rubio y hombre de toda su confianza. Rodríguez fue designado presidente por el Congreso y tomó posesión el 4 de septiembre de 1932. Apenas rendida la protesta de ley, Rodríguez se fue a Cuernavaca "con objeto de saludar al señor general Plutarco Elías Calles, por quien siente respeto y cariño". El trabajo de Rodríguez sería administrar el país. Las decisiones de importancia debían, al menos, ser consultadas con Calles, con quien a menudo los funcionarios acudían directamente. En consecuencia, Rodríguez debió recordarles a sus subalternos en varias ocasiones que él era el presidente. A diferencia de Ortiz Rubio, sin embargo, no intentó construir alianzas para independizarse de Calles. Fue una especie de jefe de gabinete al servicio del verdadero jefe del gobierno. Ello, paradójicamente, le permitió llevar a cabo una labor administrativa considerable, mientras Calles recibía el trato de jefe de Estado. Por ejemplo, cuando en 1934 éste hizo un viaje de descanso a Navolato (Sinaloa), todos los miembros del gabinete, de la legislatura y del Poder Judicial, e incluso algunos diplomáticos, fueron a despedirlo a la estación. El viaje, por supuesto, se hizo en el tren presidencial. El interinato de Rodríguez terminó el 30 de noviembre de 1934.

El cardenismo y la política de masas

México sufría cambios a paso acelerado. De 1930 a 1940, la población aumentó casi veinte por ciento. En 1940 había veinte millones de habitantes en todo el país; menos de los que hoy tiene la ciudad de México y su área conurbada.

Muchos de los nuevos mexicanos se fueron a vivir al Distrito Federal, que se convirtió en el principal receptor de migrantes. Por otra parte, en 1930 había poco más de un millón trescientos mil alumnos (de todos los niveles educativos) en el país; en 2005, tan sólo Ciudad Juárez contaba con el mismo número de habitantes. En 1940 el número total de alumnos era de poco más de dos millones; en 2005 había el mismo número de estudiantes universitarios de posgrado.

Como respuesta a la profunda depresión económica que experimentaba el mundo, el gobierno mexicano disminuyó el ritmo de las reformas sociales, pues éstas asustaban a los capitales nacionales y extranjeros. Sin embargo, los campesinos organizados aumentaron sus demandas de tierras. En 1930, Calles quiso dar por terminado el reparto agrario, lo que atizó el descontento en el campo. No obstante, el agrarismo encontró terreno fértil en el PNR, donde se volvió muy influyente. A pesar de su poder, Calles no pudo contrarrestar ese peso. En 1933 los agraristas crearon una nueva organización para defender sus intereses: la Confederación Campesina Mexicana (CCM). Esta organización pugnó por la renovación de la reforma agraria y propuso un candidato a la presidencia que impulsaba abiertamente sus demandas: el general Lázaro Cárdenas. El gobernador de Michoacán había sido un aliado leal de Calles, pero no formaba parte de su círculo más cercano. Calles, quien en realidad prefería a otros personajes, optó por no oponerse a las fuerzas que apoyaban a Cárdenas dentro del PNR y aceptó su candidatura. También dio marcha atrás a su decisión de terminar el reparto de tierras. En diciembre de 1933 la convención nacional del partido eligió como candidato al general michoacano.

Aunque no enfrentaba oposición, Cárdenas decidió hacer una intensa campaña política y recorrer de arriba abajo el país. Más que votos para una elección decidida de antemano, buscaba el apoyo popular. En julio de 1934 Lázaro Cárdenas ganó las elecciones y en diciembre tomó posesión. Muchos creyeron que el maximato continuaría. Sin embargo, el nuevo presidente puso manos a la obra, decidido a independizarse del poder de Calles, para lo cual forjó alianzas políticas y desplazó a jefes militares y gobernadores callistas. Inició también una política social que lo distinguiría en la historia de México como un presidente reformador y progresista. La reforma agraria se relanzó agresivamente y el gobierno toleró las huelgas de los trabajadores.

Durante el primer año del presidente Cárdenas el reparto de tierras se cuadruplicó. Se realizaron cambios legales para que la reforma agraria fuera más profunda. El Congreso le dio al presidente el poder de expropiar compañías y propiedades privadas. Las tierras repartidas incluían algunas de las más ricas y productivas del país y que estaban en manos de extranjeros. El presidente expropió tierras algodoneras de la Comarca Lagunera, en el norte; lo mismo ocurrió en Yucatán, en la zona henequenera. Durante la presidencia de Cárdenas se repartieron casi veinte millones de hectáreas (lo que representa el diez por ciento del territorio del país, o las superficies sumadas de Oaxaca, Jalisco y el Estado de México) a unos ochocientos mil campesinos. Se privilegió la propiedad colectiva de la tierra. Se crearon más de once mil nuevos ejidos. Para 1940, casi la mitad de la tierra cultivable de México era propiedad de 1.6 millones de campesinos repartidos en veinte mil ejidos. Dentro del PNR, en los estados y en otros muchos ámbitos de la sociedad, Cárdenas logró

constituir una base de apoyo propia que le permitió en su momento desafiar a Calles, quien se vio forzado al exilio. En 1936 el presidente Cárdenas puso al Jefe Máximo en un avión con destino a Estados Unidos. Antes de perder el poder, Calles había reiniciado su política anticlerical y el país estuvo cerca de una segunda guerra cristera. Sin embargo, Cárdenas prudentemente la evitó y terminó con los excesos de hombres como el gobernador de Tabasco, Tomás Garrido Canabal.

Cárdenas pensaba, como era común en la época, que el Estado debía intervenir activamente en la economía para controlarla. Asimismo, los planes sexenales del PNR empleaban el lenguaje socialista de la lucha de clases. El gobierno permitió que estallaran huelgas en muchas de las empresas extranjeras más importantes: petroleras, mineras y textileras. Si en 1933 hubo sólo quince huelgas, en 1934 estallaron más de doscientas y al año siguiente se produjeron seiscientas. En 1936 se creó la Confederación de Trabajadores de México (CTM), bajo la dirección de Vicente Lombardo Toledano. La CTM apoyó al gobierno y se unió al PNR. Aunque las relaciones entre los trabajadores organizados y los gobiernos revolucionarios no eran nuevas, en ese momento se creó un nuevo pacto. A cambio de su colaboración, el gobierno otorgó a la CTM muchos beneficios. Fue esta agitación social la que llevó al rompimiento definitivo entre Calles y el presidente, pues el Jefe Máximo consideraba innecesario dicho radicalismo.

En 1937 los ferrocarriles fueron nacionalizados a resultas de un conflicto laboral. El punto más alto del activismo social del gobierno fue la expropiación del petróleo en 1938. Después de repetidas huelgas, las compañías extranjeras y los trabajadores apelaron a las autoridades laborales mexicanas,

que fallaron a favor de un aumento salarial. Sin embargo, las petroleras se negaron a acatar la decisión. En respuesta, el 18 de marzo Cárdenas expropió el petróleo. La medida fue acompañada de manifestaciones populares de apoyo al gobierno. El fervor fue tal, que muchos historiadores consideran éste el punto más alto de la Revolución mexicana. Todavía hoy es un referente imprescindible en los debates sobre el futuro económico y político del país.

Para consolidar las reformas emprendidas, Cárdenas decidió refundar el PNR. El partido dejó de ser la coalición laxa de facciones regionales y corrientes ideológicas de la era de Calles. Ahora sería una organización más disciplinada que incorporaría a las masas en las que se apoyaba el gobierno. Además, sería una estructura formada por corporaciones, no por individuos. El "sector" laboral estaría representado por la CTM; el campesino por la Confederación Nacional Campesina (CNC, constituida el 28 de agosto de 1938), y también habría sectores militar y "popular", este último compuesto principalmente por burócratas. Así, en 1938 el PNR se convirtió en el Partido de la Revolución Mexicana (PRM), que contaba con cuatro millones de miembros.

En 1939 estalló la segunda Guerra Mundial. En mayo de 1942, Alemania torpedeó dos navíos petroleros mexicanos que abastecían a Estados Unidos *(El Potrero del Llano* y el *Faja de Oro)*. Por ello, México declaró la guerra a los países del Eje: Alemania, Japón e Italia. Con este hecho inició la única participación de México en las guerras mundiales. Ese año los alemanes hundieron cuatro barcos mexicanos más. El país envió un escuadrón aéreo al frente del Pacífico. La guerra también abrió oportunidades de trabajo a miles de mexicanos que fueron a Estados Unidos a trabajar en los campos y los

ferrocarriles ante la escasez de brazos en ese país. Además, creó condiciones favorables para el desarrollo de la industria en México, sobre todo en la fabricación de productos de consumo masivo que no requerían de grandes inversiones ni tecnología avanzada. El mercado mexicano había dependido en buena medida de la industria norteamericana, que en ese momento se orientó hacia la producción bélica.

La década de los treinta fue muy adversa a la democracia liberal en el mundo. Las ideologías autoritarias, como el comunismo, el fascismo y el nazismo, gozaban de mucha popularidad. Los regímenes parlamentarios eran vistos como débiles y decadentes. En 1936, una rebelión nacionalista y derechista en España inició una cruenta guerra civil que duró tres años. Los republicanos perdieron la guerra y se produjo un flujo de refugiados que buscó asilo por el mundo. México abrió, en parte, sus puertas a las víctimas de las dictaduras fascistas europeas. A finales de 1939 se estimaba que había más de seis mil refugiados españoles registrados en México. Si bien el gobierno mexicano recibió a muchos españoles, en cambio hizo muy poco por acoger a los judíos que huían de Europa. Durante el gobierno de Cárdenas sólo llegaron a México mil seiscientos treinta y un judíos provenientes del viejo continente. En 1939, el cónsul mexicano Luders de Negri opinaba desde Londres sobre el problema de los refugiados judíos:

> es bien sabido que los elementos que buscan refugio integran grupos que no son asimilables y que la experiencia de otros países ha demostrado que a la larga, cuando el número de judíos es importante, llegan éstos a constituirse en una casta exclusiva, dominante y poderosa, que no tiene ningunos

vínculos con el país donde se establecen y muy a menudo son la causa de problemas interiores.

En 1933, el departamento de migración decidió prohibir la entrada a muchas personas por prejuicios raciales. Así, no podrían entrar a México "las razas negra, amarilla (a excepción de los japoneses), malaya e hindúes [...] por sus malas costumbres y actividades notoriamente inconvenientes, los individuos conocidos como gitanos".

Un terreno en el que no se había ganado mucho era el de la igualdad entre los sexos. Existía un pequeño pero obstinado movimiento feminista que pugnaba por el derecho al voto. Sin embargo, entre los años 1920 y 1934 sólo cuatro estados otorgaron el sufragio femenino y dos de ellos terminarían por revocarlo. Muchos revolucionarios de los años veinte y treinta creían que no era conveniente conceder el voto a las mujeres debido a su religiosidad. Esa medida, pensaban, tendría efectos "reaccionarios". El "sector femenino" del Partido Nacional Revolucionario apoyó a Cárdenas. En contraparte, gracias al apoyo del presidente varios estados concedieron el sufragio a las mujeres y el PNR les dio membresía plena, así como voto interno. Cárdenas accedió en 1937 a enviar al Congreso un proyecto de reforma para otorgar el derecho al voto a las mujeres. En 1938 la enmienda fue aprobada por ambas Cámaras y se envió a las legislaturas estatales para su ratificación. Una vez que veintiocho estados aprobaron la ley, en 1939 se envió de vuelta al Congreso nacional para su promulgación. Pero, llegada ahí, la enmienda se atoró. El inicio de la campaña presidencial y una creciente oposición al gobierno y al partido oficial hicieron que muchos revolucionarios acabaran por dudar de la conveniencia

de la medida. Las mujeres no tendrían derecho al voto sino hasta 1953; sin embargo, en 1948 lograron obtener el sufragio en elecciones municipales.

La ola reformista de Cárdenas no sólo transformó el campo y las fábricas. También tuvo importantes consecuencias en el ámbito de la educación y la cultura. En 1934 el plan sexenal del PNR sostenía que la educación primaria y secundaria debía seguir la orientación de la doctrina socialista. El socialismo propugnaba por la abolición de la propiedad privada y la lucha de clases. Ese mismo año, el Congreso reformó la Constitución para establecer en el artículo 3° la educación socialista. Al mismo tiempo, el indigenismo fue exaltado en los libros de texto de historia como fuente de la identidad nacional.

El campo de la cultura fue muy rico en esos años. Los muralistas mexicanos (Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros) dejaron una huella imborrable en el arte. El cine nacional de la época merece una mención especial. A partir de 1935 la mayoría de los productores cinematográficos buscó ofrecer una imagen "civilizada" y "occidental" de México con melodramas mundanos y modernos. Destaca *Madre querida* (1935) de Juan Orol, que estableció el arquetipo de la madre abnegada y sufriente. También deben mencionarse *La mujer del puerto* (1933), *El compadre Mendoza* (1933), *Chucho el Roto* (1934), *¡Vámonos con Pancho Villa!* (1935), *Allá en el Rancho Grande* (1936), que iniciaron la larga tradición de explotar el folclor mexicano y, sobre todo, de las canciones, lo que le daría enorme popularidad y difusión. El director más importante de la época fue Fernando de Fuentes; le siguen Arcady Boytler, Raphael Sevilla, Miguel Zacarías, Gabriel Soria y Chano Urueta. Fue en esos años

cuando el cineasta ruso Serguei Eisenstein vino a México, dejando una fuerte influencia en el cine nacional. Películas que quisieron colocarse en la misma línea de denuncia social son las célebres *Janitzio, Rebelión* y *Redes* (las tres de 1934). *Allá en el Rancho Grande* dio un gran impulso a la producción nacional. Más de la mitad de esas películas recurrieron a la fórmula de Fernando de Fuentes: color local, costumbrismo y folclor. La prosperidad del cine llevó a la saturación. En él se difundió la imagen de un México de rancheros, mujeres sumisas y charros cantores que se convirtió en un estereotipo. Agotada la fórmula para 1939, la incipiente industria conoció su primera crisis. En octubre de ese año, un decreto del presidente Cárdenas impuso a las salas de cine la obligación de proyectar al menos una película mexicana al mes.

La época de oro fue durante la guerra, 1941-1945. Dado que México era el único país de habla española aliado de Estados Unidos (España y Argentina eran neutrales, en la medida en que Franco podía serlo), Hollywood apoyó al cine mexicano. La producción de películas se disparó. Surgió una nueva generación de directores: entre ellos estaban Emilio *el Indio* Fernández y Julio Bracho. Destacaron los actores: Cantinflas, Dolores del Río, Jorge Negrete, María Félix, Arturo de Córdova y Pedro Armendáriz. Entre las películas más famosas estuvieron: *¡Ay, Jalisco, no te rajes!* (1941), *Cuando los hijos se van* (1941), *Así se quiere en Jalisco* (1942), *La china poblana* (1943), *Fantasía ranchera* (1943) y *Campeón sin corona* (1945). El 14 de abril de 1942 se creó el Banco Cinematográfico, y para 1945 ya trabajaban en la producción de cine más de cuatro mil personas. Tras el fin del conflicto mundial, todavía hubo dos o tres años de vacas gordas, pero el regreso en pleno de Hollywood, la industria europea y el

advenimiento de la televisión provocarían una lenta decadencia del cine mexicano.

La política de masas del cardenismo tuvo un efecto polarizador; produjo una intensa oposición de importantes segmentos de la población, desde las clases medias hasta los campesinos católicos. Muchos mexicanos, por diversas razones, resintieron el radicalismo de esos años. Así, se fundó la Unión Nacional Sinarquista, de raíces católicas. En 1939 activistas católicos e intelectuales, encabezados por Manuel Gómez Morin, fundaron el Partido Acción Nacional (PAN). Debido a las fuertes tensiones en la sociedad, en los dos últimos años del sexenio se moderaron las políticas públicas. El ritmo de la reforma agraria se redujo. Aunque disminuido, el radicalismo no desapareció; Cárdenas creía que México tenía en el PRM un poderoso instrumento revolucionario con el cual se podría continuar hacia su liberación.

El péndulo de la política había oscilado hacia la izquierda y ahora comenzaba a regresar. Cárdenas se percató de que no podría sucederle un hombre identificado con su línea política, como el general Francisco J. Múgica. Después de un complejo proceso interno, el PRM eligió como candidato a un político moderado: el general Manuel Ávila Camacho, secretario de Guerra, quien enarboló la bandera de la "unidad nacional", la moderación y la conciliación. Esa elección era una clara señal, para todos los actores, de que la política se movería hacia el centro. Sin embargo, la decisión no dejó satisfechos a todos los interesados y la oposición conservadora postuló a otro general, Juan Andreu Almazán. Aunque Cárdenas se había comprometido públicamente a realizar unas elecciones limpias y justas, lo cierto es que la oposición, que contaba con el apoyo de numerosos campesinos, traba-

jadores, católicos y pequeños propietarios, fue hostigada por las fuerzas oficialistas. Las acciones fueron sucias y violentas y algunos partidarios de Almazán perdieron la vida. Como era previsible, Ávila Camacho ganó "por amplísimo margen" las elecciones de julio de 1940, aunque muchos pusieron en duda su triunfo. Almazán alegó fraude, no reconoció el resultado y se preparó a encabezar una revuelta que, sin embargo, nunca pudo llevar a cabo debido a la activa intervención del gobierno.

Ávila Camacho tomó posesión en 1940, en plena segunda Guerra Mundial (1939-1945). Las dudas sobre el proceso electoral hicieron que el presidente fuera particularmente conciliador con las partes y que tratara de incorporar a las diversas fuerzas del espectro revolucionario, de izquierda y derecha. Estas fuerzas se enfrentaron durante todo el sexenio en el seno del gobierno avilacamachista. Poco después de haberse sentado en la silla presidencial, el general dio un golpe de timón a la política oficial: terminó con la educación socialista y toleró las escuelas católicas. Sin embargo, algunas de las políticas revolucionarias clave continuaron recibiendo atención, como el ímpetu educador: el gobierno se propuso educar a todos los mexicanos. Otra historia fue la reforma agraria. Para 1943, el reparto de tierras se había reducido en cincuenta por ciento; para 1945 se redujo noventa por ciento, comparado con el último año del gobierno de Cárdenas. Los ejidos, un experimento en política social, ya no recibieron financiamiento y, cuando fue posible, las tierras se dividieron en parcelas individuales. El ejido no era sólo una forma colectiva de tenencia de tierra: la propiedad no se podía vender ni hipotecar; tampoco se podían emplear jornaleros para trabajar la tierra. Además, el gobierno desem-

peñaba un papel importante no sólo al crearlos, pues luego intervenía activamente en su administración. El énfasis en el campo se desplazó a la agricultura comercial.

La visión del país también se transformó radicalmente. Mientras Cárdenas veía un México agrario, sustentado en prósperos ejidos, los nuevos directores de la política se propusieron hacer del país una moderna nación industrial. En 1942, la entrada de México en la guerra al lado de los aliados estimuló la industria de manera significativa. Entre 1940 y 1945 el sector creció en promedio diez por ciento al año. Durante la guerra, el movimiento obrero aceptó disciplinarse aunque los salarios se rezagaran frente a la inflación. Sin embargo, al terminar el conflicto bélico ese rezago se mantuvo, pues el gobierno y los empresarios temían que las huelgas y un aumento en los salarios afectaran el crecimiento industrial, ya que habría menor acumulación de capital y menor inversión extranjera. Aunque en ese entonces el movimiento obrero aún no estaba subordinado del todo al gobierno, la CTM, dirigida por Fidel Velázquez, aceptó la idea de que era más importante hacer crecer el pastel antes que repartirlo en el corto plazo. A los obreros de la CTM Ávila Camacho les dijo:

> el proletariado organizado debe encontrar en la inmensa responsabilidad de la hora presente motivos de meditación, analizando desapasionadamente, patrióticamente, las condiciones de nuestros días, y emprender una atenta revisión de métodos, procedimientos y objetivos, apoyado en una actitud general de autocrítica, estando pronto a prestar la cooperación que la nación tiene derecho a esperar de él.

Mientras hubiera trabajo, los obreros no exigirían una tajada mayor. Al final de la guerra, la CTM era más débil y dependiente del gobierno. Velázquez dirigiría esta organización por más de cincuenta años. Por otra parte, el partido de los revolucionarios se transformó una vez más. En 1941 el PRM perdió el sector militar y en 1943 Ávila Camacho fortaleció el sector popular. En 1946 fue electo presidente un civil: Miguel Alemán, el cual convirtió al PRM en el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Conclusión

En 1946, el historiador y educador Daniel Cosío Villegas anunció en un artículo de revista titulado "La crisis de México", que la Revolución mexicana había muerto. Sostenía que los grandes principios de la Revolución se habían corrompido o habían sido abandonados. Con contadas excepciones, los hombres no habían estado a la altura de sus responsabilidades históricas. Sin embargo, lo cierto es que la transformación que el país experimentó en un cuarto de siglo fue muy profunda. Durante veinte años, un Estado producto de una revolución social había puesto en marcha ambiciosas reformas que buscaron modificar la política, el campo, la fábrica y la escuela. Su credo fue el nacionalismo revolucionario.

Con todo, la decepción de Cosío Villegas con la Revolución hecha gobierno muestra que las expectativas de ese movimiento fueron más grandes que los resultados. La reconstrucción llevada a cabo por los revolucionarios en el poder tuvo sus límites. Lo que el historiador lamentaba era la pérdida, o muerte, de un ideal. A pesar de que los revolu-

cionarios diferían en sus proyectos, muchos de ellos querían un país en el cual tuvieran prioridad las personas y las reivindicaciones sociales. Estos revolucionarios celebraban un ideal agrario en el que campesinos prósperos cultivarían sus propias tierras. Una pequeña industria, nacional y patriótica, completaba el cuadro. Sin embargo, a partir de los años cuarenta algo muy distinto ocurrió. Los ejidos languidecieron y la creciente pobreza obligó a los campesinos a migrar a las ciudades. Un pequeño número de empresarios y compañías extranjeras se hizo del control de la industria, el petróleo, los bancos, el comercio y las comunicaciones. Los salarios de los trabajadores se rezagaron respecto de la inflación y aumentó la desigualdad en un país tradicionalmente desigual. La visión alternativa de México se había extinguido. Hay mucho de cierto en este severo juicio de la obra de la Revolución. No obstante, también es cierto que en este periodo el país creció y se industrializó. Las ciudades también crecieron. Se expandió la clase media y los niveles de vida aumentaron. Para 1940, la esperanza de vida promedio era de cuarenta y un años. Al principio de los años veinte morían veintiún niños de cada cien, mientras que entre 1944 y 1946 sólo murieron once de cada cien. El Instituto Mexicano del Seguro Social fue creado en 1943. La semana laboral era, en promedio, de cuarenta y tres horas.

No podemos comprender el México en el que hoy vivimos sin considerar los años de reconstrucción nacional. Los revolucionarios lograron rehacer el país. Lo hicieron de formas que todavía hoy afectan la marcha de la política y la sociedad. El Estado que surgió del conflicto armado logró finalmente consolidarse y perdurar gracias a la creación de una peculiar organización como el PNR, y al papel clave que

el presidente de la República desempeñaba en el sistema. Sin embargo, esa solución no fue democrática. El camino elegido trajo paz al país, pero no lo puso en el camino de volverse una democracia liberal moderna y próspera. Algunas de las soluciones políticas y económicas de entonces son los obstáculos actuales a la democracia y el crecimiento económico.

Mientras que durante este periodo, en otros países, partidos y movimientos fascistas o socialistas se enfrentaban a gobiernos de corte liberal, en México había un Estado revolucionario que no era socialista, fascista ni liberal. Ese régimen no se oponía a las elecciones, pero no derivaba de ellas su legitimidad; en él había un partido oficial que gozaba del patrocinio del gobierno; era anticlerical, populista, corporativo y tenía una Constitución, la de 1917, en la cual se abrazaba por igual al individualismo y al colectivismo. Era un régimen nacionalista y partidario de la intervención estatal en la economía: había expropiado importantes industrias al capital extranjero. Coqueteaba con varias corrientes ideológicas sin identificarse con ninguna en particular. Por ello, la Revolución mexicana constituyó una poderosa fuente de inspiración antiliberal para otros países.

En efecto, una vez derrotado el proyecto maderista triunfó una revolución que buscó construir un Estado fuerte e interventor. Su ideología fue el nacionalismo revolucionario. Creó corporaciones a partir de las cuales se restructuraría y ordenaría el país. Esta visión le dio un papel central al Estado en la sociedad y puso a los individuos en segundo lugar. Hoy todavía vivimos con los legados de Obregón, Calles y Cárdenas.

LA CONSTRUCCIÓN DE UN PAÍS MODERNO, 1945-2000

Soledad Loaeza

El Milagro Mexicano, 1945-1970

Al término de la segunda Guerra Mundial se inició el Milagro Mexicano, una etapa de veinticinco años en que se combinaron altas tasas de crecimiento económico sostenido y estabilidad política. A lo largo del periodo hubo una notable continuidad: las sublevaciones militares se volvieron cosa del pasado, las elecciones se celebraron periódica y regularmente y las actividades económicas se desarrollaron sin interrupción.

En este periodo de estabilidad, la economía, la sociedad, la política y la cultura experimentaron profundas transformaciones. El ambicioso proyecto de modernización de inspiración nacionalista que impulsó el Estado le dio unidad de propósito a la élite en el poder, y fue la piedra angular de un amplio consenso que puso fin a los desacuerdos del pasado. En estos años se fortaleció la autoridad del Estado, en particular del gobierno federal y del presidente de la República. Esta evolución tuvo un costo muy alto para la autonomía de los gobiernos estatales y de los municipios, así como para la oposición política; sin embargo, en ese tiempo se pensaba que la "unidad de mando", que encarnaba un Poder Ejecutivo fuerte, era una condición indispensable para consolidar la estabilidad.

La estabilización política

En enero de 1946, cuando todavía era presidente Manuel Ávila Camacho, la fundación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) completó la arquitectura de una organización del poder cuyos otros dos ejes eran el gobierno federal y la presidencia de la República. Bajo el lema "Democracia y Justicia Social", el nuevo partido ocupó el lugar del Partido de la Revolución Mexicana (PRM), que había sido el instrumento privilegiado de relación entre el Estado y diversos grupos sociales y políticos. El PRI aspiraba a ser un instrumento de reconciliación nacional y representar a todos los mexicanos.

Al naciente partido se adhirieron las organizaciones obreras y campesinas, la Central de Trabajadores de México (CTM), la Central Nacional Campesina (CNC) y la Central Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), pertenecientes al PRM. Desde el principio, el PRI fue un apoyo muy importante para el Estado. Primero, porque los sectores obrero y campesino simbolizaban la continuidad entre el movimiento revolucionario de 1910 y los gobiernos que a partir de 1946 prometían la modernización. Segundo, porque el PRI también era un canal de comunicación entre los grupos populares y la presidencia de la República. En muy poco tiempo, sin embargo, quedó demostrado que el partido era sobre todo un instrumento de control de la participación. De ahí que después de su fundación disminuyeran los conflictos electorales y se redujeran considerablemente las huelgas industriales y las disputas agrarias.

La continuidad posrevolucionaria

La fundación del PRI y la elección de Miguel Alemán en 1946 representaron la consolidación del dominio de los civiles sobre la política. Ellos asumieron la tarea de transformar al país. Sus armas serían las instituciones. El ejército quedó excluido de la lucha política y se convirtió en un garante de la continuidad del Estado. Este cambio explica en parte la estabilidad de la época, así como la diferencia entre la experiencia mexicana y la de otros países latinoamericanos que en esos mismos años sufrieron golpes de Estado y dictaduras militares. La Iglesia católica también se sumó a los esfuerzos de estabilización política del gobierno. La legislación anticlerical que había provocado los dolorosos conflictos de los años veinte y treinta no fue modificada, pero entre el Estado y la Iglesia se desarrolló una relación relativamente armoniosa fundada en la no aplicación de las leyes secundarias que normaban sus relaciones. De manera que los católicos disfrutaron de amplias libertades para el ejercicio de sus actividades y de sus creencias.

Cuatro presidentes gobernaron durante estos veinticuatro años: Miguel Alemán Valdés (1946-1952), Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958), Adolfo López Mateos (1958-1964) y Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970). Todos ellos llegaron al poder como candidatos del PRI, que en esos años obtenía la inmensa mayoría de votos en las elecciones que se celebraban periódicamente para renovar la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, las gubernaturas, las presidencias municipales y los congresos locales. Por ejemplo, en las elecciones presidenciales de 1958, las primeras en que las mujeres ejercieron el derecho al voto, el candidato del PRI —que lo

era también del Partido Popular Socialista, PPS (1948-1997), y del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, PARM (1954-2000)—, Adolfo López Mateos, obtuvo noventa y uno por ciento del total de votos emitidos, mientras que Luis H. Álvarez, candidato del único partido de oposición independiente, el Partido Acción Nacional, PAN (1939), recibió nueve por ciento del voto. Todos los senadores elegidos eran miembros del PRI, y de un total de ciento setenta y ocho diputados, no más de diez provenían de los partidos de oposición.

Las diferencias entre los cuatro gobiernos de esta etapa fueron mínimas. Todos ellos trataron de llevar adelante la industrialización del país. Este proyecto se vio favorecido por la prosperidad de la economía mundial, que entre 1945 y 1973 creció en forma excepcional.

Los límites de la "democracia mexicana"

Los años 1946-1970 fueron un periodo de auge para el PRI. Una nueva ley electoral modernizó la administración y la organización de las elecciones; de manera que el sistema político cumplía con todos los signos externos de una democracia: las autoridades eran renovadas periódicamente en elecciones en las que participaba más de un partido político, y los militares estaban subordinados al poder del Estado, que estaba en manos de civiles.

No obstante, la concentración de autoridad en el presidente de la República, el ejercicio personalizado del poder y la hegemonía del PRI distorsionaban el diseño constitucional. La división de poderes existía sólo en el papel, pues en la

práctica la institución presidencial se impuso al Congreso y a la Suprema Corte de Justicia, y la centralización del poder político y administrativo en el gobierno federal anuló el federalismo. El presidencialismo era el componente central de un gobierno autoritario en el que la aplicación de la ley estaba a merced de la voluntad del presidente de la República. La única limitación a su poder era el principio de la no reelección, que fue escrupulosamente respetado.

El PRI obstaculizaba el desarrollo de opciones partidistas y no toleraba la disidencia interna. Por ejemplo, en las elecciones presidenciales de 1952, la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano (FPPM) postuló la candidatura de Miguel Henríquez Guzmán, un general revolucionario que había pasado a la oposición porque, según él, el grupo en el poder había traicionado los principios de la Revolución. Su campaña despertó muchas simpatías; sin embargo, según los resultados oficiales, el priísta Adolfo Ruiz Cortines obtuvo setenta y cuatro por ciento del voto, mientras que a Henríquez Guzmán se le reconoció un dieciséis por ciento. Para entonces, el fraude electoral, el robo de urnas y la alteración de las listas de electores eran ya una costumbre. De suerte que muchos dudaron de la veracidad de los resultados oficiales. Al día siguiente de la elección, el 7 de julio de 1952, los henriquistas se reunieron en la Alameda central de la ciudad de México para festejar su triunfo. La asamblea fue disuelta a tiros por la policía montada y los granaderos. El número de víctimas, entre heridos y muertos, nunca fue dado a conocer. Pasarían más de tres décadas antes de que otro movimiento de oposición, nacido del mismo PRI, volviera a retar al presidente de la República.

La nueva diplomacia mexicana y la cooperación con Estados Unidos

La participación de México en la segunda Guerra Mundial en el campo de los Aliados fue el punto de partida de una relación de cooperación con Estados Unidos, así como de la diversificación de sus relaciones en el exterior.

Durante los años duros de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, México pudo mantener una línea de acción independiente. En 1946 fue elegido miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y en 1948 el antiguo subsecretario de Relaciones Exteriores y secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet, fue designado director general de UNESCO, el organismo de Naciones Unidas dedicado a la educación y la cultura. En los organismos multilaterales, como la Organización de Estados Americanos (OEA), México defendía los principios de no intervención y el derecho de los pueblos a determinar libremente su forma de gobierno.

En repetidas ocasiones esta diplomacia significó oponerse al gobierno de Estados Unidos, que buscaba influir en las elecciones de los gobernantes latinoamericanos o en sus decisiones. Así ocurrió en 1961, cuando México se negó a romper relaciones con el gobierno revolucionario cubano, como lo hicieron casi todos los países de América Latina a instancias de Washington. Sin embargo, en momentos de crisis México ratificaba su pertenencia al bloque occidental. Por ejemplo, en octubre de 1962 el presidente López Mateos apoyó la oposición del presidente Kennedy a la intención del gobierno soviético de instalar bombas nucleares en territorio cubano.

A partir de la segunda Guerra Mundial, entre México y Estados Unidos se desarrollaron relaciones de cooperación

en temas de interés común; por ejemplo, la guerra estimuló la demanda de mano de obra mexicana en el campo y en la industria de Estados Unidos porque muchos estadounidenses habían entrado en el ejército. En 1942, los gobiernos de ambos países crearon el programa de braceros, en virtud del cual trabajadores mexicanos eran contratados por tiempo determinado para cultivar y cosechar los campos en los estados de California, Colorado, Texas y Nuevo México. En veintidós años de vigencia del programa se registraron 4.6 millones de contrataciones; se dio por terminado cuando la mecanización de las actividades agrícolas redujo la urgencia de mano de obra en Estados Unidos, pero los trabajadores mexicanos, hombres y mujeres jóvenes, siguieron emigrando en números crecientes hacia ese país en busca de empleo.

Durante la guerra, los intercambios comerciales entre los dos países se incrementaron. Estados Unidos necesitaba importar grandes cantidades de materias primas que México producía. Gracias a sus exportaciones el país obtuvo recursos para sentar las bases de su industria. En estos años se hablaba de una "relación especial" que consistía en que el gobierno de Washington toleraba la independencia de las posiciones mexicanas en política exterior, mientras que "castigaba" a otros gobiernos que pretendían actuar de la misma forma, como lo ilustra el hecho de que, no obstante las presiones de Washington, México mantuvo relaciones diplomáticas con el gobierno cubano.

Sin embargo, el verdadero significado de la "relación especial" consistía en un acuerdo tácito, entre los gobiernos de ambos países, de que los estadounidenses no intervendrían en asuntos internos mexicanos. En el contexto de la Guerra Fría, el autoritarismo del sistema político mexicano —en

particular el control sobre la participación política— era una garantía para la seguridad del poderoso vecino del norte. Este compromiso era realmente excepcional en un momento y en una región en que la injerencia encubierta o pública de Estados Unidos en asuntos internos de otros países causaba golpes de Estado y dictaduras.

La armonía básica entre los dos países no eliminó los problemas en la relación bilateral. Por ejemplo, en 1948, a raíz de la propagación de la fiebre aftosa en el ganado mexicano, por exigencia de Washington, temeroso del contagio, cientos de miles de animales fueron abatidos con "rifles sanitarios", y miles de campesinos quedaron sumidos en la miseria. También surgían diferencias de carácter comercial cuando el Congreso de Estados Unidos aumentaba los derechos sobre las exportaciones mexicanas, o por medidas que adoptaba el gobierno mexicano en materia de inversión extranjera. Así, por ejemplo, en 1961 el presidente López Mateos introdujo una ley de regulación de la inversión extranjera directa y de "mexicanización" que afectó intereses estadounidenses porque limitaba a cuarenta y nueve por ciento la participación extranjera en empresas nacionales.

La modernización económica

En este periodo, el Estado asumió un papel central como agente promotor de la actividad económica, pero su propósito era desarrollar un modelo de economía mixta en el que la iniciativa privada también era un protagonista fundamental. De suerte que al Estado tocaba crear condiciones propicias al desarrollo de la empresa nacional. Con esa finalidad, por una

parte, asumió la responsabilidad directa en sectores estratégicos: petróleo, energía eléctrica y siderurgia; por otra, llevó a cabo grandes obras de infraestructura, y, por último, puso en práctica diversas medidas, como subsidios y exenciones fiscales, que fomentaban la inversión privada. Incluso el control que ejercía la CTM sobre las demandas obreras de incremento salarial era un apoyo a la empresa privada, porque su intención consistía en incrementar las ganancias para reinvertir.

El apoyo del campo a la industrialización

La industrialización tuvo consecuencias muy importantes para la agricultura. El reparto agrario disminuyó durante el gobierno del presidente Alemán, quien se propuso estabilizar la propiedad rural para mantener el flujo de recursos que provenían de las exportaciones agropecuarias y atraer inversiones al campo. En 1948 introdujo reformas legales que favorecieron la formación de grandes propiedades que utilizaban métodos modernos de explotación.

Entre 1945 y 1955 hubo una gran expansión de la producción agrícola (un crecimiento del seis por ciento anual), que fue posible gracias a la incorporación de nuevas tierras al cultivo, a mejoras en el sistema de riego y distribución de agua con la construcción de grandes presas. En 1970 los productos agropecuarios —y los pesqueros— representaban el cincuenta y cinco por ciento del valor de las exportaciones, entre las que destacaban el algodón en rama, el café y el jitomate.

Merced a las grandes presas construidas por el Estado se desarrolló la agricultura de exportación, cuyas ganancias fueron destinadas a inversiones en el sector industrial. No

obstante, esta política restó recursos al campo y, en consecuencia, disminuyó el crecimiento del sector, que entre 1965 y 1970 registró una tasa anual de sólo uno por ciento. A partir de entonces empezó a hablarse de la crisis del campo y de la necesidad de importar productos agrícolas para satisfacer la demanda interna.

La caída de la producción agrícola también se explica porque el crecimiento de la población ejercía presión sobre la tierra. La creciente mano de obra rural se dedicaba a una agricultura de subsistencia que contrastaba con la productividad de las zonas de riego que explotaban grandes agricultores para el mercado interno y para la exportación. En cambio, la productividad del ejido no progresaba y muchas pequeñas propiedades fueron subdivididas en lo que se llamó minifundios.

Comunicar al país

En estos años se construyó una importante red carretera y una red caminera que más allá de apoyar el desarrollo industrial también contribuían a integrar al país, a formar regiones económicas y un mercado nacional. En 1950 se inauguró la carretera Amacuzac-Buenavista-Iguala, así como el trecho correspondiente a la carretera Panamericana, que cruza de Alaska a la Patagonia; en 1952, la autopista México-Cuernavaca; en 1958 se concluyó la carretera México-Querétaro, y en 1962 la carretera directa México-Puebla. En 1960 todas las capitales de los estados quedaron comunicadas por carretera. Se podía viajar de Yucatán a Sonora, y de Tamaulipas a Chiapas. También se construyeron líneas telegráficas y telefónicas, así como aeropuertos, y se desarrolló la aviación.

La sustitución de importaciones

La estrategia central del modelo de industrialización consistía en reducir los productos que se compraban en el exterior y sustituirlos con los fabricados localmente. Se trataba de proteger la producción interna de la competencia del exterior. En consecuencia, se puso en pie un conjunto de medidas —aranceles y permisos de importación— cuyo efecto fue *cerrar* el mercado mexicano a los productos extranjeros para favorecer a las nacientes empresas locales; con esa misma intención se daban muchas facilidades a los empresarios para que importaran maquinaria y equipo. Estos esfuerzos sentaron las bases de un empresariado nacional; sin embargo, México no aprovechó totalmente el auge económico de la posguerra, como lo hicieron otros países que en estos años abrieron gradualmente sus economías y se beneficiaron de la expansión del mercado internacional.

Entre 1945 y 1970 la economía mexicana registró una tasa media de crecimiento anual de seis por ciento, no obstante que se presentaron algunos problemas. En dos ocasiones fue necesario devaluar el peso, en 1948 y en 1954. En ambos casos la inflación había causado desequilibrios financieros, es decir, los precios internos aumentaban más rápidamente que los precios en el exterior. En consecuencia, y con todo y la protección arancelaria, se abarataban los productos extranjeros en perjuicio de las empresas y de los productos mexicanos. El resultado fue un desequilibrio en las finanzas públicas que las devaluaciones subsanaron. El valor de la moneda que se fijó después de la devaluación de 1954 se mantuvo en 12.50 pesos por un dólar hasta 1976.

Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda y Crédito

Público de 1958 a 1970, durante los sexenios de los presidentes López Mateos y Díaz Ordaz, logró una fórmula exitosa de crecimiento sin inflación conocida como "desarrollo estabilizador". Gracias a ella se sostuvo el modelo de sustitución de importaciones, sin que aumentaran los precios; en ese periodo, la tasa de inflación fue inferior al cuatro por ciento anual con un tipo de cambio estable. Sin embargo, a principios de los años sesenta las demandas de inversión y de servicios públicos de un país en pleno proceso de expansión reanimaron un problema ancestral: la escasez de recursos.

La causa inmediata fue la baja inversión en el sector agropecuario, cuyo crecimiento era insuficiente para los requerimientos del desarrollo industrial. Al iniciarse la década de los sesenta, el modelo de desarrollo mexicano exigía un aumento significativo de recursos de inversión. Era preciso que el Estado encontrara nuevas fuentes de financiamiento: las empresas locales no eran competitivas en el exterior y rechazaban una apertura comercial en la que veían una peligrosa amenaza; en 1961 los empresarios también se opusieron a una reforma fiscal que intentó introducir el gobierno de López Mateos. El hecho de que el gobierno de Díaz Ordaz haya desechado estas opciones —apertura comercial y reforma fiscal— y haya recurrido al crédito externo es una medida de la fuerza que habían adquirido los empresarios mexicanos.

La inversión extranjera directa había sido una de las fuentes más importantes de financiamiento. Sin embargo, a ojos de muchos contrariaba el propósito de un desarrollo nacional porque colocaba a la economía en una situación de dependencia en relación con intereses extranjeros; además, representaba riesgos de consideración, porque era hasta cier-

to punto imprevisible. Podía ir y venir conforme lo dictaran intereses y necesidades ajenos al país.

La explosión demográfica

Entre 1940 y 1970 la población pasó de veinte a cincuenta millones de habitantes. Este fenómeno fue resultado del mejoramiento general del nivel de vida de la población, en particular de la caída en la mortalidad. En 1930, veinticinco por ciento de los niños que nacían moría antes de cumplir el primer año de edad; en 1970 esa proporción se había reducido a siete por ciento. La esperanza de vida de los mexicanos al nacer también se elevó: en 1940 era de cuarenta y un años, en 1970, en cambio, era de sesenta y dos años.

El crecimiento demográfico fue visto en un primer momento con mucho optimismo, pues era prueba del éxito de las políticas de salud pública: las viviendas con acceso a agua entubada aumentaron de diecisiete por ciento en 1950 a sesenta y uno por ciento en 1970. Además, se construyeron hospitales públicos y se extendió la seguridad pública. También se pusieron en marcha campañas de erradicación del paludismo, la viruela, el tifo, la tuberculosis y la poliomielitis.

La urbanización

El desarrollo de la industria trajo el crecimiento de las ciudades. Entre 1940 y 1970 la población que vivía en ciudades de más de quince mil habitantes aumentó de casi cuatro millones a veintidós millones; el número de centros urbanos pasó de

cincuenta y cinco a ciento setenta y ocho. La capital de la República era un imán para muchos de los que abandonaban el campo y se convirtió en una de las grandes ciudades del mundo: en 1940, ocho de cada cien mexicanos vivían en el área metropolitana del Distrito Federal; tres décadas después, la proporción había aumentado a diecisiete de cada cien mexicanos.

La vida en las ciudades modificaba los valores y las actitudes. En el medio urbano disminuía la influencia de la Iglesia, así como de la familia patriarcal. Las formas de relación personal se transformaban por efecto de la extensión de las redes telefónicas y por la multiplicación del número de hogares que contaban con aparatos de radio y de televisión. Asimismo, se amplió la producción y distribución de periódicos y revistas ilustradas.

A pesar de estos cambios se mantenían tradiciones, por ejemplo, en relación con el papel y la función de las mujeres. Muchas se habían integrado al mercado laboral, o tenían un mejor nivel educativo que en el pasado, pero se esperaba que fueran madres de familia y amas de casa. Su condición seguía sujeta a la cultura machista que les atribuía una posición subordinada a los hombres, aun cuando tuvieran un ingreso propio. Las mujeres de clase media eran educadas para desempeñar funciones de apoyo, para ser empleadas, secretarias, enfermeras o maestras; en cambio, las mujeres de clase baja trabajaban en el servicio doméstico, eran costureras o vendedoras.

La Revolución cumple cincuenta años

En 1960, los gobiernos de la Revolución podían hacer un recuento optimista de sus logros. Sin embargo, no eran po-

cos los saldos negativos, cuya solución se volvió urgente a la luz de la Revolución cubana, que llegó al poder en enero de 1961. Este acontecimiento provocó en México —al igual que en otros países latinoamericanos— el temor de que la experiencia se repitiera por el efecto combinado de la desigualdad, la miseria y la represión política. No obstante, para México el significado de estos acontecimientos fue distinto que para otros. Hasta entonces mantenía en la región el monopolio de la revolución exitosa, y sus logros se medían sólo en sus propios términos: es decir, los datos de salud o de educación en 1960 se comparaban con cifras de 1910. En cambio, el triunfo de los revolucionarios cubanos representaba la aparición de una alternativa y de un referente de comparación que podía poner en entredicho los avances mexicanos.

Al igual que en otros países, en México se generalizó la idea de que era urgente poner fin a las condiciones antidemocráticas y de injusticia prevalecientes en América Latina. Se planteó la discusión en torno a cuál era el mejor camino para cambiar esa situación: ¿reforma o revolución?

Los desequilibrios sociales

El crecimiento demográfico trajo apremiantes exigencias; por ejemplo, era necesario construir más escuelas, viviendas, clínicas y hospitales; formar a más obreros calificados, maestros, médicos y profesionistas en general. Estas demandas no habían sido atendidas, en parte porque los recursos del Estado eran limitados, y en parte porque el modelo de desarrollo centralizado había propiciado desequilibrios entre

sectores económicos (la producción manufacturera en relación con la producción agropecuaria), entre grupos sociales (las clases medias de las ciudades frente a campesinos pobres) y entre regiones. Las entidades del norte y el centro del país (Baja California, Distrito Federal, Sonora, Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas) se habían beneficiado del crecimiento mucho más que el sur y el sureste (Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Tabasco), o que otros estados del centro (Hidalgo, Guanajuato, Tlaxcala y Zacatecas).

La transformación más notable que experimentó la sociedad mexicana fue el ascenso de las clases medias, resultado de la ampliación de los servicios educativos y de los requerimientos de una economía en proceso de modernización. Estos grupos añadían complejidad a la estructura social; estaban integrados por empleados, profesionistas, burócratas. Representaban una proporción muy importante del mercado interno para bienes de consumo, así como de la oferta de trabajo para una economía en expansión. Dadas su capacidad de compra y su creciente habilidad de organización política independiente, las clases medias se convirtieron en grupos sociales cuyos comportamientos sociales y políticos influían al resto de la sociedad.

La desigualdad social y la pobreza de millones eran pruebas de las debilidades del modelo de desarrollo. En 1963 se calculaba que cerca de ocho millones de personas (indígenas, campesinos sin tierra, subempleados y pobres de las ciudades) recibían un ingreso que apenas alcanzaba para comer. En cambio, la décima parte de la población captaba cuarenta y nueve por ciento del ingreso nacional.

Los desequilibrios del modelo de desarrollo también se

reflejaban, por ejemplo, en la educación pública, que era insuficiente para una población que crecía de manera acelerada. Hubo avances importantes: en 1940, el cuarenta y tres por ciento de la población podía leer y escribir; en 1970 este porcentaje había aumentado a setenta y cuatro; pero la explosión demográfica representaba un poderoso desafío. En 1958 la escolaridad media de la población era de tres años. Había muchos rezagos también en educación media y superior.

Además, el progreso educativo estaba condicionado por la centralización de recursos en la capital de la República. En 1960, más de la mitad de todos los estudiantes universitarios y de escuelas superiores técnicas del país se concentraba en el Distrito Federal; eran pocos los estados que podían ofrecer esos estudios, y sólo dos de cada cien jóvenes de entre veinte y veinticuatro años estaban inscritos en instituciones de educación superior.

1958: El comienzo del fin del conformismo

Durante los años de crecimiento económico hubo muchas protestas y movilizaciones de obreros y campesinos contra el monopolio del PRI, el control sindical y las acciones de las guardias blancas que en el campo defendían los intereses de los grandes agricultores. Durante los años cincuenta hubo en el campo incluso grupos armados, pero la estabilidad política general del país nunca estuvo realmente en peligro. El desarrollo industrial había acarreado el aumento de obreros y sindicatos, pero la gran mayoría estaba bajo el control de la poderosa CTM y de su líder, Fidel Velázquez. En cambio, la

política de explotación de los recursos agropecuarios, la subinversión en el campo, la concentración de tierras y apoyos para la producción de exportación habían debilitado a la CNC.

En 1958, el conformismo del periodo anterior empezó a resquebrajarse; así, al mismo tiempo que el modelo de desarrollo económico se topaba con sus propias limitaciones, el arreglo político enfrentaba dilemas similares. En mayo de ese año los líderes ferrocarrileros Valentín Campa y Demetrio Vallejo encabezaron un movimiento para destituir una dirigencia sindical que estaba subordinada al gobierno. Hubo paros escalonados, el servicio se interrumpió durante semanas; los ferrocarrileros protagonizaron marchas, mítines y protestas en la ciudad de México. En marzo de 1959 la policía ocupó las instalaciones, los líderes fueron encarcelados y muchos de sus seguidores despedidos.

Ese mismo año también se activó la disidencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Se formó el Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM), bajo la dirección de Othón Salazar. Se realizaron marchas al Zócalo en demanda de aumentos salariales (uno de los plantones frente a la SEP fue disuelto por la policía). En 1960 los granaderos y el ejército desalojaron las instalaciones de la Escuela Normal Superior, que había sido ocupada por la disidencia magisterial.

Al iniciarse la década de los sesenta, el triunfo de la Revolución cubana impuso un tono distinto al descontento. Los ideales de los revolucionarios que encabezaban Fidel Castro y *el Che* Guevara fueron de inmediato adoptados en el continente por millares de jóvenes a quienes atraía el valiente desafío cubano al inmenso poderío de Estados Unidos. En este contexto, las protestas políticas causaron gran inquietud

en México. Entonces aparecieron otras organizaciones más radicales, por ejemplo, en 1963 se fundó la Central Campesina Independiente (CCI), en defensa de los ejidatarios.

La reforma electoral de 1962

La represión de las protestas de ferrocarrileros y maestros era prueba de que en el México autoritario no funcionaban los mecanismos democráticos de solución del conflicto político. Las elecciones únicamente sancionaban la decisión que tomaba el presidente en turno, que designaba al candidato del PRI y por ende a su sucesor. Los partidos políticos y el Congreso tampoco cumplían con la representación de la diversidad ideológica y de intereses de la sociedad, sino que tenían una función casi ornamental. Cuando se trataba de resolver demandas de participación independiente, todas estas instancias desempeñaban un papel secundario frente a la policía o el ejército.

En diciembre de 1962, el presidente López Mateos sometió a la consideración de la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a los artículos 54 y 63 de la Constitución, cuyo objetivo era garantizar "el derecho de las minorías a estar representadas". La finalidad de esta modificación era inyectar vitalidad a los partidos de oposición, que recibían muy pocos votos y vivían en permanente estado de agonía. Entonces se introdujo un sistema mixto de representación en la Cámara de Diputados, el cual mantenía el principio de mayoría y los distritos electorales uninominales, complementado con "diputados de partido". Éstos serían elegidos por cada partido, en razón del porcentaje de votos que hu-

biera obtenido en las elecciones. Para tener derecho a esa representación, un partido tenía que haber recibido cuando menos 2.5 por ciento del total de votos emitidos; por esta proporción le serían atribuidas cinco curules y una más —hasta veinte— por cada medio punto porcentual adicional. La iniciativa advertía que el sistema dejaría de operar cuando los partidos lograran acreditar veinte representantes de mayoría.

En las elecciones de 1964, los candidatos del PRI obtuvieron una mayoría aplastante. Gustavo Díaz Ordaz ganó ochenta y nueve por ciento del voto, mientras que el principal candidato de oposición, el panista José González Torres, recibió once por ciento. Sin embargo, Acción Nacional conquistó dos curules de mayoría y dieciocho de representación proporcional, y el PPS y el PARM cinco curules cada uno.

El movimiento estudiantil, mayo-octubre de 1968

El gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz se inició en diciembre de 1964, en un ambiente de desafío al autoritarismo gubernamental por parte de los médicos de los hospitales públicos, así como de estudiantes universitarios en la ciudad de México y en varios estados como Puebla, Michoacán y Sonora. En más de un caso el gobierno recurrió a medidas de fuerza para resolver los conflictos. Entre ciertos grupos de clase media, estos episodios generaron una atmósfera de creciente desconfianza hacia el gobierno.

En la ciudad de México, en julio de 1968 una pelea callejera entre estudiantes de preparatoria fue disuelta por la policía con inusitada ferocidad. En unos cuantos días el conflicto

adquirió grandes proporciones. Las acciones de la policía y del ejército violaban la autonomía universitaria y los derechos de los estudiantes, quienes formaron el Consejo Nacional de Huelga. Sus demandas eran moderadas: la libertad de los presos políticos, la renuncia de los jefes de la policía de la ciudad, la derogación de algunos artículos del código penal y la indemnización de las víctimas de la agresión policiaca. Sin embargo, el gobierno percibió una amenaza muy seria y se negó a ceder a las peticiones estudiantiles.

La movilización de los estudiantes universitarios y politécnicos duró ciento treinta días. La ciudad de México vivió convulsionada por los mítines que se organizaban en mercados, plazas y jardines, a más de las manifestaciones callejeras y las marchas. En algunas de ellas llegaron a participar hasta cuatrocientas mil personas.

La situación era en sí misma inquietante, pero además el gobierno tenía urgencia de resolverla porque se acercaba la fecha de inauguración de la XIX Olimpiada, que estaba programada para el 12 de octubre. En algunos países surgieron dudas respecto de la capacidad del gobierno para resolver el conflicto. Las acciones de fuerza comprometían la imagen de país moderno que había empezado a construirse veinte años antes.

La tarde del 2 de octubre, en la Plaza de Tlatelolco se celebraba una concentración de no más de cuatro mil personas convocada por el CNH, que fueron rodeadas por casi cinco mil efectivos del ejército y de las guardias presidenciales. Entonces estalló una confusa balacera. Durante décadas el número de víctimas fue incierto; se hablaba de cientos de muertos. La apertura de los archivos en los años noventa aportó información más precisa. Según el parte oficial, en

esa fecha en la Plaza de las Tres Culturas hubo cientos de heridos, y cuarenta y nueve muertos, algunos soldados y la mayoría civiles. Fueron detenidos los líderes del CNH y cerca de dos mil personas más. En unos cuantos días casi todas ellas fueron liberadas.

Los Juegos Olímpicos se inauguraron en la fecha prevista y se desarrollaron sin mayores contratiempos. Sin embargo, las imágenes de la represión del movimiento estudiantil dieron la vuelta al mundo. Para muchos, el México violento del pasado no había desaparecido. La tragedia arrojó una sombra imborrable sobre los casi veinticinco años transcurridos desde que México ingresó al bloque de las democracias, y marcó trágicamente el fin de ese periodo de estabilidad. Lo que debió haber sido la oportunidad para mostrar al mundo los éxitos del proyecto modernizador se convirtió en el espejo del autoritarismo del sistema político.

En Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968 concluyó el Milagro Mexicano. La represión del movimiento estudiantil desenmascaró el autoritarismo del sistema político y llamó la atención sobre los problemas sociales más graves del país: la desigualdad y la pobreza, y sobre sus potenciales efectos sobre la estabilidad política. Después de lo ocurrido pocos estuvieron dispuestos a sostener que los logros económicos, la expansión de obras de infraestructura o de los servicios de salud, justificaban el autoritarismo. El acuerdo general que había sostenido el auge del PRI y que apoyaba a los presidentes fue profundamente dañado. Desde entonces la sociedad, que estaba ya dividida entre clases sociales y entre regiones ricas y pobres, quedó fracturada también por ideas y corrientes políticas antagónicas.

La cultura de la estabilidad

Los años del Milagro Mexicano fueron de gran creatividad artística y literaria. Muchas de las obras que se produjeron en esos años portaban los ecos del espíritu de construcción e innovación de la época. En 1947 Agustín Yáñez publicó *Al filo del agua* e inauguró una nueva corriente narrativa que, al igual que el muralismo, cedió el paso a obras más personales, que ya no ambicionaban educar a las masas ni transmitir un mensaje social.

Entre 1950 y 1965 hicieron su aparición figuras que dominarían el ambiente cultural hasta finales del siglo. En poesía destacan los nombres de Efraín Huerta, Jaime García Terrés, Rosario Castellanos, Jaime Sabines, Alí Chumacero; en pintura abstracta y de caballete surgieron personajes como Rufino Tamayo, Gunter Gerzso, Pedro Coronel, Jesús Guerrero Galván, Remedios Varo. En 1950 el joven poeta Octavio Paz publicó un ensayo, *El laberinto de la soledad,* que reflexionaba acerca de las contradicciones entre tradición y modernidad que caracterizaban a la sociedad de entonces. En 1952 Juan José Arreola publicó *Confabulario,* y en 1955 Juan Rulfo dio a las prensas *Pedro Páramo,* que marcaron nuevos derroteros a la narrativa mexicana. En 1958 salió a librerías la novela de Carlos Fuentes *La región más transparente,* que era una denuncia de los vicios de la política y una descripción de los claroscuros muchas veces trágicos de la capital de la República.

Una nueva generación de escritores, cuyas preocupaciones giraban en torno a la necesidad de renovar las costumbres y los valores sociales, conforme a las exigencias de la vida urbana y de las clases medias ávidas de modernidad, se

abrió paso en 1965 con la publicación de *Gazapo,* del novelista Gustavo Sainz, que entonces tenía veinticinco años; en 1966, con sólo veintidós años José Agustín publicó *De perfil.* En 1967 apareció *Morirás lejos* de José Emilio Pacheco, quien no había cumplido todavía treinta años.

Hacia finales de los cincuenta el cine, la radio y la televisión eran los principales promotores y transmisores de la cultura popular. En forma paralela se desarrollaba una cultura de alcances más limitados, aunque más atenta a los cambios que ocurrían en el mundo. El centro de este movimiento era la ciudad de México, en particular Ciudad Universitaria, que era uno de los símbolos emblemáticos de la modernidad. Por consiguiente, no extraña que en 1968 haya sido el epicentro de una movilización cuyas consecuencias políticas fueron tan significativas como sus repercusiones culturales.

Al iniciarse los años sesenta hicieron su aparición los primeros productos de la *contracultura,* que expresaba la influencia de corrientes culturales del exterior, en particular de las protestas contra la guerra de Vietnam en Estados Unidos, y sus derivaciones en el movimiento *hippie* y, más en general, en la inconformidad de los jóvenes de clase media que repudiaron los valores tradicionales, la sociedad paternalista y la pobreza cultural de los medios de comunicación de masas.

La renovación del legado revolucionario, 1970-1982

El convulsionado final de la década de los sesenta dejó al descubierto las limitaciones de un modelo de desarrollo que no podía responder a los cambios que había acarreado la modernización ni corregir sus desequilibrios. La dinámica

movilización-represión que se establecía cada vez que surgía un conflicto político demostraba que el modelo priísta de participación controlada no resolvía las demandas de los grupos más modernos de la sociedad. El dilema político en esos momentos se planteaba en los siguientes términos: el endurecimiento del autoritarismo o la liberación de la organización y de la participación políticas.

No obstante, y como ocurre frecuentemente, pocos percibieron la discontinuidad que separaba al México de la inmediata posguerra del impetuoso país de la década de los setenta. Es probable que la permanencia del PRI en el poder haya contribuido a ese error de juicio. Muchos creyeron que los problemas de la década anterior resultaban del abandono de las metas y de los instrumentos que formaban el legado de la Revolución. Así que abogaron por un regreso a los orígenes del sistema político para resolver las exigencias de cambio. Éste fue el camino que eligieron los gobiernos de Luis Echeverría (1970-1976) y José López Portillo (1976-1982). La consecuencia más importante de esta decisión fue la expansión de la participación del Estado en la actividad económica y en la vida política.

La apertura democrática de Luis Echeverría, 1970-1975

Al inicio del gobierno del presidente Echeverría, en diciembre de 1970, la situación política era crítica. La sombra del movimiento estudiantil y de su trágico desenlace oscureció la transmisión del poder y fue una presencia constante en estos años. Había una gran incertidumbre respecto de la capacidad y la disposición del nuevo presidente para resol-

ver en forma pacífica los conflictos que habían empezado a manifestarse, en vista de que, en su calidad de secretario de Gobernación entre 1964 y 1970, había sido responsable de los acontecimientos del verano de 1968.

Los universitarios no eran los únicos que exigían cambios. También en el medio sindical y en el campo se multiplicaban las señales de descontento. El presidente Echeverría decidió atajar la protesta uniéndose a ella para orientarla y, también, fijar sus límites. Su objetivo no era cambiar el sistema, sino restaurar el modelo de gobierno de Lázaro Cárdenas para prolongar la vida del sistema político. Creía que la fórmula que combinaba un Estado fuerte con amplias movilizaciones populares devolvería la confianza de la sociedad en las tradiciones de la Revolución mexicana. También pensaba que así podría construir la legitimidad de su propio gobierno.

El presidente Echeverría propuso la autocrítica y una "apertura democrática" que estaba dirigida a los jóvenes y a la izquierda. Para probar la sinceridad de su oferta, en 1971 amnistió a los líderes estudiantiles que permanecían presos en la cárcel de Lecumberri.

Uno de los efectos más notables de esta apertura fue la movilización de la opinión. Por ejemplo, desde 1968 el periódico *Excélsior,* bajo la dirección de Julio Scherer, se había erigido en una voz independiente y crítica, que contribuía a articular una opinión pública cada vez más interesada en la política. Entre sus editorialistas destacaba el historiador Daniel Cosío Villegas, que se convirtió en un crítico despiadado del reformismo de Echeverría, quien, a sus ojos, exacerbaba el presidencialismo y la personalización del poder.

El nuevo sindicalismo

En el medio sindical la apertura democrática significó la aceptación, y en algunos casos el aliento, de la organización independiente. Esta política benefició a movimientos que buscaban liberarse de la tutela de la CTM y democratizar las organizaciones controladas por el *charrismo,* es decir, por dirigencias corruptas. Por ejemplo, en 1972 el líder electricista, Rafael Galván, inauguró el nuevo sindicalismo. En abierto desafío a la CTM fundó el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (STERM), y el Movimiento Sindical Revolucionario, que agrupaba a trabajadores de la industria automotriz, hulera, mecánica, química y metálica. Estos sindicatos no se limitaban a pedir incrementos salariales y mejores condiciones de trabajo, sino que exigían una intervención activa en la organización del trabajo dentro de la empresa y en algunas decisiones de producción e incluso de comercialización. El apoyo del gobierno al nuevo sindicalismo le proporcionó un notable impulso y fue la base de una alianza entre el presidente y estos trabajadores.

El regreso del agrarismo

En 1970 la mitad de la población del país era rural, veinticuatro millones de mexicanos. Los campesinos habían sido víctimas de la disminución de inversiones en el campo, de la falta de créditos, de la lentitud del Banco de Crédito Ejidal y del control de precios de los productos agrícolas, mediante el cual el gobierno mantenía bajos, entre otros, los precios

del maíz y del frijol, para favorecer a los consumidores de las ciudades. Manifestaban su descontento con invasiones de tierras y tomas de bodegas y oficinas públicas.

La respuesta del gobierno a esta situación fue promover la organización independiente, continuar el reparto agrario que había reiniciado Díaz Ordaz y fomentar las asociaciones de productores y hasta un proyecto de colectivización de ejidos. Por ejemplo, para la producción de café se organizaron las Unidades Económicas de Producción Campesina. En 1974, el antiguo Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización se convirtió en la Secretaría de la Reforma Agraria, y en 1975 se creó el Banco Nacional de Crédito Rural. Todas estas decisiones impulsaron una importante movilización en el campo. En 1974 nació la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC).

El populismo económico y la expansión del intervencionismo estatal

Entre 1971 y 1973 el ritmo de crecimiento de la economía registró una pérdida de velocidad que el gobierno denominó *atonía*. No se trataba de un problema transitorio. Esta disminución resultaba de las limitaciones del modelo de sustitución de importaciones para generar los recursos que exigía la industrialización, la cual requería productos y componentes importados en cantidades que superaban con mucho las exportaciones mexicanas. La diferencia entre unos y otras provocó un importante desequilibrio comercial porque era más lo que comprábamos que lo que vendíamos. Además, los bienes importados eran más baratos que los que se producían

en el país. La reactivación de la economía era urgente también porque un crecimiento económico mediocre constituía un obstáculo para el reformismo político.

El gobierno intentó promover las exportaciones. En 1970 se fundó el Instituto Mexicano de Comercio Exterior (IMCE), para apoyar la exportación de productos mexicanos. Sin embargo, éstos no podían competir en los mercados internacionales porque estaban acostumbrados a la protección comercial y a las ayudas estatales. Así que esta política tuvo pocos resultados. El gobierno tampoco logró impulsar la inversión privada, pues muchos empresarios miraban con suspicacia el reformismo, uno de cuyos aspectos más inquietantes era la denuncia de "los riquillos".

La atonía se prolongó hasta 1973 y se vio agravada por el incremento abrupto de los precios internacionales del petróleo, que tuvo un efecto muy negativo sobre el consumo y la inflación. Entonces el presidente Echeverría decidió fomentar la actividad económica mediante la inversión pública. Exasperado por la repetida negativa de su secretario de Hacienda, Hugo Margáin, a aumentar el gasto público, el presidente lo cesó brutalmente el 1° de junio de 1973 y remató su decisión con esta tronante declaración: "La política económica se hace en Los Pinos". Así llegó a su fin el desarrollo estabilizador.

Entre 1973 y 1976 el gasto público se incrementó gracias a créditos externos; entre 1970 y 1976 precios y salarios aumentaron a un promedio anual de diez por ciento. Así se puso en pie el *populismo económico*, una política que consistía en prometer todo a todos: empleos, créditos, subsidios, sin prestar mucha atención a los costos de sus promesas, aunque el gobierno se endeudara. El objetivo real no era reactivar el

crecimiento económico sino mantener la tranquilidad política y disipar el descontento. De suerte que las decisiones de política económica respondían primeramente a consideraciones políticas.

La crisis de fin de sexenio

La situación se tornó crítica en septiembre de 1976, cuando el gobierno no pudo pagar los intereses de la deuda que había contraído con bancos extranjeros; entonces se vio obligado a devaluar el peso, cuyo valor pasó de 12.50 a 19.50 por dólar. Hubo desempleo y cierre de empresas. Fue necesario recurrir al apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI). A cambio de recursos frescos, el gobierno se comprometió a limitar el gasto público y el intervencionismo estatal. El balance económico de este sexenio fue muy negativo. Su legado fue una economía en recesión, con inflación y alto desempleo, y una deuda externa de veinte mil millones de dólares.

Los problemas económicos abonaron las discrepancias entre el gobierno y los empresarios. El presidente Echeverría había roto la costumbre establecida de que el gobierno consultara con los empresarios las decisiones económicas más significativas. El sector privado rechazaba las movilizaciones de obreros y campesinos, así como la política exterior de acercamiento al Tercer Mundo; consideraba que el discurso del presidente y sus políticas eran divisivos, generaban conflicto y propiciaban la anarquía.

En el último año de gobierno empezaron a circular rumores acerca de un supuesto golpe de Estado, del secuestro

del presidente, de sus intenciones de reelegirse. La autoría de esta campaña de desprestigio se atribuyó al Consejo Coordinador Empresarial, una asociación de organizaciones empresariales creada en 1975.

Para responder a la ofensiva empresarial, el presidente Echeverría acudió a sus aliados, los campesinos. El 17 de noviembre de 1976, a menos de dos semanas de concluir su gobierno, firmó un decreto que expropiaba a un grupo de empresarios agrícolas dedicados a la exportación más de cien mil hectáreas de tierra de riego muy productiva, en los valles del Yaqui y del Mayo en el sur de Sonora. Las tierras expropiadas fueron convertidas en ejidos y distribuidas. Esta decisión sólo ahondó la crisis. La reacción de los empresarios a esta medida fue una fuga multimillonaria de capitales.

El deterioro de la economía había puesto límites al reformismo echeverrista. En condiciones adversas de endeudamiento e inflación, el gobierno necesitaba el apoyo de la CTM para frenar las demandas salariales. En 1975 empezaron a declinar las simpatías del gobierno por el nuevo sindicalismo. Cuando el grupo de Galván emplazó a huelga a la Compañía Federal de Electricidad (CFE), el gobierno recurrió a la respuesta tradicional: la policía desalojó los locales, sostuvo enfrentamientos con los trabajadores, y el ejército ocupó las instalaciones.

Así también la obra crítica de *Excélsior* terminó bruscamente en julio de 1976, a causa de un conflicto en el interior del periódico que provocó la salida de Scherer y de su grupo. Muchos atribuyeron al gobierno este oscuro final.

José López Portillo, "Administrar la abundancia", 1977-1981

En su discurso de protesta como presidente de la República, el 1° de diciembre de 1976, José López Portillo hizo un llamado a la reconciliación nacional. Propuso una "Alianza para la Producción" que reuniera a empresarios, trabajadores, empleados, funcionarios y burócratas en torno a un mismo propósito: la recuperación económica. "La solución somos todos", había sido su lema de campaña electoral.

La reconciliación llegó, pero como consecuencia virtuosa de una prosperidad fortuita. El descubrimiento de ricos yacimientos petroleros en el Golfo de México y los altos precios del petróleo en el mercado internacional pusieron a disposición del gobierno recursos extraordinarios. Así, muy pronto fue superada la crisis económica.

En 1977 el país miraba el futuro con optimismo. El presidente López Portillo recogió en una sola frase este espíritu cuando afirmó que le tocaba "administrar la abundancia". Las condiciones parecían propicias para superar la condición ancestral de pobreza y relanzar el proyecto de modernización industrial. En consecuencia, el gobierno multiplicó sus inversiones industriales y agrícolas. Entre 1977 y 1981 el petróleo se convirtió en el principal producto de exportación; en 1982 Pemex exportaba cerca de un millón y medio de barriles diarios, y el valor de estas ventas representaba el setenta y siete por ciento del total de las exportaciones; el país se convirtió en el sexto productor mundial del hidrocarburo y adquirió una presencia internacional de mayor peso que en el pasado. La tasa anual de crecimiento de la economía en estos años osciló entre siete y nueve por ciento.

Al igual que durante el gobierno de Miguel Alemán, una suerte de actividad febril se apoderó del gobierno. Los dineros públicos se destinaron a inversiones millonarias en las actividades y regiones vinculadas con la industria petrolera en Campeche y Tabasco; también se gastaron en ferrocarriles, en energía nuclear, en la industria siderúrgica. Se construyeron grandes obras de infraestructura, combinados industriales; se abrieron plantas productivas. El gobierno hizo cuantiosas inversiones en complejos turísticos, adquirió ingenios azucareros y fábricas de papel.

La reforma política de 1977

En 1977 el secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, impulsó una iniciativa de reforma electoral que buscaba conjurar el peligro que representaban para la estabilidad política general, un bajo nivel de participación electoral y la pobre credibilidad de los partidos de oposición. En julio de 1976, José López Portillo fue el único candidato presidencial porque el PAN no logró elegir a un contendiente por un conflicto interno. En esa ocasión quedó exhibida la falta de contenido de las elecciones. El objetivo más o menos explícito de la ley era integrar a la vida institucional de los partidos y del Congreso a la oposición de extrema izquierda que había elegido la vía de las armas.

Después de 1968 surgieron varios grupos guerrilleros que defendían la opción revolucionaria. Entre las más importantes organizaciones radicales destacan la Liga Comunista 23 de Septiembre, el Frente Estudiantil Revolucionario de Guadalajara (FER), el Partido de los Pobres (PP), el Ejército

Popular Revolucionario (EPR) y el Partido Revolucionario Obrero Campesino Unión del Pueblo (PROCUP). Estaban activos en Monterrey, en Guadalajara, en las montañas de Guerrero y Chiapas y en la ciudad de México. Su estrategia consistía en atacar destacamentos militares o secuestrar a empresarios y políticos, ya fuera para minar la fuerza del Estado o para negociar la liberación de sus compañeros encarcelados.

Las organizaciones guerrilleras fueron combatidas por el Estado en una *guerra sucia,* de la que la opinión pública nunca fue informada. Sus operaciones no respetaban los derechos fundamentales de los guerrilleros; por ejemplo, muchas aprehensiones nunca se hicieron públicas, no fueron sometidos a proceso judicial, muchos de ellos sufrieron tortura y murieron asesinados por la policía o por miembros del ejército. Según Gustavo Hirales, antiguo miembro de la Liga 23 de Septiembre, en los setenta murieron así cerca de mil quinientos guerrilleros. A diferencia de lo que ocurría en Argentina, Chile y Uruguay, la lucha antiguerrillera en México estuvo siempre bajo la dirección y el control de las autoridades civiles.

La intención de la Ley Federal de Organizaciones y Procesos Políticos y Electorales (LOPPE), era ofrecer una opción creíble a estos opositores del régimen. La nueva legislación fortaleció a los partidos políticos porque les aseguró acceso a los medios de comunicación, así como subsidios cuyos montos se decidirían en función de los resultados electorales que obtuvieran. Además introdujo un sistema mixto de representación según el cual en la Cámara de Diputados habría trescientas curules correspondientes a otros tantos distritos de representación de mayoría relativa, y cien curules más repartidas de acuerdo con la distribución

proporcional de los votos que obtuvieran las listas regionales —elaboradas y presentadas por los partidos— de candidatos a la representación de las tres circunscripciones en que se dividió el país para ese propósito.

En las elecciones federales de 1979, amén de los partidos tradicionales, el PAN, el PPS y el PARM, también participaron el Partido Comunista Mexicano, que había sido legalizado; el Partido Demócrata Mexicano (PDM), y el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), fundado en 1973. El porcentaje de votos que recibió cada uno de ellos fue muy pequeño en relación con el setenta por ciento que obtuvo el PRI. Sin embargo, gracias a la representación proporcional todos consiguieron representación en la Cámara de Diputados.

El fortalecimiento de los partidos políticos restó vitalidad a la organización gremial independiente, pero no la canceló. En 1977 nació el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), que reunía a trabajadores administrativos y académicos. Ese mismo año estallaron huelgas universitarias en la ciudad de México, Morelos, Nuevo León, Sonora, Guanajuato, Nayarit y Coahuila. En 1979 se formó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), una corriente inconforme con el control que ejercía el SNTE.

La crisis de 1982 y la expropiación de la banca

La riqueza petrolera no fue suficiente para sostener los ambiciosos planes de modernización del gobierno, de suerte que el país otra vez se endeudó. En mayo de 1981, la caída de los precios internacionales del petróleo —de treinta y dos a vein-

tiocho dólares por barril— desencadenó en México una crisis financiera agravada por el incremento de las tasas de interés que anunció el gobierno de Estados Unidos. Los ingresos por concepto de exportaciones petroleras se desplomaron y la deuda se incrementó. Esta situación causó una gran desconfianza entre los inversionistas, que, ante la perspectiva de una devaluación, decidieron retirar sus fondos y convirtieron sus pesos en dólares. Así, se produjo una fuga masiva de capitales. En febrero de 1982 el valor de la moneda pasó de 28.50 a cuarenta y seis pesos por dólar.

En agosto de ese año el presidente López Portillo tuvo que reconocer que el país no podía hacer frente a sus acreedores internacionales y fue preciso acudir al gobierno de Estados Unidos para obtener un crédito de emergencia. Aun así, no logró detener la fuga de capitales ni el alza de las tasas de interés, y en un acto de desesperación, el 1° de septiembre anunció sorpresivamente el control de cambios y la expropiación de la banca comercial. Así, instituciones como Banamex, Bancomer y Banpaís pasaron a ser propiedad del Estado. El objeto inmediato de la decisión era detener la fuga de dólares y aumentar los recursos públicos; pero López Portillo también quería castigar a los banqueros, a quienes culpaba de la crisis. "¡Ya nos saquearon! ¡No nos volverán a saquear!", gritó casi a voz en cuello ante el Congreso durante ese dramático último informe presidencial.

La dependencia económica del exterior que derivó de la petrolización de la economía significó que el destino de muchos proyectos de obras públicas o las inversiones del gobierno en educación y salud quedaran a merced de acontecimientos fuera del control de los mexicanos, como ocu-

rrió con muchas obras iniciadas durante el auge petrolero. Por ejemplo, el Sistema Alimentario Mexicano (SAM), que apoyaba la producción de alimentos básicos, como el maíz, el azúcar, el arroz y el frijol, se vino abajo en 1982 con el precio del petróleo.

La expropiación no tuvo los efectos económicos que buscaba el gobierno. La moneda siguió perdiendo su valor, la inflación se disparó a cerca de cien por ciento, y la suma de la deuda del gobierno y de las empresas mexicanas alcanzó el inusitado nivel de ochenta y siete mil millones de dólares. En octubre hubo que recurrir nuevamente al FMI para estabilizar la economía. Las consecuencias de la nacionalización bancaria fueron devastadoras para el Estado mexicano: tardaría mucho en recuperarse de la bancarrota financiera en la que estaba sumido; había perdido la capacidad de ser agente del crecimiento económico y había comprometido el alcance de su acción política.

La expropiación de la banca despertó en un primer momento el entusiasmo de corrientes de opinión que la interpretaron como un regreso a los valores originales de la Revolución y a su compromiso con la defensa de los grupos populares. No obstante, la severidad de la crisis que se desencadenó inmediatamente trocó el ánimo inicial en una rabia que fue aumentando conforme se denunciaba el dispendio y la corrupción de recursos públicos que habían acompañado el auge petrolero. La nacionalización resquebrajó de manera irreversible el consenso sobre las bondades del intervencionismo estatal que había sostenido la continuidad del sistema político de la posguerra y está en el origen de la democratización de los años ochenta.

La política exterior activa, 1970-1982

El contexto internacional de los años setenta y ochenta fue muy diferente del de la segunda posguerra. La recuperación económica de Japón y Europa occidental propició una redistribución del poder económico mundial. Los dos gobiernos del periodo 1970-1982 buscaron aprovechar las oportunidades que brindaban estos cambios, uno, para reactivar la economía; otro, para modernizarla. Entre 1970 y 1982 se sentaron las bases de la internacionalización de la economía; se ampliaron y diversificaron las relaciones económicas con el exterior.

La participación activa en la política internacional fue un recurso para alcanzar objetivos nacionales. El mundo exterior dejó de ser visto como una amenaza, y empezó a ser considerado como una fuente de oportunidades. En momentos de auge y en situaciones de emergencia, los gobiernos y los productores mexicanos, los estudiantes y los emigrantes volvieron los ojos al exterior en busca de mercados, de créditos o de oportunidades de trabajo.

El activismo de la política exterior mexicana coincidió con el ascenso de los países del Tercer Mundo a una posición de influencia en el escenario internacional. La importancia de las relaciones entre los países ricos del Norte y los países pobres del Sur desplazó el eje Este-Oeste que había ordenado la rivalidad capitalismo/socialismo de la Guerra Fría. En el pasado, México siempre había preferido preservar su libertad de decisión y mantenerse al margen de los grupos de países que se formaban en torno a una posición común. En cambio, los gobiernos de Echeverría y de López Portillo adoptaron las causas del Tercer Mundo e incluso buscaron ejercer un liderazgo internacional. Ambos presidentes realizaron nu-

merosas giras internacionales y recibieron a muchos jefes de Estado. El presidente Echeverría visitó al papa Paulo VI en el Vaticano en 1974, y en 1979 el papa Juan Pablo II realizó su primera visita a México, donde fue recibido por el presidente López Portillo, aun cuando no había relaciones diplomáticas entre los dos Estados.

En 1972, el gobierno de Echeverría estableció relaciones diplomáticas con China, y promovió la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, que fue adoptada por Naciones Unidas en 1974. El 28 de marzo de 1977 el gobierno de López Portillo reanudó las relaciones diplomáticas entre México y España, que habían sido interrumpidas al término de la Guerra Civil española. En 1980 propuso un Plan Mundial de Recursos Energéticos; en 1981 organizó la cumbre Norte-Sur en Cancún. En 1982, el diplomático mexicano Alfonso García Robles recibió el Premio Nobel de la Paz por su dedicación a la causa del desarme y por sus trabajos en la promoción del Tratado de Tlatelolco de desnuclearización de América Latina.

Este activismo provocó fricciones con Estados Unidos. Las discrepancias a propósito de temas de política internacional agriaron la relación bilateral; pero los conflictos en Centroamérica provocaron las principales diferencias de opinión entre los dos países. El gobierno de López Portillo apoyó la revolución sandinista en Nicaragua en 1979, mientras Washington la denunciaba como una amenaza para la estabilidad de la región.

La sociedad próspera

Buena parte del gasto público de los años 1971-1981 en actividades industriales y agrarias fue desordenado, hubo dispen-

dio, corrupción; en algunos casos hubo pérdidas millonarias por errores de planeación. Sin embargo, la expansión de la economía trajo cambios importantes: estimuló el crecimiento de las ciudades, transformó la estructura del empleo y el sistema educativo.

Si se toman en conjunto los años del populismo económico y de la prosperidad petrolera, el balance de los gobiernos del periodo en materia de pobreza y de desigualdad es relativamente positivo. La actividad económica y la abundancia de recursos favorecieron la redistribución de la riqueza. Una proporción importante del gasto público fue destinada a la educación, a la salud y al apoyo de los más necesitados. En 1977 se creó la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar), un ambicioso programa de apoyo a grupos y zonas marginados.

Entre 1970 y 1984 la pobreza total en el país disminuyó más de veinte puntos porcentuales; también se redujeron el analfabetismo y el riesgo de muerte de los niños en el primer año de edad; el porcentaje de la población atendido por las instituciones de salud y asistencia aumentó de sesenta a ochenta y cinco por ciento.

No obstante, incluso con crecimiento la sociedad mexicana seguía siendo muy desigual, porque la expansión benefició más a quienes más tenían. Por ejemplo, en 1980 el PIB por persona en Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Tlaxcala y Zacatecas era de menos de siete mil pesos (a precios de 1970), mientras que en Baja California, Baja California Sur y Nuevo León era superior a dieciséis mil pesos, y en el Distrito Federal era de veinticuatro mil pesos.

Entre 1970 y 1982 mejoró el nivel educativo de niños y jóvenes; esta evolución dio un nuevo impulso a la movili-

dad social. Se hicieron grandes inversiones en campañas de alfabetización y en la educación secundaria y universitaria. Entre 1977 y 1982 el número de alumnos que terminaron la secundaria aumentó de dos millones trescientos mil alumnos a tres millones seiscientos mil. Se abrieron nuevas oportunidades de formación para el trabajo; se inauguraron numerosas escuelas técnicas.

Entre 1971 y 1982 se crearon cerca de veinte universidades en todo el país; en 1974 se fundó la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en la ciudad de México. En 1970 había menos de trescientos mil estudiantes en educación preuniversitaria en todo el país. En 1982 su número se había multiplicado por cuatro, a más de un millón doscientos mil.

Al iniciarse los años setenta, demógrafos, sociólogos y economistas llamaron la atención sobre la incapacidad del país para responder a las demandas de empleo, salud y educación de una población que tenía una tasa de crecimiento de más de 3.5 por ciento. En 1974 se fundó el Consejo Nacional de Población (Conapo), el organismo del Estado que con el lema "La familia pequeña vive mejor" diseñó una amplia campaña de planificación familiar. El uso de los anticonceptivos se extendió con celeridad; el número de hijos por familia disminuyó muy rápidamente: en 1960, cada familia tenía en promedio siete hijos; en 1990, de dos a tres.

Esta política demográfica tuvo consecuencias directas sobre los valores y los comportamientos sociales: transformó las relaciones de pareja y la conducta sexual de los adolescentes. También afectó directamente la vida de millones de mujeres, para quienes era más fácil trabajar fuera del hogar si tenían una familia pequeña. Muchas de ellas se incorporaron al mundo del trabajo, empezaron a recibir regularmente un

ingreso propio, conquistaron una independencia que les era desconocida.

Las rebeliones culturales

Los tumultuosos acontecimientos políticos y económicos del periodo 1970-1982 se reflejaron en una notable transformación de la cultura. El conformismo del pasado quedó atrás. El movimiento estudiantil de 1968 había sido reprimido, pero fue también el violento empujón con que esa generación se abrió camino para imponer sus ideas y sus comportamientos en la vida cotidiana y en la cultura. Muchas de las prohibiciones del pasado se vinieron abajo. Fueron los años de la revolución sexual y de los inicios del feminismo.

Los primeros síntomas de este cambio cultural aparecieron en Avándaro, Estado de México. En septiembre de 1971 se celebró el *Concierto de Ruedas y Rock* en esa localidad. Se contaron cerca de cien mil asistentes, jóvenes de todas las clases sociales que cantaron "Paz y amor", y bailaron durante dos días al ritmo de la música de los más importantes grupos de rock de México y del mundo. También se consumieron muchas drogas. El encuentro fue una especie de revancha de los jóvenes contra la derrota de 1968. La prensa condenó en forma unánime el festival.

El reformismo político impulsó la crítica entre las clases medias y, hasta cierto punto, alentó la rebeldía. Gradualmente el interés por la política fue ganando espacio en las preocupaciones de los mexicanos. Por esa misma razón, en estos años se produjo un notable desarrollo de la información política: aumentó el número de periódicos y de lectores de periódicos.

La experiencia traumática de la represión de 1968 inspiró obras memorables que sentaron la pauta de desarrollo de la literatura política en las décadas posteriores: en 1970 Octavio Paz escribió una penetrante crítica al sistema político, el ensayo *Posdata;* el año siguiente, el antiguo líder estudiantil Luis González de Alba publicó desde la cárcel una memoria del movimiento: *Los días y los años,* y Elena Poniatowska, un gran reportaje sobre el 2 de octubre: *La noche de Tlatelolco.* Estas tres obras marcaron el inicio de la politización de las letras característica de esos años. Hubo una vigorosa renovación del ensayo político y de la novela política. Entre éstas destaca la escalofriante descripción de José Revueltas de la vida en la cárcel de Lecumberri, *El apando.*

La UNAM perdió gradualmente el lugar privilegiado que ocupaba como núcleo generador de cultura y de opinión. Fue desplazada por otras instituciones de educación superior y también por el periodismo. El suplemento *La Cultura en México* del semanario *Siempre!;* las revistas mensuales *Plural* —que dirigía Octavio Paz y que después de 1976 se convirtió en *Vuelta*— y *Nexos* promovieron nuevos autores y géneros como la crónica de los acontecimientos políticos y de la vida cotidiana. En 1970 Carlos Monsiváis publicó *Días de guardar,* y en 1977 *Amor perdido,* y se consagró como el gran cronista de la vida mexicana de la segunda mitad del siglo XX.

Entre 1971 y 1976, el cine conoció un importante renacimiento, gracias en buena medida a la intervención del Banco Nacional Cinematográfico, que financió películas que ofrecían una poderosa crítica social. Entonces surgieron grandes directores como Alfonso Arau, Felipe Cazals, Jorge Fons, Alberto Isaac y Arturo Ripstein. En este periodo, en la pintu-

ra, la fotografía y la música se produjeron obras importantes, pero la poesía y la literatura se consolidaron como las formas dominantes de expresión artística en México. La poesía fue renovada por una nutrida generación de jóvenes poetas.

Crisis, reforma económica y democratización, 1982-2000

La nacionalización de la banca provocó un vuelco histórico; fue el "canto del cisne" del Estado de la Revolución, como escribió Héctor Aguilar Camín en 1982. Una decisión que debió haber restablecido la continuidad con la épica revolucionaria, en realidad precipitó una ruptura irreparable. A partir de entonces el Estado dejaría de ser agente de cambio. Su papel en la promoción de la actividad económica y en la organización de la vida política sería cada vez menor. En cambio ganaron espacio el mercado en la economía y los ciudadanos en la política. El nacionalismo, que había sido la imagen de marca del proyecto de modernización del país, fue desplazado por la presencia cada vez mayor de factores internacionales como la globalización o la ola democratizadora de finales del siglo XX, que arrasó los autoritarismos en casi todo el mundo.

A diferencia del periodo anterior, cuando el objetivo de la industrialización había orientado las decisiones del Estado, en estos años de crisis e inestabilidad muchas de esas decisiones fueron respuestas a dificultades de corto plazo, o remedios de emergencia a problemas que demandaban soluciones más profundas.

Los años de crisis de Miguel de la Madrid, 1982-1988

En diciembre de 1982 la situación económica del país era caótica: ese año la economía se contrajo seis por ciento. El endeudamiento externo colocaba al Estado en una situación financiera gravísima. Sólo en 1983 debía pagar a sus acreedores más de veinte mil millones de dólares. Además, las soluciones a estos problemas debían sujetarse a los términos del acuerdo que el gobierno de López Portillo había firmado en noviembre anterior con el FMI, a cambio de un crédito de emergencia. En estas condiciones de incertidumbre y con severas limitaciones, Miguel de la Madrid asumió la presidencia de la República. Una frase de su discurso de toma de posesión refleja el dramatismo de la situación: "No es tiempo de titubeos... es hora de definiciones y responsabilidades. La situación es intolerable. No permitiré que la Patria se nos deshaga entre las manos".

El pesimismo se apoderó de la opinión pública. Se hablaba de la "cancelación del futuro". De la Madrid afirmaba que a su gobierno le había tocado "administrar la crisis", y muchos sostenían que vivíamos la "cruda" que nos había dejado la "borrachera petrolera".

El objetivo prioritario del gobierno era frenar la inflación que devoraba los ingresos de obreros y campesinos y los ahorros de las clases medias. Para lograrlo debía recuperar antes la confianza en la eficacia de sus decisiones y restablecer relaciones armónicas con los empresarios. Con ese fin, al inicio de su gobierno propuso al Congreso una serie de reformas constitucionales que precisaban el ámbito de la "rectoría económica" del Estado. Su intención era delimitar las competencias para dar seguridad a la iniciativa privada; muchas de las

medidas que adoptó redujeron el intervencionismo estatal. También se votó una reforma al artículo 115 que aumentó las facultades y los recursos de los municipios, en los que se introdujo la representación proporcional. Estos cambios detonaron un proceso de descentralización de largo plazo.

Los recursos que obtenía el gobierno de la venta de petróleo eran insuficientes para reactivar la economía y pagar las deudas; los precios internacionales seguían a la baja. En 1986 se produjo un estruendoso colapso de precios y el barril de crudo mexicano llegó a venderse a seis dólares. Sin embargo, el presidente De la Madrid se mantuvo firme en la idea de que México debía pagar puntualmente a sus acreedores de la banca internacional cerca de diez mil millones de dólares al año, y rehusó escuchar a quienes proponían que se declarara en suspensión de pagos. Esta política imponía restricciones adicionales al gasto público.

En 1986, en atención a una de las condiciones de restructuración de la deuda externa, México ingresó al Acuerdo General de Tarifas y Aranceles (GATT, por sus siglas en inglés), y se comprometió a suprimir las barreras al libre comercio de productos y manufacturas. El proteccionismo mexicano pasó a ser historia, al igual que el Estado propietario. El gobierno vendió a particulares muchas de las empresas públicas, cuyo número se redujo de mil ciento cincuenta y cinco en 1982 a cuatrocientas doce seis años después.

Los sismos de septiembre de 1985 en la ciudad de México

El infortunio parecía cebarse en la crisis mexicana. El 19 de septiembre de 1985, alrededor de las siete de la mañana,

cuando los habitantes de la ciudad de México se preparaban para llevar a los niños a la escuela, para ir a trabajar, o simplemente iniciaban su rutina cotidiana, un poderoso terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter, originado en Michoacán y con una duración de más de dos minutos, sacudió violentamente sus vidas. Se derrumbaron edificios de departamentos, escuelas, hospitales, oficinas y comercios en la zona centro. En las zonas afectadas se interrumpió el servicio de electricidad y de distribución de agua. Al día siguiente hubo una réplica igualmente devastadora. Se calcula que murieron entre treinta y cinco y cuarenta mil personas; hubo también miles de heridos y desamparados.

La disposición espontánea de la población para participar en labores de ayuda a quienes habían sido afectados por la tragedia generó en muchos de ellos sentimientos de autosuficiencia. El gobierno, en cambio, fue blanco de severas críticas. Se le reprochó la lentitud de su respuesta, la indecisión y el relativo desorden de muchas de sus acciones.

Los sismos de septiembre abonaron el terreno para que cobrara forma la oposición política en el Distrito Federal. Desde los años cincuenta esta ciudad se había erigido en el corazón del sistema dominado por el presidente de la República y por el PRI. A finales de los ochenta se convirtió en la piedra angular de la organización de la izquierda.

La insurrección electoral de los ochenta

En diciembre de 1982 aparecieron síntomas de que el voto y las elecciones serían armas de protesta contra el autoritarismo. El núcleo de esta oposición eran los grupos empresaria-

les en los estados más ricos del país, que habían sido afectados por la crisis del final del sexenio anterior y que repudiaban la expropiación bancaria: Baja California, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Sonora.

El PAN se benefició de esta protesta y triunfó en elecciones locales. En 1983, los candidatos panistas Luis H. Álvarez, Francisco Barrio y Rodolfo Elizondo conquistaron las presidencias municipales de Chihuahua, Ciudad Juárez y Durango, respectivamente. El avance electoral del panismo parecía irresistible, favorecido por las deplorables condiciones de la economía. En algunos casos, las disputas entre panistas y priístas llegaron a la violencia. Por ejemplo, en Piedras Negras, Coahuila, en las primeras semanas de 1985 se produjo lo que la prensa extranjera llamó "un baño de sangre", en un enfrentamiento entre miembros del PRI y del PAN. Fue necesaria la intervención del ejército. El saldo fue el incendio del palacio municipal, veintiséis heridos y varias personas detenidas o con órdenes de aprehensión.

En los comicios de ese mismo año para la renovación de la Cámara de Diputados, el PAN alcanzó una votación promedio nacional de quince por ciento, que no tenía precedentes. En 1986 la elección para gobernador de Chihuahua fue un desafío muy serio a la hegemonía del PRI. El candidato panista Francisco Barrio y sus seguidores rechazaron los resultados oficiales que otorgaban la victoria al contendiente priísta y denunciaron el fraude. Hubo huelgas de hambre, bloqueo de carreteras, plantones. La resistencia civil de los panistas tuvo el apoyo de la opinión pública internacional, en particular estadounidense, del embajador Jonh Gavin, y de los obispos del norte del país. No obstante, el presidente De la Madrid no cedió a estas presiones y defendió la victoria del PRI.

La división del PRI, *1987*

La política económica provocó descontento aun en las filas del PRI. Se reprochaba al gobierno su "falta de sensibilidad" hacia las necesidades populares, así como su subordinación a los dictados económicos del gobierno de Washington y de las agencias internacionales. Muchos priístas incluso reprobaban el reconocimiento de los triunfos electorales del PAN.

Según Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del presidente Lázaro Cárdenas y distinguido priísta, la elección presidencial debía ser la oportunidad para un cambio de política. Desde 1986 externó su inquietud respecto del poder del presidente de la República para designar al candidato presidencial, que equivalía a nombrar a su sucesor.

En apoyo de la demanda de Cárdenas, en agosto de 1987 nació la Corriente Democrática (CD), que exigía la democratización de los mecanismos de elección del candidato presidencial, así como el regreso a las "legítimas tradiciones" de la Revolución. La exigencia fue rechazada y los disidentes expulsados del partido. No obstante, Cárdenas participó en la campaña presidencial de 1988 como candidato del Frente Democrático Nacional (FDN), una coalición de partidos que incluía al PARM, al PPS, al Partido Mexicano Socialista (PMS) —que era el principal partido de izquierda— y a otras pequeñas formaciones.

Los conflictos con Estados Unidos

En los años ochenta se multiplicaron las tensiones entre México y Estados Unidos. Se agudizaron los problemas de migra-

ción y narcotráfico, en buena medida por efecto de la crisis económica; por ejemplo, el promedio anual de emigrantes se elevó a doscientos mil. Este movimiento se convirtió en un flujo continuo de personas que cruzaban la frontera sin documentos de viaje ni permiso de trabajo, con la intención de establecerse en forma definitiva en Estados Unidos. El problema no tenía una solución fácil. La extensión de la frontera y el número de emigrantes hacían casi imposible el control. Entonces empezaron a buscarse formas de regular la migración. En el Congreso estadounidense se presentaron varios proyectos de legislación, uno de los cuales —la Ley Simpson-Rodino de 1986— proponía sancionar a los empresarios que contrataran a indocumentados, pero esto no prosperó.

La extensión del narcotráfico en México también se aceleró durante la crisis, cuando muchos campesinos se dedicaron a la producción de marihuana, que tenía un amplio mercado en el país vecino. Por su parte, varios jóvenes desempleados de las ciudades del norte del país se sumaron al crimen organizado, que prometía ingresos extraordinarios y una vida de aventura.

Diferencias de opinión a propósito de los conflictos centroamericanos provocaron tensiones entre los dos gobiernos. El gobierno estadounidense había adoptado una política de franco intervencionismo contra el gobierno sandinista, cuya estrecha relación con Cuba le causaba enorme irritación. El presidente Miguel de la Madrid no podía ignorar las consecuencias de la inestabilidad en los estados de la frontera sur, adonde empezaron a llegar muchos refugiados que huían de la guerra. En 1983 el gobierno mexicano invitó a Panamá, Colombia y Venezuela a formar el Grupo Contadora, que promovía negociaciones entre el gobierno y la guerrilla en

El Salvador y Guatemala. También se buscaba prevenir una intervención militar de Estados Unidos. Aun cuando nunca se firmó el Acta de Paz, se conjuró una guerra generalizada. Por sus trabajos, el Grupo Contadora recibió el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 1984.

El embajador Gavin se convirtió en el portavoz de la irritación de Washington hacia México, y expresaba agrias críticas al gobierno y al PRI. En el Congreso de Estados Unidos, el senador Jessee Helms organizó audiencias en las que se acusaba al gobierno mexicano de ser cómplice de los narcotraficantes. Desde los años veinte no se habían producido incidentes de intervencionismo de este tipo. La relación entre México y Estados Unidos se hundió a uno de sus peores niveles históricos.

No obstante las divergencias, el apoyo estadounidense fue decisivo para que México pudiera resolver las crisis financieras que se produjeron en 1982 y 1986. La asistencia de Estados Unidos no fue gratuita ni desinteresada. Por una parte, el rescate financiero protegía a sus inversionistas, que habrían perdido sus ahorros en caso de que México se hubiera declarado en bancarrota; por otra parte, en la crisis de la deuda una suspensión de pagos mexicana habría arrastrado a otros países de la región que atravesaban por problemas similares y afectado a inversionistas de todo el mundo, con el riesgo de provocar una crisis financiera de grandes dimensiones.

La sociedad mexicana en la crisis

La crisis tuvo un impacto devastador sobre las condiciones de vida de la mayoría de la población. Muchas empresas

quebraron y dejaron a miles desempleados; otras redujeron los salarios, pero la renta, los precios de los alimentos y de las medicinas aumentaban día con día. La inflación afectaba a quienes tenían un empleo fijo; por ejemplo, obreros y empleados, que no siempre lograban que les subieran el sueldo. Pequeños comerciantes, dueños de talleres o de fábricas medianas no soportaban los costos de un aumento salarial ni el incremento del precio de los componentes de los bienes que producían o vendían.

En esos años disminuyó el ritmo de crecimiento del número de jóvenes que terminaban la secundaria. Muchos de ellos se vieron en la necesidad de dejar la escuela y trabajar para sobrevivir o para ayudar a sus familias; aceptaron empleos que no requerían mucha preparación, se convirtieron en vendedores ambulantes o emigraron a Estados Unidos. Entre 1983 y 1990, trescientos mil mexicanos al año cruzaron a Estados Unidos.

Para defenderse de la pobreza, muchas mujeres y hasta niños salieron del hogar a la caza de un ingreso. Se desarrolló la economía informal, que consiste en trabajos por cuenta propia que requieren poco capital y ninguna tecnología, y en muchas ocasiones los realizan familiares que no reciben un salario. Así, por ejemplo, se multiplicaron los vendedores en las calles de las ciudades. Numerosas familias improvisaron comederos frente a su domicilio en la vía pública, y proliferaron los cuidadores de coches.

La crisis que estalló en 1982 causó el empobrecimiento general de la población; por primera vez en el siglo XX aumentó el número de pobres. El sector rural fue el más afectado, así como los estados del sur y el sureste del país. El deterioro de la economía provocó una diversidad de

experiencias y acentuó las diferencias sociales, profundizó la brecha entre la ciudad y el campo, entre los estados ricos del norte y los más pobres del centro y sur del país, y entre todos ellos y la capital de la República. En el Distrito Federal, la caída de la inversión y el empleo fue mayor que en los estados fronterizos; en cambio, la demanda de mano de obra aumentó en Baja California, Chihuahua, Jalisco y Sonora, cuyas economías estaban vinculadas con la exportación.

En 1986 el gobierno propuso un nuevo plan para controlar la inflación, el cual consistía en un acuerdo entre empresarios, gobierno, sindicatos y organizaciones campesinas para fijar periódicamente precios y salarios. El 15 de diciembre de 1987 se firmó el Pacto de Solidaridad Económica (PSE), el cual tuvo un éxito inmediato. En 1988 la inflación se redujo a cincuenta y dos por ciento, es decir, la tercera parte de la registrada el año anterior.

1988-2000, HACIA LA MODERNIDAD A MARCHAS FORZADAS

Al iniciarse el último tramo del siglo XX, la sociedad mexicana estaba empobrecida y dividida. No obstante, los dos últimos presidentes priístas, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, profundizaron las reformas económicas que emprendió Miguel de la Madrid. En esos doce años, los avances electorales de los partidos de oposición minaron la hegemonía del PRI, al igual que las movilizaciones y organizaciones sociales independientes que exigían más participación.

La elección presidencial de 1988

La campaña presidencial de 1988 alcanzó un nivel de competencia sin precedentes, gracias a la inusitada movilización del electorado. Por primera vez en la historia surgió la posibilidad de que el PRI fuera derrotado. Los contrincantes del candidato priísta, Carlos Salinas, fueron Manuel J. Clouthier, del PAN, y Cuauhtémoc Cárdenas, que tenía el apoyo de una coalición de izquierda, el Frente Democrático Nacional (FDN), y despertó el entusiasmo de campesinos, obreros y clases medias, para quienes su apellido evocaba los ecos de una Revolución generosa.

El 6 de julio de 1988 hubo una afluencia inusual de votantes. La jornada transcurrió sin incidentes, pero al atardecer Cárdenas, Clouthier y Rosario Ibarra de Piedra, quien había participado como candidata de un pequeñísimo partido, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), protestaron contra irregularidades en el proceso.

Se inició entonces un periodo de incertidumbre. Los partidarios de Cárdenas denunciaron el fraude que, según ellos, pretendía arrebatarles el triunfo; presentaron boletas semidestruidas, fotografías de robo de urnas y actas alteradas. Hubo numerosas marchas y manifestaciones de protesta por todo el país. Sin embargo, al mismo tiempo continuó el proceso normal de revisión de las actas electorales, así como las negociaciones entre los diferentes partidos. Los resultados oficiales se dieron a conocer el 22 de agosto: cincuenta por ciento del voto para Carlos Salinas de Gortari; treinta y uno por ciento para Cuauhtémoc Cárdenas, y diecisiete por ciento para Manuel J. Clouthier. El FDN rechazó los resultados de la elección presidencial, pero dio por buenos los de la elección de diputados y senadores.

El presidente De la Madrid presentó su último informe de gobierno ante la LIV Legislatura, que estaba integrada por una pluralidad partidista sin precedentes. Además del PRI (doscientos sesenta) y del PAN (ciento uno), estaban representados el PFCRN (sesenta y uno), el PPS (treinta y dos), el PARM (veinticinco) y el PMS (diecinueve). El 10 de septiembre, Carlos Salinas fue declarado presidente electo con los votos de la mayoría priísta y tres más del FDN. Por primera vez en la historia, los partidos políticos fueron los protagonistas del proceso electoral, y el conflicto se resolvió principalmente en la Cámara de Diputados. Así, con la pluralidad política representada en el Congreso, el equilibrio de poderes que establece la Constitución empezó por fin a cobrar forma.

El nuevo modelo de crecimiento

Los dos objetivos inmediatos del nuevo gobierno eran mantener el control de la inflación y alcanzar un nuevo arreglo con los acreedores internacionales, y así liberar recursos que le permitieran incrementar la inversión pública. Para alcanzar el primer objetivo ratificó el PSE. Entre 1988 y 1989 la inflación mensual se redujo de siete a uno por ciento; en ese último año el mecanismo de acuerdo económico fue bautizado Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE), que se mantuvo vigente hasta 1992. Durante todo el sexenio la tasa de inflación se mantuvo a la baja; en 1993 fue de ocho por ciento, y entre 1989 y 1993 la economía creció al tres por ciento.

El gobierno también firmó acuerdos con el FMI y con el Banco Mundial, y obtuvo recursos frescos, pero también

adquirió el compromiso de llevar a cabo profundas reformas económicas.

Resueltas al menos las presiones inmediatas de la deuda y la inflación, el gobierno del presidente Salinas siguió adelante con la transformación de la economía. Así también lo haría Ernesto Zedillo, el último presidente priísta, pese a que estos cambios tenían poco apoyo en la opinión pública. El objetivo era instaurar un nuevo modelo económico cuyas líneas generales obedecían a un consenso internacional que favorecía al mercado frente al Estado en la promoción del crecimiento económico, así como la liberalización comercial, la privatización de las actividades económicas y la desregulación. Así, por ejemplo, en 1990 el gobierno del presidente Salinas "desincorporó" los bancos, la compañía telefónica, las líneas de aviación, las plantas siderúrgicas, los puertos y los aeropuertos. El presidente Zedillo, a su vez, privatizó la mayor parte del sistema ferroviario y concesionó a empresas privadas la comunicación satelital. Infortunadamente, la privatización no generó la eficiencia que se esperaba porque no se introdujeron condiciones de competencia en los sectores involucrados. De manera que en algunos casos el monopolio público del pasado fue sustituido por el monopolio privado.

En el nuevo modelo, el comercio internacional sustituyó al mercado interno como motor de la actividad económica; el capital privado y la inversión extranjera fueron considerados como fuente primaria de financiamiento. Para los gobiernos neoliberales de Salinas y Zedillo, la medida del éxito económico era el monto de la inversión extranjera directa y de los flujos de comercio exterior. En 1989 se publicó un nuevo reglamento a la Ley para Promover la Inversión

Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, y en 1993 el Congreso aprobó una nueva Ley de Inversión Extranjera que eliminaba toda restricción al capital foráneo.

El objetivo general de estos gobiernos era ajustar la economía a transformaciones internacionales y aprovechar las oportunidades que podía ofrecer la globalización, en la que se multiplicaban los intercambios comerciales internacionales y los movimientos de capital. Las relaciones económicas de México con otros países se ampliaron y diversificaron. En 1993 México firmó con Estados Unidos y Canadá el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Al año 2000 se habían firmado acuerdos comerciales con Bolivia, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Nicaragua, la Unión Europea, El Salvador, Guatemala y Honduras.

El éxito del proyecto exportador puede medirse en los siguientes datos: en 1982 el petróleo representaba setenta y cinco por ciento del total de las exportaciones; en 2000, esa proporción se había desplomado a quince por ciento, dado el crecimiento de la exportación de manufacturas. Entre 1989 y 1999 las exportaciones mexicanas se cuadruplicaron y las importaciones aumentaron trescientos por ciento. Más aún, entre 1985 y 2000 el valor en dólares de las exportaciones no petroleras pasó de doce mil a ciento cincuenta mil millones de dólares.

La continuidad de la política económica introdujo estabilidad, no obstante una catastrófica crisis financiera que estalló en diciembre de 1994. Entre 1990 y 1999 el producto interno bruto creció a una tasa promedio anual de 2.4 por ciento, y la tasa de inflación anual fue de ocho por ciento.

La integración a Estados Unidos y el TLCAN

La geografía y las relaciones existentes favorecían una mayor integración entre México y Estados Unidos. En la década de los noventa, este país era la única superpotencia mundial después del colapso de la Unión Soviética que puso fin a la Guerra Fría. México podía aprovechar la proximidad territorial, así como las dimensiones de la economía y la capacidad de influencia de su vecino.

La crisis había profundizado los vínculos económicos entre ambos países. En 1990 Estados Unidos era el principal comprador de productos mexicanos en el exterior; más de cincuenta y seis por ciento de las exportaciones petroleras iban a ese país; de ahí provenía más de sesenta y cinco por ciento de las inversiones extranjeras que llegaban a México, y las dos terceras partes de la deuda externa era con instituciones estadounidenses. En 1999 se calculaba que los emigrantes mandaban desde Estados Unidos a sus familias en México más de seis mil millones de dólares al año.

Estos datos indicaban que las dos economías tendían a integrarse, a pesar de las grandes diferencias que separaban al país más rico del mundo del país de desarrollo intermedio que era México.

El TLCAN eliminó las barreras al comercio entre los tres países de la región: México, Estados Unidos y Canadá. Este acuerdo prometía un mercado de más de cuatrocientos millones de consumidores. Se esperaba que el incremento de los intercambios comerciales beneficiara a las empresas mexicanas, fomentara la creación de empleos y, de manera indirecta, redujera la emigración a Estados Unidos. El TLCAN tenía un profundo significado histórico: por una parte, representaba

el fin de la desconfianza que siempre había separado a los dos vecinos; por la otra, simbolizaba una integración entre ambos que parecía inevitable.

La integración no puso fin a las diferencias entre los dos países que provocaban los problemas de migración y narcotráfico, los cuales, además, se agravaban crecientemente. El deterioro del campo mexicano y la falta de perspectivas para las actividades agrícolas contribuyeron al aumento de la emigración. Asimismo, el narcotráfico se extendió con rapidez. Durante la década de los noventa, para atacar esos problemas los gobiernos de ambos países pusieron en marcha acciones coordinadas y programas conjuntos, por ejemplo, de entrenamiento y reclutamiento de policías y de protección de los derechos humanos de los emigrantes mexicanos.

Otros mundos

El acercamiento con Estados Unidos absorbió buena parte de los esfuerzos mexicanos en el exterior. No obstante, se mantuvo el tradicional compromiso con la promoción del desarme, con la no proliferación de armas nucleares y el control de armamentos. México también participó en los esfuerzos de construcción de una comunidad iberoamericana, uno de cuyos resultados más importantes fueron las reuniones anuales conocidas como Cumbres Iberoamericanas, en que se reunían los países latinoamericanos, España y Portugal.

El propósito de vincular el crecimiento económico con los intercambios internacionales también orientó los esfuerzos diplomáticos de los años noventa hacia las relaciones

comerciales y financieras. Por ejemplo, en abril de 1994 México ingresó en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que es considerado el club de los países ricos. Este acontecimiento refrendaba el aparente éxito de las reformas económicas. En 1995 México participó activamente en la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Reformas electorales

En las últimas dos décadas del siglo XX se levantó en el mundo una gran ola democratizadora que derribó dictaduras y gobiernos autoritarios. México no podía mantenerse ajeno a ese amplio movimiento internacional. En el mundo de la post Guerra Fría, el predominio de un solo partido como el que sostenía el PRI era un anacronismo. El complemento necesario de la modernización económica que prometieron los presidentes Salinas y Zedillo era la transformación política del Estado.

El primer paso en esa dirección fue la construcción de un nuevo sistema electoral. En 1990 se votó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), que debía garantizar la limpieza de las elecciones y la imparcialidad de las autoridades encargadas de su organización. Entonces se creó el Instituto Federal Electoral (IFE), cuyo Consejo General fue integrado por un presidente consejero, representante del gobierno, y por cuatro consejeros miembros del Poder Legislativo. Además habría seis consejeros magistrados. Asimismo se estableció el servicio electoral profesional.

El Cofipe fue modificado en 1994 en reacción al levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, que podía poner en entredicho la elección presidencial que habría de celebrarse ese año. Todos los partidos estuvieron de acuerdo en que la autonomía del IFE podía fortalecer la credibilidad del voto y de los procesos electorales, de manera que se suprimió la representación gubernamental y el voto de los partidos, y el Consejo General quedó integrado por la figura de los "consejeros ciudadanos", independientes del gobierno y de los partidos. La nueva legislación también tenía que organizar a un electorado que iba en incremento: en 1994 había 45.7 millones de mexicanos con derecho a voto; en 2000 su número había aumentado a 58.7 millones.

El pluripartidismo

La fuerza que los partidos de oposición habían mostrado en la elección presidencial de 1988 era prueba de una novedosa pluralidad política. La legislación electoral y la renovada fuerza de los partidos de oposición restaron fuerza al PRI y al presidencialismo. El partido oficial había perdido su capacidad para formar mayorías, de manera que el presidente necesitaba del apoyo de la oposición para gobernar. Durante el gobierno del presidente Salinas, el PAN, que representaba una minoría muy importante en la Cámara, fue su principal interlocutor. La cooperación entre ambos fue uno de los ejes de equilibrio político del sexenio.

En 1989 nació el Partido de la Revolución Democrática (PRD), integrado por muchos de los antiguos participantes en el FDN y por un variado conjunto de fuerzas de izquierda.

Su primer presidente fue Cuauhtémoc Cárdenas. Las relaciones del nuevo partido con el gobierno fueron desde el principio de confrontación porque el PRD le disputaba al PRI el legado de la Revolución, así como el voto de electores afines. También aparecieron partidos más pequeños, como el Partido del Trabajo (PT), el Partido Convergencia (PC) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que muy frecuentemente establecían alianzas con los partidos grandes.

A partir de 1989 la influencia de las oposiciones se extendió a lo largo del país. Entre ese año y 2000, candidatos panistas alcanzaron las gubernaturas de Baja California (1989 y 1995, y nuevamente en 2001), Chihuahua (1992), Jalisco (1992, 1998), Guanajuato (1995, 2000), Nuevo León y Querétaro (1997), Aguascalientes (1998), Nayarit (en coalición con el PRD, 1999) y Morelos (2000). En 1997 Cuauhtémoc Cárdenas fue elegido como primer jefe de gobierno del Distrito Federal, y los candidatos perredistas triunfaron en treinta y ocho de los cuarenta distritos de mayoría de la Asamblea de Representantes.

Las reformas constitucionales

Como parte de su proyecto de modernización, el presidente Carlos Salinas impulsó varios cambios constitucionales. En enero de 1992 quedó reformado el artículo 130 y las iglesias adquirieron personalidad jurídica. Este cambio favoreció en particular a la Iglesia católica, aunque la legislación estaba dirigida a iglesias y asociaciones religiosas en general, en reconocimiento del desarrollo de denominaciones religiosas distintas del catolicismo. También se reconoció el derecho

al voto de los sacerdotes y miembros del culto. El 20 de septiembre de ese mismo año se restablecieron relaciones diplomáticas con el Vaticano y se puso fin a más de un siglo de ruptura.

La reforma del artículo 27, referido a las formas de propiedad de la tierra, dio por terminado el reparto agrario; permitió vender la tierra ejidal, transformarla en propiedad privada y formar asociaciones entre ejidatarios y particulares; reconoció la propiedad de las comunidades indígenas sobre sus recursos naturales, y creó la Procuraduría Agraria para asesorar a los campesinos.

Estas dos reformas tenían un significado simbólico innegable dada su relación con los objetivos de la Revolución: la redención del campesino y la defensa del Estado laico. El anticlericalismo anticonstitucional era anacrónico en un sistema democrático, pero las condiciones del campo mexicano mostraban que las promesas de la Revolución no habían sido cumplidas. Estas reformas generaron descontento entre los priístas, que pensaban que el presidente les imponía cambios contrarrevolucionarios. Acción Nacional, en cambio, votó las reformas como si se tratara de la reivindicación de causas que había defendido durante décadas. Para el PRD, las modificaciones eran prueba de que el PRI había abandonado los caminos de la Revolución.

Por último, en 1993, en el artículo 28 constitucional quedó consignada la autonomía del Banco de México, con la intención de limitar el posible intervencionismo del Poder Ejecutivo en decisiones relativas a la emisión de moneda. En 1998 se completó esta autonomía con nuevas atribuciones en materia de política monetaria.

1994: el Año Terrible

El aparente éxito de la política económica del presidente Salinas alimentó la creencia de que se habían sentado bases sanas para recuperar la vía del crecimiento estable de largo plazo. Una atmósfera de euforia se había posesionado de la élite política. La ilusión de modernidad se esfumó el 1° de enero de 1994 con la aparición de una guerrilla campesina —integrada por no más de dos mil personas y modestos pertrechos— que se había apoderado de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, bajo el liderazgo de un enigmático subcomandante Marcos. Los zapatistas intentaban reanimar la opción armada para luchar contra los poderosos, y sumar los agravios indígenas a los de los pobres de las ciudades. El levantamiento del EZLN fue una poderosa sacudida al sueño de que México era parte del Primer Mundo; puso en evidencia la condición deplorable de las comunidades indígenas resultado de siglos de injusticia.

El zapatismo chiapaneco tuvo efectos políticos de largo alcance. Muchos temieron que el EZLN rompiera el frágil dique que contenía el descontento de los desheredados, y que una ola insurreccional se extendiera por todo el país. Por primera vez en décadas la elección presidencial y el cambio de gobierno que debían tener lugar ese año estaban en riesgo. Ese escenario catastrófico y la presión de la opinión pública internacional empujaron al gobierno a desistir de resolver el problema con el ejército y a invitar a los zapatistas a la mesa de negociación. La violencia fue conjurada. Gracias a los medios internacionales y al internet, esta "guerrilla posmoderna", el EZLN y su líder, el subcomandante Marcos, se convirtieron en un auténtico fenómeno de opinión pública

de alcances internacionales. Movilizaron apoyos financieros y políticos, desde luego en México, y en Europa, donde la causa indígena adquirió un profundo tono moral.

La atención a las demandas de los zapatistas se pospuso hasta el cambio de gobierno de 1994, pero generó la presión constante de multitudinarias movilizaciones por la paz. En este caso, el Poder Legislativo desempeñó un papel central. En 1995 se formó la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), prevista por una Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas que fue votada en marzo de ese año. Estaba integrada por representantes de todos los partidos en el Congreso. En este proceso se hizo presente la Iglesia católica a través del obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, quien desempeñó un papel importante en las negociaciones entre el gobierno y la guerrilla. En noviembre de 1996 la Cocopa presentó un proyecto de reformas constitucionales sobre derechos y cultura indígenas que el EZLN aceptó, pero que el gobierno rechazó. Entonces el conflicto llegó a un punto muerto.

El asesinato de Colosio y la elección presidencial de 1994

El 23 de marzo de 1994, el candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado por Mario Aburto Martínez durante un multitudinario acto de campaña en Tijuana. Las primeras investigaciones arrojaron resultados contradictorios. Por una parte, el gobierno defendía la hipótesis de que el asesinato había sido la obra solitaria de Aburto. Otros, en cambio, sostenían que éste había sido contratado por una banda de narcotraficantes que pretendía

desestabilizar al país. Incluso circularon otras versiones que atribuían el homicidio a conflictos entre los priístas. No obstante, prevaleció la hipótesis del asesino solitario y Aburto fue encarcelado.

En esta coyuntura de emergencia, el presidente Salinas designó candidato del PRI a su antiguo secretario de Educación Pública, Ernesto Zedillo. A pesar de la incertidumbre que habían provocado el levantamiento zapatista y la muerte de Colosio, la competencia electoral fue real. El panista Diego Fernández de Cevallos despertó mucho entusiasmo incluso entre electores que no se identificaban con su partido. Cuauhtémoc Cárdenas fue nuevamente candidato. Cinco partidos más participaron en la contienda; sin embargo, la atención del electorado se concentró en los candidatos del PRI, el PAN y el PRD. El 12 de mayo sostuvieron el primer debate de campaña electoral televisado de la historia. También por primera vez los electores tenían credencial para votar con fotografía, lo cual dio confiabilidad al proceso. Participó el setenta y siete por ciento de la lista nominal de electores.

Ernesto Zedillo triunfó con 48.7 por ciento del voto; muchos explicaron la nueva victoria del PRI como una reacción del electorado que creyó que, en las condiciones de incertidumbre que provocaba la violencia política, solamente el PRI tenía capacidad para mantener la paz general del país.

No obstante, la imagen del partido sufrió un golpe mortal en el mes de agosto siguiente, cuando su secretario general, José Francisco Ruiz Massieu, fue abatido en la calle a tiros por un sicario. Este nuevo crimen provocó nerviosismo en los mercados financieros, exhibió las limitaciones

del sistema judicial, pero sobre todo dañó profundamente la imagen del PRI.

En las elecciones federales de 1997, el partido oficial perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. El PAN y el PRD sumaban cincuenta y tres por ciento de la representación. Durante su gobierno, el presidente Zedillo se topó varias veces con la acción concertada de las oposiciones, y asuntos urgentes como el presupuesto anual del gobierno fueron materia de prolongadas negociaciones entre los legisladores, y entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. El PAN y el PRD también actuaron conjuntamente en 1996 para reformar el Cofipe y sellar la plena autonomía del IFE.

La crisis financiera de 1994-1995

En lo que parecía ser un patrón sexenal recurrente, el gobierno del presidente Zedillo se inauguró con una crisis financiera. A mediados de diciembre corrió como la pólvora el rumor de que la devaluación de la moneda era inminente. En menos de un mes el país perdió las tres cuartas partes de sus reservas internacionales. La fuga de capitales creó una situación sumamente grave porque en enero vencían títulos de deuda emitidos por el gobierno mexicano por un valor de veintinueve mil millones de dólares. Si no honraba el vencimiento de estos bonos, el gobierno mexicano podía provocar una crisis de amplias repercusiones internacionales, el llamado "efecto tequila". Por esa razón, el presidente Bill Clinton organizó el paquete de rescate financiero más grande de la historia para un solo país, más de cuarenta mil millones de dólares.

De nuevo fue necesario aplicar un programa de estabilización que redujo el gasto público, incrementó las tarifas de los servicios públicos, los impuestos y las tasas de interés. El peso se devaluó cien por ciento. Muchas empresas se declararon en bancarrota porque se habían endeudado en dólares, confiadas en el éxito aparente de la modernización económica.

En 1995 se creó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), un programa por el cual el gobierno federal absorbió las deudas de los bancos, para proteger a los ahorradores. Esta decisión causó un enorme resentimiento porque entre los favorecidos había muchos grandes empresarios. Una de las consecuencias más significativas de esta crisis fue que la mayor parte del sistema bancario pasó a ser propiedad de extranjeros. Antiguas instituciones como Banamex o Bancomer fueron adquiridas una por Citibank y la otra por un banco español, BBVA.

La recuperación fue relativamente rápida. Entre 1996 y 2000 el PIB *per capita* creció en promedio a una tasa anual de 3.7 por ciento.

Sociedad pobre, sociedad moderna

La sociedad mexicana de finales del siglo XX tenía muchas de las características de una sociedad moderna, pero también elevados índices de pobreza y de escandalosa desigualdad. En 2000 México no era de los Estados más pobres del mundo, pues estaba lejos de los países africanos. Sin embargo, sí era una de las naciones más desiguales. En una lista de ciento veinticuatro países ordenada por nivel de desigualdad, Méxi-

co ocupaba el lugar ciento nueve. Las crisis y las reformas de finales del siglo XX propiciaron una brutal concentración de la riqueza, y los episodios de crecimiento favorecieron sólo a quienes ya tenían educación, alguna propiedad, ahorros. En 1994, el cuarenta por ciento más pobre de las familias mexicanas recibía apenas once por ciento del ingreso nacional, mientras que el diez por ciento más rico se llevaba más de cuarenta y uno por ciento de esos recursos.

Las reformas al artículo 27 constitucional no atrajeron inversión privada al campo, como se buscaba. En 1994, sesenta por ciento de los treinta y cuatro millones de personas que vivían en áreas rurales era pobre; en cambio, de los cincuenta y ocho millones de habitantes de las ciudades, sólo once por ciento compartía esa condición. El investigador Guillermo Trejo observaba que a finales del siglo XX la pobreza en México tenía una profesión, la actividad rural, y un domicilio, los estados del sur del país: Chiapas, Guerrero y Oaxaca, donde también se concentraba la mayor proporción de la población indígena, que en 2000 representaba un poco más de seis millones del total de la población.

Los gobiernos de Salinas y de Zedillo pusieron en pie sendos programas de política social: Solidaridad y Progresa, cuyos rasgos generales correspondían a los programas de política social que promovía el Banco Mundial en esos años. En lugar de la cobertura amplia y los subsidios universales, el combate a la pobreza se concentró en poblaciones e individuos bien identificados. El Programa Nacional de Solidaridad, que inició en 1988, incluía programas de salud, educación, nutrición, vivienda, empleo e infraestructura. Se trataba de mejorar las capacidades de quienes los recibían para ayudarlos a que se incorporaran a la economía moderna.

El Pronasol llegó a atender a diecisiete millones de personas. El programa promovía la organización social mediante la formación de Comités de Solidaridad, que administraban los recursos que distribuía el mismo. Los miembros de los comités aportaban trabajo o materiales al proyecto. Así se asfaltaron las calles de muchas pequeñas comunidades y se construyeron caminos vecinales. Pese a estos esfuerzos, los años noventa fueron llamados la *década perdida* de la política social.

El empobrecimiento y la inestabilidad económica no frenaron el crecimiento de las ciudades. Las personas que trabajaban en actividades ligadas con la industria, el comercio y los servicios representaban setenta y siete por ciento de la población activa en la economía. No obstante, las crisis redujeron el empleo en el sector industrial; buena parte de la actividad económica se desempeñaba en pequeños establecimientos que ofrecían remuneraciones muy bajas; además, se incrementó el trabajo por cuenta propia.

Uno de los indicadores más claros de las transformaciones que había experimentado la sociedad era el mejoramiento general de la vida y la posición de las mujeres. Entre 1970 y 1997 la escolaridad media de las mujeres aumentó de tres a siete años; el porcentaje de analfabetismo entre ellas disminuyó de treinta a trece por ciento, y su participación en el mercado de trabajo aumentó de veintiuno por ciento en 1970 a treinta y cuatro por ciento en 2000. Todos estos indicadores estaban relacionados con el descenso en la tasa de crecimiento demográfico, porque una mujer educada planeaba cuántos hijos quería tener, y si recibía un ingreso regular se sentía en libertad de tomar decisiones según su conveniencia. En 1999, sesenta y cinco por ciento de las mujeres que vivían en pareja y podían ser madres utilizaban algún método anticonceptivo.

En estas condiciones, las mujeres desarrollaron actitudes más liberales hacia el sexo antes del matrimonio, el divorcio, el aborto y la responsabilidad compartida del hombre y la mujer en el sostén de la familia y en las actividades del hogar.

Al igual que la vida política, la cultura se democratizó gracias al desarrollo de los medios de comunicación de masas. Entre 1982 y 1995 éstos registraron un crecimiento impresionante: el número de canales de televisión en el país aumentó de ciento cuarenta y ocho a cuatrocientos noventa, incluyendo los canales de televisión por cable. Entre 1988 y 1994 el número de radiodifusoras pasó de ochocientas ochenta y una a mil ciento cincuenta y cinco. En esos años se calculaba que había diecisiete televisores por cada cien habitantes y tres radios por familia. Además, gracias a la emigración a Estados Unidos millones de mexicanos tenían vínculos familiares en el exterior y contactos con el mundo más allá de las fronteras. La mayor libertad política, la diversidad social, se reflejó en la diversificación de la información política que fluía de manera abundante en el radio y en la televisión, así como en la literatura, donde el género político floreció al calor de los cambios en la realidad.

En los noventa aparecieron los escritores nacidos en los sesenta: la generación de la crisis, que miraba con disimulado desdén la modernización inacabada del país y repudiaba el nacionalismo y las relaciones que tradicionalmente existían entre los intelectuales y el poder. La literatura recogió la atmósfera pesimista que se apoderó del país en esos años. Los costos de la modernización y los violentos contrastes entre opulencia y miseria alimentaron la reflexión y la literatura.

Como reflejo de la creciente independencia de las mujeres y de la transformación de las actitudes en relación con

ellas, numerosas escritoras se abrieron paso en el mundo de las letras, y con grandes éxitos editoriales. Publicaron en número sin precedentes novelas, ensayos, poesía. Su presencia activa y la perspectiva que ofrecían de la vida cotidiana, de los sentimientos, de la historia y de la política contribuyeron a la transformación de los valores sociales.

La derrota del PRI en 2000

En 1985, Octavio Paz publicó en la revista *Vuelta* un ensayo titulado "Hora cumplida", en el que convocaba al PRI a reconocer que había concluido su ciclo de vida como partido dominante. Reconocía su obra modernizadora, pero insistía en que había llegado el momento de cambiar. Así lo indicaban la rabia de los ciudadanos a quienes el presidente López Portillo había defraudado, la movilización opositora que en esos momentos impulsaba al PAN a municipios y gubernaturas, las dificultades del gobierno del presidente De la Madrid para enfrentar la crisis económica, o las exigencias de los intelectuales que, como Enrique Krauze, demandaban una "democracia sin adjetivos", que en realidad significaba la democracia aquí y ahora.

La sociedad compleja, diversa, mayoritariamente urbana, más o menos informada y politizada de finales del siglo XX demandaba cambios políticos. Sin embargo, los priístas no habían perdido el reflejo original que los impulsaba a controlar el cambio. Así que buscaron mantenerse a la cabeza de las transformaciones sociales; ése era el significado político del proyecto modernizador que pusieron en pie los presidentes Salinas y Zedillo. No obstante, no lo lograron.

Como era de esperarse en una sociedad dividida en clases sociales y en corrientes ideológicas diversas, su propuesta no tuvo un apoyo unánime. Cuando el proyecto modernizador pasó a manos de Ernesto Zedillo, se agudizaron las diferencias entre lo que el gobierno proponía y las preferencias y expectativas de amplias franjas de la sociedad.

El final del partido de la reconciliación nacional de la posguerra fue una larga agonía de quince años, marcada por desgajamientos, fracturas profundas y fisuras múltiples. La crisis de 1982 y las reformas de finales del siglo XX fueron factores decisivos en este lento final.

Desde la década de los ochenta, el PRI y la presidencia de la República habían dejado de ser el eje de los equilibrios políticos. La inestabilidad económica y las reformas estructurales debilitaron a los sindicatos obreros. Además, el fortalecimiento de los partidos como actores centrales de la vida política también minó su capacidad de influencia, al igual que la de organizaciones campesinas que no pudieron detener el crepúsculo del agro. Este tipo de organizaciones fue sustituido por una multitud de organizaciones no gubernamentales, asociaciones y grupos medianos y pequeños, que defendían intereses particulares y no necesariamente gremiales.

Al inicio de su gobierno, el presidente Zedillo afirmó que establecería una "sana distancia" con el PRI, y que no participaría en la vida interna del partido. La relativa ausencia del presidente agravó la fragilidad que aquejaba a la organización. El vacío de poder propició luchas intestinas y la formación de corrientes internas y de bloques de poder. Estas divisiones condicionaron la lucha por la candidatura presidencial en 1999. Por primera vez en la historia, la intervención del presidente en turno fue limitada. Se llevó a cabo

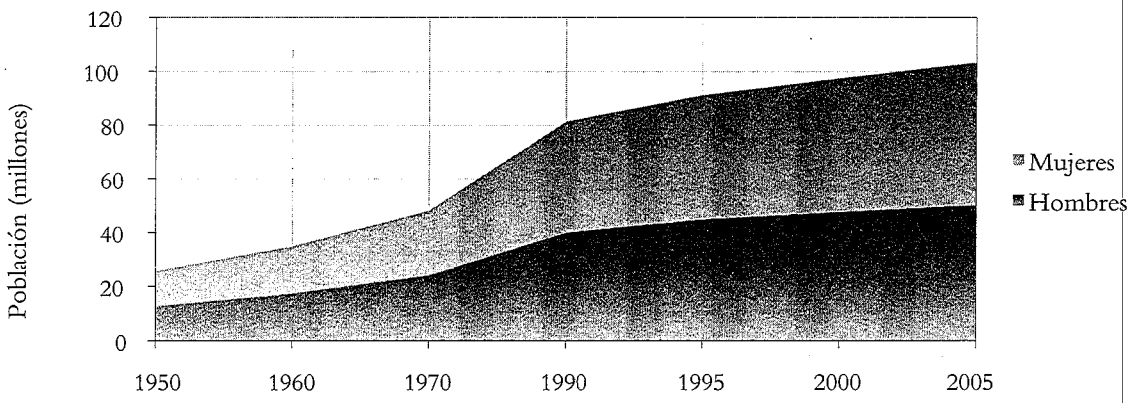
una elección primaria, abierta a la participación de todos los electores con credencial. Participaron diez millones de votantes y eligieron a Francisco Labastida.

Sus contrincantes en la batalla electoral fueron Cuauhtémoc Cárdenas y el panista Vicente Fox, que representaba un sector del México moderno que se había formado en la segunda mitad del siglo XX: empresario medio, miembro de una élite local, que había entrado a la política como reacción a la nacionalización de la banca, en defensa de los intereses locales y contra el imposicionismo del gobierno federal. Pero su mayor atractivo fue que logró presentarse a los votantes como el candidato del cambio. El triunfo de Vicente Fox fue ambiguo. Por una parte, su promesa de "sacar al PRI de Los Pinos" ofrecía la posibilidad de desalojar los bloqueos a una verdadera transformación; pero, por el otro, su triunfo tuvo el sabor de la revancha de aquellos que supuestamente habían sido vencidos por la Revolución: las élites locales, los agricultores ricos y los católicos.

En las elecciones del 2 de julio de 2000, el candidato del PRI recibió treinta y siete por ciento del voto, mientras que el candidato del PAN obtuvo cuarenta y tres por ciento. La derrota del PRI fue mucho más que un revés electoral: representa el fin de la época del Milagro con que se inició la segunda mitad del siglo XX mexicano.

La historia de la segunda mitad del siglo XX estuvo dominada por la obsesión de la modernización del país y por los retos que planteaban cambios que demandaban siempre más cambios. Fue un largo periodo de estabilidad y crisis, de certezas e incertidumbres en el que la sociedad y sus instituciones se transformaron para abrir el camino al país diverso y plural de principios del siglo XXI.

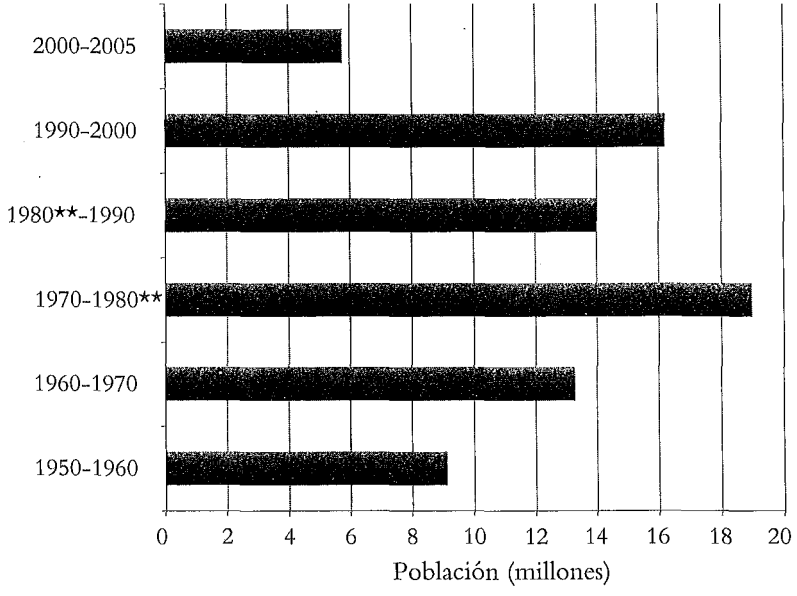
Población de México
(1950-2005)



Fuente: Estimaciones y proyecciones del Consejo Nacional de Población, noviembre de 2006.

Población nacional

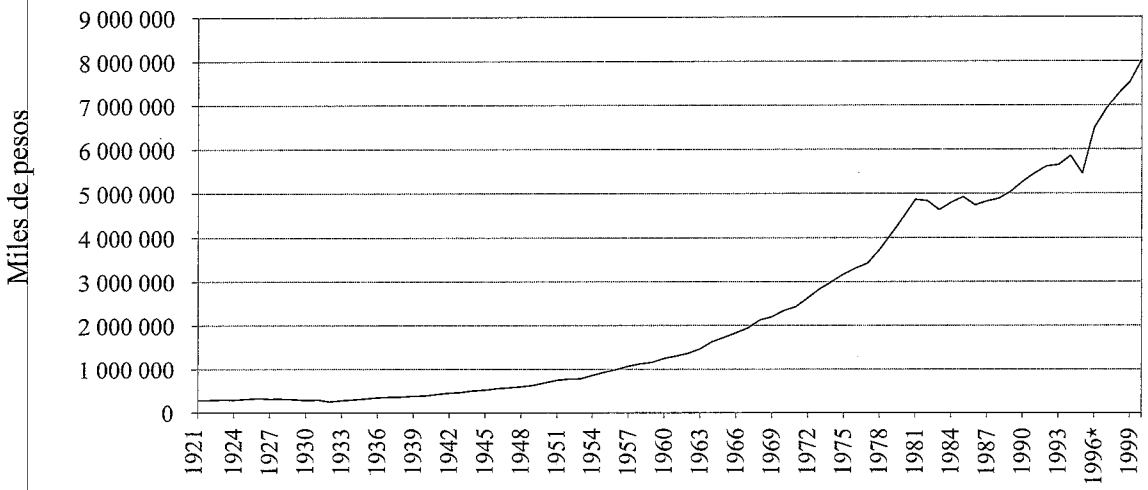
Diferencias intercensales de la población nacional
(1950-2005)



** Fuente: Estimaciones y proyecciones del Consejo Nacional de Población, noviembre de 2006.

Tasas de natalidad y de mortalidad
(1950-2005)
Nacimientos y defunciones
por mil habitantes
60
50
40
30
20
10
0
1950-1955
1955-1960
1960-1965
1965-1970
1970-1975
1975-1980
1980-1985
1985-1990
1990-1995
1995-2000
2000-2005
Tasa de natalidad
Tasa de mortalidad

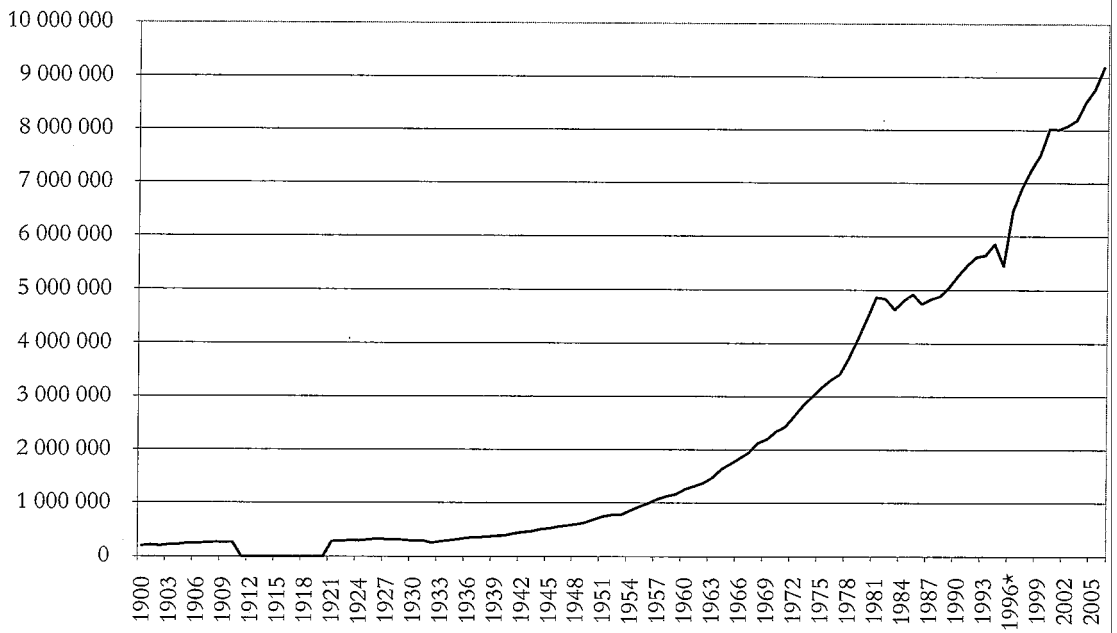
Producto interno bruto
(1921-2000)



Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.

* A partir de 1996 con estimaciones propias del PIB hechas con base en el PIB trimestral en millones de pesos corrientes y el Deflactor Implícito del PIB base 1980.

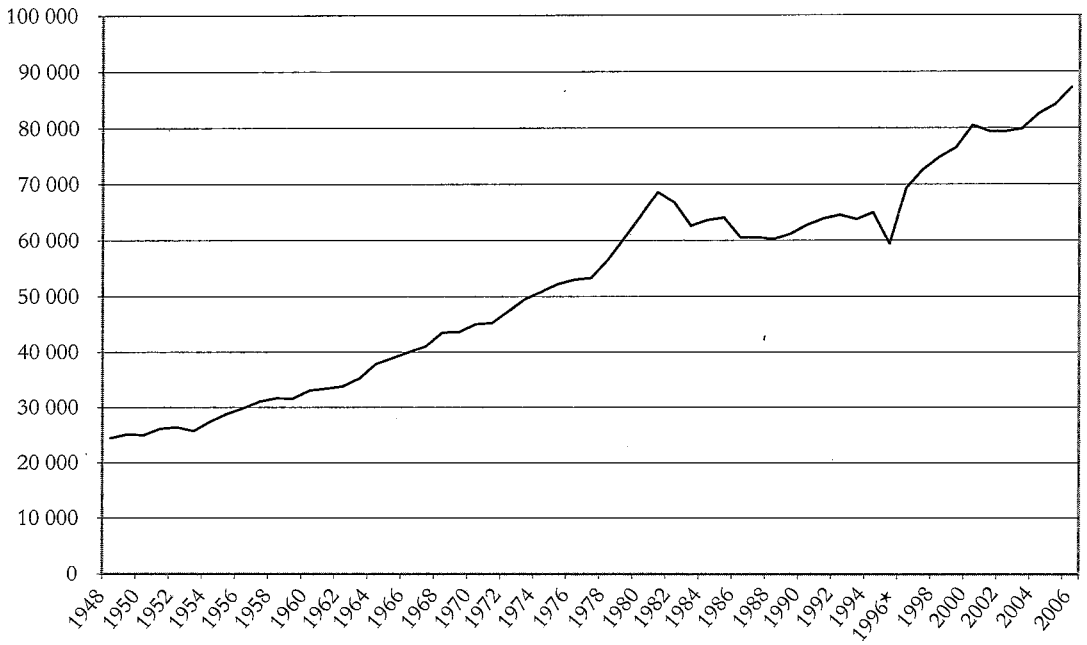
PIB 1980=100
(1900-2006)



Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de Méxco.

* A partir de 1996 con estimaciones propias del PIB hechas con base en el PIB trimestral en millones de pesos corrientes y el Deflactor Implícito del PIB base 1980.

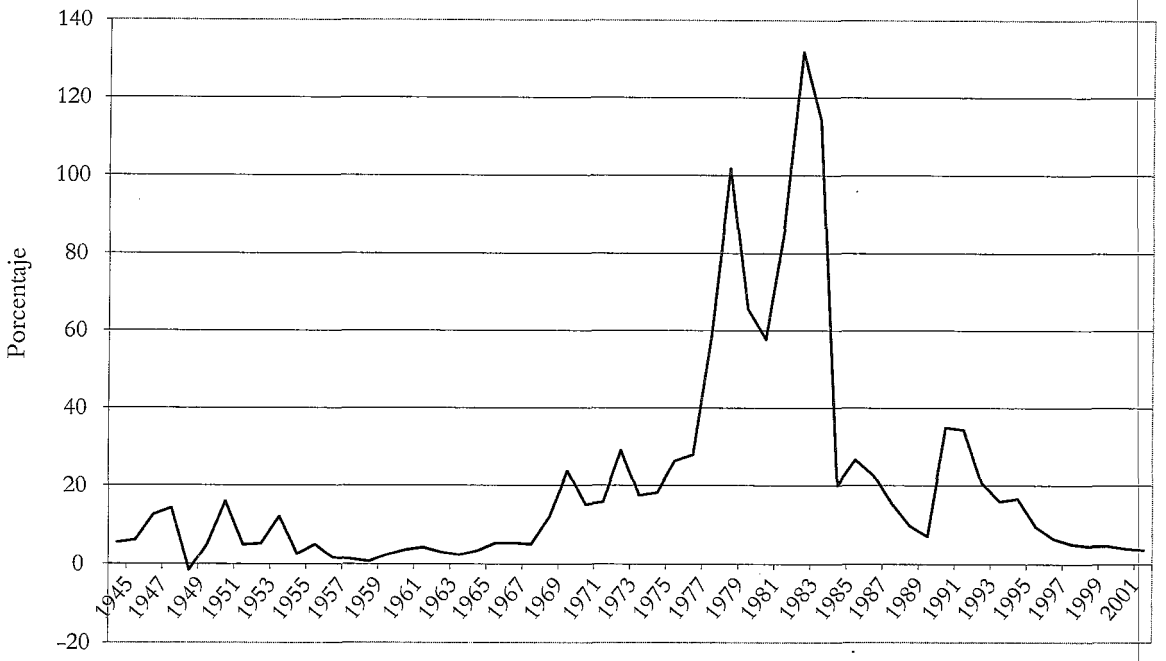
PIB *per capita*



Fuente: FMI.

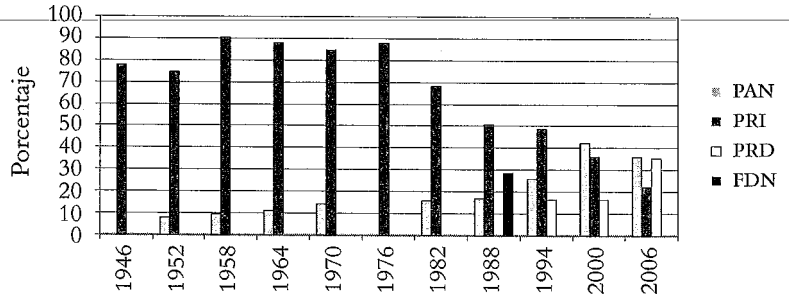
* A partir de 1996 con estimaciones propias del PIB hechas con base en el PIB trimestral en millones de pesos corrientes y el Deflactor Implícito del PIB base 1980.

Inflación (1950-2006)



Fuente: FMI.

Porcentaje del voto obtenido en elecciones presidenciales por el PRI, PAN, FDN y PRD



Año	PAN	PRI	PRD	FDN
1946	–	77.8	–	–
1952	7.8	74.8	–	–
1958	9.4	90.6	–	–
1964	11.0	87.8	–	–
1970	14.0	84.6	–	–
1976	0.0	87.8	–	–
1982	15.7	68.4	–	–
1988	17.0	50.8	–	28.3
1994	25.9	48.7	16.6	–
2000	42.5	36.1	16.6	–
2006	35.9	22.3	35.3	–

Fuentes: Para el FDN: Soledad Loaeza, *El Partido Acción Nacional: la larga marcha, 1939-1994. Oposición leal y partido de protesta,* México, Fondo de Cultura Económica, 1999, p. 466.

Para los demás partidos: Grupo Financiero Banamex, *México Electoral. Estadísticas federales y locales. 1970-2004,* México, Grupo Financieron Banamex, Centro de Estudios Económicos y Políticos, 2004.